

Nicolás Lynch

LA TRANSICION CONSERVADORA

Prólogo	13
Lista de <i>Movimiento Social y Democracia</i>	17
Primera parte: <i>en el Perú 1975 - 1978</i>	
Transiciones, Democracia y Movimientos Sociales	43
1. Los modelos teóricos y el caso peruano	
a. Observaciones iniciales	21
b. La particularidad de la transición peruana	23
c. Las instituciones de la "democracia política"	27
d. Los movimientos sociales en la transición peruana	35
Segunda parte: Una transición peculiar	43
2. La crisis del estado oligárquico	49
a. La forma de democracia	47
b. La crisis estructural	51
c. Los actores políticos frente a la crisis	55
3. El movimiento El Zorro de Abajo ediciones	59
a. El movimiento	59
b. La cooperación y el golpe	63
c. Las relaciones "desde arriba"	65

Nicolás Lynch

LA TRANSICIÓN CONSERVADORA

Movimiento Social y Democracia
en el Perú 1975 - 1978

- © Nicolás Lynch Gamero
Reservados todos los derechos de esta edición
para el Zorro de abajo, ediciones

1^{ra} edición, noviembre de 1992

1000 ejemplares

Impreso en el Perú

Diseño de la Edición:

Gonzalo Nieto Degregori

CONTENIDO

Prefacio	13
Lista de Siglas	17
Primera parte: Algunas consideraciones sobre Transiciones, Democracia y Movimientos Sociales	19
1. Los modelos teóricos y el caso peruano	
a. Observaciones iniciales	21
b. La particularidad de la transición peruana	23
c. Las insuficiencias de la "democracia política"	27
d. Los movimientos sociales en la transición peruana.	35
Segunda parte: Una transición peculiar	43
2. La crisis del estado oligárquico	47
a. La forma de dominación	47
b. La crisis estructural	51
c. Los actores políticos frente a la crisis	53
3. El reformismo militar	59
a. Los antecedentes	59
b. La conspiración y el golpe	63
c. Las reformas "desde arriba"	66

CONTENIDO

d. La democratización social	72
e. El fracaso económico.	84
4. La caída de Velasco	91
a. ¿Velasquismo o reformismo?	91
b. Las tesis sobre la crisis	92
c. El conflicto militar y la movilización social	94
d. El cinco de febrero	100
e. La resolución ambigua	106
5. La contrarreforma	109
a. "La profundización de la revolución"	110
b. La limpieza militar	111
c. Ajuste económico	115
d. Estado de emergencia	117
6. La apertura política	125
a. El 19 de julio	125
b. La convocatoria electoral	131
c. ¿Acto electoral o acto de masas?	140
d. La instalación de la Asamblea Constituyente y el pacto político	145
Tercera Parte: Movimientos sociales y perspectivas democráticas	149
7. Metalúrgicos: el "clasismo" paradigmático	153
a. Los obreros de moda	153
b. La izquierda que llega a los sindicatos	156
c. La dinámica sindical: un conflicto de intereses parciales	165
d. El clasismo metalúrgico y la apertura democrática	179
8. Chimbote: el estado patrón y los nuevos obreros	183
a. La particularidad de un desencuentro	183
b. Los nuevos obreros	184
c. La lucha por la autonomía	188
d. La perspectiva democrática	202

e. El clasismo: una identidad social	207
9. Cusco: el radicalismo andino	211
a. El Cusco rojo en la ciudad de los señores	211
b. ¡Kausachun Velasco!	214
c. Todos contra la dictadura	221
d. Identidad regional y democracia	233
10. Rasgos comunes de los movimientos sociales estudiados	237
Conclusiones generales	243
Bibliografía	251

A mi hijo Jhonny, por la guerra

A mi hija Jimena, por la espera

LA AFILIACION ENTRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL ESTADO es un tema incómodo. Generalmente, quienes se ocupan del estudio de los movimientos sociales prestan poca atención al problema de la democracia en el régimen político nacional, lo denominan "desajuste" o simplemente ajena a la vida civil, entre las organizaciones de base. Por su parte, quienes estudian los problemas de la construcción democrática, prefieren ocuparse de las elecciones, partidos y militares y a lo más consideran a los movimientos sociales como una variable más, señalando que su presencia suele ser perjudicial, en especial para los procesos de transición. Sin embargo, la proximidad de las democracias en América Latina y en particular en el Perú, nos hace ver que uno de los problemas fundamentales continúa siendo la falta de identificación de la población y sobre todo de los sectores populares más organizados, con este régimen político. Por ello, dedico este trabajo a profundizar en la compleja relación entre movimientos sociales y transición democrática en el caso peruano en la década del setenta, en especial, a las dificultades de la transición de los primeros en la transición. Si mis conclusiones demuestran que es necesario atender el problema este libro habrá cumplido con su objetivo.

¹¹ Este trabajo es el resultado del trabajo de tesis presentado por el autor a la Graduate Faculty del New School for Social Research de Nueva York, en noviembre de 1991, para optar el grado académico de Doctor en Sociología.

LA RELACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA es un tema incómodo. Generalmente, quienes se ocupan del estudio de los movimientos sociales prestan poca atención al problema de la democracia como régimen político nacional, la consideran "burguesa" o simplemente ajena a la vida cotidiana de las organizaciones de base. Por su parte, quienes estudian los problemas de la construcción democrática, prefieren ocuparse de elecciones, partidos y militares y a lo sumo consideran a los movimientos sociales como una variable más, señalando que su presencia suele ser perturbadora, en especial para los procesos de transición. Sin embargo, la precariedad de las democracias en América Latina y en particular en el Perú, nos hace ver que uno de los problemas fundamentales continúa siendo la falta de identificación de la población y sobre todo de sus sectores populares más organizados, con este régimen político. Por ello, dedico este trabajo a profundizar en la compleja relación entre movimientos sociales y transición democrática en el caso peruano en la década del setenta, en especial, a las dificultades de integración de los primeros en la transición. Si mis conclusiones dan nuevas luces para entender el problema este libro habrá cumplido con su objetivo.

1. Este libro recoge en lo fundamental el trabajo de tesis presentado por el autor en la Graduate Faculty del New School for Social Research de Nueva York, en setiembre de 1991, para optar el grado académico de Doctor en Sociología.

El trabajo de investigación desarrollado, además de la revisión de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, ha descansado en buena medida en la entrevista abierta a actores políticos y sociales, de nivel tanto nacional como regional. Este privilegio de la fuente oral se debe a la intención de recoger la versión de los actores sobre los acontecimientos para reconstruir en la forma más viva posible los procesos en estudio. Se han desarrollado 33 entrevistas, ocho a líderes nacionales y 25 a dirigentes regionales. Las entrevistas a los líderes nacionales se usan principalmente en la segunda parte, que se refiere a la dinámica global de la transición y las entrevistas a los dirigentes regionales, en la tercera parte, que se refiere a los estudios de caso. En la gran mayoría de los casos me refiero a ellos por su nombre propio, pero en algunos pocos, a petición expresa, les he cambiado de nombre. Tanto por la disposición de fuentes bibliográficas como por el estilo de investigación, las entrevistas tienen una mayor importancia como fuentes en los estudios de caso. Asimismo, se usan también entrevistas desarrolladas por otros investigadores, en cuyo caso se hace la mención o se procede a citación bibliográfica respectiva. De igual forma, en la segunda parte, para el recuento de los hechos, se toma principalmente en consideración la excelente recopilación "Perú. Cronología Política", volúmenes IV al VII, que abarca los años entre 1975 y 1978.

El libro está dividido en tres partes y las conclusiones generales. La primera parte, busca dar el marco teórico al conjunto, discutiendo las nociones de transición, democracia y movimientos sociales en boga, así como sus diferentes implicaciones, buscando encontrar su especificidad para analizar el caso peruano. La segunda parte, es la presentación y el análisis de la dinámica de la transición democrática, que incide particularmente entre los años 1975 y 1978. Aquí, se presentan los antecedentes de la misma en la crisis oligárquica y el reformismo militar y su desenvolvimiento, como proceso de apertura política, desde la crisis del reformismo hasta la instalación de la Asamblea Constituyente. La tercera parte, analiza tres casos de movimientos sociales, cada uno con características particulares, ocurridos en diferentes lugares del Perú, en el período de transición a la democracia. Se trata de la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FETIMP), con base en Lima, así como de dos movimientos regionales ocurridos en las ciudades de Cusco y Chimbote. En las conclusiones generales intento centrar mi

atención en las lógicas diferenciadas que desarrollan tanto los movimientos sociales, por un lado, como el proceso de transición, por otro, con las consecuentes dificultades de integración que van a marcar el producto democrático.

Debo agradecer a diferentes instituciones y personas que a lo largo de los cinco años que han durado mis estudios doctorales, me han prestado su invaluable ayuda. Me refiero a la Inter-American Foundation que en 1986 me concedió una beca que me permitió ir a estudiar a los Estados Unidos, al New School for Social Research, que en repetidas oportunidades me proporcionó ayuda económica, para completar mis cursos así como para desarrollar el trabajo de investigación doctoral, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima que me concedió sucesivas licencias de mi labor como profesor asociado en la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, al Instituto Democracia y Socialismo que me permitió compatibilizar mi trabajo en esa institución con la continuación de mi tesis, a la Asociación Peruana para el Fomento de las Ciencias Sociales, FOMCIENCIAS, que me proporcionó una beca de investigación para realizar mis estudios de caso, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, que también me ayudó económicamente para culminar la investigación, y al Fondo Panamericano Leo S. Rowe de la Organización de Estados Americanos, que me proporcionó ayuda financiera para terminar con el trabajo de redacción. De igual forma, deseo mencionar también la inspiración y el apoyo que recibí de Sinesio López, durante las interminables conversaciones que llevamos adelante, casi diariamente, entre 1988 y 1990. Quisiera asimismo agradecer las enseñanzas de mis profesores en el New School for Social Research, Andrew Arato y José Casanova, en especial, las discusiones habidas en múltiples seminarios sobre democracia, donde tomaron forma las ideas de esta tesis. En el trabajo de campo fue muy importante la asistencia de Enrique Tineo, David Ugarte y Rubén Reátegui, que hicieron posible realizar buena parte de las entrevistas. Asimismo, las gracias a todos y cada uno de los entrevistados, que hicieron posible con su testimonio contar con una fuente irremplazable para este trabajo. También quisiera mencionar el apoyo constante de mi padre, Roberto Lynch, quien en más de una oportunidad al verme desanimado me instó a continuar con este proyecto. Por último, sin la generosidad ilimitada de Corinne, mi compañera, quizás nunca hubiera llegado al final.

Lima, invierno de 1992

LISTA DE SIGLAS

AP	Acción Popular
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
CADE	Conferencia Anual de Ejecutivos
CAEM	Centro de Altos Estudios Militares
CECOSPA	Comité Coordinador de Organizaciones Sindicales y Populares de Ancash
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CITE	Comité Intersectorial de Trabajadores Estatales
CNA	Confederación Nacional Agraria
CNT	Confederación Nacional de Trabajadores
COAP	Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República
COCOP	Comité Coordinador de Organizaciones Populares
CONACI	Confederación Nacional de Comunidades Industriales
CTP	Confederación de Trabajadores del Perú
CTRP	Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana
CUL	Comando Unitario de Lucha
ENAFER	Empresa Nacional de Ferrocarriles
FARTAC	Federación Agraria Revolucionaria "Túpac Amaru" del Cusco
FDCC	Federación Departamental de Campesinos del Cusco
FDPA	Frente Democrático Popular Antiimperialista
FDRP	Frente de Defensa de la Revolución Peruana
FDTC	Federación Departamental de Trabajadores del Cusco
FEDETAN	Federación Departamental de Trabajadores de Ancash

FESIDETA	Federación Sindical de Trabajadores de Ancash
FETIMP	Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del Perú
FEZOCAU	Federación Zonal Campesina de Anta-Urubamba
FIR	Frente de Izquierda Revolucionaria
FOCEP	Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular
FTC	Federación de Trabajadores del Cusco
FUC	Federación Universitaria del Cusco
FUDES0	Frente Unico de Desarrollo del Sur-Oriente
FUDIC	Frente Unico de Defensa de los Intereses del Cusco
FUSIT	Frente Unico Sindical de Trabajadores
IPC	International Petroleum Company
MLR	Movimiento Laboral Revolucionario
PC	Partido Comunista
PCR	Partido Comunista Revolucionario
PPC	Partido Popular Cristiano
PSR	Partido Socialista Revolucionario
SERP	Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana
SINAMOS	Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social
SUTEP	Sindicato Unico de Trabajadores en la Educación del Perú
UDP	Unidad Democrático Popular
VR	Vanguardia Revolucionaria

PRIMERA PARTE

Los modelos teóricos
y el caso peruano

Algunas consideraciones sobre Transiciones, Democracia y Movimientos sociales

OBSERVACIONES INICIALES

EL ESTUDIO DE LAS TRANSICIONES a la democracia por los estudiosos en el área de América Latina en los últimos quince años, ha tenido especial relevancia porque se trata de dar cuenta de un proceso que promete el paso de regímenes autoritarios a democráticos. El carácter del análisis se refiere para empezar al fenómeno, generalmente períodos cortos de tiempo, gran versatilidad de los actores involucrados y poca capacidad de predicción sobre lo que lleva a actuar, ha llevado a desarrollar dos enfoques que buscan encontrar modelos explicativos para entender la dinámica de estas transiciones.¹

Una primera observación necesaria de alcance general es reafirmar la imposición metodológica de Adam Przeworski (1936-47-48) sobre el carácter "micro" de la explicación de estos estados, que enfatizan el

¹ Este importante estudio es el resultado de los debates en curso y del trabajo titulado *Transitions from Authoritarianism: Prospects for Democracy*, editado por Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead, John Hopkins University Press, 1986. Se pueden consultar los *Authoritarianism and Democracy. Regime Transitions in Latin America* editado por James A. Mahoney y Mitchell A. Seligson, University of Pittsburgh Press, 1992 y *Towards Democracies. An essay on democratic transitions*, Giuseppe Colonna, University of California Press, 1996.

Los modelos teóricos y el caso peruano

A. OBSERVACIONES INICIALES

EL ESTUDIO DE LAS TRANSICIONES a la democracia, particularmente en el caso de América Latina en los últimos quince años, ha tenido especial relevancia porque se trata de dar cuenta de un proceso que prometía el pasaje de regímenes autoritarios a democráticos. El carácter del análisis requerido para estudiar el fenómeno, generalmente períodos cortos de tiempo, gran versatilidad de los actores involucrados y poca capacidad de predicción sobre lo que fuera a ocurrir, ha llevado a desarrollar nuevos enfoques que buscan encontrar modelos específicos para entender la dinámica de estas transiciones⁽²⁾.

Una primera observación necesaria de alcance general es reivindicar la proposición metodológica de Adam Przeworski (1986:47-48) sobre el carácter "micro" de la orientación de estos estudios, que enfatizan el

2. El más importante esfuerzo en este sentido es el conjunto en cuatro volúmenes titulado: *Transitions from Authoritarian rule: Prospects for Democracy*. editado por Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead. John Hopkins University Press, 1986. Se pueden consultar también: *Authoritarians and democrats. Regime transition in Latin America* editado por James A. Malloy y Mitchell A. Seligson. University of Pittsburg Press, 1987; y *To craft democracies. An essay on democratic transtions*. Giuseppe Di Palma. University of California Press, 1990.

comportamiento táctico de diversos actores sociales y políticos en situaciones específicas. Pzeworski resalta esta orientación micro en contraste con los estudios de carácter "macro" que tienden al análisis de las grandes estructuras económicas y sociales para concluir de allí las conductas políticas. Sin negar la pertinencia de estas cuestiones objetivas Pzeworski señala que se trata de condiciones en las cuales se producen los acontecimientos, no de determinantes de los mismos. Esta observación va de la mano con otra que hacen O'Donnell y Schmitter (1986:4-5) respecto a la dinámica cambiante que implica el análisis de corto plazo de las transiciones, donde las categorías que se usan para explicar regímenes políticos estables presentan problemas. Esto es especialmente cierto respecto de los roles que asumen los distintos actores en la coyuntura y de las dificultades para encontrar referentes sociales en cada momento a cada uno de esos actores. Arthur MacEwan (1988:123) trata de refutar este enfoque señalando que la postura de Pzeworski lo lleva a dejar de lado las condiciones sociales de la democracia y no permite llegar a conclusiones válidas en el análisis de las transiciones. Sin embargo, como señala el propio Pzeworski, los análisis macro quizás puedan capturar el por qué "en última instancia", pero se quedan cortos cuando de lo que se trata es de descubrir el cómo de los acontecimientos. Este reduccionismo del análisis político a circunstancias económico-sociales no puede entender el reflejo de lo social en la dinámica política ni las posibilidades y preferencias de los actores, en particular cuando lo que se busca explicar son consensos, compromisos, negociaciones, dinámicas institucionales y múltiples peculiaridades, de los que están tejidos los grandes por qué.

A estos elementos debemos agregar las observaciones de Alain Touraine (1987:14-16) sobre el carácter "mixto", es decir, socio-político de los actores en América Latina. Este fenómeno es para Touraine resultado de la no separación clara entre actores sociales, fuerzas políticas y el Estado. Los primeros, en particular si los entendemos como clases sociales, difícilmente pueden ser entendidos como fuerzas totalmente independientes, por el contrario, tienden a desarrollarse al influjo de las fuerzas políticas y del Estado, a diferencia de lo que sucede en los países de Europa occidental donde la separación entre clases sociales, representación política y Estado es mucho más nítida. Esta situación es un hecho más reciente en países como el Perú donde la crisis final de la

sociedad tradicional y el orden político oligárquico recién ocurre en la década del sesenta. Este carácter socio-político, hace difícil la transición por ser este un proceso concebido como representación política de fuerzas sociales. Al no existir la separación aludida entre actores sociales y fuerzas políticas, difícilmente se puede desarrollar un proceso que "represente".

Pero esta falta de separación produce también, cuando ya existe una red significativa de organizaciones sociales que busca su autonomía, una falta de articulación entre sociedad y Estado. Fernando Henrique Cardoso (1981:273) sugiere, pensando en el caso brasileño, la existencia de dos lógicas, una del poder y otra de los movimientos sociales, a partir de las cuales se desarrollan dinámicas diferenciadas e incomunicación mutua. Unas, las élites políticas y militares tradicionales, estarían más interesadas en la esfera de la política estatal y otros, los movimientos sociales, en el desarrollo de nuevos espacios en la esfera social, desconfiando, por la exclusión histórica de que han sido objeto, de todo lo que sea política estatal. El eventual contacto en esta situación se produce a partir de la dinámica confrontación-represión, procediendo los dominadores a integrar las demandas de los de abajo "en frío", es decir luego que derrotan o desarticulan a los movimientos sociales. Esta observación es especialmente pertinente para el Perú en la coyuntura de la transición, donde la persistencia de estas dos lógicas no favorecería el proceso de democratización.

B. LA PARTICULARIDAD DE LA TRANSICION PERUANA

El caso peruano, sin embargo, al presentar matices significativos respecto de otros procesos, es una buena oportunidad para evaluar los enfoques en boga y sobre todo los supuestos que ellos implican. La referencia fundamental será al trabajo desarrollado por Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter (1986), ya citado, pero sobre todo al modelo que formulan en el volumen final con el título "Tentative Conclusions about uncertain democracies".

El contraste con el modelo empieza con la discusión de la idea misma de "transición". O'Donnell y Schmitter la definen como "...el intervalo

entre un régimen político y otro"⁽³⁾ (1986:6). Es decir, la transición implica puntos de partida y llegada que refieren a regímenes políticos diferentes, en el entendimiento general: un punto de partida autoritario y otro de llegada democrático. Así entendida la cuestión, los puntos de partida y llegada se presentan como hitos contrastables en forma absoluta, uno, autoritario, es el contrario, del otro, democrático. Si lo que se contrastan son regímenes políticos, es decir, en general, formas de gobierno⁽⁴⁾, las características fundamentales de ambos deben ser también contrastantes para que el modelo mantenga su consistencia.

Sin embargo, la definición de "régimen", en cualquiera de sus formas, es insuficiente para aplicar el modelo general al caso peruano. El polo autoritario, para el caso de América Latina, semeja más al, también modelo de O'Donnell (1979, 1988), "Estado Burocrático Autoritario", por definición un régimen excluyente y abiertamente represivo. Por más que el propio O'Donnell (1986:4), intenta hacer la diferencia con el régimen militar peruano del General Velasco, al señalar que se trata de una variedad de autoritarismo de carácter populista, entre cuyas características están sus políticas anti-oligárquicas, equivoca el orden de los términos⁽⁵⁾. Al revés, el reformismo militar o velasquismo es un gobierno anti-oligárquico con algunos rasgos populistas. El carácter anti-

3. La traducción de esta y todas las siguientes citas de textos en inglés son del autor.
4. O en la definición más elaborada de O'Donnell y Schmitter donde régimen refiere a: "el conjunto de patrones, explícitos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos y los recursos y estrategias que se usan para ganar tal acceso" (1986:73)
5. David Collier (1979:24) haciendo síntesis de las contribuciones de O'Donnell, define populismo de la siguiente manera: "Aunque hay una variación considerable en el grado en que esos sistemas son competitivos y democráticos, es claro que son sistemas "inclusivos". Están basados en coaliciones multi-clasistas de intereses urbano-industriales, que incluyen a las élites industrialistas y a los sectores populares urbanos. El nacionalismo económico es también una característica común de esos sistemas. El Estado promueve la fase inicial de industrialización orientada hacia los bienes de consumo. Lo hace, tanto, directamente, apoyando la industria doméstica, como, indirectamente, estimulando la expansión del mercado nacional para bienes de consumo, a través del aumento del ingreso de los sectores populares".

oligárquico del velasquismo estriba en la destrucción del poder de la clase terrateniente y el impulso a través de las reformas económicas y sociales de la organización popular, a ello agrega un importante rol del Estado y su política económica nacionalista y pro-industrial. A nivel político, a diferencia de otras experiencias populistas peruanas y latinoamericanas, estimula la participación popular más allá de la simple manipulación, o del apoyo de la masa a un líder carismático, brindando, muchas veces a pesar suyo, el espacio social para la reproducción de organizaciones e identidades populares, así como logrando la concesión de importantes derechos económicos y sociales. La propuesta de intermediación entre sociedad y Estado del velasquismo va entonces más allá de la participación masificante que caracteriza a los populismos y tiene un contenido social democratizador (Franco 1986), que trasciende el carácter generalmente inclusivo de otras experiencias latinoamericanas. Si calificamos al régimen velasquista solo de "populismo" corremos el riesgo de confundirlo con una variedad de experiencias que no compartieron su radicalismo anti-oligárquico ni su contenido democrático. No se trata entonces de un punto de partida "burocrático autoritario", ni tampoco de un régimen populista, sino de un régimen reformista anti-oligárquico, con forma política autoritaria pero con un importante contenido social democrático, desde el cual se marcha a una variedad de democracia política.

El otro polo "democracia política" también merece reconsideración en el caso peruano. Partiendo del modelo "burocrático-autoritario", la democracia política definida como voto secreto y universal para toda la población adulta, elecciones periódicas, competencia partidaria, derechos de organización y fiscalización, y respeto a la oposición (O'Donnell y Schmitter 1986:7-8), es un avance sustantivo. Sin embargo, partiendo del reformismo anti-oligárquico peruano la situación es diferente ya que eran las fuerzas más conservadoras del espectro político quienes demandaban elecciones. El pacto final, entre estos grupos conservadores y las Fuerzas Armadas, que da curso a la transición, implica la restricción de los derechos económicos y sociales garantizados por el velasquismo a la vez que permite una apertura política general, por lo que su caracterización, a secas, como "democracia política" debe ser matizada.

De la misma forma, si los puntos de partida y llegada presentan diferencias importantes con los supuestos del modelo, las etapas de la

transición tienen también sus peculiaridades. O'Donnell y Schmitter (1986:7-11) nos hablan de dos momentos: liberalización y democratización, definidos el primero como la devolución o concesión de derechos individuales y colectivos, es decir, derechos de la persona y derechos de acción social y política, y el segundo, como derechos electorales y realización de los comicios. En el caso peruano se pueden distinguir momentos de liberalización y democratización, pero por las particularidades del punto de partida ambos procesos beneficiaron a los que reclamaban elecciones e implicaron represión para los beneficiados por el reformismo.

Además, en el caso peruano no se da un pasaje directo del reformismo anti-oligárquico a la democracia, sino que hay un gobierno militar intermedio, presidido por el General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), que derroca al velasquismo y conduce la transición a la democracia. Se trata de un gobierno sin proyecto específico cuya tarea es desmontar las reformas y lograr un nuevo pacto que permita una salida política, democrática en este caso.

El contraste entre regímenes, autoritario y democrático, no es entonces suficiente para analizar el Perú, hay que especificar la democratización producida por el gobierno militar y su posterior represión, para poder entender las características de la transición democrática.

Otra particularidad importante en la transición peruana es la influencia del movimiento social. Si bien el proceso se mantiene como una dinámica principalmente de élites, tal como señala el modelo comentado, el movimiento social tiene una influencia muy significativa en todo el período de estudio, pero sobre todo en dos momentos claves para la transición. En su inicio, con la crisis del velasquismo y en su definición, con la convocatoria electoral. En ambos casos la institución militar reacciona por temor a ser rebasada por la movilización popular. A pesar de esta presencia constante, no pasa, sin embargo, de ser una amenaza, sin llegar a constituirse en alternativa a la salida electoral y más bien, pierde su calidad de amenaza cuando las elecciones se llevan adelante. A diferencia entonces del modelo, que no considera a la movilización popular una buena influencia para la transición y a contrapelo de lo que explícitamente señalaban las demandas sociales, que no pedían elec-

nes, el movimiento permite que se desate el proceso y luego que se concrete.

C. LAS INSUFICIENCIAS DE LA "DEMOCRACIA POLITICA"

La formulación del modelo de transición por O'Donell y Schmitter parte de una asunción normativa, que "la democracia política por si sola constituye un objetivo deseable" (1986:3). Asimismo, su definición de democracia política como una democracia electoral, basada en un conjunto de reglas que regulan la competencia entre las élites partidarias (1986:3, 7-8, 59), nos señalan los límites de su modelo de transición a la democracia. Esta definición parece basada en las contribuciones de los teóricos pluralistas (Dahl 1956, 1970), que entienden la democracia como la competencia entre diversos grupos de interés, o diversas minorías en la versión de Dahl, de acuerdo a determinados arreglos institucionales y sujetos periódicamente a la aprobación de los electores. Pero concede también a la crítica de Carole Pateman (1970) al señalar el carácter elitista de esta competencia política. Sin embargo, tal como plantea David Held (1989:62) los teóricos del pluralismo, pretenden convertir las explicaciones descriptivas de las democracias en el mundo occidental en la definición normativa general de democracia, con lo que restringen sustantivamente los alcances del concepto. Un ejemplo reciente de esto último es el planteamiento de Giuseppe Di Palma (1990:15-16), donde señala que cuando se analizan procesos de transición a la democracia lo que importa no es la definición analítico-normativa del concepto, sino su definición como un fenómeno histórico concreto en el mundo occidental, tal cual, agrega, lo define Schumpeter (1942:269)⁶, es decir la definición elitista por excelencia. Se trataría entonces, en la cruda exposición de Di Palma, de observar si determinados procesos políticos se acercan o se alejan del modelo occidental dominante.

6. La definición de Schumpeter es la siguiente: "el método democrático es el arreglo institucional para llegar a decisiones políticas, por el cual unos individuos adquieren el poder de decidir, por medio de una competencia por el voto del pueblo". Como el mismo Schumpeter hace notar en esta definición ya no se parte del principio que el "pueblo" es el que tiene la opinión definitiva sobre las decisiones políticas, sino los "representantes" que este escoge, los que a su vez están encargados del arreglo institucional que les permite ser elegidos.

Tenemos entonces, en el planteamiento de O'Donnel y Schmitter, una definición de democracia exclusivamente política y electoral que me parece importante cuestionar en dos sentidos, primero porque deja de lado el problema del Estado y segundo porque usa una concepción muy restringida de ciudadanía.

La no alusión al problema del Estado puede significar considerarlo un ente neutral, por encima de las contradicciones sociales y políticas, o reducirlo al poder que puedan desarrollar los diversos grupos en competencia. En todo caso no queda claro el rol de las instituciones estatales en la dinámica del corto plazo, a lo sumo son consideradas como algún actor más en competencia. La crítica a esta primera cuestión ya ha sido desarrollada tanto por Harding y Petras (1988) como por MacEwan (1988), y refiere que los autores del modelo en cuestión no toman en cuenta el carácter de clase del Estado, limitándose a dar elementos para analizar los cambios a nivel de régimen, pero no a nivel de instituciones estatales. Por esta razón sus análisis de las transiciones carecerían de significado y más bien tendrían el propósito de prestar un servicio ideológico a las clases dominantes de los respectivos países, así como al gobierno de los Estados Unidos que sería su promotor más importante. Creo, sin embargo, que esta crítica, si bien tiene la virtud de relevar el problema, lo hace en base a un enfoque instrumentalista del Estado, es decir, entendiendo a este como un representante directo e inmediato de los intereses de las clases dominantes. Esta es una de las interpretaciones posibles, tanto de Marx y Engels (1971) en "El Manifiesto del Partido Comunista" como sobre todo de Lenin (1970) en "El Estado y la Revolución", aunque no la única (Held 1989:33), y nos lleva a la conclusión de que el análisis válido de la política es el análisis estrictamente de clase. Desde esta perspectiva la dinámica cambiante de los actores en la coyuntura carece de sentido sino se liga a relaciones sociales de producción específicas y a la forma como estas determinan la naturaleza del poder político. Este punto de vista vuelve inútil cualquier análisis de transiciones a la democracia y da tanto peso al carácter de clase del Estado que termina sepultando el rol de los actores en la coyuntura.

El caso peruano ofrece un ejemplo en el cual el Estado tiene un peso propio y un rol específico y sus acciones no pueden reducirse a los intereses inmediatos de las clases dominantes. Este es un enfoque que se

encuentra también en Marx (1971), en su libro "El 18 de Brumario de Luis Bonaparte", paradójicamente un intento de análisis de coyuntura de corto plazo con una multiplicidad de actores involucrados. En él, Marx señala que la dependencia del Estado respecto de las clases dominantes es un asunto observable en el largo período, en la política general del Estado, por lo que formula una relación entre Estado y clases que podemos denominar, prestando un término acuñado por Poulantzas (1973) (aunque no necesariamente compartamos el conjunto de su análisis), como de "autonomía relativa"⁽⁷⁾. Alfred Stepan (1978) es quien más busca resaltar en el análisis este peso específico que tiene el Estado en el caso del gobierno militar peruano, aunque en su perspectiva se trate de reivindicar a este como una variable independiente de la sociedad, buscando basarse en las definiciones de Weber (1980) en "La Política como vocación", sobre el Estado como un aparato burocrático de dominación, administración, control y monopolio de la violencia física. Siendo útil el concepto de Weber para entender el desarrollo del Estado y sus instituciones, la pretensión de "independencia", sin embargo, me parece excesiva. Hablar de independencia puede implicar que el Estado actúa sin ninguna relación con los actores sociales y políticos, la autonomía relativa, por el contrario, da cuenta de la dinámica propia del Estado, pero señala sus límites, tanto los histórico-estructurales como los referidos a la lucha social y política coyuntural.

La distancia del Estado frente a la sociedad permite explicar la posibilidad del gobierno militar reformista y las múltiples medidas que tomó en favor de las clases populares. Aunque es importante resaltar que fue en un momento de autonomía, entre 1968 y 1975, que rompió con una tradición de casi identidad (salvo contadas excepciones) entre Estado y clases dominantes en el período oligárquico y que paso a paso volvió, en el curso de la transición y el posterior asentamiento democrático, a estrechar sus vínculos, aunque con diferencias que no es del caso analizar aquí, con los sectores dominantes. Tenemos entonces un movimiento en dos sentidos, de distancia y acercamiento del Estado con las clases dominantes. Un movimiento que se realiza vía la institución

7. Para una revisión crítica de tal concepto en Poulantzas puede verse Held (1989:69-70).

militar, que no es cualquier actor, sino tal como lo demostró durante el reformismo y durante la transición, un actor con un peso especial. Si nos atenemos al esquema original de O'Donnell y Schmitter quizás perdamos de vista su relevancia particular, si nos guiamos por la crítica de Harding, Petras y MacEwan, no distinguiremos entre Estado y clases dominantes y no podemos dar cuenta de los conflictos entre dos conjuntos de actores decisivos para el proceso, a la vez, si nos guiamos por Stepan, no entenderemos la crisis del velasquismo ni la contrareforma posterior. En el Perú, en cambio, es esencial este movimiento en dos sentidos, que señala la autonomía estatal y marca sus límites, para poder entender las características del "producto democrático".

Ciudadanía por otra parte es "el principio guía de la democracia" (1986:7) para O'Donnell y Schmitter. Sin embargo, su definición se restringe a los elementos políticos de la misma:

"Esta implica, tanto el derecho a ser tratado por otros seres humanos como igual respecto de la toma de decisiones colectiva, como la obligación de aquellos que implementan esas decisiones de ser igualmente fiscalizados por y accesibles a todos los miembros de la comunidad política. Inversamente, este principio impone obligaciones a los gobernados, esto es, respeto a la legitimidad de las decisiones hechas por deliberación entre iguales, y derechos a los gobernantes, para actuar con autoridad, empleando la fuerza si fuera necesario, para promover la eficacia de tales decisiones y proteger a la comunidad política de las amenazas a su sobrevivencia." (1986:7-8)

Olvidan de esta forma otros aspectos que también conforman la ciudadanía, como es el caso de los derechos económicos y sociales, que si bien pueden no regular en forma directa el proceso electoral, sí condicionan las posibilidades de los potenciales participantes en el mismo.

T.H. Marshall (1976:70-72) en su definición clásica de ciudadanía, en la tradición occidental, señala que esta significa la aceptación de la gente como miembros plenos de una sociedad, es decir como ciudadanos. Asimismo, divide los elementos que la conforman en civiles, sociales y políticos. Por elementos civiles refiere a los derechos individuales, de

libertad personal, expresión, creencia religiosa, propiedad, realización de contratos y administración de justicia; por elementos políticos, los de participación a través del voto y la actividad política propiamente dicha; y por elementos sociales, los derechos que refieren al gozo de un mínimo nivel de bienestar y seguridad. De igual forma hace hincapié (1976:102-103) en la relación entre ciudadanía y clases sociales, señalando que el desarrollo de la ciudadanía a lo largo de tres siglos en Gran Bretaña ha disminuido las contradicciones de clase, al haber producido una igualación en términos de status, es decir, no una igualdad entre clases, que permanecen como fuente de desigualdad, sino entre individuos, que pueden acceder a las mismas oportunidades. Esto llevaría, según Anthony Giddens (1982:170), a que algunos discípulos norteamericanos de Marshall, que el primero no menciona, pero que David Held (1989:211) descubre como Seymour Martin Lipset, Reinhard Bendix y David Bell, malinterpretaran a Marshall señalando que el desarrollo de la ciudadanía elimina los conflictos de clase⁽⁸⁾.

Sin embargo, estas definiciones presentan algunos problemas que llevan a ampliar y reordenar la visión clásica. Por ejemplo, Marshall refiere que los derechos laborales, son una proyección contemporánea de los derechos individuales de los trabajadores. Pero tanto Anthony Giddens (1982:173) como David Held (1989:201) señalan que se trata de derechos de diferente naturaleza, que los trabajadores, como colectivo, han conseguido en lucha contra los empresarios y el Estado y que implican no solo salarios, sino un mayor control del lugar de trabajo por parte de la fuerza laboral. Held (1989:201), por lo tanto, propone un nuevo conjunto de cuatro elementos de la ciudadanía: económicos,

8. En el caso de Lipset, lo que este señala comentando a Marshall en su obra "Political Man. The social bases of politics", es que: "Aunque la ciudadanía universal abre el camino para el desafío a las desigualdades sociales remanentes, también provee las bases para creer que tal proceso de cambio social hacia la igualdad permanecerá dentro de los límites del conflicto permisible en un sistema democrático" (1981:82, nota 19). Es decir, que la lucha de clases pasa, en los países occidentales, de ser un elemento de desafío al sistema democrático-liberal a estar integrada a sus mecanismos de resolución de conflictos. Aunque, es preciso señalar, que estos mecanismos del sistema demo-liberal consideran individuos o grupos de individuos, pero no clases.

sociales, civiles y políticos; que nos parece más adecuado para nuestros propósitos, porque desagrega lo que estaba contenido en los elementos sociales y civiles para Marshall, en elementos económicos, sociales y civiles, distinguiendo el carácter colectivo de los dos primeros y el carácter individual de los últimos. Giddens (1982:174) por su parte enfatiza el sentido y los límites que tiene la relación entre clases sociales y ciudadanía, señalando que las luchas sociales y en particular las contradicciones de clase han jugado un rol central en el desarrollo de la ciudadanía y constituyen la base de su continua ampliación. Para él, a diferencia de Marshall, la ampliación de derechos ciudadanos no disminuye los antagonismos de clase sino que más bien fortalece la posición de los trabajadores en la lucha por sus demandas.

Tenemos entonces que la ciudadanía definida como derechos políticos para individuos, es una concepción, no solo restringida a uno de los elementos que la conforman, sino que toma una de las posibles versiones de Marshall, la popularizada por los sociólogos norteamericanos aludidos, donde ya no aparecen las clases sino tan solo personas individuales representadas en la política. En el modelo de transiciones a la democracia que comentamos O'Donnell y Schmitter parecen inclinarse por esta versión parcial de ciudadanía. Con esta concepción, por más que intenten distinguir entre distintos tipos de autoritarismo (burocrático-autoritario, populista) y diferentes resultantes democráticas (democradura, dictablanda), las variantes siempre estarán subordinadas a la bipolaridad autoritarismo-democracia donde el primero prescinde de derechos de ciudadanía (político-electoral) y la segunda los supone⁽⁹⁾.

En el caso peruano, si entendemos ciudadanía tan solo como derechos políticos para individuos no podemos explicar la peculiaridad de la transición. En el orden oligárquico, anterior al gobierno militar reformista,

9. O'Donnell y Schmitter (1986: 11-14) plantean también la posibilidad de una segunda transición que denominan "socialización", donde suponen que los ciudadanos podrían tener un mayor control de las decisiones en diversas esferas de la actividad económica y social y gozar en consecuencia más igualitariamente del producto resultante. Sin embargo, consideran poco probable y poco deseable esta meta cuando se está en un proceso de transición a la democracia.

los derechos ciudadanos en todos sus órdenes estaban severamente restringidos, el derecho a voto limitado a la población adulta alfabetizada, en un proceso que recién comienza en los años 30, los partidos populares mayormente ilegalizados, los derechos civiles reconocidos formalmente pero ejercidos solo por la población urbana de clase media y alta y los derechos económicos y sociales reconocidos tan solo para pequeños sectores de trabajadores. Esta situación fue cambiada por un gobierno autoritario: el reformismo militar, que reconoció masivamente derechos económicos y sociales para campesinos y trabajadores. Es más, este reconocimiento sirvió para que vastos sectores de campesinado andino y sobre todo jóvenes obreros recién llegados a las grandes ciudades, accedieran a sus derechos civiles a partir de su experiencia en distintas formas de organización social, tanto gremial como vecinal, que fueran reconocidas e incluso impulsadas por el reformismo. Estos nuevos derechos, siguiendo a Marshall, produjeron modificaciones en el status de las clases populares, es decir en su consideración por el conjunto de su posición en la sociedad. Estas modificaciones ocurrieron, en particular, tal como resaltamos en la Tercera Parte, en los nuevos contingentes proletarios. No diríamos que estos cambios de status llevaron a una igualación general, ni tampoco a una igualación dentro de las clases populares, por la heterogeneidad de las mismas, pero sí permitieron que sectores mayoritarios de la población, antes marginados, se sintieran parte de la sociedad y fueran reconocidos como tales por el Estado. Es decir, avanzaran en asumir una condición ciudadana, como miembros de una comunidad mayor, que a pesar de las distintas fracturas que atraviezan al Perú, podríamos denominar "nacional". La definición básica de ciudadanía, tal como señala Marshall, como membresía plena de una determinada sociedad, empezaba a realizarse.

Pero esta membresía tenía una característica fundamental: el carácter colectivo, y particularmente de clase, de los actores que logran y defienden estos derechos. Esto sucede con particular incidencia entre los trabajadores industriales, de particular significación en la coyuntura y contribuye a que se forme una identidad propia denominada "clacismo", que se refiere a pertenencia a una clase, en este caso a la clase trabajadora. Es esta identidad la que luego se extiende como sinónimo de autonomía a otros sectores populares. La ciudadanía tiene entonces referentes importantes en un desarrollo de la identidad de clase y su existencia es

indesligable del desarrollo y la autonomía de las clases populares durante el reformismo. La represión a los sectores populares organizados durante el gobierno de Morales Bermúdez es por eso también la represión de estos elementos económicos y sociales de ciudadanía, que constituían un desafío para las clases dominantes peruanas porque eran asumidos y defendidos colectivamente. Al respecto, Fernando Henrique Cardoso (1988: 323), refiriéndose a la transición brasileña, señala que en países dependientes con grados de pobreza extremos, como es también el caso del Perú, tiene poco sentido hablar solamente de la libertad individual del ciudadano propietario como base para una lucha por la democracia. Más bien, continúa, es fundamental recuperar el carácter colectivo, de los actores que llevan adelante esta lucha, sea a través de sindicatos, partidos y/o diversas formas de movimientos y organizaciones sociales. Solo estos actores colectivos serán capaces de enfrentar con éxito al Estado, las clases dominantes y sus profundas tradiciones autoritarias.

A esta connotación clasista que adquieren los elementos económicos y sociales de ciudadanía hay que agregar el problema étnico-social que opone a una minoría blanca, tradicionalmente en el control del poder económico y político, con una inmensa mayoría indígena y mestiza que conforma los sectores populares. En el proceso de formación nacional peruano la minoría blanca dominante ha usado su control del Estado y la economía para excluir del goce de derechos ciudadanos a las mayorías indígenas y mestizas. Esta exclusión ha tomado diversas formas, desde la discriminación abierta a los indígenas en el siglo XIX y principios del XX, pasando por la marginación y negligencia de la población campesina analfabeta, mayoritariamente indígena, en la mayor parte de este siglo, hasta el rechazo, la discriminación y el temor frente a los migrantes andinos en las ciudades de la costa y particularmente Lima, en la actualidad. Este conflicto fue otra de las hondas fisuras reveladas por el reformismo, al conceder derechos y en este sentido también humanidad a mayorías racialmente diferentes de la sociedad oligárquica. Las ganancias ciudadanas de estas mayorías trascendían entonces las referencias de clase y amenazaban también un predominio racial y cultural.

Las elecciones en este contexto significaban una recuperación de derechos políticos para toda la población y una ampliación del espectro

de participantes, pero sobre la base de la represión de quienes eran portadores de derechos económicos y sociales garantizados tan solo algunos años antes. De allí que la transición peruana, contradictoriamente, tenga elementos de apertura política y represión social, estableciendo el pasaje de un gobierno militar progresista a una democracia conservadora. Esta última, sí es entendida por sus autores como una democracia de individuos, que deja de lado los derechos que fueron asumidos clasistamente y tiende a proteger lo que O'Donnell y Schmitter señalan como condiciones *sine qua non* para que las transiciones a la democracia sean exitosas: los derechos de propiedad de la burguesía y la integridad de la institución militar. Sin embargo, es una democracia insuficiente para las condiciones del Perú en la década del setenta, porque reprime lo nuevo que en términos de ciudadanía se había ganado con el reformismo y restaura, parcialmente, lo viejo, a petición de los actores del Perú anterior a 1968.

Tenemos entonces que la ciudadanía, definida en sus cuatro elementos: económico, social, civil y político, es más bien recortada y no ampliada en la transición a la democracia en el caso peruano. La inclusión a un nivel (político) del conjunto de la población supuso en este caso la exclusión a otros niveles (social y económico), lo cual implicó para amplios sectores de la población un deterioro en sus posibilidades de miembros plenos de la sociedad, es decir, de ciudadanos.

D. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA TRANSICION PERUANA

Es difícil definir los movimientos sociales que se dieron en nuestro período de estudio y por ello quizás sea también compleja su relación con el proceso de transición mismo. Si tomamos dos enfoques, los de Charles Tilly y Alain Touraine, podemos tener un punto de partida.

Tilly (1978), prefiere hablar de acción colectiva que de movimiento social. Define movimiento social como "un grupo de gente identificada por su adhesión a algún conjunto particular de creencias" (1978:9), mientras que acción colectiva "consiste en gente actuando junta en busca de objetivos comunes" (1978:7). Señala que el análisis debe centrarse en la acción colectiva que a la postre explicaría los movimientos. Los grupos sociales, según Tilly, desarrollan acciones colectivas con una

determinada agenda de demandas, que caracteriza el movimiento como "defensivo" u "ofensivo", de acuerdo a las características de las mismas. Privilegia, asimismo, el análisis del grupo en función de los intereses, principalmente clasistas, que desarrolla, así como la dinámica de la acción colectiva en función de la organización, capacidad de obtener recursos y oportunidad para actuar con que se cuenta. Podríamos ubicar este paradigma dentro de la corriente de la "opción racional", es decir que para él la gente se integra a una acción colectiva por un cálculo de costo-beneficio, lo que implica que los resultados de la acción deban ser mayores que los recursos invertidos. Señala también la vocación estratégica de poder de todo movimiento social. Para él la realización del movimiento está en su relación con el poder político. Cuando la acción colectiva trasciende los marcos locales y regionales sus objetivos pasan a ser la entrada a un determinado sistema político, el reacomodo, si es que se está dentro de él, o su destrucción y el reemplazo por otro que los grupos involucrados consideran que responde mejor a sus intereses. Se trata entonces de posibilidades de acción colectiva por intereses comunes en función del poder. Es interesante la observación de Jean Cohen (1985:683-684) cuando refiere el parentesco con Marx del enfoque de Tilly, sin embargo, señala que se trata de una recuperación que deja de lado las dimensiones del pensamiento marxista que refieren a ideología y conciencia de clase. Tilly, por último señala, refiriéndose a las conclusiones de su libro "From mobilization to revolution" (1978:10) que: "...quizás, en el mejor de los casos, pueda aplicarse tan solo al mundo industrial urbano moderno", evitando hacer las distinciones que, como veremos más adelante, propone Alain Touraine. Sin embargo, la vasta influencia de ese mundo occidental y la amplitud de las fuentes utilizadas, nos permiten, salvando las distancias, recoger elementos para dar cuenta de realidades diferentes.

Touraine (1981), por otra parte, define movimiento social como "la conducta colectiva y organizada de un actor de clase luchando contra su adversario clasista por el control social de la historicidad en una comunidad concreta" (1981:77). Privilegia, por ello, la identidad, o la construcción de identidad, entendida como la apropiación de una determinada tradición histórico-cultural por parte del grupo respectivo. Esta labor del movimiento social la desarrolla en el ámbito de la sociedad y Touraine por ello la denomina "producción de sociedad". Para él, el

sentido del movimiento es entonces sincrónico, descartando la evolución o la reproducción diacrónica como objetivo de futuro necesario a tener por la acción del movimiento en la sociedad. Lo político en este planteamiento no es necesariamente la realización del movimiento, el objetivo no es por ello la conquista del poder o la participación en él, sino la reproducción de nuevos ámbitos sociales que se expresan en el desarrollo de identidades particulares. En el caso de Touraine, sin embargo, existe la salvedad histórico-temporal (1981:102-138), ya que considera sus planteamientos plenamente válidos para las sociedades formadas como estados-nación, es decir, para el caso de las sociedades occidentales desarrolladas, no así para los países del tercer mundo que tienen pendiente su proceso de formación nacional. En este último caso no solo son pertinentes las denominadas "luchas sociales" producto de los movimientos del mismo nombre, sino también las "luchas históricas" que apuntan a zanjar el proceso de formación nacional. En el caso de las luchas históricas se trata necesariamente de luchas por el poder político, cuestión eje para proceder a formar el estado-nación. En los países tercermundistas aludidos se daría entonces para Touraine una doble dinámica que llevaría a las luchas sociales a convertirse en luchas por el poder, e incluso en el poder mismo, es decir en Estado, a partir del cual continúan la construcción de sus sociedades. Sin esta opción de poder a los movimientos sociales de países que no tienen o están constituyendo estados-nación les sería imposible realizarse.

En el caso peruano los movimientos sociales del período de transición a la democracia presentan un conjunto de características que es interesante analizar.

Son movimientos que se dan en un momento de cambio en la actitud del Estado hacia la movilización social. Al respecto es importante recapitular algunos antecedentes. Desde principios de la década del sesenta se empiezan a producir tibias políticas reformistas como respuesta a la movilización social producida por la crisis del orden oligárquico. Estas políticas reformistas van a transformarse en un proyecto anti-oligárquico con el velasquismo, acelerando desde el Estado la movilización popular. Como señalamos líneas arriba, esto va a significar que el Estado brinda nuevos derechos, a la vez que los actores sociales los exigen, pero la dinámica del primero es lo que domina la situación.

Se produce entonces un doble proceso, por una parte el Estado intenta una cooptación masiva de la movilización popular, para lo cual desarrolla su propia organización corporativa, por otro, la organización popular se fortalece y extiende su autonomía. La situación, sin embargo, tiene un límite, cuando el Estado no puede controlar las fuerzas que ha desatado y tiene necesidad de hacerlo usando la represión. Este es el momento de crisis del velasquismo. El fenómeno tiene detrás la distancia ancestral entre Estado y sociedad en el Perú. Quienes desarrollan estas políticas no proceden directa ni indirectamente de la movilización social. En el caso de los tímidos reformismos de los sesentas se trata de partidos de clase media ligados a la oligarquía, en el caso del velasquismo, más allá de su radicalismo, se trata de una institución estatal, las Fuerzas Armadas, que se habían distinguido en décadas anteriores por su represión al pueblo. Por eso, los actores populares usan los derechos concedidos y ocupan los espacios que les dan, pero les es muy difícil reconocerse en ese Estado. No se trata, como en otros lugares de América Latina, de partidos o movimientos nacional-populares, quizás no tan generosos en conceder reformas y promover la participación, pero que llegan al gobierno luego de un importante proceso de movilización popular, sino de la institución militar, con todo el autoritarismo, la concepción jerárquica y la distancia social que ello implica. Este es el momento, sin embargo, que más podría semejarse a lo que en términos de Touraine se denomina como "lucha histórica", donde el objetivo es la formación del estado-nación, tal cual se lo propuso el proyecto velasquista.

Con la crisis del velasquismo, de 1973 en adelante, y la contrarreforma del gobierno siguiente, del general Morales Bermúdez (ver Segunda y Tercera Parte) la actitud fundamental del Estado vuelve a ser, crecientemente, de represión a la movilización popular. Es en esta etapa cuando se producen movimientos sociales autónomos y enfrentados directamente con el poder estatal. Se trata de movimientos que incluyen tanto organizaciones sociales (sindicatos y organizaciones de pobladores, principalmente) así como partidos de izquierda, especialmente de filiación marxista-leninista, cuya influencia será decisiva en el curso de los movimientos. Su acción en el período es reivindicativa y defensiva, ya que luchan por mantener salarios y condiciones de trabajo logradas, así como el protagonismo estatal en la realización de obras públicas. Este carácter reivindicativo y defensivo se expresará incluso en los grandes

paros nacionales de 1977 y 1978, que a pesar de darse en plena coyuntura de transición e influir significativamente la misma, constituirán en lo fundamental una respuesta al empeoramiento de condiciones económicas, no una lucha ofensiva por democracia política. Esta característica defensiva será un elemento central para no convertirse en protagonistas en la conformación de la nueva comunidad política democrática, o en los términos de Charles Tilly, para socavar la proyección política de los movimientos sociales. Sin embargo, a pesar de estas características serán movimientos que ganarán una presencia social significativa y en base a ella generarán nuevas identidades sociales. Este será el caso de la identidad denominada "clasismo" entre los obreros, que por la importancia que tiene el movimiento obrero en la década del setenta va a proyectarse como signo distintivo de autonomía a otros sectores del pueblo.

Este momento de autonomía, que a pesar de su carácter defensivo es donde se generan espacios sociales e identidades, donde en las palabras de Touraine se desarrolla "producción de sociedad", se puede denominar más específicamente como un período de desarrollo de movimientos sociales. En este momento es cuando se va a cristalizar una nueva densidad social plebeya que surge como producto de los movimientos sociales. Este fenómeno es caracterizado por Sinesio López (1987, 1989) como el desarrollo inicial de la sociedad civil en el Perú, que luego de un primer momento de surgimiento al amparo estatal, pasa a constituirse independientemente. Diríamos con Andrew Arato y Jean Cohen (1988), que la idea de sociedad civil expresa la autoconciencia de los movimientos sociales sobre su propia construcción de tejido societal. López (1989:9-16), inspirándose en Gramsci (1971:12), define a esta sociedad civil como las asociaciones privadas que atraviezan diferentes relaciones de clase, excluyendo la estructura económica y el aparato del Estado propiamente tal. Es decir una versión de la sociedad civil que al excluir la esfera económica, rechaza la identificación de esta con el mercado y, por ende, con un espacio de desigualdad. Por lo tanto, concibe a este nuevo espacio creado por los movimientos sociales como un esfera democratizadora, "una esfera de libertad" como diría Francisco Weffort (1988:329) refiriéndose a la transición brasileña. López (1989:12,15), sin embargo, agrega que se trata de una sociedad civil restringida a los sectores populares y a su red organizativa, principalmente gremial. Esto la hace

altamente dependiente de la capacidad de movilización social de sus organizaciones, y a la vez le presenta dificultades de influencia en la opinión pública y el conjunto de la sociedad mayor. Esta última limitación se haría evidente en el curso de la transición a la democracia en el Perú, en particular en el curso paralelo que tienen las demandas sociales y la campaña electoral, lo que lleva a graves dificultades para establecer vasos comunicantes entre ambas. Se trata entonces, en contraste con la forma que tiende a asumir la sociedad civil en los países europeos, de una sociedad civil popular y movilizadora (Ames y Nieto: 1987), sin el carácter universal que tiene la primera, pero al mismo tiempo con una capacidad de producción de sociedad, de la que carecen las clases dominantes en el Perú.

Sin embargo, el conjunto de características que presentan los movimientos sociales hace difícil clasificarlos en términos de patrones más globales. Su origen está muy ligado a una interacción con el Estado, tanto en su base de clase como en su inicial expansión organizativa y esto señala límites muy importantes a tener en cuenta. Sectores obreros como los metalúrgicos, siderúrgicos y pescadores se desarrollan debido a políticas estatales específicas que alcanzan su máximo esplendor durante el velasquismo, pero que rápidamente también se muestran poco efectivas, afectando la sobrevivencia de los sectores mencionados. Asimismo, la juventud de estos obreros, hace que su referencia al sector ocupacional al que pertenecen ("metalúrgicos" o "pescadores") sea más fuerte que su capacidad de articulación nacional, produciéndose lo que Touraine (1987:44-45) denomina "segmentación" en su situación objetiva. Un fenómeno similar sucede con los movimientos regionales, en particular con los que se dan en las zonas andinas, de aún menor desarrollo relativo. Estos, a pesar de tener gran relevancia en su localidad o región e incluso impacto nacional, tienen una reducida capacidad de articulación con otros movimientos contemporáneos.

Esta segmentación social afecta su capacidad de proyección política. Primero, porque restringe su posibilidad de articular intereses y por lo tanto plataformas reivindicativas y segundo, porque ante la falta de articulación o la debilidad de esta la participación que se impulsa carece de perspectiva nacional y difícilmente desarrolla un sentido de representación política. Como señala también Touraine (1987:45), refiriéndose

a las dificultades de proyección política de los actores sociales en América Latina, esta es una cuestión que no podemos achacar solo a la represión, sino que tenemos que analizarla observando la precariedad de las bases materiales de los actores sociales.

La diferencia entre participación y representación va a alcanzar gran importancia en la coyuntura, en particular respecto de los diferentes significados de democracia que manejan los dirigentes populares e izquierdistas, por una parte, y las élites militares y políticas conservadoras, por otra. Participación será el significado de democracia para los primeros, entendida como presencia activa en las movilizaciones que desarrollan los distintos movimientos y en sus iniciales mecanismos democráticos, garantías de parte del Estado para que esto pudiera ocurrir, así como satisfacción de demandas económicas y sociales. Representación será el significado de democracia para los segundos, entendida como la acción de individuos que periódicamente eligen a sus gobernantes para que tomen las decisiones nacionales y mantengan un determinado orden que garantice propiedades y jerarquías. El desencuentro de los portadores de ambos significados marcará la transición.

Esta diferencia entre la participación que ocurre en el plano social y la representación que ocurre en el plano político, será referida por Stepan (1988:3-5) en su reflexión comparativa sobre el Brasil y los países del cono sur de América Latina, como los fenómenos que ocurren en lo que él denomina la "sociedad civil", por una parte, y la "sociedad política", por otra. Por la primera entiende la esfera donde se constituyen los movimientos sociales y las organizaciones cívicas de las diferentes clases para expresarse y avanzar sus intereses, por la segunda, la esfera en la cual los actores se organizan específicamente para la lucha por el poder político. Stepan sostiene que una exagerada atención a la sociedad civil por oposición a la sociedad política presenta en el caso brasileño serios problemas para el proceso de democratización, ya que permite a los militares dividir fuerzas y, agregaríamos nosotros, remarcar el carácter elitista del proceso. Sin entrar a debatir esta definición de "sociedad civil" que me parece más restringida de la que diéramos anteriormente, creo, guardando distancias con la situación peruana, que es importante la atinencia de Stepan. En el Perú, además de la escasa diferenciación

estructural entre actores sociales y políticos, señalada líneas atrás, se juntaron la tradición autoritaria de la política oligárquica y la influencia marxista-leninista para impedir que las organizaciones sociales y los partidos de izquierda tuvieran un rol más importante en la definición de la reglas de juego democrático. En el caso de la tradición autoritaria de la oligarquía, presente en los partidos de derecha, apoyando el proceso de contrarreforma de los militares que buscaba destruir los avances de la sociedad civil y en el caso de la influencia marxista-leninista, centrándose en la lucha reivindicativa, restándole importancia a la apertura política y denunciando las elecciones como una farsa. Con esto los movimientos sociales agregan al propósito de marginarlos que venía desde arriba su propia voluntad de automarginación.

Tenemos entonces movimientos sociales, producto de un período de reformas, que se emancipan del Estado, crean su propio espacio social y generan una identidad, pero tienen graves problemas de realización política. Si solo observamos su capacidad de proyección estatal y la relación costo-beneficio de la acción colectiva, en términos de objetivos estratégicos conseguidos en el sistema político, como parece sugerir Tilly, la importancia de los movimientos se reduce al mínimo, pero si tomamos en cuenta los nuevos espacios sociales creados y la identidad generada, encontramos un camino para entender las ganancias del movimiento. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado la exclusión que sufren los sectores populares en el período de transición, lo que se puede traducir como carencia de objetivos estratégicos logrados en el Estado, porque hacerlo sería negligir en el análisis del factor cuya ausencia distingue el carácter conservador de la transición peruana.

Nuestro enfoque tratará entonces de analizar el desarrollo de los nuevos espacios e identidades logradas en el período, poniendo atención al conflicto movimiento social-estado, así como al fracaso de la proyección político-estratégica de esta movilización social.

SEGUNDA PARTE

Una transición peculiar

Para explicar la naturaleza de la transición a la democracia en el Perú, hay que explicar otros dos procesos que se desarrollaron en el tiempo y que son buena medida responsables de los cambios demarcados. Uno fue la crisis del Estado oligárquico y el gobierno militar intervencionista encabezado por el General Velasco, entre 1968 y 1975. La democracia oligárquica fue la forma política predominante hasta 1968 y el gobierno militar reformador a "vanguardia", un intento de acabar con esta régimen político reformando desde arriba la sociedad y el Estado. Ambos procesos, si bien refieren a cuestiones distintas, sus competencias se superponen parcialmente, en el primer caso eliminando la herencia colonial y republicana de dominación de una élite de ascendencia europea, en el segundo, usando el Estado y en particular a la Fuerza Armada para producir cambios de trascendencia democrática en la sociedad. "La transición oligárquica" como diría Bourdieu (1987: 11), sin embargo, no es un Estado oligárquico y reformador anti-oligárquico recurriendo al Leviatán para cumplir sus objetivos. En el Perú, por ello, la transición no se interrumpe ni siquiera un proceso que luego comienza, sino que se intenta inaugurar una práctica desconocida para los trayectos.

La transición coincide con la crisis del velasquismo, cuando fracasan los esfuerzos por impulsar reformas políticas en el proceso reformador y se ponen en actividad las fuerzas, principalmente de origen conservador, que impulsaron la transición a la democracia. Por eso se diferenciaba, cuando de Velasco, de la capitulación del reformismo como tal. La crisis

PARA EXPLICAR LA NATURALEZA de la transición a la democracia en el Perú, hay que exponer otros dos procesos que la precedieron en el tiempo y que en buena medida condicionaron su carácter democrático. Me refiero a la crisis del Estado Oligárquico y al gobierno militar reformista encabezado por el General Velasco, entre 1968 y 1975. La dominación oligárquica fue la forma política predominante hasta 1968 y el gobierno militar reformista o "velasquismo" un intento de acabar con este régimen político reformando desde arriba la sociedad y el Estado. Ambos procesos, si bien refieren a cuestiones diferentes, comparten un signo político autoritario, en el primer caso sintetizando la herencia colonial y republicana de dominación de una élite de ascendencia europea, en el segundo, usando el Estado y en particular a la Fuerza Armada para producir cambios de consecuencias democráticas en la sociedad. "La propensión oligárquica" como diría Bourricaud (1989:14), sin embargo, persiste. Estado Oligárquico y reformas anti-oligárquicas recurrirán al Leviatán para cumplir sus objetivos. En el Perú, por ello, la transición será aprendizaje, no se interrumpe un proceso que luego continúa, sino que se intenta inaugurar una práctica desconocida para las mayorías.

La transición empieza con la crisis del velasquismo, cuando fracasan los esfuerzos por institucionalizar políticamente el proceso reformista y se ponen en actividad las fuerzas, principalmente de signo conservador, que impulsarían la transición a la democracia. Por eso he diferenciado, la caída de Velasco, de la explicación del reformismo como tal. La crisis

del proyecto reformista da lugar a una aguda disputa entre la movilización social que había desatado el velasquismo y las Fuerzas Armadas que tratan de contenerla, para luego, estas últimas, buscar interlocutores que les permitan una salida política. De allí, el tratamiento diferenciado de los procesos de contrarreforma y apertura política.

La crisis del Estado Oligárquico

A. LA FORMA DE DOMINACION

El orden político anterior a 1968 difícilmente puede calificarse como democrático. Ello no solo se debe a la abundancia de golpes de Estado y a las graves restricciones en cuanto a electores y participantes cuando hubieron procesos electorales, sino principalmente a sus bases sociales. Fue un Estado de minorías que no tuvo vocación hegemónica, ni pretendió mostrar lo que no era. Un Estado que determinó e incluso legisló la exclusión de los más y les aplicó el garrote cuando, a su juicio, pidieron demasiado.

El Estado Oligárquico peruano cubre el período que va de 1895, cuando se reorganiza el poder político luego de la Guerra con Chile, hasta 1968, cuando los militares empiezan un gobierno reformista que afecta las bases de ese sistema político. Esta periodización no implica que no existiera dominio oligárquico previo a 1895, pero por las condiciones de precariedad estatal en que se desarrolla consideramos que el Estado, en tanto aparato de dominación y pacto social relativamente estable, recién empieza a tener una vida regular en 1895. Este año marca la derrota del caudillismo militar que había asolado el país desde la independencia en 1821 y el inicio de construcción de un poder central.

El Estado Oligárquico era el poder de los señores de la tierra, liderados por su fracción más dinámica, de incipiente desarrollo burgués, denomi-

nada propiamente "oligarquía", por ser la que se había desarrollado en el negocio de cultivos de exportación para el mercado mundial. Los intereses terratenientes se extendían al comercio, la minería y la banca, pero el control territorial, a través de sistema de hacienda, heredado de los españoles, era fundamental. Burga y Flores Galindo (1987:84) apuntan que no solo era indispensable el poder económico sino también el status para ser considerado parte del grupo oligárquico y que la determinante en esta connotación de prestigio social era la herencia colonial, el ser descendiente de conquistadores o funcionarios virreinales o haberse ligado a ellos vía el matrimonio.

El Estado oligárquico tiene su principal punto de apoyo en la relación entre la oligarquía, principalmente agro-exportadora y el capital imperialista, primero inglés y luego norteamericano. Para implementar su dominio desarrolla un pequeño aparato burocrático en Lima, que según Joaquín Capelo contaba en 1905 con 500 empleados públicos (López 1978:993), así como pactos regionales con diversos sectores terratenientes del interior, a cargo de las respectivas funciones estatales en sus provincias, lo que le permite un control de la población y el territorio. José Carlos Mariátegui (1970:35-38) denomina a este sistema de poder local y/o regional "gamonalismo", en el cual resalta el control privado del uso de la violencia por parte del terrateniente o gamonal, subordinando en muchos casos recursos del poder central como el ejército, la policía o los jueces a sus intereses inmediatos. El Estado Oligárquico es por definición excluyente "de un pequeño número y para un pequeño número" (Bourricaud 1989:24). Jorge Basadre en su *Historia de la República del Perú* (1968, 11:123) dice, refiriéndose a los integrantes del Partido Civil que organiza el Estado Oligárquico en su primera etapa, entre 1895 y 1919, que "era la gente a la que le había ido bien en la vida" resaltando la injerencia directa de los grandes propietarios en el poder y la estrechez de las posibilidades de éxito en el período. Era una dominación que se basaba en el consenso pasivo de la mayoría de la población, o lo que Sinesio López llama "masas indiferenciadas de clase" (1978:991) por su escasa estructuración clasista. Julio Cotler (1983:177), caracteriza esta forma de dominación a través de la figura del "triángulo sin base", donde señala que múltiples radios convergen en un solo vértice pero sin comunicación entre ellos. Es decir, que se trata de una forma de dominación que utiliza la fragmentación

social de las mayorías, donde destaca la marginación del sector rural y la incorporación segmentaria de algunos sectores populares, para imponer su predominio. El Estado se asienta así en relaciones de clientela entre los diversos grupos oligárquicos, el capital extranjero y distintos sectores de la población, relaciones las más de las veces de carácter privado, donde la lealtad es a tal o cual señor y no al poder público. Así, cuando los sectores dominados formulan sus demandas estas buscan ser tratadas de manera separada, condenando toda organización que venga desde abajo y evitando el cuestionamiento a la privatización de la dominación estatal.

Esta definición excluyente es la que lleva a López (1978:995) a señalar dos momentos de crisis en el desarrollo del Estado Oligárquico. La primera una crisis "histórica", a principios de los años treinta, cuando las demandas de los sectores medios y algunos sectores obreros alcanzan el nivel de la organización política y cuestionan la legitimidad de la dominación excluyente de la oligarquía. Es el momento del surgimiento del APRA y el Partido Comunista (PC), desarrollando ambos, pero sobre todo el primero, un importante trabajo de organización entre las clases medias y algunos sectores obreros, a la vez que recurriendo a cuestionamientos radicales del orden vigente vía la insurrección armada. Para enfrentar esta situación la oligarquía se ve precisada a abdicar del control directo del gobierno civil y recurrir a los militares para salvar su dominación. Es decir, continuar con un sistema excluyente pero impuesto por la fuerza militar. Históricamente dice López la dominación se encuentra agotada en tanto que aparece como ilegítima, pero políticamente todavía cuenta con recursos, específicamente los militares, para mantenerse. La segunda es la crisis política, a fines de los años cincuenta, cuando factores estructurales, que veremos más adelante, hacen el propio recurso del golpe de Estado insuficiente para que el sistema mantenga su capacidad de gobierno sobre las mayorías. Esta sería la crisis que el velasquismo se encargaría de volver en definitiva.

¿De qué democracia podemos hablar en estas condiciones? Carlos Franco (1986:314) ha llamado a estos interregnos de legalidad "democracia-oligárquica", que no debemos confundir con las "democraduras" de las que nos hablan Schmitter y O'Donnell (1986:9) en su reflexión sobre las transiciones. En el primer caso el Estado no considera parte de la sociedad al campesinado indígena, particularmente andino, por excluir

a los analfabetos del derecho al voto, lo que es concordante con el dominio privado que ejercían los terratenientes en la mayor parte de las zonas rurales. Es más, múltiples piezas de legislación que se vino en llamar "tutelar" (Lynch 1979) muestran que de forma explícita se les consideraba ciudadanos de segunda categoría o menores que supuestamente el Estado debía proteger. Inclusive dentro de aquellos que considera miembros de la sociedad impone restricciones, para los analfabetos urbanos y las mujeres. Las democraduras no implican necesariamente la marginación explícita de un sector de la población de la sociedad nacional, sino la prohibición del tratamiento de determinados temas y/o la restricción de la ciudadanía para algunos individuos o grupos, lo que no significa que no se les considere parte de la sociedad. La democracia-oligárquica no restringe la ciudadanía solo por razones de agenda política o preferencia partidaria sino por discriminación étnico-social de quienes eran la abrumadora mayoría del país. En las elecciones de 1931 que se consideran las primeras relativamente organizadas, con un padrón electoral cuya confección no estaba ligada a la lista de los mayores contribuyentes ni al registro del servicio militar y donde el voto se ejerció en forma secreta (Basadre 1980:141-160), solo participaron una cifra de electores que correspondía a algo más del 6% de la población nacional, sin embargo, estos eran el 76% de los hombres adultos alfabetos, aptos para votar (Roncagliolo 1980:24-27). Estas cifras se mantienen en proporciones similares en los procesos de 1939, 1945 y 1950, hasta 1956, cuando se incorpora el voto femenino y se eleva la cifra de electores al 17% de la población nacional. Este año, coincidentemente, empiezan las movilizaciones urbanas y campesinas que desatan la crisis de esta forma de dominación.

La democracia-oligárquica no tiene que ver con la eventualidad de una dictadura militar que busca como solución a su crisis instaurar una democracia restringida, sino es más bien el producto natural de una correlación de fuerzas sociales que da base a un orden estructuralmente excluyente. La democracia en los tiempos oligárquicos era más, entonces, un arreglo de cuentas, asumido como legítimo, al interior de la élite dominante y no un sistema de representación política del conjunto de la sociedad. Dos ejemplos, en momentos extremos de crisis del dominio oligárquico ilustran esta última afirmación sobre el predominio del gobierno de los "notables". Uno es el caso de la reunión de "los señores"

de Lima, el año 1880, con la ciudad ocupada por los invasores chilenos, para "elegir" un Presidente de la República que tratara con el enemigo. El otro, 75 años más tarde, es la reunión del mismo carácter llevada adelante en 1955 para discutir las salidas políticas a la dictadura militar de la época y enfrentar la crisis del orden que ya se avecinaba. Eran "los señores" los llamados a decidir en última instancia el destino del país.

B. LA CRISIS ESTRUCTURAL

El sistema, sin embargo, entra en crisis cuando no puede responder a las demandas, cada vez mayores, de la población que reclama mejores condiciones de vida, servicios del Estado y participación política (Cotler 1985). Ello se debe a que, desde mediados de la década del cincuenta, ocurre en el país una importante modernización capitalista que tiene varios elementos. Primero, un proceso de industrialización, que lleva al sector manufacturero a adquirir predominancia en la conformación del Producto Nacional Bruto, pasando de ser el 13.6% del mismo en 1950 a ser el 26.2% en 1975, mientras que la agricultura, otrora predominante, declina del 20.4% al 12.7% en el mismo período (Carbonetto 1986:508). Esta industrialización sigue el modelo de "sustitución de importaciones", es decir, busca fabricar en el país algunos productos importados, privilegiando productos de consumo, más bien inmediato, de las clases medias y altas, lo que garantizaba un mercado seguro y ganancias rápidas. Segundo, la crisis del mundo rural tradicional, sacrificado por este desarrollo industrial que presupone precios bajos para los productos agrícolas y significa un polo de atracción de mano de obra y la ilusión de mejores niveles de vida para el campesinado. Al respecto, se calcula un deterioro de los precios agrarios del orden del 20% entre 1945 y 1969 (Hopkins 1981:84). La principal razón, según Rodrigo Montoya (1989:248), para esta crisis es la incapacidad de la clase terrateniente andina para reproducirse como tal, así como los importantes movimientos campesinos, en disputa con los terratenientes, por el recurso productivo fundamental que es la tierra, cuyo control se hace más urgente en los momentos de crisis. Tercero, las grandes migraciones del campo a la ciudad y de las provincias a Lima, que se suceden entre 1950 y 1980, pero con particular incidencia en la década del 60 (Verdera 1986). Estas migraciones van a cambiar las ciudades de la costa y sobre todo la ciudad capital, transformando su carácter occidental y criollo por otro mestizo y andino.

Lima Metropolitana pasa de tener el 18.7% de la población nacional en 1961 a contar con el 24.4% en 1972 (Consejo Nacional de Población 1984:70). Cuarto, los elementos anteriores van a producir condiciones para un efecto democratizador a nivel de la sociedad, en el sentido de que millones de individuos van a estar en disposición de organizarse, produciéndose como señala René Zavaleta (1983:39-42) para el caso boliviano, una disposición de masas, fruto de la liberación de las formas de subordinación señorial. Al respecto Cotler (1985:276) anota el trabajo de múltiples antropólogos que señalan el deterioro de las relaciones de dependencia personal en el campo, en las décadas del 50 y el 60, y Rodrigo Montoya (1989:19-46), la predominancia de las demandas de siervos y parceleros para disminuir y/o terminar con las relaciones de tipo pre-capitalista en el medio rural. Esta disponibilidad se produce tanto en el campo luchando por la tierra, como, principalmente, en la ciudad como obreros, producto de la industrialización, desocupados que demandan trabajo, o simples pobladores que construyen un nuevo espacio de vida urbana en los barrios populares. A este impulso que se produce desde abajo se va a agregar la propia acción del Estado que a través de sus primeras políticas reformistas busca integrar segmentariamente a algunos sectores populares, dando concesiones parciales y reforzando esta disposición a la organización. El efecto se potencia entonces desde arriba y desde abajo dando curso a la consecuencia más significativa de la crisis del Estado Oligárquico.

Sin embargo, la modernización capitalista presenta una seria limitación por el tipo de industrialización que desarrolla. Se trata de una industrialización inducida principalmente por el capital extranjero y restringida a satisfacer el consumo de pequeños sectores de la población, sin intenciones de crear un mercado interno nacional ni engarzarse con otros procesos productivos importantes en campos como la agricultura o la minería. Esto hace que su demanda de mano de obra alcance rápidamente un techo y sea mucho menor que la oferta producto de las migraciones. La urbanización como observa tempranamente Bourricaud (1989:105) es más rápida que la industrialización. Si en 1940 la población urbana del Perú era del orden de 35.4% de la población total, en 1972 aumenta al 59.5% (Consejo Nacional de Población 1984:68), en cambio, el porcentaje de la fuerza laboral en el sector industrial manufacturero, de asiento fundamentalmente urbano, se mantiene relativamente esta-

ble, alrededor del 15% de la fuerza laboral total (Sulmont 1977:309). La frustración de este proceso de modernización capitalista lleva a Sinesio López (1989:1) a decir que en el Perú las etapas históricas se acumulan, no se cancelan, produciéndose la convivencia de múltiples formas de integración social y política y una consecuente debilidad de las formas de integración capitalistas. La modernización económica tiene por ello un alcance mucho menor que la democratización social, podemos decir que en muchos sentidos los impulsos de la primera desatan la segunda, pero una vez que el proceso de democratización está en marcha no pudo ser limitado a las posibilidades de la modernización. La tensión entre ambos procesos marcará a las reformas y contrarreformas posteriores y es uno de los grandes conflictos irresueltos que deja el Estado Oligárquico.

Por lo demás, la democratización social no significa individuación ciudadana y acceso a derechos políticos para todos, sino principalmente disponibilidad de masa que tiende a convertirse en audiencia del caudillo carismático populista. El tránsito de masas a ciudadanos se hace con dificultad, por ausencia de una adscripción al mercado que permita el desarrollo de la división del trabajo con fluidez. Esto no quiere decir que los elementos de democratización social no sean significativos sino que no se traducen inmediatamente en democracia política. La crisis del Estado Oligárquico deja entonces una masa disponible para la organización que tiene como posibilidad inmediata la construcción de la sociedad civil y que carece de intermediaciones sustantivas con el ámbito estatal.

C. LOS ACTORES POLÍTICOS FRENTE A LA CRISIS

Esta crisis oligárquica intenta ser enfrentada por diversos actores, que aparecen o son potenciados por la modernización capitalista y la democratización social. Se producen dos tipos de movimientos, que llegaran a unirse solo circunstancialmente, uno en la escena política y otro en el medio rural. Los primeros son los movimientos reformistas de clase media, que salen a luz en 1956 y pugnan por hacerse un sitio en el Estado buscando ampliar la participación política; los segundos, los movimientos campesinos, entre 1956 y 1964, en el centro y el sur-oriente del país, que luchaban por arrebatar el control de la tierra a los gamonales. Estos últimos, sin ser los únicos movimientos sociales en el período,

porque también existen iniciales movimientos de pobladores y de obreros, son los que pueden significar, por su ubicación y dimensiones, un desafío al dominio oligárquico.

Entre quienes buscaban salidas a la crisis oligárquica pugnando por ingresar a la escena política se encuentran tanto el APRA como nuevos movimientos reformistas. La primera que venía enfrentada a la oligarquía desde los años 30, pero que en la década del 50 cambia de posición, buscando una alianza con su rival oligárquico para conducir la modernización del país. Este espacio de oposición anti-oligárquica busca ser cubierto por nuevos partidos reformistas, con una importante presencia de profesionales de clase media, entre los que destacan Acción Popular (AP), la Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista, aunque solo el primero alcanza éxito electoral. Tanto el APRA como Acción Popular apelan al liderazgo carismático de sus figuras centrales como elemento fundamental de movilización de sus seguidores. Sin embargo, a diferencia del APRA, los nuevos grupos reformistas no desarrollan lazos significativos con los sectores sociales emergentes que iniciaban procesos de movilización por sus demandas, tanto en el campo, de mucha importancia en el período, como en la ciudad (Franco 1986:316). Prefirieron buscar un lugar en la escena política oligárquica y apelar a su pequeña opinión pública, con las limitaciones consecuentes.

El proceso de modernización y los nuevos grupos reformistas impactan a sectores de la propia oligarquía y a instituciones tradicionales como la Fuerza Armada y la Iglesia llevando a lo que se denomina un "consenso" (Cotler 1985:330-331) sobre la necesidad de cambios, siempre que estos fueran hechos dentro de las pautas del orden establecido. Los temas de este consenso eran la reforma agraria, el tratamiento al capital extranjero y la industrialización. Por cierto, las posiciones respecto de cada tema variaban de acuerdo a cada actor político, pero Cotler insiste en hablar de consenso porque considera que el tratamiento de temas semejantes es ya una reacción contra el manejo privado que la oligarquía hacía de la cosa pública. Bourricaud (1989:381-386), incluso, en observaciones escritas en la época e influenciado quizás por el rol que cumplía el APRA, predice la posibilidad de que la oligarquía se modernice e integre, tanto a los nuevos grupos insurgentes como las demandas populares que se expresaban.

Uno de los cambios en torno a los que se articulaba este consenso era la reforma agraria. Su necesidad surge, en buena medida, de los movimientos campesinos de la época. Estos son movimientos que se dan en un plano diferente al de los nuevos partidos reformistas. Surgen de las necesidades de la propia masa campesina y en sectores rurales cuya producción para el mercado mundial hace el conflicto social más intenso, por los intentos del terrateniente de aumentar las obligaciones de los campesinos y arrebatarles sus tierras. Los objetivos de lucha por la tierra, contra el abuso de autoridades locales o contra diversas formas de opresión señorial, apuntaban a uno de los pilares del Estado Oligárquico por lo que su impacto, a pesar de la brutal represión de que son objeto y el logro solo parcial de sus objetivos, será necesariamente significativo. Sin embargo, esta influencia no se procesa a través de las agrupaciones izquierdistas o los asesores de procedencia urbana que les ayudan a organizar sus demandas, pero cuyas posibilidades en la escena nacional son reducidas, sino en el impacto que los movimientos como tales tuvieron en los actores políticos que sí contaban en esos momentos. Así, los nuevos partidos que surgen adoptan la reforma agraria como una de sus banderas centrales y esta a su vez es tema de debate nacional. El gobierno del Presidente Prado (1956-1962), último gobierno propiamente oligárquico, forma la Comisión para la Reforma Agraria y Vivienda en 1956, el breve gobierno militar que lo sucede (1962-1963) da una ley de Reforma Agraria que se circunscribe a uno de los valles en conflicto y el primer gobierno del presidente Belaúnde, en 1963, da una ley de reforma agraria que afecta principalmente las regiones más atrasadas de la sierra del Perú. Incluso podemos encontrar consecuencias de esta gran agitación campesina en el movimiento guerrillero de 1965, de corta duración y conformado principalmente por intelectuales, pero que contribuye también a la toma de conciencia sobre el desmoronamiento del régimen de dominación oligárquico.

Sin embargo, estas propuestas, salvo la guerrillera de pocas posibilidades, no iban más allá de plantear reformas aceptables para la oligarquía. El caso más claro es el APRA y su opción, en 1956, por la alianza con las fuerzas a las que siempre había combatido. A cambio de su apoyo el APRA consigue la legalidad del partido y de los sindicatos por ella promovidos, en los términos de la democracia oligárquica, pero ninguna reforma económica o social significativa. De igual manera, el primer

gobierno de Fernando Belaunde y su partido Acción Popular (1963-1968), que gana las elecciones con una plataforma anti-oligárquica, en particular respecto del tratamiento al capital extranjero y la reforma agraria, ve rápidamente su acción desnaturalizada por un parlamento conservador que lo lleva a arriar sus banderas de cambio y buscar entenderse con la derecha. En ambos casos terminan formándose gobiernos que la política criolla denominó de "convivencia", en el caso del apoyo del APRA a Manuel Prado y de "superconvivencia", para el caso de la alianza de Acción Popular con la derecha y finalmente también con el APRA. En ningún caso la oligarquía produjo la integración de las demandas reformistas esperada por Bourricaud ni los grupos reformistas tuvieron capacidad de imponer sus agendas iniciales, produciéndose lo que Carlos Franco (1986:317) denomina un "bloqueo político" por la carencia de fuerza para transformar el sistema a pesar de sus síntomas de crisis. Es equivocado, por ello, establecer una continuidad entre el reformismo "democrático" (Pease 1977:35) que surge luego de 1956, con la crisis del Estado oligárquico y el reformismo militar, que pasaremos a tratar en las siguientes páginas. Algunos autores, como Luis Abugattás (1987:123), creen encontrar una línea de continuidad en la definición populista de ambos movimientos, por el acento común en el nacionalismo, la industrialización, la reforma agraria y el crecimiento del rol del Estado. Sin embargo, en esta visión se deja de lado el elemento político central que los diferencia, el reformismo "democrático" es bloqueado por la oligarquía y termina absorbido por ella, el reformismo militar, en cambio, es consecuentemente anti-oligárquico afectando las bases de poder de la oligarquía. De allí que la propia denominación democrática del primero, más que referir a una real apertura del sistema político señala su pacto con la democracia oligárquica.

En los años sesenta tenemos entonces diversas corrientes de movilización desatadas. Sectores medios profesionales que pugnan por reformas, para incluirse antes que nada ellos mismos en el sistema político, las masas campesinas que expresan sus demandas acicateadas por la crisis del mundo rural tradicional, produciendo impacto pero no comunicación con el sistema político, por su condición de exclusión ancestral y la propia oligarquía que se resiste al cambio y usa sus acercamientos con los reformismos nuevos o viejos para este propósito. El funcionamiento de la democracia oligárquica en este período de crisis,

entre 1956 y 1968, tiene escasas posibilidades de representar ciudadanos. Las apelaciones de masa más significativas, en audiencias principalmente urbanas, las producen Haya de la Torre, líder aprista y Fernando Belaúnde, líder de Acción Popular. Y la oligarquía negocia con estas capacidades de apelación carismática. Los movimientos campesinos lejos de la oligarquía y lejos también de los caudillos populistas, no tienen, por ejemplo, forma viable de participación. Las propias masas que siguen a los caudillos carismáticos ven traicionadas en pocos años las banderas anti-oligárquicas por las que alguna vez votaron. La política vuelve a reducirse así al arreglo oligárquico, solo que esta vez incluyendo a los líderes que surgen como reformistas. ¿Quién desata el entrampamiento? Esa será la clave de surgimiento del velasquismo.

3. LOS ANTECEDENTES

En los primeros setenta, también llamado velasquismo, por los rasgos caudillescos que se le dan, el General Juan Velasco, le impone el proceso, pero antecedente en los cambios por los que atraviesa el Ejército Peruano entre los años cincuenta y sesenta. El Ejército es una institución que a diferencia del resto del Estado es impactada positivamente por el proceso de modernización capitalista, desarrollando nuevos valores y formas de procedimientos que se alejan de su historia específica para que impulse la profesionalización de sus cuadros. Es importante señalar que esta racionalización se da en la segunda mitad de los años cincuenta luego del último gobierno militar encabezado por un caudillo profesional, como fue el General Odría, entre 1948 y 1956. Odría, junto con Sánchez Cerro y Benavides, representaron un caudillismo militar que con la crisis de los años 30 cuya función fue reprimir las demandas populares que los políticos civiles no podían controlar. Para tanto pusieron la institución al servicio de los intereses oligárquicos y aseguraron, tanto el país como la institución, en base al criterio arbitrario de poder. Esta racionalización implica una superación de este tipo de caudillismo y se empieza a hacer efectiva, de acuerdo a lo que nos muestra el maestro entrevistado el General Jorge Feyjandez Maldonado, con la reorganización que lleva adelante el General Alfredo Rodríguez Larrea en 1957.

El reformismo militar

A. LOS ANTECEDENTES

EL REFORMISMO MILITAR, también llamado velasquismo, por los rasgos definitorios que su líder, el General Juan Velasco, le impone al proceso, tiene antecedentes en los cambios por los que atraviesa el Ejército Peruano en los años cincuenta y sesenta. El Ejército es una institución que a diferencia del resto del Estado es impactada positivamente por el proceso de modernización capitalista, desarrollando una racionalización interna de proporciones, que en términos de su función específica castrense implica la profesionalización de sus cuadros. Es importante resaltar que esta racionalización se inicia en la segunda mitad de los años cincuenta luego del último gobierno militar encabezado por un caudillo tradicional, como fue el General Odría, entre 1948 y 1956. Odría, junto con Sánchez Cerro y Benavides, representaron un caudillismo militar surgido con la crisis de los años 30 cuya función fue reprimir las demandas populares que los políticos civiles no podían controlar. Para hacerlo pusieron la institución al servicio de los intereses oligárquicos y gobernaron, tanto el país como su institución, en base al criterio arbitrario del líder. Esta racionalización implica una superación de este tipo de caudillismo y se empieza a hacer efectiva, de acuerdo a lo que nos informa nuestro entrevistado el General Jorge Fernández Maldonado, en la reorganización que lleva adelante el General Alfredo Rodríguez Martínez en 1957.

Cuando nos referimos a que la racionalización desarrollada en el Ejército implica la profesionalización de sus cuadros, entendemos profesión en el sentido que lo hace Samuel Huntington (1985:8) como "un tipo especial de grupo funcional con características de alta especialización" y los elementos inherentes de competencia, responsabilidad y espíritu de cuerpo. En este sentido la profesionalización es un proceso que niega el caudillismo anterior y tiende a reforzar el funcionamiento burocrático interno vía el respeto a las jerarquías y a la unidad institucional. Este tipo de oficial "profesional" era muy difícil que surgiera en un ambiente donde la voluntad arbitraria del caudillo era predominante.

Aspectos fundamentales de esta reorganización fueron la formación del Servicio de Inteligencia del Ejército y del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). En estas unidades se procedería a formar un nuevo tipo de profesional, lo que Kruijt (1989:57) llama "el intelectual militar". En el eje de esta racionalización está la discusión de los fines mismos de la institución, la que se da en torno a la definición del concepto de "seguridad nacional" (Kruijt 1989:59-72). El Ejército Peruano, al igual que la mayoría de los ejércitos de América Latina, tiene gran influencia de los Estados Unidos, tanto a través de la presencia en el Perú de misiones militares norteamericanas como del envío de los oficiales más destacados a seguir estudios a los Estados Unidos. Por ello, el concepto de seguridad nacional que se impone luego de la Segunda Guerra mundial es el patrocinado por Estados Unidos, que señala la defensa continental de América como la tarea común de todos los ejércitos hemisféricos, frente a una hipotética agresión, probablemente soviética. Este concepto coloca el anti-comunismo como la tarea central de cada ejército nacional. Sin embargo, en el proceso de racionalización del Ejército Peruano se forman puntos de vista alternativos que provienen de los diagnósticos de la situación del país que se desarrollan en la propia institución militar. Estos diagnósticos inciden en que el poder, tal como señala un informe anónimo del CAEM en 1963 "no son el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral, sino los latifundistas, los exportadores, los banqueros y las empresas americanas" (Kruijt 1989:64). En otras palabras, que las instancias superiores del Estado, a quien se supone las Fuerzas Armadas deben defender, no representan los intereses generales de la población sino los intereses particulares de la oligarquía. Como señala entonces Carlos Franco (1986:328), los militares empiezan a tomar

conciencia de que el sujeto de la seguridad nacional, un Estado legítimo y representativo, es decir, un Estado Nacional, no existía y que por lo tanto debía ser construido.

Las particularidades de esta preocupación militar, que liga la seguridad nacional, con el problema del desarrollo y en última instancia con el problema del poder político, llevan a Alfred Stepan (1978:129-130) a señalar, partiendo de Huntington pero diferenciándose de él, la existencia de un "nuevo profesionalismo" que tiene en América Latina al caso peruano como uno de sus ejemplos. "Nuevo", aunque en el Perú la calificación pueda ser peligrosa por la carencia de profesionalismo anterior, por oposición al profesionalismo alejado de la política que describe Huntington para Europa Occidental y Estados Unidos. En estos últimos casos, la especialización en el manejo de la violencia les da a los militares un espacio estrictamente relativo a su función, mientras que en el Perú el desarrollo de su especialización los lleva a participar en política. No se trata solo entonces de un "intelectual militar", como propone Kruijt, sino además de un profesional que para realizar los objetivos de su institución tiene que ampliar el rango de sus preocupaciones, por supuesto que con un mayor entrenamiento y actitud intelectuales.

Esta reflexión lleva a los militares a la problemática del desarrollo como cuestión fundamental a llevar adelante para lograr una seguridad nacional integral y los hace partícipes del consenso reformista que se empieza a formar en el Perú en el período de crisis del Estado Oligárquico, sobre la necesidad de llevar adelante una reforma agraria, un proceso de industrialización y una nueva actitud nacionalista frente al capital extranjero. Sin embargo, esta reflexión sobre el desarrollo admite desde un inicio diferentes matices y posiciones, que son los que permiten que se pueda desarrollar en una institución del orden como es, al fin y al cabo, el ejército. Desde aquellos que entendían la necesidad de cambios como una forma de evitar el peligro comunista, en una típica posición contra-insurgente, que se relaciona con el discurso norteamericano para la Alianza para el Progreso y las reflexiones al respecto de Robert McNamara (North 1985:275), hasta los que desde una posición nacionalista empiezan a visualizar la existencia de intereses estratégicos distintos entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos y por lo

tanto la necesidad de tomar distancia de este último para lograr el objetivo de formar el Estado Nacional. Las tensiones entre los diversos elementos de este pensamiento militar atraviezan casi todos los escritos de sus principales representantes, desde el General José del Carmen Marín, precursor de esta reflexión ya en los años cuarenta, hasta los del General Edgardo Mercado Jarrín (1967) anteriores al velasquismo (Kruijt 1989). Fernández Maldonado insistirá, cuando lo entrevistamos, que, dentro de estos matices, en la Escuela de Inteligencia del Ejército se desarrolla un pensamiento mucho más radical sobre la necesidad de los cambios que en el CAEM. Esto es significativo porque tres de los cuatro coroneles que forman parte de la conspiración para dar el golpe y luego impulsan las principales reformas son entrenados en la Escuela de Inteligencia. Quizás el consenso reformista al que hacíamos alusión líneas arriba no era suficiente para romper con el poder oligárquico, había necesidad de una vanguardia no solo ideológica sino también prácticamente entrenada en trajines conspirativos para actuar.

Este horizonte reformista va a tener algunas pruebas prácticas en estos años de crisis oligárquica. Por una parte la breve experiencia de gobierno entre 1962 y 1963, fruto de un golpe en el que aún se combinan viejos con nuevos elementos. La intervención militar pretende evitar, como ya había sucedido en décadas anteriores, un acceso aprista al poder, luego de la victoria electoral de ese partido en los comicios de 1962. Sin embargo, el golpe se lleva adelante, por primera vez, en términos institucionales y ya en el poder los militares emprenden la primera experiencia local de reforma agraria en respuesta a un movimiento campesino, así como la fundación del Instituto Nacional de Planificación. De igual forma en 1965 el Ejército es encargado, por el primer gobierno de Belaunde, de reprimir un pequeño brote guerrillero, acción que desarrolló en algunos pocos meses. Ambas experiencias tienen gran impacto entre la oficialidad y van a ser cuidadosamente evaluadas. Los militares establecerán un contraste entre el consenso reformista existente y la incapacidad de los civiles, en particular del primer gobierno de Belaunde, que se autoproclama reformista, para llevarlas adelante.

Los militares encontrarán entonces que su propia modernización institucional se ve trabada por el atraso del Estado en que se encuentran

insertos y empiezan a asumir como prioritaria la tarea de transformación del régimen político oligárquico para dar curso a su propia transformación en un ejército que tenga una entidad nacional que defender. Esta contradicción entre racionalización administrativa y régimen político, tal como la plantea Casanova (1983) para el caso español, es un conflicto de gran fuerza explicativa para entender el surgimiento del gobierno militar reformista, generalmente poco atendido por quienes se han ocupado del tema. Tratada en el contexto global de la crisis oligárquica, esta contradicción nos permite entender la fuerza con que el ejército irrumpe en la escena política y la escasa resistencia que encuentra de parte de los titulares del antiguo régimen, inmediatamente afectados.

Asimismo, esto nos permite entender que los motivos del golpe van más allá de un reflejo contra-insurgente de la institución militar, razón explicativa inmediata que sugiere Cotler (1985:364) y que asumió buena parte de la izquierda peruana de la época. El reflejo contra-insurgente no estaba ausente del horizonte reformista que indicamos, pero distaba de ser la motivación principal, en particular del grupo encabezado por Velasco, que se vuelve protagónico en los años del proceso.

B. LA CONSPIRACION Y EL GOLPE

El hecho que provoca la conspiración y finalmente el golpe, desatando las energías reformistas que existían en el Ejército, es el escándalo final del gobierno de Belaúnde, agobiado por acusaciones de corrupción, por una devaluación que había prometido no hacer y por un arreglo de cuentas con una empresa petrolera norteamericana, contrario a los intereses nacionales y muy lejos de lo que él mismo prometiera en repetidas oportunidades. De estas cuestiones, el arreglo con la International Petroleum Company (IPC), subsidiaria de la Standard Oil of New Jersey, con la que el gobierno peruano mantenía litigio por más de 50 años, es la que causa particular irritación en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército, que mantenía, como elemento central de su reformismo, una clara posición nacionalista.

Desatada la crisis, de acuerdo con la versión de Fernández Maldonado, se forma entre febrero y marzo de 1968 el grupo conspirativo. Nueve oficiales, cinco generales, entre los que se incluía Velasco y cuatro

coroneles, entre los que se contaba al propio Fernández Maldonado, desarrollan diversas hipótesis de toma del poder y elaboran un esquema de plan de gobierno. Un cambio de gabinete, ligado al problema del petróleo, les da la oportunidad y dan el golpe el 3 de octubre de 1968. El grupo combina tres tipos de gente. El jefe, Juan Velasco, Comandante General del Ejército en el momento y muy considerado en la fuerza por sus cualidades de liderazgo castrense, mezcla un profundo convencimiento de la necesidad de los cambios, básicamente intuitivo, con una especial rudeza personal. El resto de generales, contemporáneos la mayoría a Velasco, más conservadores que él, pero de ascendiente significativo en la institución. Por último, los coroneles, ideológicamente convencidos de la necesidad de cambios radicales, particularmente a través de su experiencia en actividades de inteligencia y destacados profesionalmente en el arma. Producido el golpe, los generales contemporáneos a Velasco, junto con otros de similar rango, irán a ocupar los puestos del gabinete ministerial, mientras que los coroneles conformarán, con algunos otros de similares características que se suman, el Comité de Asesoramiento del Presidente de la República (COAP), que es donde se desarrollan los principales proyectos de reforma. En un primer momento, algunos de los generales contemporáneos a Velasco intentan bloquear el ímpetu reformista, e incluso impedir que Velasco continúe en la presidencia, se produce lo que Bourricaud (1989:346), tomando el término de Hugo Neira, denominara la tendencia a la "criollización" de los regímenes militares anteriores, buscando repetir las características tradicionales de los golpes militares. Estos intentos llevan a una cercanía de Velasco con el COAP, que en la práctica se convierte en el grupo de presión para llevar adelante los cambios.

Fernández Maldonado reitera el efecto sorpresa que permite el éxito del golpe, así como la posición (Comandante General) y arraigo del líder, que permiten sea aceptado por la jerarquía militar. La sorpresa desconcierta a los otros institutos armados que deben aceptar, sobre todo la Marina, a regañadientes los hechos consumados, así como a otros servicios de inteligencia hostiles, como el norteamericano. Fernández Maldonado dirá orgulloso: "a los americanos los agarramos en calzoncillos". Este efecto de sorpresa será elemento importante en la iniciativa política de los primeros años evitando que se pueda desarrollar una oposición eficaz a la misma. De igual manera las cualidades castrenses

de Velasco y su uso de la jerarquía para actuar, en una institución cada vez más burocratizada, le ganan el respeto de sus pares y evitan que fácilmente puedan levantarse voces disidentes.

Tenemos entonces que se trata de un pequeño grupo, de una de las instituciones armadas, ciertamente la más poderosa: el Ejército, minoritario, por lo tanto, en las Fuerzas Armadas, quien lleva adelante el golpe y asume el empuje de las reformas. Sin embargo, la intervención se da a nombre institucional, así lo señalan sus documentos iniciales, Manifiesto y Estatutos, que dirigen al país, así lo reiterarán los jefes de las tres armas y el gobierno como tal se autodenomina "Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada". Pero este grupo minoritario se inserta en un proceso mayor, que está dado por el desarrollo institucional y la profesionalización militar, así como por el horizonte reformista que surge de aquellos. Esta situación es la que le permite tomar la iniciativa y lograr el liderazgo del conjunto. Lo cual no quiere decir que dejen de ser minoría o que el proyecto político que desarrollen, a partir del consenso reformista señalado, fuera necesariamente también, consenso institucional. Desde un punto de vista conservador, aunque aceptando el horizonte reformista desarrollado por la institución castrense en la década del sesenta, el General Luis Cisneros Vizquerra señala, cuando lo entrevistáramos, que "la intervención del General Velasco en el ámbito político sorprende a la Fuerza Armada". Estos matices hacen ver la coexistencia de voces discrepantes que se mantendrán en los marcos de la institución pero que serán fuente de las contradicciones del proceso de reformas y base de la contrarreforma posterior.

Alfred Stepan (1978:131-133) tratando de determinar el grado de cohesión ideológica de los militares peruanos, revisa la Revista de la Escuela Superior de Guerra y encuentra que entre 1954 y 1957 el 1.7% de los artículos están dedicados a temas que tocan la relación entre seguridad interna y desarrollo, lo que se incrementa al 50% entre 1964 y 1967. Este es uno de sus indicadores más significativos para concluir un grado de unidad de la élite militar "moderadamente favorable" en la instalación del régimen. Carlos Franco (1986:340) por otra parte, asesor del grupo militar radical en el período, resalta, tomando en cuenta las dificultades políticas de los actores desde un inicio, la "dramática situación minoritaria" de estos oficiales. Me parece importante distinguir entre la preocu-

pación reformista de la institución, que bien se puede expresar en la revista analizada por Stepan y la situación minoritaria de los conductores efectivos del proceso, que es en un primer momento aliviada por su ubicación en el aparato castrense y sus cualidades personales, pero que no puede ser revertida por ellos y que será factor decisivo en la crisis del proyecto reformista.

C. LAS REFORMAS "DESDE ARRIBA"

Tomando en cuenta diversas propuestas de periodización del proceso reformista (Pease 1977, Tovar 1985, Guerra 1986) podemos distinguir, asumiendo como su duración los casi siete años de la presidencia del General Velasco, entre el 3 de octubre de 1968 y el 29 de agosto de 1975, tres momentos. El primero entre 1968 y 1970, claramente de instalación y autodefinición del carácter "revolucionario" del gobierno, derrotando a las tendencias proclives a la "criollización". El segundo, entre 1970 y mediados de 1973, donde se produce el desarrollo del programa reformista, se da una aguda pugna con la burguesía y se inicia la organización popular. Y el tercero, entre 1973 y agosto de 1975, un momento de crisis, cuando se producen los intentos de control de la movilización popular y el enfrentamiento entre los militares reformistas. En el primero y sobre todo en el segundo período se dan la mayoría de las reformas y en el último se muestran las limitaciones de la conducción para institucionalizarlas. Este último momento abrirá la crisis política en que se desarrolla la transición.

Las reformas llevadas adelante por el gobierno militar durante el período señalado son los cambios más importantes que se hayan experimentado en la historia republicana del Perú. Por ello y aunque la evaluación detallada de las mismas no es objeto del presente trabajo, intentaremos presentar sus principales características⁽¹⁰⁾.

En este período se realizó una reforma agraria radical, repartiendo 10'298,453 hectáreas entre 399,576 familias campesinas, lo que representaba el 55.3% de la superficie agrícola y el 32.9% de las familias en el

10 Destacan como fuentes de referencia por la variedad de aspectos y puntos de vista que tocan las compilaciones de McClintock y Lowenthal (1985) y Carlos Franco (1986).

campo (Carbonetto 1986:486). Este reparto, a pesar de los problemas derivados del control estatal del proceso, significó una redistribución drástica de los recursos en el campo y la liquidación de la base de poder de la clase terrateniente. Se nacionalizó las industrias petrolera y pesquera, la mayor parte de la gran minería, las finanzas, el comercio exterior, y la denominada "industria básica" (química, cemento y siderurgia). Lo anterior llevó a incrementar la participación del Estado de un 13% a un 23% del Producto Bruto Interno entre 1968 y 1975 y elevó la participación del sector público en la inversión bruta a un 50% del total hacia mediados de la década del setenta (Carbonetto 1986:493, Guerra 1986:558). Se incentivó asimismo, a través de medidas proteccionistas, el desarrollo industrial, profundizando las características del denominado modelo de "substitución de importaciones", con las consecuencias negativas que veremos más adelante. La industria, que ya era desde 1960 la rama productiva más dinámica de la economía, con una tasa de crecimiento anual del 7.5%, alcanzó en 1975 el 26.2% del Producto Bruto Interno (Carbonetto 1986:508). Se limitó la acción de las empresas extranjeras, reduciendo sus posibilidades de repatriación de ganancias y señalando los sectores en que podían desarrollar sus actividades. Se desarrolló un sistema de participación de los trabajadores en la propiedad y gestión de las empresas, denominado "comunidad laboral", llegando a crearse 3,918 de estas experiencias de co-gestión, la gran mayoría en la industria. Se promovió la formación de empresas de propiedad colectiva, tanto en el campo, a través de las cooperativas agrarias, con cerca de mil unidades, como, en menor medida, en otros sectores vía las denominadas "empresas de propiedad social" (Guerra 1986:556-557). Se impulsó una reforma educativa que reorganizó la educación nacional y reconoció el quechua (lengua aborígen) como lengua nacional. Se reconocieron derechos económicos y sociales básicos como la estabilidad laboral y la organización sindical y barrial. Destaca en el caso de la organización sindical el reconocimiento, entre 1968 y 1975, de casi tantos sindicatos (2,115), como los que se habían reconocido en toda la historia anterior, que va de 1936 a 1968 (2,279) (Tovar 1985:73). Pretendió, de igual forma, el gobierno militar, desarrollar sus propias organizaciones sociales de sustento, con algún éxito en el agro y agudos conflictos en otros sectores. Se desarrolló, asimismo, una política exterior independiente, en particular de los Estados Unidos, tal como remarca Abraham Lowenthal (1985:442), en cuya esfera de influencia el Perú estaba inscrito hasta 1968. Por

último, hacia mediados de 1974, en una acción donde se mezclaron los afanes reformistas con las políticas de control, se expropiaron los diarios de circulación nacional, diciendo que se buscaba transferirlos a las organizaciones sociales, lo que nunca se realizó.

Estas reformas se llevan a cabo "desde arriba" y los analistas (Cotler 1985, 1985a; Franco 1986) coinciden en que no había otra posibilidad que la vía autoritaria. La tradición oligárquica y dentro de ella la propia tradición castrense de golpes de Estado, por más que este se perfilara como un golpe institucional y sus objetivos fueran reformistas, abonaban en este sentido. De igual forma, los reformismos anteriores, ya sea el aprista, que se remontaba a los años 30 o el de Acción Popular que surge en la década del 50, habían tomado también la forma de apelación carismática a las masas por caudillos populistas. La vía autoritaria parece entonces una lógica consecuencia en el quehacer político peruano de fines de los sesenta, más allá del signo político que tomara. El problema está en que el gobierno militar reformista no es exclusivamente dictadura o forma política autoritaria. Las reformas que produce tienen un efecto en la sociedad que no se puede desestimar y que a la postre entraría en contradicción con su propia forma autoritaria.

Julio Cotler (1985a, 1988) ve solamente el aspecto autoritario y desestima tanto el discurso como los efectos de las reformas, así nos dice: "cuando los militares y sus técnicos pensaban en participación tenían en mente un desfile militar" (1985a:56) o "debido a su naturaleza castrense, el gobierno pretendió establecer la organización y la mentalidad que le eran propias, como modelo de organización estatal, negando a los subalternos la posibilidad del participar" (1988:163). Carlos Franco (1986:415), por el contrario, caracteriza al régimen por una "unidad de contenido socialmente democratizador y forma política autoritaria" y señala que el "secreto" de la experiencia reformista consiste en el carácter necesario de ambos aspectos. Esta caracterización significa un avance respecto a la apreciación unilateral de Cotler, sin embargo, refiere el "contenido socialmente democratizador" más al discurso político y las organizaciones sociales directamente creadas por el gobierno que al efecto global sobre la sociedad.

El impacto de las reformas, al conceder derechos económicos y sociales a las mayorías populares, no solo se va a expresar en las intenciones militares de crearse una base social propia sino que también permitirá el desarrollo de la organización popular independiente del Estado y con ella el de los partidos de izquierda, acelerando un proceso que venía desde la crisis del poder oligárquico. Los dos aspectos que definen la naturaleza del reformismo van a ser entonces autoritarismo y democracia social. Los afectados, la vieja oligarquía, y quienes se sentían amenazados, los sectores burgueses afines a la anterior, sentirán un desafío sin precedentes con las reformas, sin el auxilio de las armas como antaño y con el pueblo movilizado, habían perdido el control de la situación; de forma similar, quienes hacían competencia al gobierno desde la izquierda, a pesar de que se desarrollan en las nuevas condiciones creadas por este, encontrarán un rival que les arrebatara sus banderas y contaba con recursos mucho mayores, identificándolo como su enemigo inmediato.

La forma política autoritaria presentará un conjunto de características que es preciso tener en cuenta. La figura del líder es central. El gobierno reformista descansará en buena medida en la capacidad del General Velasco para manejar a la Fuerza Armada y en especial al Ejército, al mismo tiempo que agrupaba en torno suyo a los mejores oficiales de la institución para concebir y ejecutar las reformas. Los tres generales entrevistados, Morales Bermúdez, Fernández Maldonado y Cisneros, así como el marino Vargas Caballero (Tello 1983, vol.2), coinciden en la importancia de Velasco. Franco (1986:342) quizás sea el que mejor describe la situación cuando señala que Velasco resolvía los asuntos de gobierno en relación directa con sus ministros y con los comandantes generales de cada arma y que el grupo promotor del golpe, pasada la etapa inicial, no dirigió ni su institución ni el proceso. Empezando por la Junta Revolucionaria, formada por los Comandantes Generales de las tres armas y el Presidente militar, que de acuerdo al Estatuto, acordado el día del golpe, debería estar a la cabeza del proceso, Velasco parece ser que no la convocaba con mucha frecuencia. Vargas Caballero (Tello 1983, 2:200) recuerda que "cuando yo le hablaba a Velasco de la Junta, me respondía ¿qué Junta? y yo le tenía que aclarar, la Junta Revolucionaria". Esto le permitía controlar personalmente las decisiones políticas fundamentales del gobierno. Diferente era, sin embargo, cuando se trataba

de asuntos castrenses. Morales Bermúdez, que llegó a ser Comandante General del Ejército bajo la presidencia de Velasco, señala que en los asuntos propiamente institucionales de cada arma "no se metía mucho" y dejaba a cada Comandante General decidir. Fernández Maldonado, en el mismo sentido, pero más bien quejándose, dice: "Velasco fue muy respetuoso de la antigüedad y eso estaba jodido". De igual forma, señala que no siempre los ministros respondían a una orientación política de adhesión al proceso, muchos aceptaban un ministerio "por deber castrense y prestigio personal" lo que debilitaba la implementación de las políticas reformistas en su sector. Aunque parece que Velasco no fue tan escrupuloso en momentos de crisis, como fue el caso del conflicto con la Marina en 1974, esta consideración de las jerarquías le servía para tener la adhesión del cuerpo de oficiales, cuya educación profesional tenía como eje el respeto a los rangos.

El acceso al líder se convirtió así en una cuestión central. Parece ser que los oficiales del COAP, donde se agrupan los promotores del golpe, la tienen sin mayores problemas en los primeros años, cuando se afirma el gobierno y se decretan las principales reformas. Kruijt (1989:134-146) incluso afirma que el COAP llega a funcionar como Estado Mayor del Presidente, que no solo elabora sino también fiscaliza la marcha de los ministerios. Pero esta relación es bruscamente cortada con la enfermedad de Velasco, en marzo de 1973, luego de la cual este restringe sus contactos al jefe del organismo, el General Graham, abriéndose al poco tiempo el momento de crisis y declinación del régimen.

Un elemento central de esta forma política autoritaria es el instrumento de gobierno, que por su naturaleza castrense es en primer lugar la Fuerza Armada y luego el aparato burocrático del Estado. El gobierno reformista carece de partido político y más bien desarrolla un cierto tono anti-partido, que tendrá consecuencias posteriores, como veremos más adelante, cuando intentan institucionalizar el régimen. Velasco, según el General Meza Cuadra (Kruijt 1989:215), solía decir "el partido es para partir" mientras que él aspiraba a que la revolución representara a todo el país, repitiendo, como hace notar Cotler (1990:13) el afán exclusivista del APRA en décadas anteriores, a partir del cual no quedaba lugar para los rivales en la escena política, pero con la diferencia, en cuanto a representatividad y eficacia, de que los militares se encontraban a cargo

del Estado. Tampoco cuenta este gobierno con una base social definida, tal como resalta Jorge Nieto (1983:25), cuando compara el reformismo aprista "de masas" y el reformismo de Acción Popular con "su organicidad burguesa", con el reformismo militar; la fuerza a este último le vendrá del aparato estatal.

Cotler (1988:163) señala, discutiendo el problema de la base social de los militares que "se interrumpieron y cortaron las tradicionales redes políticas de patronazgo y clientela" reemplazándolas por "relaciones de carácter tecnocrático". Estas últimas eran, sin embargo, de naturaleza cualitativamente distinta, ya que las lealtades de los funcionarios del gobierno dejaban de ser para con los poderosos locales o la clase dominante en general, muchas veces afectados directamente por las reformas, y pasaban a representar una opción de cambio que tenía respaldo armado y resaltaba lealtades estatales y nacionales. Los militares forman, literalmente, ejércitos de burócratas para llevar adelante sus reformas, administrar el aparato estatal redimensionado y en muchos casos reemplazar en el manejo de las nuevas unidades de producción y organizaciones sociales a quienes deberían ser los supuestos beneficiarios. Guerra (1986:561-565) y Franco (1986:323) ven esta cuestión como inevitable dada la ausencia de otros agentes de cambio y la afinidad militar por el manejo burocrático. Stepan (1978:304), sin embargo, observa el temor de los diversos grupos de la población, tanto de las clases altas como populares, a estas nuevas relaciones de poder que se buscan establecer, ya que no quedaban muy claras las posibilidades de participación en ellas. Este cambio, de redes tradicionales a burocráticas, dejará vacíos y creará expectativas que no podrán ser atendidos de inmediato por el aparato estatal y ello será uno de los motivos del desarrollo del movimiento social durante la crisis del reformismo y el período de transición.

La importancia del líder y, sobre todo en los primeros años, de su grupo de asesores en el COAP, así como el uso de la burocracia civil y militar para implementar las reformas se mostraron fundamentales para el proceso. Se convertirán en factores que les permitirán una gran iniciativa política, sobre todo en los dos primeros momentos, entre 1968 y 1973. Sin embargo, constituirán también su debilidad, me refiero sobre todo a la importancia del General Velasco y al manejo burocrático del experimento social.

Sobre lo primero, las graves dificultades que asaltan al liderazgo reformista luego de la incapacidad física de su jefe son muestra del inmenso poder que acaparaba Velasco. En cuanto al manejo burocrático, los problemas se presentarán con los intentos de control de las energías sociales desatadas por el proceso, tal como veremos al analizar "el contenido socialmente democratizador".

D. LA DEMOCRATIZACION SOCIAL

Las reformas aceleran el proceso de democratización social que venía de la década del cincuenta con la crisis del Estado Oligárquico. El efecto más importante de ellas va a ser el cuestionamiento global de la dominación oligárquica, señalándola desde el Estado como una dominación ilegítima. Dentro de este cuestionamiento el efecto práctico más importante será la liquidación de la clase terrateniente a través de la Reforma Agraria. Esto implica, aunque en forma mediatizada y parcial, por los múltiples esfuerzos del Estado por controlar el proceso, el acceso de los campesinos a la tierra, terminando con una reivindicación agraria secular (Montoya 1989:230-239). De igual forma, el reconocimiento, no sólo legal sino práctico, de derechos sociales fundamentales, como el derecho a la estabilidad laboral y a la organización sindical y popular en general, así como a la mediación del Estado en los conflictos laborales con mayor equidad que en épocas anteriores. Asimismo, el impulso a la participación de los trabajadores en la gestión y propiedad de las empresas, tanto estatales como privadas a través de experimentos de co-gestión como la Comunidad Laboral o de propiedad, como las cooperativas agrarias y las empresas de propiedad social. Este tipo de participación laboral cuestionaba el carácter privado mayoritario de la propiedad y despertaría entre la burguesía una resistencia aún mayor que el crecimiento del Estado y su intervención en la economía.

El efecto de las reformas se dará en condiciones de crecimiento de la PEA urbana respecto de la rural, la primera pasa de ser 37.6% en 1961 a convertirse en el 62.2% de la PEA total en 1972 (Consejo Nacional de Población 1984:84). Sin embargo, este crecimiento, producto del fenómeno de la urbanización, solo implica un ligero aumento de la fuerza laboral en el sector manufacturero, que pasa de ser el 13.2% en 1961 a

15.1% en 1972 y más bien un crecimiento importante en el sector terciario, que incluye servicios, comercio y gobierno, el cual pasa de 27.8% a 34.7%, donde destaca el crecimiento de los empleados del Estado, que van del 3.7% al 7.4% y casi triplican su número en términos absolutos (Sulmont 1977:309). Asimismo, las cifras del sector terciario tienden a ocultar el sub-empleo y dentro de él a quienes se dedican a actividades del denominado sector "informal" de la economía, generalmente trabajadores autoempleados en el comercio y los servicios. Al respecto la cifra de sub-empleo para 1972 es del 44.2% y la de desempleo del 4.2%, cifras que tienden ligeramente a decrecer entre 1972 y 1974, producto de la política industrial del velasquismo, pero que aumentarían bruscamente a partir de 1975, con la crisis económica, alcanzando el 52% y el 6.5% respectivamente el año 1978. Estos altos porcentajes de la población que no tienen un empleo adecuado hacen ver la escasa capacidad del tipo de desarrollo industrial para integrar la economía y conducir la urbanización. Esta es una situación que no cambia con las reformas, ya que la política de desarrollo industrial, tal como veremos con mayor detalle más adelante, insiste y radicaliza el modelo de sustitución de importaciones que venía de la década del sesenta.

Esta situación lleva a una estructura altamente heterogénea de las clases populares, donde Teresa Tovar (1985:47) estima que la PEA en 1972 se divide en 23.1% de obreros (agrícolas y no agrícolas), 37.6% de campesinos, 19.8% de empleados, 15.8% de trabajadores independientes y 3.7% de trabajadores domésticos; situación, de acuerdo a la misma autora, que necesariamente conducía a la fragmentación de los movimientos sociales resultantes.

En este argumento cuantitativo, empezamos resaltando la debilidad de los trabajadores industriales manufactureros en toda la fuerza laboral, situación relativa que nos ayudará a entender su debilidad en el conjunto del período, pero ello no implica dejar de lado los cambios significativos que se dieron al interior de la propia clase obrera industrial. Carmen Rosa Balbi (1989:42-45) resalta dos que nos parecen de particular importancia. El primero, que la clase obrera industrial sea el sector de la población asalariada que más crece en el período 1961-1972, casi doblando su número y el segundo, que dentro de este crecimiento las ramas que más se desarrollan, como es el caso de los

trabajadores metalúrgicos, darán lugar a los sectores más activos del sindicalismo en los años setenta.

En estas condiciones de urbanización, heterogeneidad y proletarianización intensa pero limitada es que las reformas van a desatar una movilización social que pondrá en actividad las "masas disponibles" producto de la crisis del poder oligárquico. Esta movilización social buscará ser encauzada por dos proyectos políticos, los que a su vez presentan ellos mismos contradicciones y conflictos, me refiero a los proyectos del gobierno militar y de los partidos de izquierda, en particular la "Nueva Izquierda" que surge a mediados de los años sesenta. En ambos casos se va a tratar de proyectos inducidos desde fuera de las clases populares, llevando a la conformación, con diferencias importantes en cada caso, de lo que Touraine (1987:16) llama "actores socio-políticos", debido, según él, a la escasa diferenciación entre Estado y sistema de representación política en América Latina, o lo que Sinesio López (1989:5-6), con más precisión para el caso peruano, señala como diferentes formas de relación o ausencia de ella, entre la sociedad civil y la sociedad política y el Estado. En la definición de López la sociedad política contiene no sólo formas de representación, que abarcan solo a la fracción de la población que se puede definir como ciudadana, sino también otras formas de participación política, como la de las masas que siguen al caudillo carismático o, diríamos nosotros, la de control desde arriba o corporativa que busca implementar el régimen militar.

El gobierno militar, de acuerdo a su discurso oficial, pretende implementar el proyecto de "Democracia Social de Participación Plena". Este proyecto plantea como objetivo, de acuerdo a sus enunciados, "la transferencia del poder al pueblo organizado" sin interferencias de los partidos políticos, a los que se consideraba distorsionadores de la voluntad popular. La participación política de acuerdo a Francisco Guerra (1986:555), uno de los ideólogos del proyecto, no era entendida como emitir un voto cada cierto tiempo sino como la decisión cotidiana a nivel de cada unidad productiva, localidad y región que llevara al desarrollo de un nuevo régimen político a nivel nacional. Asimismo, de acuerdo también con Guerra, el que el gobierno pusiera el acceso a la propiedad de los medios de producción por parte de los trabajadores como un elemento central de su propuesta, le daba a la "democracia de

participación plena" una profundidad y potencial mucho mayores que la democracia representativa. ¿Qué tan claro tenían este objetivo final de transferencia, más allá de su discurso, los propios militares? Eso es algo que otro de los participantes civiles del proceso, Carlos Franco (1986:349), considera "brumoso" en el horizonte castrense, lo que se probaría tal cuando en los momentos de crisis se empiezan a buscar salidas políticas. El rechazo a los partidos y a la democracia representativa en este proyecto, tal como señalan Nieto (1983:30) y Franco (1986:309-313) estaba dado por la experiencia de partidos y democracia anterior a 1968, que más allá de sus connotaciones oligárquicas, se asociaba con ineficacia para resolver los problemas del país y aguda corrupción política, lo que además empataba con un sentimiento militar de desprecio por una élite política que los había utilizado en el pasado.

Para llevar adelante este proyecto el gobierno funda una agencia especial: el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), en 1971, que debería ser el ente encargado de promover la participación, tal como la entendía el gobierno, así como la organización de los sectores populares, en particular de los que se desarrollan en el ámbito de las reformas. Por su función el SINAMOS fue una institución controvertida desde un primer momento. Para la derecha, tanto civil como militar, significó "infiltración comunista en el gobierno" y para la izquierda el instrumento de control corporativo, incluso fascista del movimiento popular. El General Cisneros señala que los problemas en la Fuerza Armada empezaron cuando comienzan estos esfuerzos de organización, en particular cuando Carlos Delgado, creador del proyecto y máximo dirigente civil de SINAMOS, a quien atribuye una orientación izquierdista, aumenta su influencia en el gobierno. El temor frente a SINAMOS dentro de la Fuerza Armada se pone de manifiesto desde el momento mismo de su creación, cuando se modifica el proyecto inicial y se hace a los jefes de cada región militar, los directores de SINAMOS en el lugar (Kruijt 1989:179). Posteriormente el organismo se va a convertir en un foco de tensiones, buscando ser controlado, en particular de 1974 en adelante, cuando el General Leonidas Rodríguez, conspicuo miembro del grupo radical, deja la jefatura para regresar al ejército, por militares ligados a los servicios de inteligencia y al Ministerio del Interior (Tello 1983, 2:87, Kruijt 1989:179). Estas influencias acrecientan la ambigüedad de su acción y

de su concepción política. Más allá de sus buenas intenciones, de llevar adelante una organización libre del sectarismo partidario, al intentar una labor "desde arriba", en base a los recursos y capacidad de clientela del Estado, los promotores de SINAMOS lo que crean son bases de apoyo social a las reformas, manejadas a través de mecanismos de control burocrático. Dependiendo, sin embargo, de quién o quiénes desarrollaran la acción dentro de la propia institución se perfilaban las características de esta, por lo que en algunos casos, particularmente en el campo, se crean organizaciones que luego pueden tener vida propia, mientras que en otros se desarrollan meros apéndices de organismos estatales.

En el campo es quizás donde la labor de SINAMOS fue más perceptible, en particular en la organización de las cooperativas agrarias y de la Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio nacional campesino con bases en todo el país que se crea en 1972. En el medio rural se organizan con la participación directa o indirecta de SINAMOS, 949 empresas asociativas (Guerra 1986:555-556), de igual manera, la CNA, debido a la importante cobertura que tuvo, significó en muchos casos la única forma organizativa que se opuso al poder local terrateniente y logró la implementación de la Reforma Agraria. En su mejor momento (1975) esta central campesina, siempre con el patrocinio gubernamental, es una organización que alcanza 675,000 miembros (Kruijt 1989:178).

Cosa diferente sucede cuando lo que se intenta es un abierto paralelismo a organizaciones existentes y poderosas o la división de las mismas. En este caso se trata de una práctica rechazada por el grupo civil que estaba a cargo de SINAMOS y que generalmente llevaban adelante algunos funcionarios de este organismo en colaboración con grupos policiales y/o militares. Así, se crea la Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), también en 1972, para neutralizar a las otras centrales sindicales, particularmente a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de orientación comunista. Lo mismo sucede con el Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana (SERP), para contrarrestar al Sindicato Unico de Trabajadores en la Educación (SUTEP), de orientación maoísta, frontalmente opuesto al gobierno y abrumadoramente mayoritario entre los maestros. Y con la división de

la Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI), que llega a agrupar nacionalmente cerca de 3,500 experiencias de co-gestión empresarial (Guerra 1986:555-556) y cuyo conflicto, por ser una experiencia creada por las propias reformas, enfrenta públicamente a sectores rivales dentro del proceso. Por último, la misma tendencia forma el Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), agrupación que se desarrolla en el ámbito laboral, particularmente pesquero, en el período en que las empresas del sector son estatizadas. Su función es abiertamente violenta, consistiendo en asaltar sindicatos independientes para someterlos a las autoridades.

El gobierno se mantiene a la ofensiva y logra montar las principales organizaciones de apoyo al régimen en el período que va de 1969 a 1973. En estos años, con la dación de las principales reformas y la formidable iniciativa política desplegada era difícil que pudiera desarrollarse una oposición exitosa. Las movilizaciones, en el caso del campo por ejemplo, son para exigir que se aplique la ley de Reforma Agraria. Lo que no quita que hubieran presiones salariales, destacando las huelgas minera y magisterial que son severamente reprimidas. Sin embargo, se trata de un momento en que tanto la oposición de derecha como de izquierda se mantienen a la defensiva. Entre 1973 y 1975, la resistencia al control burocrático desde arriba se deja sentir. Son los años en que algunos sectores del gobierno desarrollan operativos de paralelismo, división y asalto de las organizaciones sociales que mantuvieran su independencia. Son los años en que destaca la acción del MLR, que va ganando el respaldo de los sectores más autoritarios del régimen, e incluso, a principios de 1975, recibe el respaldo del propio Velasco. Este período de agudo conflicto no enfrenta solo al gobierno con la oposición de izquierda, sino que significa una grave contradicción al interior del propio gobierno, entre los militares radicales y el grupo civil que dirige SINAMOS, por una parte, y militares cuyas tendencias autoritarias se hacen cada vez más pronunciadas. Las consecuencias trascenderán a las Fuerzas Armadas y serán uno de los elementos decisivos de la crisis del reformismo.

¿Podemos calificar este intento de movilización social como un "desfile militar" tal como lo hace Julio Cotler o se trata de un fenómeno más complicado? Creo que los elementos de control político desde el Estado, para formar una base social de apoyo al régimen son indudables. Pero

también existía la intención de organizar una forma de participación política y de representación de intereses, que tuvieran como base material las reformas que se llevaban adelante. En este sentido es un intento de participación con fuertes rasgos corporativos. Sin embargo, no se puede señalar que los elementos autoritarios sean los únicos presentes y las contradicciones dentro del gobierno son muestra de ello. El solo hecho de que fuera una política estatal la movilización social llevó a que muchos sectores que carecían de organización o la tenían con grandes debilidades procedieran a organizarse y desarrollaran un liderazgo independiente, tal como se mostraría en el período siguiente. Esto, al margen del espacio y las posibilidades que, como veremos, las reformas dieron a los sectores izquierdistas. Eduardo Castillo, líder sindical bancario y luego Secretario General de la CGTP, señala, en entrevista que nos concediera, que en la propia CGTP aconsejaban a muchos sindicatos no reconocidos que se afiliaran a la central gobiernista, la CTRP, para conseguir un reconocimiento aún más rápido del gobierno, cambiándose luego a la central izquierdista. Ahora bien el que este corporativismo pudiera dar lugar a una "democracia participatoria" como decían los ideólogos del régimen, o a alguna otra variedad de autoritarismo militar, como regímenes políticos estables, es algo que estaba justamente en disputa en el período. En medio de este conflicto, que buscaba su institucionalización, es que el régimen entra en crisis y se termina como experimento social.

El otro proyecto político que actúa sobre esta movilización social es el que desarrollan los partidos de izquierda. Estos se dividen en dos grandes grupos: el Partido Comunista y los partidos a la izquierda de este, entre los que se cuentan grupos de la denominada "Nueva Izquierda", esiciones maoístas del PC y grupos troskistas, que en conjunto denominaremos "izquierda radical". El Partido Comunista desarrolla una política de apoyo a las reformas del gobierno militar, aunque mantiene su estructura partidaria y los organismos sindicales bajo su influencia aparte de las organizaciones que crea el gobierno. Los partidos de izquierda radical, por el contrario, desarrollan una encendida oposición al gobierno, al que consideran representante de los enemigos del pueblo. Consideramos al Partido Comunista como a los partidos de la izquierda radical parte de un proyecto político distinto al del gobierno militar porque ambos, más allá de las diferencias tácticas que observan

en el período y la confrontación, a veces muy aguda que desarrollan, comparten la misma ideología marxista-leninista y actúan en un medio sindical y popular similar, compitiendo, con diversos medios por el control de las organizaciones sindicales y populares independientes del gobierno. Esta cuestión de buscar desarrollar organizaciones autónomas, rechazando los elementos corporativos, de control desde arriba, del reformismo, será una característica distintiva fundamental.

La insistencia en la autonomía recogerá el ánimo democrático de quienes procedían a organizarse, fuera bajo la influencia del gobierno o de la izquierda, e incidiría, en el curso de la coyuntura, dentro del propio equipo gobernante. Por lo demás, es difícil, sobre todo en los momentos de crisis, marcar líneas entre el gobierno y los grupos de la izquierda marxista-leninista para señalar quién estaba a favor y quién en contra de la organización social autónoma. Un importante sector de quienes inicialmente participan en los esfuerzos de organización social del gobierno buscaba impulsar una organización autónoma, lo que en múltiples situaciones los puso del lado de los partidos de izquierda y en contra de las tendencias autoritarias del gobierno. El problema es que las desconfianzas que venían de un temor ancestral a todo lo que en el Perú viniera "de arriba", así como los mutuos dogmatismos e intolerancias impidieron que estas distintas tendencias pudieran confluir.

Los partidos de izquierda van a tener un desarrollo que será muy similar al del conjunto del proceso reformista, aunque siempre, por sus diferencias tácticas, manteniendo el PC y la izquierda radical dinámicas propias. Un primer momento es el que se da entre 1969 y 1973, donde la izquierda, en particular el PC, se van a beneficiar de las nuevas posibilidades que abre el reformismo al facilitar el reconocimiento sindical y la estabilidad laboral. Uno segundo, el que va entre 1973 y 1975, cuando se da la lucha contra la ofensiva corporativa del gobierno y se desarrolla una identidad sindical denominada "clasista", produciéndose una definitiva expansión de la influencia izquierdista que alcanzará su máximo desarrollo en el período de transición.

Líneas arriba ya hemos señalado cómo entre 1968 y 1975 se reconocen tantos sindicatos como los que se habían reconocido entre 1936 y 1968, es decir, en toda la historia anterior en cuanto a reconocimiento sindical

se refiere. Asimismo, el reconocimiento de la estabilidad laboral es una garantía básica que le permite al trabajador atreverse a organizar un sindicato sin temor al despido. En este primer período es indudablemente el PC, por su trabajo más antiguo, el que cosecha mayores frutos. De especial importancia, es el reconocimiento legal de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, en 1971, que se convierte en la mayor de las centrales sindicales del país. Este reconocimiento permite, en primer término al PC, pero también a otras fuerzas de izquierda tener una central nacional de referencia para expandir y profundizar el trabajo sindical. El reconocimiento de la CGTP, está también motivado por el deseo del gobierno de contrarrestar la influencia sindical aprista, hasta ese entonces predominante, a través del trabajo de su central la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) (Balbi 1989:60). Datos del año 1974 señalan que la CGTP contaba con un 37% de la afiliación sindical, la CTP con el 29%, la CTRP con el 27% y la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), pequeña central de influencia democristiana, con el 7% (Sulmont 1977:301). De igual forma, a partir de la ley de comunidades laborales en 1970, se produce una expansión de la sindicalización en las pequeñas y medianas empresas (Balbi 1989:67-69) donde la formación de la comunidad laboral empuja a los trabajadores a formar sindicatos que mayoritariamente habrían sido también influidos por la CGTP. Asimismo, la central izquierdista es la que desarrolla las huelgas y movilizaciones de mayor importancia, Sulmont (1977:321) señala que en 1973 el 47.8% de horas-hombre perdidas se debió a la CGTP, cifra que se elevó al 67.7% en 1975. Sin embargo, a pesar de la intensa labor de sindicalización llevada adelante por el gobierno y los partidos de izquierda, esta solo alcanza a un aproximado del 18% de la población asalariada en aptitud de sindicalizarse (Valladares 1987:47), lo que nos hace ver las dificultades de organización social en una estructura social heterogénea y la persistencia de mecanismos tradicionales de subordinación, sobre todo en las empresas con menor número de trabajadores y ubicadas en el comercio y los servicios.

Para la izquierda radical este parece ser más un momento de penetración de sus cuadros, que en buena medida se trasladan de las universidades al trabajo político sindical. Las contradicciones, sin embargo, entre el PC y la izquierda radical ya se dejan sentir. Tanto la Federación Nacional de Educadores como la Federación Nacional Minera, controlados por el PC, desarrollan huelgas, en 1971, que el partido no apoya y que terminan

en la desafiliación de estos gremios de la CGTP y el paso de sus dirigencias a ser controladas por posiciones radicales, dando origen, en el caso de los maestros, al SUTEP, que será uno de los núcleos de movilización más importantes en los años siguientes.

El segundo momento, entre 1973 y 1975 es de intenso conflicto social. La crisis económica expresa sus primeros síntomas mostrando uno de los límites más importantes del velasquismo. Diversos sectores sociales, motivados por las reformas, plantean demandas que el velasquismo no puede satisfacer y los sectores más autoritarios del gobierno desatan una ofensiva controlista del movimiento popular. 1973 es el año en que el costo de vida empieza a subir por encima del salario real, revirtiendo un alza de este último que se había mantenido entre 1968 y 1973 (Tovar 1985:114). Esta es una tendencia que se mantendrá hasta el presente, agudizándose seriamente a partir de 1975. Asimismo, se producen reclamos regionales, campesinos, de obreros industriales, maestros y mineros. Destacan las oleadas de movilización regional de mayo y noviembre de 1973, que tienen como focos principales el puerto pesquero de Chimbote en la costa norte y las ciudades del sur andino: Cusco, Puno y Arequipa. En la mayoría de los casos son movilizaciones directamente contra el Estado, protestando contra la pretensión de control de organizaciones sindicales independientes, demandando obras públicas o en solidaridad con algún gremio en lucha que depende del gobierno, como es el caso de los maestros o los pescadores. En el campo destacan las luchas en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, en 1974, donde campesinos influidos por Vanguardia Revolucionaria (VR), una organización de la Nueva Izquierda, invaden haciendas que no habían sido afectadas por la Reforma Agraria y reclaman su aplicación. Asimismo, a partir de 1973, se observa un drástico aumento del número de huelgas y su impacto en el número de horas-hombre perdidas, estas últimas pasan de ser 3'377,801 en 1968 a 15'688,686 en 1973 y a 20'269,428 en 1975, sextuplicando su número en los siete años del velasquismo (Sulmont 1977:318). La mayoría de estas paralizaciones se llevan adelante en la industria manufacturera, 40%, y la minería, 12%. La causa fundamental es aumento de remuneraciones, expresando la presión redistributiva de los sectores sindicales organizados, aunque también se observa un importante número de acciones de solidaridad lo que

señala el desarrollo de la centralización por sector, en Federaciones de rama y a nivel general en las centrales nacionales (Sulmont 1977:320). El panorama huelgístico muestra la predominancia de la clase obrera en la movilización sindical, la que se hará más importante en el período siguiente.

Estos años serán el momento de expansión de la influencia izquierdista que se expresará en todos los sectores en conflicto. En particular serán los años de crecimiento de los denominados partidos de la Nueva Izquierda que, tal como subraya nuestro entrevistado Edmundo Murrugarra, traerán un estilo político diferente "revalorando el papel de la masa" y alejándose del enfoque burocrático que predominaba en el PC, fruto del control del aparato de la CGTP. Estos partidos se encargarán de radicalizar las demandas que el gobierno no podía satisfacer, atreviéndose a lo que dirigencias anteriores, provenientes del APRA o del propio PC, no se habían atrevido a hacer por su apego a la legalidad y a moverse en el horizonte de lo posible. La lucha sindical en el período, tal como señala Tovar (1985:89-96), se movía dentro de una aguda contradicción. Para unos, encabezados por el Partido Comunista y ocasionalmente los sectores radicales del SINAMOS, se trataba de una lucha cuyo objetivo era el apoyo al gobierno y la profundización de las reformas, para la izquierda radical, en cambio, la lucha sindical, en especial la obrera, se convirtió en el eje de la oposición al gobierno. La actitud diferente se debía a diseños estratégicos distintos, mientras que para el PC el gobierno militar estaba realizando una revolución y poniendo al país en camino al socialismo, para la izquierda radical el gobierno era contrarrevolucionario, por lo tanto debían de radicalizarse las luchas para conseguir su caída, lo cual daría paso a una insurrección o "guerra popular" que traería la verdadera revolución. Esta actitud "izquierdista" le permitió un importante desarrollo a los más radicales, sin embargo, el agudo conflicto en que se trabaron con el PC, en particular las sucesivas variantes de centralización alternativa a la CGTP que intentaron, sin mayor éxito, debilitaron las posibilidades de expansión, aún mayor, del sindicalismo autónomo del Estado.

Frente a este desarrollo sindical izquierdista es que hay una contraofensiva controlista de parte del Estado y en este contexto es que se desarrolla en forma intensa el trabajo de paralelismo y división del

gobierno, así como la labor violenta y criminal del MLR. Tal dimensión alcanza el conflicto entre esta vertiente autoritaria y las posiciones de izquierda, que sus aristas más agudas, en torno a la labor del MLR en Chimbote, la división de CONACI o el asalto al sindicato minero de Marcona, pasarán a ser las cuestiones fundamentales de debate político en la coyuntura, en particular en 1974 y 1975, llevando la contradicción del movimiento social al seno del gobierno, con las consecuencias que veremos más adelante. En este conflicto con el MLR es que las distintas corrientes de la izquierda, tanto radical como PC e incluso sectores que trabajaban dentro de las propias agencias gubernamentales, empiezan a reconocerse como defensoras de la autonomía de las organizaciones sociales frente al Estado, empezando un camino de unidad que tardaría todavía algunos años en madurar.

Es en este período que el encuentro de los partidos de izquierda con el movimiento sindical, particularmente obrero, produce una nueva identidad que se va a denominar "clasismo". La etiqueta como tal es ampliamente disputada en el movimiento. Así, tenemos a la izquierda radical negándole al PC y su esfera de influencia la posibilidad de llamarse clasistas por su apoyo al reformismo y al PC haciendo lo mismo con los radicales, porque con su dogmatismo e intolerancia estarían atentando contra la necesaria unidad de la clase trabajadora. El caso es que la influencia marxista, viniera de cualquiera de las izquierdas, permitió, en las condiciones dadas por las reformas, la creación de un nuevo espacio y nuevos actores sociales, que desarrollaron un sindicalismo ajeno al Estado y a los patrones, que ponía por delante la defensa de sus propios intereses "de clase".

Diversos autores (Parodi 1986, Balbi 1989) van a señalar al clasismo como una identidad que se basa en el poder colectivo de los trabajadores para demandar respeto a la dignidad y los derechos de los mismos, cuestionando la autoridad despótica de los empresarios y/o supervisores dentro de la fábrica y utilizando métodos de lucha que tienden a la confrontación. Estos enfoques, junto con Nieto (1986), resaltan la igualdad jurídica que logra el clasismo entre patrones y obreros, permitiendo a nivel social, en este caso del lugar de trabajo, un acceso a la ciudadanía por parte de los trabajadores del que antes carecían. De nuestra propia investigación, tal como veremos en la presentación de cada uno de los

casos, podemos agregar los siguientes puntos que considero fundamentales. Primero, la connotación de autonomía que el clasismo en su nombre mismo contiene, es decir, pertenencia y particularidad de clase, diferencia frente a las otras clases, en especial las dominantes e independencia frente al Estado. A partir de esta afirmación autónoma y del acceso que las nuevas condiciones le garantizan a la organización es que demanda dignidad y derechos. Y, segundo, la concepción de la democracia que infiere de esta identidad, entendida como la presencia masiva de los trabajadores en las acciones de lucha, que era tomada como la prueba máxima de la legitimidad de sus demandas.

Otros autores, como Agüero (1980), desde una perspectiva más militante, agregan a la definición del clasismo un necesario horizonte socialista "por la vía revolucionaria", o Cotler (1990:14), restándole importancia al fenómeno, señala que el clasismo se basaba en un "malentendido", ya que los trabajadores lo que querían era conseguir demandas del Estado y los partidos marxistas crear un escenario revolucionario. El horizonte socialista y revolucionario era un elemento efectivamente existente, sobre todo en el discurso, pero difícilmente asumido más allá de la dirigencia ligada a partidos de izquierda, a diferencia de la identidad clasista, cuyo referente inmediato estaba en el trabajo cotidiano y que sí se extendía a importantes sectores de trabajadores. En cuanto a calificar de "malentendido" al clasismo ello es no comprender la significación del nuevo espacio que se abría con el desarrollo de un sindicalismo independiente del Estado y su expresión en una identidad social que trascendía las intenciones de la utopía izquierdista que la propiciaba y atendía, más bien, las necesidades de los trabajadores. Además, la identidad clasista se extendió a otros movimientos sociales no específicamente obreros, que se empezaron a denominar "clasistas" para distinguirse ya fuera del APRA y su sindicalismo de conciliación con la patronal o, principalmente, del sindicalismo propiciado por el gobierno.

E. EL FRACASO ECONÓMICO

El objetivo económico del gobierno militar que era lograr un nuevo modelo de acumulación, basado en la industria, fracasa. Como señalan Thorp (1985) y Stepan (1978) las reformas no sirven para incrementar el

ahorro nacional y este más bien disminuye. Así, Carlos Franco (1986:419) que trabajó en el equipo de gobierno, señala: "Disponíamos de una teoría de la transformación, pero carecíamos de una teoría del desarrollo".

Cuando las dificultades económicas fueron innegables, alrededor de 1975, los gobernantes militares achacaron los problemas a la economía internacional, es decir, a la baja de los precios de las exportaciones peruanas, especialmente mineras, en el mercado mundial. Esta es una explicación bastante común: las divisas, moneda dura, generalmente dólares, para las importaciones necesarias para que funcione el resto de la economía, principalmente la industria, proceden del sector exportador, por lo tanto, a precios más bajos para las exportaciones, menos divisas y paralización de la economía. El General Francisco Morales Bermúdez, Ministro de Economía de Velasco entre 1968 y 1973 y luego Presidente de la República durante la transición, nos reafirma esta visión cuando señala que hacia 1975 "se había exprimido el limón de los recursos financieros". La falta de divisas intentó ser compensada con préstamos externos, en particular a partir de 1974, siempre pensando que los grandes proyectos de inversión en minería y petróleo empezarían a dar sus frutos y permitirían pagar la deuda y financiar las importaciones. Los resultados de estas inversiones recién llegaron en 1977, tarde para el reformismo, y por debajo de la expectativas previstas. Esta es una explicación que se restringe a la balanza de pagos y no toma en cuenta cuestiones más de fondo como la inversión del sector privado y el modelo de desarrollo industrial.

Otra de las imágenes relativamente comunes del gobierno reformista es que el sector estatal de la economía creció en una forma desmesurada amenazando con devorar las demás actividades productivas. Es cierto que se produjo un crecimiento significativo, tal como ya hemos señalado, elevando a un 23% su participación en el producto nacional bruto y a un 50% su participación en la inversión, sin embargo, si tomamos cifras de 1975 (Carbonetto 1986:493-497) podemos observar que el sector de propiedad estatal llegaba solamente al 10.3% del Valor Bruto de la producción (VBP) total del país y el sector asociativo, creado por las reformas, apenas pasó el 8%, mientras que el sector privado mantuvo su predominancia controlando el 58.4% (43.1% nacional y 15.3% extranjero). El sector estatal pasó a controlar la banca, la minería y el petróleo,

mientras las empresas asociativas, principalmente las propiedades agrarias, es decir, que las reformas afectaron lo que había sido la base de la propiedad oligárquica. La empresa privada por su parte, siempre de acuerdo a cifras de Carbonetto, se concentró en la industria, que era el sector más dinámico de la economía, con una cifra promedio de crecimiento del 7.5% entre 1960 y 1975 y un aporte del 44.3% al VBP. Destaca, asimismo, el control del capital extranjero sobre el sector denominado "gran industria", es decir, donde las unidades de producción ocupan a 100 ó más trabajadores, en especial en las ramas más dinámicas de este estrato, como son la química y la metalmecánica, de propiedad sobre todo norteamericana, que jugarían un rol particularmente intenso en el proceso de sustitución de importaciones. Ahora bien, lo que sí es claro respecto al sector estatal de la economía es su dificultad para generar un excedente, tanto porque, como señala Thorp (1985:69), muchas veces se trataba de instalaciones obsoletas, como por la falta de eficacia microeconómica en el manejo de las empresas nacionalizadas (Shydlofsky y Wicht 1985:138). De igual manera, en el caso de la agricultura se continuó con una política de mantener los precios agrarios bajos para no ejercer presión sobre el costo de vida en la ciudad, lo que restó posibilidades para el desarrollo de las nuevas formas asociativas en el agro, de fundamental importancia en momentos en que se implementaba una reforma agraria radical.

Ahora bien, ¿este crecimiento de la inversión estatal se debe solamente a la nueva dinámica económica del sector público o tiene que ver también con la falta de la inversión privada? Oscar Dancourt (1989:54) señala que en el Perú, en lo que al sector privado se refiere, entre 1970 y 1975, la demanda, la producción, la rentabilidad y los beneficios aumentaron, pero no la inversión porque no había confianza empresarial. En efecto, el conjunto de incentivos que dió el velasquismo a la producción industrial, en especial las múltiples exoneraciones tributarias, así como el mayor gasto público y los mejores salarios, por lo menos hasta 1973, aumentaron la producción y sobre todo los beneficios. Sin embargo, tal como señala Carbonetto (1986:503-507), los ingresos producto de las utilidades crecieron más rápido que los ingresos producto del trabajo, los primeros pasaron de ser el 22.4% del ingreso nacional en 1968 al 28.2% en 1975, y los segundos, de ser un 77.6% en 1968 a ser un 72.6% en 1975; lo que implica un efecto regresivo en la distribución

nacional de ingresos. Además, estas utilidades no se dedicaron principalmente a inversión, sino a un aumento en los gastos dedicados al consumo personal de los empresarios, que subieron del 40% al 70% entre 1968 y 1975. El argumento, muy popular entre los empresarios de la época, que señala el aumento excesivo de los ingresos de los trabajadores como una de las causas principales de la crisis del reformismo, pierde entonces validez. Dancourt achaca esta falta de inversión a la ausencia de confianza empresarial, pero define "confianza empresarial" como la capacidad de los empresarios de disciplinar a los trabajadores, particularmente a través del despido. Como esta prerrogativa se había visto erosionada, principalmente por la ley de estabilidad laboral y la competencia que como empleador significaba el Estado, se señala una falta de confianza, que no sería en este caso sino una disminución de su poder en la sociedad en favor de los sindicatos y de la autoridad estatal. Tenemos entonces que la burguesía, además de verse afectada por un discurso que enfatiza la solidaridad y la propiedad pública y colectiva, quitándole la iniciativa ideológica, siente, en particular un desafío al nivel de la propia actividad productiva, donde se cuestiona, restándole decisión en el mercado laboral, el poder arbitrario con el que contaba. Los empresarios acostumbrados a actuar sin competencia económica ni respeto por los derechos laborales no se sintieron cómodos en las nuevas condiciones impuestas por el reformismo, por más que estas significaran mayores ganancias, provocando grave perjuicio al proyecto gubernamental.

En cuanto a la inversión extranjera, buena parte de ella en los sectores agrario, petrolero y minero fue nacionalizada, no así la industrial. La inversión extranjera directa en la industria, que como vimos era significativa, siguió el comportamiento del capital privado nacional, beneficiándose de los incentivos del gobierno, usando las divisas peruanas y obteniendo los consecuentes mayores beneficios, pero sin invertir. La posibilidad de atraer nueva inversión fue muy reducida debido a las leyes de estabilidad laboral y co-gestión empresarial, así como de los requisitos comunes del Pacto Andino (Mercado Común Sub-regional) en la época, que solo permitían la repatriación de una parte de las utilidades y requerían la conversión progresiva de las empresas extranjeras en nacionales.

Sin embargo, más allá de la falta de inversión empresarial, hay estudiosos como Shydrowsky y Wicht (1985) y Carbonetto (1986) que plantean problemas de fondo con el modelo de desarrollo industrial mismo, conocido como de "sustitución de importaciones", llamado a convertirse, de acuerdo al proyecto reformista, en el eje de la acumulación económica. Regresamos aquí al problema de las divisas. El modelo de sustitución de importaciones necesita dólares para importar maquinaria e insumos. Este requerimiento de divisas se incrementa cuando la demanda de la población se estimula a través de aumentos de sueldos y salarios y elevación del gasto público. Finalmente el requerimiento de divisas que necesita la industria es mayor del que pueden proveer las exportaciones y viene la crisis. Frente a ello Shydrowsky y Wicht plantean que se trata de un proceso inevitable si se produce para el mercado interno y no se cuentan con suficientes divisas, señalando la necesidad de diversificar la exportaciones peruanas, en particular impulsando la industria de exportación, para evitar este problema. Carbonetto, por otra parte, señala, que no es un problema inherente a la idea de "sustitución de importaciones" sino a la forma como el modelo se desarrolla en el Perú. En un primer momento, en la década del 50 se inicia la sustitución de bienes de consumo no duradero como alimentos y vestidos, que usaban insumos nacionales y por lo tanto no afectaban mayormente el uso de divisas. Luego, de 1960 a 1975, la gran expansión de la producción industrial se basa en la producción de los denominados "bienes de consumo durables" como automóviles, televisores, refrigeradoras, cocinas y otros artículos para el hogar, cuya producción requiere maquinaria e insumos mayoritariamente importados y cuyo destino es el pequeño mercado de las clases alta y media alta. No existe, paradójicamente, durante el velasquismo una política orientada a promover industrias que atiendan el consumo masivo de la población, a partir de insumos nacionales y del desarrollo de un sector de maquinarias y equipos producido en el país. La razón quizás pueda estar en la "falta de confianza" apuntada líneas arriba, producida por la pérdida de poder social de los empresarios, lo que los inhibía de participar en empresas cuyas ganancias a corto plazo no fueran lo suficientes para aplacar sus temores respecto de las políticas reformistas. Las escasas divisas con que contaba el Perú terminan así financiando una industria que no atendía sino las necesidades de un sector muy pequeño de la población, no producía una integración económica del conjunto de los

sectores productivos, por lo tanto no creaba un mercado nacional y por último no reinvertía sus ganancias por razones principalmente políticas.

La escasez de divisas lleva a que se incremente sustancialmente la deuda externa, cuyo monto sube de 1,100 millones de dólares en 1968 a 2,542 millones en 1973 y a 3,990 millones en 1975 (Stallings 1985:206). Estos son montos que provienen principalmente de bancos privados, tanto de los Estados Unidos como de Europa, ya que las relaciones con el gobierno norteamericano se encontraban deterioradas por las nacionalizaciones de empresas de ese país. Recién en 1974 se llega a un arreglo entre los gobiernos del Perú y Estados Unidos lo que permite que se reestablezcan con más fluidez los flujos financieros. Cotler (1985a:49) señala que desde 1972 ya se cubrían los déficits presupuestales con préstamos externos y que en 1974 esta proporción se eleva al 45%. Asimismo, los gastos de defensa empiezan a jugar un rol importante. El deterioro de la situación geopolítica del Perú luego de la caída de gobiernos vecinos amigos del velasquismo, como eran los de Allende en Chile, Rodríguez Lara en Ecuador y Torres en Bolivia, lleva a los militares peruanos a considerar significativos aumentos en gastos de defensa. Estos suben de 58 millones en 1970 a 219 millones en 1975, en tendencia que se mantendrá ascendente hasta el final de la década (Dancourt 1986:58). Esto lleva al Perú a una difícil situación financiera, lo que hace destinar una proporción cada vez mayor de las exportaciones al pago de la deuda externa, que va de 14.6% en 1968 al 25.8% en 1975, cifra que también empeoraría en los años siguientes (Stallings 1985:206). Cuestión interesante es observar que una de las salidas más a la mano que tenían los militares: la reestructuración del sistema tributario para aumentar los ingresos y cubrir sus déficits no es tomada en cuenta y más bien la presión tributaria tiende a caer. Thorp (1985:73) sugiere certeramente que esta falta de una reforma tributaria proviene nuevamente de un temor a afectar las ganancias empresariales y, agrega, los ingresos de la clase media, la alta clase media diríamos mejor; dos sectores que a pesar de verse favorecidos por las políticas económicas inmediatas tendían a manifestar su distancia ideológica con el régimen.

El fracaso económico, que se expresa en forma inmediata como apremio financiero, no tiene entonces su causa en una falta de divisas, motivada por una baja en los precios de los productos de exportación,

sino en un modelo de industrialización dólar-adicto que consume divisas sin integrar la economía ni promover la reinversión. La baja en las exportaciones, los gastos en defensa y el recurso desordenado a la deuda externa agravan la situación financiera pero no la crean, la raíz está dentro del país, en la industria, que debería haber sido el eje de la acumulación propuesta por los militares y que terminó siendo su talón de Aquiles. En este aspecto, los militares no significan una ruptura con el modelo de desarrollo industrial del reformismo anterior, por el contrario, lo profundizan, llevando la economía a una bancarrota más profunda.

La caída de Velasco

EL PERÍODO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA comienza con la crisis del reformismo militar, en la primera mitad de 1975, proceso que desemboca en la caída de su líder, el general Velasco. En esos meses fracasa el intento de institucionalización política de las reformas, poniendo en actividad tanto a las fuerzas militares como civiles que empezarían a buscar una nueva salida política.

A. ¿VELASQUISMO O REFORMISMO?

Existe la tentación cuando se busca periodizar el reformismo militar de referir su término al desplazamiento final de los últimos oficiales reformistas de posiciones de poder, en julio de 1976, sin embargo, creo más adecuado señalar el momento final del reformismo en agosto de 1975, con el golpe de Morales Bermúdez contra Velasco. Esto lleva a identificar velasquismo con reformismo militar, y a darle a su conductor, el general Juan Velasco, una relevancia particular. A riesgo de establecer un corte abrupto, creo que Velasco tanto por su condición de líder del proceso como de jefe militar, era el centro de poder que permitía conjugar el apoyo de las Fuerzas Armadas y la iniciativa del grupo de militares y civiles que dieron perfil ideológico y político y empujaron las reformas. Desaparecido Velasco de la escena política ese centro de poder desaparece también, permitiendo la acción de otras fuerzas, en particular los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas, que recuperan la iniciativa e inician el desmontaje de las reformas. Es cierto que el desmontaje no se produce de inmediato pero la fuerza e iniciativa política desaparecen y con ellas el reformismo como proceso y como

período político. Carlos Franco (1986:415) que es quien con más fuerza sostiene esta perspectiva, relata una anécdota dramática, sobre una visita a Velasco poco después del golpe, oportunidad en la cual éste le dijo: "Franco, explíqueme, ¿cómo pueden seguir hablando de revolución si la revolución...era yo?" Esta situación ilustra cómo las ventajas que permiten el inicio del proceso reformista, donde el liderazgo de Velasco juega un papel fundamental, se manifiestan como problemas en su crisis.

Esta identidad entre reformismo y velasquismo nos permite señalar un período de crisis del proceso que estrictamente va del 5 de febrero de 1975, cuando se producen graves desórdenes callejeros en Lima, a propósito de una huelga policial y el gobierno tiene dificultades para controlar la situación, al 29 de agosto de 1975 en que se da el golpe contra Velasco. Este período, por supuesto, tiene antecedentes en los conflictos que se agudizan a partir de 1973, tanto en la Fuerza Armada como en el movimiento social, así como en la propia crisis económica, y, remanentes, que se terminan de liquidar en julio de 1976, con la salida de los últimos oficiales radicales. Antes del 5 de febrero el gobierno todavía podía controlar la situación y luego del 29 de agosto, como señalamos, ya no existe el articulador central de poder, ni la correlación de fuerzas, que permite llevar adelante las reformas.

B. LAS TESIS SOBRE LA CRISIS

La discusión de los diferentes puntos de vista sobre la crisis final del reformismo cobra especial importancia, porque su resultado marcará las características de la transición. La particularidad contradictoria que señaláramos líneas arriba entre forma política autoritaria y consecuencias sociales profundamente democratizadoras se hará presente con distintos énfasis en todos los autores.

Cotler (1985a, 1988, 1990) será quien remarque más la forma política autoritaria del régimen, señalando que profundiza la tradicional distancia establecida entre Estado y sociedad por el dominio oligárquico, es decir que las reformas por su carácter totalizante y excluyente, al pretender, según él, organizar a toda la población bajo un solo horizonte político, no son capaces de tener consecuencias integradoras y más bien llevan al

aislamiento de los militares. Esta perspectiva subestima los efectos del velasquismo en la sociedad y señala que la movilización social se dió contra los deseos de los militares, que más bien habrían estado guiados por razones de tipo preventivo contrainsurgente desde el planeamiento del golpe del 3 de octubre de 1968. Aquí los militares son vistos como un bloque, se ignora el proyecto político de movilización social del velasquismo y se asume el punto de vista tradicional frente a las dictaduras militares de derecha: su autoritarismo las lleva al aislamiento y nada bueno pueden brindar a la sociedad. Lo más grave en esta perspectiva es que no toma en cuenta los elementos democratizadores del velasquismo, por lo que la posterior democratización política sería nada más que la negación del autoritarismo militar.

Franco (1986), plantea con mucha claridad la contradicción entre autoritarismo y democratización social, sin embargo, solo ve las consecuencias sociales de la movilización que impulsara el propio velasquismo y al constatar su fracaso desarrolla una perspectiva pesimista sobre los demás movimientos sociales. Esta visión unilateral lo lleva a no tomar en cuenta que las condiciones propiciadas por las reformas permitieron el surgimiento de movimientos, generalmente bajo influencia de la izquierda marxista-leninista, que desarrollaron un espacio social propio, autónomo del Estado. La crisis del reformismo es entonces para Franco una crisis en las alturas y más específicamente en la institución militar. Los problemas centrales están para él en la ruptura del grupo militar que apoyara a Velasco y en las consecuencias que esto tuvo en el control de las Fuerzas Armadas. La referencia a los militares como aquellos que tomaban las decisiones, parece ser, por lo demás común entre los que trabajaron con el reformismo. La encontramos también en Rafael Roncagliolo, periodista que apoyara al velasquismo, cuando al entrevistarlo nos dice: "Los civiles eramos fusibles, los actores verdaderos son militares. El gobierno, las tendencias y los centros de poder son militares. Lo que hacemos los civiles es adherirnos con nuestra capacidad crítica." Esta perspectiva, sin embargo, resalta un aspecto importante, el nivel en el que se tomaban las decisiones, inherente a un régimen castrense.

Nieto (1983), en una posición bastante representativa de la izquierda radical de los setentas toma un punto de vista contrario a los dos anteriores, para él la crisis tiene que ver, principalmente, con la resisten-

cia popular a la ofensiva corporativa del gobierno. Aquí se retoma en algún sentido el aspecto que deja de lado Franco, sin embargo, no se le ubica en la crisis global que atravieza a la institución militar y en particular al grupo de oficiales comprometidos con las reformas, por lo que podría dar la impresión, si se le toma por toda explicación, que el velasquismo fue copado por la sociedad.

Por último Stepan (1978) ve todo el proceso como un problema de cohesión institucional. Señala que la cohesión que sirvió a los militares para tomar el poder fue un obstáculo para institucionalizar el régimen. Aquí las contradicciones al interior del régimen como su interacción con la movilización social están ausentes. Además, tal como vimos, dicha cohesión institucional no existió en el momento de la toma del poder, sino más bien un liderazgo sobre la institución que las circunstancias del gobierno erosionaron luego. Lo que sí es importante rescatar es la atención de Stepan sobre los temores de la institución militar respecto de una institucionalización política de las reformas. Este es un tema que estuvo en el centro de la crisis del reformismo.

La crisis del reformismo y su expresión más alta en la caída de Velasco no pueden ser vistas unilateralmente como una crisis en las alturas o el resultado de una movilización popular. Existieron ambas porque ambas estaban inscritas en la naturaleza misma del proceso reformista. Este es un cambio producido desde el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, que produce una vasta movilización popular, en apoyo y en oposición a las reformas, propiciada y a la vez reprimida por el propio Estado, de acuerdo a las demandas que se enarbolaran y al curso que tomaran los acontecimientos. La crisis tiene que ver entonces con la forma como este gobierno autoritario impacta a una sociedad en proceso de movilización, pero todavía mayoritariamente desorganizada, así como con la respuesta que viene desde abajo. Esta respuesta, a su vez, divide al gobierno, atemoriza a la institución militar, afecta el sistema de poder que permitía el liderazgo de Velasco y desata la crisis.

C. EL CONFLICTO MILITAR Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Asumiendo que el conflicto al interior de las Fuerzas Armadas es algo casi permanente durante el velasquismo, es preciso, sin embargo,

distinguir el conflicto entre los sectores conservadores en las diferentes armas y el velasquismo, del conflicto al interior del grupo velasquista. Asimismo, para el análisis de estos enfrentamientos es importante tener en cuenta el grave deterioro de salud de Velasco, desde marzo de 1973. Diversos observadores y participantes en el proceso, como los generales Morales Bermúdez y Fernández Maldonado, coinciden en la importancia de este deterioro de la salud de Velasco para la crisis del reformismo, en particular por como afecta la conducción del proceso, donde, como hemos reiterado, su liderazgo era una pieza clave.

El conflicto entre los sectores conservadores y el velasquismo tiene 3 momentos. El primero, en la instalación del régimen, cuando Velasco debe hacer concesiones a sectores conservadores, sobre todo dentro del propio Ejército, otorgándoles ministerios, para asegurarse su apoyo. Estos sectores pretenden desplazarlo cuando observan el giro radical que van tomando los cambios, pero Velasco, aliado con los oficiales que lo acompañan en el golpe, los pone de lado y desarrolla el proyecto reformista. De esta forma, asegura la lealtad de las Fuerzas Armadas y sobre todo del Ejército, asentando su gobierno y su liderazgo.

El segundo, es un conflicto de mayores proporciones, enfrentando al grupo velasquista con la Marina. En este caso se trata del enfrentamiento con toda una institución, que en todo momento había estado en desacuerdo con el proceso reformista pero que había tenido que subordinarse por su menor tamaño y poder relativo en las Fuerzas Armadas. Es un conflicto que sucede entre principios de 1973 y mayo de 1974, casi coincidente en su inicio con la enfermedad de Velasco y luego de que se han producido casi todas las reformas importantes del proceso. Se da precedido por años de agudo enfrentamiento entre el velasquismo y las clases propietarias, que habían sido afectadas por las reformas y cuya protesta no había tenido mayor éxito. Los temas del conflicto, levantados por el Jefe de la Marina, Vice-Almirante Luis Vargas Caballero, son el derecho a la propiedad privada y a la libertad de expresión, así como la pertenencia del Perú a la "tradición occidental y cristiana" de donde pretendería alejarlo la "infiltración comunista", verdadera inspiradora de las reformas según estos conservadores. Pero por comunistas no solo entendían al Partido Comunista y su accidentada relación con el gobierno, sino a todos aquellos que cuestionaban el monopolio de la propiedad

privada e impulsaban la organización del pueblo. Comunistas eran entonces no solo los partidos marxistas sino también el SINAMOS, los militares velasquistas y sus aliados, es decir, todos los que negaban el orden oligárquico. Los sucesivos incidentes de desarrollo del enfrentamiento se dan cuando el jefe naval muestra solidaridad con los gremios de empresarios y/o políticos de derecha que esporádicamente hacen declaraciones contrarias al gobierno. En particular cuando se trata de defender a algún medio de expresión de esa tendencia. El propio Vargas Caballero (Tello 1983, 2:180) señala, su primera reacción frente al golpe: "Yo lo que tenía era un rechazo al hecho de que se hubiera producido un movimiento revolucionario" y luego, relatando sus problemas como ministro dice: "todos estamos de acuerdo en que había que hacer transformaciones pero dentro del sistema democrático, dentro del sistema de gobierno en el cual se reconoce la propiedad privada, la iniciativa privada, en el cual hay libertad de expresión". Las referencias a la democracia anterior a 1968, con la que termina el velasquismo, así como su defensa del derecho fundamental a la propiedad para las clases que habían sido afectadas, y de los medios de expresión de derecha que eran portavoces de aquellas, lo hacen casi un representante del antiguo régimen y muestra las agudas contradicciones con las que convivía el velasquismo. Velasco decide enfrentar al Almirante, pasando al retiro a él y a tantos jefes navales como fue necesario hasta encontrar a uno que no se opusiera al proceso. Con esta acción asestó un duro golpe a las posiciones conservadoras, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la unidad institucional quedó seriamente mellada y las heridas abiertas se mostrarían un año más tarde en la conspiración para el relevo de Velasco, tercer momento al que nos referiremos en los acápite siguientes.

Pero esta distancia entre el reformismo y las fuerzas de derecha, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, se hará aún mayor con la expropiación de los diarios de circulación nacional, que se produce en julio de 1974. Estos eran los únicos voceros con que contaban las posiciones conservadoras, al estar sus partidos políticos prácticamente inactivos y sus contactos militares replegados, por lo que la acción los afecta seriamente, polarizando aún más el panorama político y contribuyendo a profundizar el autoritarismo militar. Las intenciones reformistas de entregar los periódicos a diferentes sectores sociales, organizados por

el proceso, no llega nunca a concretarse, pasando la prensa diaria de ser el oligopolio de unas cuantas familias oligarcas a ser un monopolio estatal. Este es quizás el ejemplo más claro del fracaso del proyecto reformista, donde el poder expropiado a la oligarquía teme ser entregado a la organización social y prefiere conservarse como prebenda burocrática.

El conflicto al interior del grupo velasquista es de naturaleza diferente y tiene que ver, más específicamente, con la forma como el gobierno promovía la movilización social. Su importancia para la crisis del velasquismo creo que es definitiva. Muy difícilmente los sectores opuestos a las reformas podrían haber propiciado la caída de Velasco, por lo menos en la forma y los tiempos en que se dió, sin una división del grupo velasquista. Su desarrollo es claramente perceptible en la etapa final del velasquismo, entre 1974 y 1975, como el conflicto que domina la escena política y va a resultar en el golpe contra Velasco. El tema de la organización popular es central en este conflicto por una reconocida resistencia de las Fuerzas Armadas a que el gobierno propiciara una acción de este tipo. Fernández Maldonado señala así que: "el proceso llegó a un límite por la aprehensión de la Fuerza Armada a que el pueblo se organizase. Ese era el elemento central" y Cisneros reitera: "los problemas empezaron con la organización del campesinado, con la CNA y SINAMOS como el embrión de la organización política". Sin embargo, ¿qué permite que este conflicto se desarrolle de 1974 en adelante? La crisis económica. 1974 es el año en que el velasquismo empieza a dar muestras de agotamiento económico y uno de sus primeros síntomas era la multiplicación de las huelgas, que venían en alza creciente desde el año anterior. Al natural aumento de las demandas sociales producto de las reformas, se sumaban ahora demandas mayores que permitieran contrarrestar los iniciales efectos de la crisis. Esta situación es la que deja al descubierto los conflictos al interior del velasquismo.

Se suele señalar las facciones antagónicas como "la misión" y "los militares progresistas" (Pease 1977). Hay resistencias, sin embargo, de los actores que se pueden syndicar como líderes de uno o el otro grupo, explícitamente los generales Fernández Maldonado y Javier Tantaleán (Tello 1983, 2:135) así como de algunos analistas (Franco 1986:395-415), a distinguir grupos tan definidos. Quizás los diferentes periódicos que controlaban sectores proclives a cada corriente hicieron aparecer la

polémica más profunda de lo que era y las normas castrenses tampoco permitieron a los oficiales involucrados una expresión totalmente clara de sus puntos de vista. Por otra parte existe también un grupo intermedio, el de los intelectuales que trabajaban en SINAMOS, que gusta de considerarse equidistante de las simpatías pro-comunistas de los "progresistas" y el controlismo de "la misión", sin embargo, para efectos prácticos los consideraremos dentro de la tendencia "progresista" por desarrollar una similar apertura frente a las distintas expresiones del movimiento social.

El caso es que se desarrollaron corrientes en el proceso que se distinguían por diferentes formas de actuar frente a hechos concretos, en particular relacionados con la organización popular. Estas corrientes se encarnaban en distintos jefes militares, los cuales van a presentar características comunes. Por un lado están los ministros que favorecían una política controlista del movimiento social y estando a cargo de ministerios claves como Trabajo, Interior, Pesquería e Industrias, implementan operativos coordinados con los servicios de inteligencia para el trabajo de paralelismo y división sindical. A estos se les conoce por el apelativo periodístico de "la misión". Su labor, es la que más precisamente se puede denominar corporativa y sus objetivos no se restringen a las organizaciones que crea el gobierno sino que se extienden a enfrentar la extensión creciente de la influencia izquierdista, que para ellos abarcaba desde la otra ala del gobierno hasta el Partido Comunista y los sectores de la izquierda radical. Los *une*, por lo demás, una lealtad incondicional a Velasco, basada, sobre todo, en la amistad personal. Por otra parte tenemos al sector que demuestra una apertura mayor frente al movimiento social y es proclive a tomar en consideración a las organizaciones ya existentes, incluso si estas mantienen discrepancias con el gobierno. Está conformada por jefes militares miembros del grupo inicial de coroneles que dió el golpe con Velasco y que en su mayoría evoluciona hacia posiciones radicales. Ocupan ministerios como Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Alimentación, y en un primer momento tienen la dirección de SINAMOS, que luego, en 1974 y 1975, pasaría al control del otro grupo. Ellos son a los que en el debate cotidiano se les conoce como "los militares progresistas". De 1974 en adelante, su contacto con Velasco se reduce, quizás porque sus consideraciones de lealtad tenían un perfil ideológico más claro y ello alimenta

la desconfianza que el propio líder desarrolla en su entorno a partir de su enfermedad.

Como señalamos, el conflicto entre ambas tendencias, para los ojos del público, se desarrolla más en la polémica periodística de sus adherentes civiles, que en conflicto entre jefes militares. Las denuncias, sin embargo, de un grupo contra el otro, por las acciones que se realizan a nivel de las organizaciones de base empieza a tomar resonancia nacional, en particular en torno a la división de CONACI y las actividades del MLR. A fines de 1974 y 1975, ambas cuestiones enfrentarán no solo a una tendencia del gobierno contra la otra, sino a la tendencia denominada "progresista" muchas veces en alianza o con el apoyo de otros sectores de izquierda marxista, contra los sectores "controlistas". Con el deterioro de la situación económica el gobierno había empezado a variar el énfasis de su discurso poniendo por delante la consigna de "más producción" (Pease 1977:187), frente a la cual la movilización popular se veía como una amenaza. La tendencia controlista sacará ventaja de esta situación para ganar posiciones dentro del propio gabinete y aparecer a la vez más responsable y opuesta a la infiltración comunista. Será en torno a este debate que en enero de 1975 se produce por primera vez una toma de posición de Velasco. Opinará inusitadamente sobre el que era quizás el problema más espinoso del momento: las actividades del MLR. Frente a unos que le negaban al grupo calidades "revolucionarias" y a los otros que se las atribuían, el líder señala:

"...qué derecho tiene el gobierno para rechazar a un individuo o grupo de individuos que vienen a abrazarnos y quieren darnos su apoyo más cercano...Qué derecho tendría el gobierno para decirles: "No, señor, no, ustedes no, no aceptamos"?...El Movimiento Laboral no es de ahora. Es antiguo. En Chimbote había un cierto modo de vivir extraño. La gente se criaba sin finezas de señoritos. Son hombres rudos y sus problemas los resolvían a palos, a chavetazos o a puñetazos, porque así se han criado. Esa gente resuelve sus problemas como hombres a punta de puñetes o a punta de palos. En cambio, hay otros, que por haber nacido en plumas o ser medio fifís, pueden discutir, pueden mentarse a la madre y sin embargo resuelven sus problemas a pañuelazos. Este Movimiento Laboral Revolucionario, desea prestar su apoyo más cercano a la Revolución, como anterior-

mente se ha formado el grupo de Trabajadores de la Revolución Peruana. Nosotros no podemos rechazarlos. ¿Con qué derecho? ¿Cómo les decimos "no, porque ustedes son unos criminales, unos fascistas"? y ¿quién dice a quién? Hay un sector que los acusa, pero con qué pedigree, con qué base un grupo califica a otro. Si la revolución intentara rechazar al MLR también debe rechazar al otro grupo. Pero si no hemos rechazado al comunismo por qué quiere el comunismo rechazar al MLR? Por qué no conviven, por qué no hacen suya la Revolución ciento por ciento y se vuelven todos participantes?"

Esta no es la versión oficial, que más bien aparece muy moderada en sus referencias al MLR, es la versión que publica el N° 509 de la revista *Caretas*, sin embargo, periodistas presentes aseguran que es la versión verdadera. En cualquier caso, su veracidad como versión y las modificaciones que sufre para salir a la luz pública manifiestan las contradicciones que atravesaba el proceso, así como las inclinaciones de Velasco por salidas más autoritarias y controlistas. A este punto de agudización había llegado el conflicto al interior del grupo velasquista cuando se producen los hechos del 5 de febrero de 1975.

D. EL CINCO DE FEBRERO

El sociólogo Sinesio López, me decía alguna vez que en los sucesos del cinco de febrero estaba inscrita la caída de Velasco. ¿Qué sucedió en esa fecha? Una huelga policial deja a Lima desguarnecida motivando que turbas de composición popular (Panfichi 1983) procedieran al saqueo de tiendas comerciales en el centro de la ciudad. Asimismo, estudiantes universitarios, parece ser que de orientación aprista, atacan dos periódicos, recientemente expropiados, que se destacaban por su apoyo al gobierno, logrando destruir las instalaciones de uno de ellos. El Ejército debió salir a reprimir tanto la huelga como los desórdenes, con un resultado de 86 muertos, 155 heridos, 1,012 detenidos y 53 policías enjuiciados (Panfichi 1983:34, Kruijt 1989:200).

La policía era un aparato de seguridad que sentía su situación disminuída frente a las instituciones integrantes del gobierno militar y aspiraba al control del Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, el personal subalterno de las fuerzas policiales, era sometido por sus

superiores a una disciplina de corte militar que rayaba en el abuso e incluso, a veces, en la servidumbre. Esta situación explota a fines de diciembre de 1974 cuando el Jefe de la Casa Militar de Velasco insulta y abofetea a uno de los guardias encargados de la custodia de Palacio por haber dejado acercarse a los periodistas al Presidente. Se suceden varias amenazas de huelga que finalmente se concretan el 3 de febrero, llevando a los incidentes del día cinco. El gobierno reacciona tarde y con dificultad. Incluso el encargado directo de reprimir la huelga y los disturbios, el Jefe Militar de Lima, General Leonidas Rodríguez, destacado miembro del grupo "progresista", no mueve a sus tropas sino hasta las once de la mañana del día cinco, argumentando que no tenía orden escrita, lo que permite que se extiendan los disturbios por la ciudad. El General Aníbal Meza Cuadra, en ese entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, señala que se actuó con tal falta de coordinación de parte de las autoridades y que él no excluye que estos incidentes fueran uno de los planes alternativos para desplazar a Velasco (Kruijt 1989:198).

Por más que no se pueda detectar con precisión una intencionalidad política directa, los sucesos del cinco de febrero expresan una manifestación de descontento de envergadura mayor, cuya resonancia crece por haber sucedido en el centro de Lima, capital de la República. Velasco, en un discurso pronunciado luego de los incidentes, acusa al APRA como promotora de los desórdenes, pero ésta niega su participación y, más allá de la concurrencia de jóvenes apristas entre la muchedumbre, no se aportan otras pruebas contundentes. Los disturbios del cinco de febrero más parecen ser el funcionamiento de una válvula de escape en una sociedad que se intentaba remodelar desde arriba, concediéndole derechos, pero sin mecanismos de participación política visibles. Por primera vez durante el reformismo, se da una sensación generalizada de descontrol y de represión abierta, mellándose, como resalta Kruijt, el prestigio del gobierno al haberse disparado contra la población. Esta situación repercute negativamente en las Fuerzas Armadas, "empiezan a escaparse las cosas de las manos" dice el General Cisneros, que en ese momento adhería a una posición institucionalista.

Esta sensación de descontrol va a tener como consecuencia una grave erosión de la legitimidad que los militares habían ganado con las reformas. Será un punto de viraje en el proceso reformista que llevará a

los diferentes actores a la búsqueda de salidas políticas que los conviertan en alternativas viables al deteriorado velasquismo. Roncagliolo, relevando la coyuntura, llama a los meses siguientes el momento "post-cinco de febrero". Las distintas tendencias dentro del gobierno encaran el problema de la institucionalización política de las reformas y los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas que se encontraban replegados desde el conflicto de la Marina con el gobierno empezarán a querer expresar la preocupación institucional por la incertidumbre reinante. Asimismo, y a pesar de los ataques que continuaban sufriendo de parte de los medios de comunicación controlados por el Estado, se rumorea que los partidos tradicionales¹¹ empiezan a tener contactos con jefes militares. En especial, se dice que el APRA, en los días siguientes al cinco de febrero, llega a plantear demandas específicas al gobierno a cambio de moderar su oposición al mismo. Esto podría ser el primer antecedente del acercamiento aprista a los militares, que no se concretaría sino en el siguiente período. Sin embargo, la capacidad de acción de estos partidos en la coyuntura es todavía restringida, debiendo depositar sus esperanzas en sus contactos militares.

La izquierda marxista, por su parte, aprovechará también la coyuntura para expresarse políticamente. En los años anteriores había estado confinada al trabajo sindical y universitario. Solo el PC, vía el desarrollo de la CGTP, había tenido expresión nacional. Sin embargo, la experiencia de combate al autoritarismo militar, sobre todo al MLR, le había permitido extender su influencia y empezar a aparecer en la escena nacional. El 5 de febrero, será una coyuntura en que algunos grupos, sobre todo el Partido Comunista y Vanguardia Revolucionaria, tratarán de buscar alianzas con los sectores radicales del gobierno, para enfrentar lo que, a través de la huelga policial, se veía como una "ofensiva reaccionaria", en la que se mezclaban, desigualmente, la derecha militar, los partidos tradicionales y el Servicio de Inteligencia Norteamericano (CIA). Los

11 Entiendo por "partidos tradicionales" al APRA, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular, que eran los partidos dominantes en el período de crisis del orden oligárquico, inmediatamente anterior a 1968. En la coyuntura objeto de estudio el APRA aparece como un partido de centro, que buscaba ser puente entre el gobierno militar y un futuro régimen democrático, mientras que AP y el PPC aparecen como grupos de derecha, que defienden a las clases propietarias y exigen el inmediato retiro militar.

temores por ambas partes, los militares "progresistas" y la izquierda, serán, sin embargo, tan grandes, que nada se llega a concretar. En el Partido Comunista una posición de este tipo no era novedad, pero en los sectores más radicales significaba un cambio de proporciones que les hubiera permitido pasar de la esfera sindical a la propiamente política. Se imponen las visiones más dogmáticas, que impedían todo contacto con institución estatal alguna e incluso repudiaban al PC por su acercamiento al gobierno. Esta actitud llevaría a la continuación del confinamiento de gran parte de la izquierda al plano sindical y al desarrollo de dinámicas paralelas entre el movimiento social y la escena política, lo que paradójicamente le daría gran desarrollo a esta izquierda marxista, sobre todo a sus sectores radicales, pero muy poca capacidad de representación política.

El proyecto de "democracia social de participación plena" levantado por el velasquismo era lo que estaba en cuestión. Las diferentes tendencias dentro del gobierno planteaban distintas formas de llevarlo adelante, mientras aquellos opuestos a las reformas empiezan a agruparse para plantear alternativas. La institucionalización política de los cambios que se venían desarrollando debería ser un paso fundamental en la plasmación de esta "democracia social de participación plena" como régimen político nacional, razón por la que se genera un arduo debate dentro del gobierno. Unos intentaban continuar con la política controlista que venían desarrollando con relativo éxito, animados sobre todo porque parecían inclinar el liderazgo de Velasco a su favor, mientras que otros apuraban la constitución de una organización política, donde eventualmente podrían coordinar con organizaciones de izquierda. Esta última tendencia forma, inmediatamente después del 5 de febrero, un "Comité de Organizaciones Populares", formado por organizaciones sociales que apoyan al régimen y luego un "Movimiento de la Revolución Peruana" formado por diferentes personalidades también ligadas al gobierno. Su iniciativa no logra cuajar y más bien el gobierno mismo toma el asunto en sus manos formando una comisión de ministros militares y publicando, hacia fines de febrero, un documento de "Bases Ideológicas de la Revolución Peruana", donde buscaban conciliarse los distintos puntos de vista. No será sino hasta julio de 1975, casi en las postrimerías del velasquismo, que se anuncia la formación de la "Organización Política de la Revolución Peruana", OPRP, cuya

comisión organizadora estaba formada principalmente por burócratas estatales, con escasa ligazón con el esfuerzo de movilización social desplegado por el propio régimen, por lo tanto con mínimas posibilidades políticas.

Tenemos entonces que en esta coyuntura crucial "post-cinco de febrero" no se logra cristalizar la organización política del proceso reformista. Varias son las causas que concurren para que esto suceda. La división del grupo velasquista, en primer lugar, que hace que el gobierno se desgaste en pugnas intestinas, restándole capacidad para continuar las reformas. La salud de Velasco, que sufre un nuevo deterioro en el mes de febrero, debilitando aún más el liderazgo y aumentando las preocupaciones concernientes en todos los actores involucrados, relativas a su desplazamiento o sucesión. Los rumores de un conflicto bélico con Chile que toman importancia, en especial luego del golpe contra Allende y la cercanía del centenario de la Guerra del Pacífico, entre Perú y Chile, en 1979. La crisis económica, que se profundiza, más allá de las razones estructurales que la causaban, con el deterioro de los precios internacionales para los productos peruanos de exportación. Por último y con particular relevancia, los temores de la institución militar, tanto por el rumbo político del proceso reformista como por su propia situación interna. El General Morales Bermúdez llama la atención, en este sentido, por la situación que él nota a principios del año 1975 cuando se hace cargo de la Comandancia General del Ejército, calificándola de "polarización muy clara, muy marcada" en las Fuerzas Armadas, que lo lleva a temer pudiera derivar en conflictos mayores entre las diferentes tendencias.

En la Marina la oposición era frontal, y explícita luego del conflicto con el Vice-Almirante Vargas Caballero. Esta actitud los lleva a sublevarse nuevamente en junio de 1975 para exigir el cambio de su Comandante General, que había sido elegido por Velasco, por uno elegido por ellos, lo que les permite recuperarse de la humillación sufrida un año atrás. En el Ejército los militares conservadores empiezan también a manifestar sus temores. El General Cisneros señala que luego del 5 de febrero se empiezan a reunir en el Cuartel General del Ejército un grupo de generales para considerar la necesidad del relevo de Velasco. Cisneros dice que este grupo mantiene contactos con oficiales de la Marina y la Aviación y con el General Morales Bermúdez, en ese momento Co-

mandante General del Ejército y Primer Ministro y más tarde Presidente. La oposición institucional de las Fuerzas Armadas expresaba razones coyunturales como las citadas: politización de la institución militar, deterioro del liderazgo, posibilidad de un conflicto bélico y la crisis económica, pero todas ellas no hacían sino manifestar una razón más profunda, la amenaza que sentían para su propia existencia como tales. Fernández Maldonado dice que la tentación controlista de la organización popular, expresada incluso por parte del propio Velasco, así como por algunos de sus ministros no hacían sino expresar ese temor institucional:

“Definitivamente había un temor de que el pueblo con toda esa fuerza revolucionaria pudiera rebasar a la Fuerza Armada. No en nosotros, la vanguardia militar, sino en la Fuerza Armada como conjunto. Y Velasco no quería confrontarse con la Fuerza Armada... Sala, Richter, Tantaleán, (ministros ligados a posiciones controlistas) estaban en esa... expresaban ese temor.”

Este temor, que lleva a limitar la actividad de SINAMOS desde un primer momento, es el que se traducirá en controlismo primero y en oposición institucional luego del 5 de febrero. Los actores que están detrás de cada actitud, no son por supuesto los mismos, ya que detrás de las actividades controlistas se encuentran oficiales miembros del grupo velasquista, que pasan a conformar progresivamente una tendencia y detrás de la oposición institucional se encuentra un espectro más amplio de fuerzas, pero con la participación muy activa de los oficiales más conservadores. Sin embargo, ambas son expresiones del espíritu castrense que cuida del rol privilegiado de la institución por encima de otras consideraciones. Si antes señalamos que la institución militar necesitaba, para continuar con su propio desarrollo, la modernización y nacionalización del Estado, ahora encontramos que el proceso de reformas, con las condiciones que había generado para la movilización del pueblo, representa, a ojos castrenses, un peligro para su existencia. Por lo demás, el gobierno se autodenominaba “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, si se pensaba en una organización política del proceso era lógico pensar que la conducción militar estaría en cuestión. Quizás esto solo significaba, en el proyecto de los ideólogos militares y/o civiles del proceso, la creación de una nueva institucionalidad política donde la

Fuerza Armada tendría su lugar, pero las mayoría de los militares no lo entendían así. Parece ser que desconfiaban de cualquier nuevo proyecto de institucionalidad que no estuviera bajo su control, en particular si se trataba de un proyecto que planteaba transferir el poder "al pueblo organizado". Por más que las "imágenes participativas", en las palabras de Franco, fueran tan solo imágenes, involucraban a un actor: el pueblo, a pesar de los esfuerzos reformistas, ajeno a la perspectiva castrense. En cualquier caso este temor marca el límite final del reformismo.

E. LA RESOLUCIÓN AMBIGUA

El período que va de febrero a agosto de 1975 se caracteriza también por los esfuerzos de los diferentes agrupamientos militares por encontrar una forma de cambiar a Velasco en la conducción del gobierno. Pero los objetivos de cada cual eran diferentes: la Marina y otros conservadores querían un relevo para volver al viejo orden, la tendencia controlista del velasquismo aspiraba a profundizar un esquema corporativo y crecientemente autoritario, los "progresistas" querían "profundizar la revolución". Ninguno, empero, tenía la fuerza para llevar adelante por sí solo su alternativa manteniendo la unidad de la Fuerza Armada, por lo que se debían tejer alianzas. Sin embargo, las posiciones parecían tan alejadas en la coyuntura que no se veía cómo esto podría suceder.

La división del grupo velasquista descarta la posibilidad de una sucesión ordenada y aumenta la desconfianza del líder. Los diversos intentos de afrontar el problema fracasan y no se llega a un acuerdo formal entre Velasco y sus más cercanos colaboradores. Los relatos de Carlos Franco (1986) como del General José Graham (Tello 1983, vol.1), Jefe del COAP desde 1969, muestran en estos últimos meses a un Velasco solitario, aislado e incomunicado, como expresión de que el momento final de su gobierno se acercaba. Había, sin embargo, un hombre que tenía un amplio consenso institucional basado en una brillante carrera militar: el General Francisco Morales Bermúdez, que seguía en línea de mando a Velasco. Curiosamente su retórica radical lo acercaba a los "progresistas" y su profesionalismo a los institucionalistas. Ambos grupos mantenían contacto con Morales Bermúdez en esta época, los "progresistas" porque lo consideraban uno de los suyos y los institucionalistas, porque, como nos informa Cisneros, lo consideraban la

única carta de recambio. Incluso el propio Velasco llega a conversar con él sobre la necesidad de que se preparara para sucederle, sin que tampoco ningún procedimiento llegara a concretarse. Esta situación le permite a Morales Bermúdez, de acuerdo con las versiones de los Generales Cisneros y Fernández Maldonado, mantener relaciones con ambos grupos, aunque por el clima político reinante no se hicieran explícitos sus lazos con los oficiales más conservadores que aparecían como institucionalistas. Lo que en un momento no había parecido posible: que las tendencias que emergen del cinco de febrero pudieran entenderse, logrando la fuerza necesaria para derrocar a Velasco pero manteniendo la unidad de la Fuerzas Armadas, parece ahora realizado en la persona de Morales Bermúdez.

El clima de autoritarismo reinante en los últimos meses de gobierno de Velasco, por el predominio de la tendencia controlista, se ve exacerbado por una deportación masiva de 27 periodistas, dirigentes sindicales y políticos de izquierda y derecha a principios de agosto de 1975. La amplitud de la medida dice de su arbitrariedad y señala el nivel de desgaste y aislamiento al que había llegado el gobierno. Morales Bermúdez en coordinación con la tendencia "progresista" acelera los planes para el relevo de Velasco, fijando la fecha para mediados de setiembre. Sin embargo, en una forma de actuación que luego sería característica de su gobierno, sorprende a sus colegas y se subleva por decisión propia el 29 de agosto en la ciudad de Tacna, aprovechando una gira por el sur del país. "Progresistas" e institucionalistas sorprendidos y sin otra opción deben plegarse rápidamente. El General Juan Velasco abandona Palacio de Gobierno por una puerta lateral, solo lo despiden sus ayudantes más inmediatos. Habían terminado siete años de reformismo militar.

La Contrarreforma

LOS MOMENTOS DEL GOBIERNO de Morales Bermúdez que van del 29 de agosto de 1975 a la instalación de la Asamblea Constituyente tres años más tarde, por más que sean procesos definidos, no van a tener un perfil tan claro en el tiempo como sucede con las etapas del gobierno velasquista. Se intersecan por ello dos momentos básicos: el desmontaje de las reformas con la apertura política, así como los procesos de purga militar, ajuste económico, demanda y represión social, liberalización y democratización políticas que les son inherentes. Se pueden distinguir, sin embargo, dos momentos, uno de contrarreforma, donde se crean las condiciones para una salida política y otro de apertura, donde se procede a dicha salida.

Ahora bien, en el momento de contrarreforma es que sucede, principalmente, la liberalización política, en el sentido que la entienden Schmitter y O'Donnell (1986:7), es decir que se les concedieron derechos, o mejor dicho, se les devolvieron derechos, principalmente de reunión y expresión, a los gremios empresariales y a los partidos tradicionales, cuya actuación había estado seriamente recortada durante el reformismo. Sin embargo, es preciso remarcar el carácter unilateral de esta liberalización, ya que las organizaciones populares y los partidos de izquierda fueron más bien reprimidos. Por ello es importante señalar que en las condiciones que marca la contrarreforma es que se produce una liberalización parcial.

A. "LA PROFUNDIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN"

La alianza equívoca que da lugar al gobierno de Francisco Morales Bermúdez permitirá también un inicio equívoco para su administración. La primera consecuencia de este cambio de gobierno será la desaparición de la tendencia controlista de la organización popular, en particular del MLR, que se había vuelto predominante en los últimos tiempos del gobierno de Velasco, así como la revocación de sus medidas autoritarias, en especial la deportación masiva de principios de agosto de 1975. Ello crea un clima de cierta libertad política, en cuyo contexto el nuevo gobierno emite señales contradictorias.

Morales Bermúdez como puente entre dos tendencias que poco tenían en común, institucionalistas y "progresistas" opta al principio por la retórica radical de la que hacía gala dentro del grupo velasquista (Tello 1983:270). El mismo lo dice: "Yo en un primer momento quiero profundizar el proceso". Señala repetidamente, yendo incluso más allá de las "Bases Ideológicas", su especial adhesión "socialista", promete el 3 de octubre de 1975, aniversario del golpe de Velasco, "la transferencia del poder al pueblo organizado" (Nieto 1983:51) y da disposiciones radicalizando la reforma agraria y buscando impulsar la propiedad social. Pero, en lo que es quizá su intento mayor, crea el "Frente de Defensa de la Revoución Peruana" (FDRP) agrupando organizaciones sociales creadas por las reformas y pone al frente a Avelino Mar, un líder campesino de conocidas simpatías izquierdistas. Insiste de esta manera en buscar el camino de la institucionalización política del proceso reformista, que había sido la piedra de toque de la crisis del gobierno de Velasco. Dispone también la creación de una comisión especial que formule un nuevo plan de gobierno, la primera versión de lo que posteriormente sería el "Plan Túpac Amaru", con funcionarios, tanto militares como civiles, conocidos por sus simpatías izquierdistas.

Sin embargo, estos afanes radicales duran poco y se dan junto con disposiciones que claramente los contradicen. La más importante de estas es la remoción de los militares radicales que detentan posiciones de poder y la promoción consiguiente de oficiales conservadores. De igual forma, desde un primer momento el discurso oficial apela a la "unidad de todos los peruanos", a diferencia del discurso velasquista cuyo perfil

claramente anti-oligárquico excluía a los antiguos sectores propietarios afectados por las reformas de cualquier proyecto político futuro. En consecuencia, permite la expresión de la derecha política, que de inmediato pide, con insistencia, elecciones generales. Asimismo, endurece su posición frente a los reclamos laborales, recortando el derecho de huelga y llevando a la Colonia Penal de "El Sepa" a un grupo de abogados asesores sindicales, a la vez que flexibiliza su trato con los empresarios, sobre todo en cuanto a la estabilidad laboral y el consecuente despido de trabajadores. Esto último lleva a un paro regional de Lima y Callao de la CGTP, el 29 de diciembre de 1975, el primero de estas características desde 1968, en protesta por esta medida.

Es muy significativo que la posición del Ministerio de Trabajo sobre el asunto de la estabilidad laboral varíe casi desde el inicio del gobierno de Morales Bermúdez. La estabilidad laboral había sido la garantía básica que había permitido a los trabajadores organizarse durante el velasquismo, una flexibilización al respecto por parte del gobierno era uno de los gestos más significativos que podían recibir los empresarios. Sin embargo, el tema era tan delicado que el gobierno no se atreverá a convertir en ley su cambio de actitud sino hasta marzo de 1978, presionado en ese momento por una agobiante crisis económica y la necesidad urgente de apoyo empresarial.

B. LIMPIEZA MILITAR

La evidencia de estas contradicciones queda en claro con las palabras del propio Morales Bermúdez:

"En diciembre del 75 me doy cuenta de que la profundización del proceso se hace difícil, que lo mejor es contener, es decir, no retroceder...empiezo a observar el agotamiento, la crisis económica y la crisis institucional, expresada en que se comienza a quebrar la concepción jerárquica".

En este camino, de enfrentar los problemas de gobierno con una concepción institucionalista, le da preeminencia en la toma de decisiones importantes a la denominada "Junta Revolucionaria", convocándola regularmente. De esta manera el eje de poder empieza a variar, de estar

concentrado en el líder y prolongarse con su consentimiento al COAP o a algunos de los ministros de su entorno, pasa a estar en el Presidente y la Junta Revolucionaria, lo que indudablemente buscaba reflejar mejor los sentimientos institucionales. En esta línea de afirmación institucional es que proceden los cambios militares, favoreciendo mayoritariamente, por los temores que priman en los institutos castrenses, a las posiciones conservadoras. Se devuelve su autonomía a la Marina, respetando el nombramiento interno de sus mandos. Se pasa al retiro, en octubre de 1975, a los Generales José Graham y Leonidas Rodríguez, destacados velasquistas, el primero jefe del COAP y el segundo jefe militar de Lima. Se nombra, en setiembre de ese mismo año, jefe del SINAMOS al General Luis Cisneros Vizquerra, oficial conservador opuesto a la política de movilización social del velasquismo, por lo que su nombramiento implicaba, en conflicto flagrante con otras acciones que se tomaban al mismo tiempo, poco entusiasmo por parte del gobierno para esa labor. Algunos meses más tarde a principios de 1976, el General Cisneros es nombrado Ministro del Interior. Sin embargo, siguiendo esta misma línea institucional y con la oposición abierta de la derecha civil y militar, Morales Bermúdez nombra al General Jorge Fernández Maldonado, destacado militar radical desde los momentos de la conspiración velasquista, Comandante General del Ejército y por lo tanto, Ministro de Guerra y Primer Ministro. Los criterios son nuevamente castrenses, era el que seguía en antigüedad y de acuerdo a los reglamentos "le tocaba". Aunque el propio Fernández Maldonado aclare, de acuerdo a los cambios ocurridos: "Yo entro sin piso a la Comandancia General, ninguna de las regiones (militares) estaba conmigo".

Pero el cambio político fundamental, motivado por este criterio institucional, viene en febrero de 1976, cuando la comisión encargada de elaborar un nuevo plan de gobierno es invitada a hacer una exposición ante los generales del Ejército. Estos tienen una reacción abiertamente negativa frente a cualquier "profundización de la revolución", manifestándose en igual forma, por escrito, la Marina, la Aviación y la Policía, tal como señala el General Arturo Valdés, encargado del plan por Morales Bermúdez (Kruijt 1989:232-237). Parece ser que este consenso institucional, presionado por los conservadores, tal como se encarga de remarcar Cisneros, es el que lleva a Morales Bermúdez a tomar otro paso decisivo contra el grupo "progresista": cambia todos los directores de los

diarios de circulación nacional, expropiados por el gobierno desde julio de 1974, donde la izquierda gubernamental tenía influencia significativa y quizás si sus voceros más importantes. Esto sucede a mediados de marzo y le permite a Morales Bermúdez, en un discurso a fines de mes, atacar abiertamente a los sectores radicales del reformismo y anunciar que se está elaborando un nuevo plan de gobierno "sin modelos importados" y de acuerdo "a los anhelos de la Fuerza Armada y de las grandes mayorías del país" (Pease y Filomeno 1977a:1890-1897). Inusualmente el discurso recibe el respaldo inmediato, a través de un comunicado oficial, de la Junta Revolucionaria y el gabinete ministerial.

A este discurso siguen en el mes de abril la declaratoria en emergencia de los sectores minero y pesquero, de propiedad mayoritariamente estatal y cuyas exportaciones significaban un aporte en divisas importante para el comercio exterior. Esta "emergencia" implicaba la prohibición de hacer huelgas, en un intento por quebrar el sindicalismo "clasista" dominante en esos sectores. Asimismo, se produce el primer acercamiento explícito a un partido tradicional, cuando en la ciudad de Trujillo, Morales Bermúdez llama a una reconciliación entre el APRA y la Fuerza Armada, tradicionalmente enemistadas por las posiciones anti-militaristas de este partido en la época oligárquica. "Ahí -dice Morales Bermúdez- doy a entender que se va a iniciar un proceso de transición". De igual forma, se cortan los juicios que los gobiernos militares habían iniciado contra políticos y sindicalistas civiles, desde el período velasquista. Por más que el propio General Morales Bermúdez aclare que sus llamados conciliadores con el APRA no implican intenciones de convocar a elecciones, tanto el APRA como Acción Popular consideran "positivos" los gestos presidenciales (Pease y Filomeno 1977a:1932-1934).

Este conjunto de hechos van a significar un giro político fundamental en el gobierno, donde la influencia institucional de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones se vuelve muy importante, la represión al movimiento popular, en particular la violación de los derechos laborales que había dado Velasco, un patrón consistente y, a la par, se empieza a buscar una salida política a través de los partidos tradicionales. Como diría Carlos Delgado, principal ideólogo del velasquismo, en entrevista que le hace el diario El Excelsior de México, en junio de 1976, el gesto de

Morales Bermúdez “pareciera conducir a la restauración de la política tradicional”.

Este giro político se completaría en julio de 1976 con la remoción del Jefe del Ejército y Primer Ministro, General Jorge Fernández Maldonado. El cambio se produce luego de que uno de los jefes militares de Lima, el General Bobbio, se sublevara contra Fernández Maldonado, lo que debilita la autoridad de este último y lleva a los otros jefes militares, de posiciones más conservadoras, a considerar su cambio. El General Cisneros señala al respecto:

“...el rechazo institucional no era al General Fernández Maldonado, sino a la posición ideológica del General Fernández Maldonado, que es comunista, y la Fuerza Armada no es comunista ni lo va a ser nunca”.

Tanto Fernández Maldonado como Cisneros no consideran estos hechos una cuestión fortuita sino el incidente final de una lucha por el poder que se venía librando casi desde el cambio de gobierno, en agosto de 1975, donde uno representaba el velasquismo y el otro la reacción conservadora. El uso de diferentes servicios de inteligencia a favor de uno y otro grupo, había sido repetidamente denunciada por ambos jefes al Presidente en los meses anteriores. Morales Bermúdez, en cambio, buscaba ponerse por encima de las contradicciones y señala que este incidente no hizo sino expresar la polarización existente en el Ejército entre diferentes posiciones políticas:

“Bobbio era un hombre con una mentalidad de derecha y Fernández Maldonado un hombre de izquierda, ahí se produce el choque...un hombre de izquierda en armas y un hombre de derecha en armas, demostración de que el proceso institucional se estaba politizando...Las instituciones empiezan a actuar como partidos. Un grupo en armas de la institución que desconoce a su Comandante General. Esto ya significa quiebra de la disciplina”.

Reitera así un punto de vista que había tenido sobre crisis militares anteriores, situación que según él, dañaba gravemente a la Fuerza Armada, de allí que contando con una mayoría de mandos del Ejército

que pedían el cambio de Fernández Maldonado, procede a su relevo. La limpieza de simpatizantes velasquistas no terminaría con este descabezamiento en la cúpula, en el mismo mes de julio de 1976 se produce un conato de golpe radical por parte de oficiales subalternos que es rápidamente debelado y parece ser que en los meses siguientes, según informa el General Cisneros, también suceden intentos similares en guarniciones de provincias que son igualmente controlados.

La salida de Fernández Maldonado se da en medio de una grave agudización del conflicto social. Tanto metalúrgicos como maestros, que se habían distinguido por su capacidad de movilización, desarrollan huelgas importantes. Asimismo, en el mes de junio, se habían sucedido tomas de fábrica en Lima, en particular en la zona de la carretera central, ante las múltiples solicitudes de los empresarios para reducir personal. En uno de los casos, en la fábrica "Nylon", los obreros se juntarían con la población aldeaña para enfrentar a la policía, sentando un patrón de lucha que luego se repetiría en otros lugares en los años siguientes. El deterioro de la situación económica lleva al gobierno a dar un nuevo paquete de medidas para estabilizar la situación, lo que agita aún más el encrespado ambiente laboral. Ambos aspectos, la crisis económica y el conflicto social, llevarán al gobierno, ya libre de elementos reformistas, a tomar medidas más abiertamente represivas antes de cualquier apertura política.

C. AJUSTE ECONOMICO

Los "ajustes económicos" o "paquetes", conjunto de medidas de política económica, que van, en diversos momentos, a tratar de solucionar la crisis que se desata con la quiebra del velasquismo, estarán estrechamente relacionados a los momentos claves de movilización social y crisis política del gobierno de Morales Bermúdez. Desde julio de 1975, en las postrimerías del gobierno de Velasco, los militares empezaron a tomar medidas correctivas de política económica. Como ya señalamos, la retórica oficial refirió los problemas a la economía mundial y el deterioro de los términos de intercambio y limitó sus correcciones al alza de precios de los productos básicos (mayormente alimentos) y topes en los salarios. Con el gobierno de Morales Bermúdez, esta dinámica de aumentar los precios y contener los salarios

se acentúa, tratando de restringir levemente las importaciones y dar incentivos para las exportaciones no tradicionales, principalmente industriales. Sin embargo, la crisis aumentaba y fue necesario, siempre dentro del esquema que entiende el problema como de balanza de pagos, proceder a medidas más duras que devaluaran la moneda, restringieran el gasto público, subieran los precios de los productos básicos y contuvieran severamente los salarios. Esto fue lo que sucedió a fines de junio de 1976, dos semanas antes del conflicto militar que lleva a la salida de Fernández Maldonado. El diagnóstico, que se trataba de mantener oculto en las anteriores "correcciones" aparecía ahora con más claridad. Se suponía que el problema era de "exceso de demanda" y por lo tanto había que restringirla, reduciendo la capacidad de compra de la población, la capacidad de gasto del Estado y la capacidad del país para importar. El diagnóstico que salía ahora a la luz, continuaría siendo el argumento central de los ajustes posteriores, en junio de 1977 y mayo de 1978.

Este era un diagnóstico, sin embargo, que se ubicaba en la dinámica de la contrarreforma. El "exceso de demanda", primero argumento empresarial y luego, recién en junio de 1976, argumento de los militares, aludía a una mejora de los salarios lograda por un sector reducido de la población, el proletariado industrial, entre 1968 y 1973. No era un aumento de los ingresos del conjunto de la población, que como ya vimos, sufrieron más bien un deterioro relativo durante el velasquismo. Sin embargo, el sector obrero que había logrado una mejora lo había hecho en base a un conjunto de derechos, garantizados por las reformas, que le habían permitido ganar poder social, tanto en la fábrica como en la sociedad. Estos derechos y las consecuentes ganancias eran lo que el gobierno buscaba restringir, para ganar el favor empresarial.

Pero había otro aspecto en que el gobierno de Morales Bermúdez no era tan riguroso como en la reducción de los salarios. Me refiero al gasto público. Durante el gobierno de Velasco se había desarrollado, como vimos, la intervención del Estado en la economía, que consumía importantes recursos públicos y que los militares se resistían a recortar en forma drástica por considerarla una fuente de poder y un ámbito de desarrollo para las propias instituciones castrenses. Asimismo están los gastos en armas, que alcanzan la cifra más alta de la década en 1977, con

548 millones de dólares (Dancourt 1986:58) y que los militares, por la posibilidad ya mencionada del conflicto con Chile, también se negarían a reducir. Esta actitud es la que, en el corto plazo, impediría la estabilización de la economía, no permitiendo que se llegara a un acuerdo final con los organismos financieros internacionales, en particular el FMI, al mismo tiempo que haría necesarios, dentro del mismo esquema de limitar el "exceso de demanda", los ajustes de 1977 y 1978.

Coyunturalmente, sin embargo, la combinación del ajuste económico de junio de 1977, junto con la depuración de los reformistas, tuvo un efecto, en el préstamo de un grupo de bancos privados norteamericanos, apoyados por su gobierno, que le permitió a la administración de Morales Bermúdez atender sus necesidades más inmediatas (Stepan 1978:287). Parece ser que, a pesar de no aprobar aún los rigurosos requerimientos del FMI, el gobierno recibió una recompensa por los cambios que empezaba a hacer.

D. ESTADO DE EMERGENCIA

En la coyuntura de julio de 1976, junto con las medidas económicas y la "limpieza" de militares reformistas, se decreta el Estado de Emergencia Nacional. Este significó la suspensión de las garantías individuales, o sea de los derechos de reunión, libre tránsito, inviolabilidad de domicilio y de la necesidad de orden judicial para detener personas. Asimismo, se agregó en este caso, significativamente, la suspensión del derecho de huelga y la clausura de todas las revistas independientes. Por último, para facilitar la aplicación del Estado de Emergencia, se decreta el Toque de Queda nocturno en la ciudad de Lima. Estas medidas represivas terminan con las ambigüedades que se habían manifestado en los primeros meses del gobierno de Morales Bermúdez frente a la movilización social, se la califica de subversiva y se procede a reprimirla.

El Estado de Emergencia es un momento del período de transición en que el gobierno militar, más allá de su carácter autoritario desde la inauguración en 1968, es visto como dictadura por el conjunto de los sectores políticos y sociales. El velasquismo era percibido como dictadura por los sectores conservadores y los grupos de izquierda radical. El gobierno de Morales Bermúdez, en cambio, luego de un primer momen-

to radical y a pesar de sus sucesivos intentos de apertura hacia la derecha, es visto por un espectro mayor de actores como un gobierno dictatorial, percepción que se acentúa con el Estado de Emergencia, cuyas medidas represivas, a pesar de estar dirigidas centralmente a detener la movilización social, afectan, en diferentes grados, a todos los sectores. Esta percepción del gobierno como dictadura por un amplio espectro de actores sociales y políticos llevará a un punto muy bajo la legitimidad de los militares para permanecer en la administración del Estado, profundizando su aislamiento de la población. Esta situación hará difícil a las Fuerzas Armadas combinar represión y liberalización y a la vez ganar credibilidad y nuevos interlocutores.

Destaca en esta actitud represiva la política del Ministro del Interior General Cisneros. En el mes de agosto dicho Ministro señala que se ha iniciado una investigación en los centros laborales para establecer la "infiltración de ultraizquierda" en los mismos, la que parece que fue exitosa ya que tal como nos dijera el propio Cisneros:

"...teníamos buena información, porque habíamos podido conseguir infiltración en todo el aparato sindical, podría haber algo de exageración para motivar, pero siempre teníamos un sustento de veracidad."

Asimismo, en el mes de octubre el Ministerio del Interior denuncia el descubrimiento de un grupo armado de ultraizquierda, denominado "Ejército Popular Peruano", sin embargo, no se conocen acciones de tal agrupación y no se presentan evidencias posteriores.

En esta misma dinámica, se procede a devolver a la empresa privada la flota pesquera que había sido estatizada por Velasco. Asimismo, en el mes de noviembre, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que reúne anualmente a los empresarios, Morales Bermúdez elogia el rol positivo que juega la propiedad privada y la inversión extranjera en el desarrollo nacional, a la par que anuncia la modificatoria en la ley de Comunidad Laboral, recortando el acceso de los trabajadores a la propiedad y la gestión de las empresas, con lo que se accede a un reclamo fundamental de los empresarios.

El Estado de Emergencia, sin embargo, tiene un efecto significativo en la movilización social y en particular en el movimiento sindical. Gran parte del proletariado industrial que se había destacado en su reclamo laboral durante el velasquismo simplemente suspende su actividad gremial. Las horas-hombre perdidas por huelgas se reducen (en miles) de 20,269 en 1975 a 6,822 en 1976 y 4,648 en 1977 (Webb y Fernández Baca 1990:219). Las luchas que persisten se dan en forma dispersa y aún las huelgas de gremios grandes y con dimensión nacional, como es el caso de la huelga de la Federación de Pescadores, contra la devolución de la flota a manos privadas, no alcanzan sus objetivos.

Estas medidas, sin embargo, significan una pérdida de apoyo para el gobierno por parte de quienes habían sido firmes soportes. La CNA, central campesina con implantación nacional, creada por Velasco pero que mantiene su apoyo a Morales Bermúdez, señala que "la revolución está retrocediendo" (Pease y Filomeno 1977a:2152). CONACI, que agrupaba las experiencias de co-gestión empresarial, rechaza las modificaciones que propone Morales Bermúdez a la ley de Comunidad Laboral y llama a formar un "frente popular" que defienda las conquistas laborales. Y el Partido Comunista, el grupo de mayor influencia sindical, que había apoyado a Velasco e intentado conciliar con Morales Bermúdez, emite también un pronunciamiento crítico al gobierno en diciembre de 1976.

En el caso del PC, se trata del primer pronunciamiento, desde que apoyan las reformas de Velasco luego de una breve oposición al golpe, en que señala críticas de fondo a la actuación militar, aunque todavía sin procesar una ruptura tajante. Recién en marzo de 1978, se puede observar en su semanario "Unidad" una actitud de clara oposición, en la que se pierden las esperanzas de una vuelta al velasquismo por parte de los militares. Gustavo Espinoza, dirigente comunista durante todo el período, refiriéndose a esta situación en entrevista que nos brindara, dirá: "En el Partido Comunista no nos dimos cuenta de cuando empezó ni de cuando terminó el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada".

Asimismo, la izquierda radical, también afectada por la represión que desata el Estado de Emergencia endurece su posición frente al gobierno. Esta tendencia desarrolla planteamientos sobre una "tercera fase" militar,

de carácter fascista, a la que estaría yendo el régimen, lo que abría en el país una situación de naturaleza pre-revolucionaria o revolucionaria, según los matices de cada tendencia, por lo que no quedaba otro camino, según estos sectores, que prepararse para una gran confrontación con el gobierno. En este sentido inician coordinaciones, desde julio de 1976, para la convocatoria a un paro nacional. Sin embargo, la fuerza represiva del gobierno y las dudas del PC, indispensable en cualquier medida de este tipo, sobre la necesidad de pasar a una oposición frontal, postergan por el momento la posibilidad de un paro nacional.

En medio del rigor de la contrarreforma el gobierno avanza con dificultad en el proceso de liberalización política. En agosto, Morales Bermúdez decide dejar de lado la caracterización "socialista" del proceso porque señala que se presta a confusiones. Cisneros, sin embargo, dice que ese abandono le es impuesto por la Junta Revolucionaria, que con su nueva composición, luego del relevo de Fernández Maldonado, tenía una correlación claramente derechista. De igual forma, en el mes de setiembre, Morales Bermúdez, en declaraciones al diario francés *Le Monde*, señala que el gobierno preconiza el pluralismo político, aceptando tanto organizaciones sociales como partidos políticos de diferentes tendencias. Esto último significa un alejamiento de las pretensiones reformistas sobre la necesidad de un "partido de la revolución", o de la exclusión, al menos en el discurso, de quienes no estuvieran de acuerdo con el gobierno.

Hacia fin del año 1976, sin embargo, continúan las cavilaciones en el gobierno sobre la salida política y ello se refleja en acciones y discursos contradictorios. Mientras que el abandono del reformismo y la represión a la movilización social parecen definidas, así como la necesidad de buscar nuevos interlocutores en los gremios empresariales y los partidos tradicionales para una salida política, las propuestas para atraerlos no están claras. Diferentes posiciones están en juego. Primero, los que desean un regreso simple y llano al viejo orden, agrupados principalmente en la Marina, cuya preocupación central parece ser la restauración de las jerarquías étnico-sociales (Franco 1986:399) afectadas por el velasquismo. Segundo, aquellos cuya preocupación central es "el conflicto social manejado por el comunismo", como dice Cisneros, y estarían tentados por la prolongación del régimen autoritario. Y, por

último, los que aceptan, e incluso prefieren, la derrota del velasquismo, pero aún desean permear la salida política de algunos remanentes reformistas. Es difícil establecer tendencias claras o grupos definidos, mucho más que en el caso de la crisis del velasquismo y los elementos tienden a combinarse, buscando avanzar en torno a consensos. Morales Bermúdez maneja con habilidad la baraja y no parece haber tenido, más allá de sus ambiciones personales, una posición premeditada. En conferencia de prensa en el mes de diciembre (Pease y Filomeno 1977a:2343) se refiere ya explícitamente a la transición, aunque señala:

"...no significa que al hablar de elecciones estamos hablando de las elecciones tradicionales en el Perú porque esas elecciones todos somos conscientes que no han dado resultados."

Sin embargo, se acepta no sólo la salida política, sino el carácter electoral de la misma, y la necesidad del período de transición respectivo. Dos meses más tarde, en febrero de 1977, al publicar el proyecto de plan de gobierno, conocido como "Plan Túpac Amaru", se incluye en este el consenso institucional alcanzado en torno a las elecciones y se agrega la necesidad de una nueva Constitución. Pero la persistencia de la distinción entre "elecciones" y "elecciones tradicionales" así como la inclusión de fórmulas como la "democracia social de participación plena" reflejaban todavía tensiones en el equipo gobernante. A estas alturas, con los velasquistas fuera del gobierno, difícilmente se podría hablar de discrepancias ideológicas de fondo, sino más bien de la influencia que la Fuerza Armada tendría en un futuro ordenamiento político, para lo cual la recuperación de algunas de las reformas y la distinción, por esta vía, del viejo orden oligárquico, era útil e importante.

Continuando con los esfuerzos de liberalización, en diciembre de 1976, se cortan los juicios a los ex-ministros del primer gobierno de Belaúnde que el velasquismo había perseguido. Se autoriza también la circulación de algunas de las revistas clausuradas, escogiéndose a los órganos de derecha y al semanario del Partido Comunista. Se dejan fuera las publicaciones de la izquierda radical y las relacionadas, directa o indirectamente con militares velasquistas. Las revistas aparecen en base a un "pacto de caballeros" entre el gobierno, representado por su

Ministro del Interior, el General Cisneros, y los directores de las publicaciones. Los puntos de compromiso de parte de estos últimos son: no atizar la lucha de clases, no apoyar la subversión ni atentar contra la unidad de las Fuerzas Armadas. Parece ser que este espectro de posiciones, que va de los partidos tradicionales al PC, es el conjunto de partidos con que los militares desearían tratar, ya que es con ellos con quienes buscan mantener contactos y eventualmente iniciar diálogos más formales. Los partidos tradicionales por la vía de contrarreforma que se estaba cursando y el PC, por su importante influencia sindical. Sin embargo, algunas semanas más tarde se deporta a los militares velasquistas en retiro que forman un partido político, el Partido Socialista Revolucionario (PSR), aunque parece ser que en esta deportación más pesa el temor a la influencia que este partido pudiera tener dentro de la propia Fuerza Armada que un intento de detener la liberalización.

Pero los partidos tradicionales y los gremios empresariales, conscientes de la necesidad que tiene el gobierno de nuevos interlocutores, exigen una mayor claridad de intenciones, en particular respecto de la forma y el cronograma de la salida política. A mediados de marzo, Acción Popular, el APRA, el Partido Popular Cristiano (PPC), exactamente los partidos dominantes del régimen anterior a 1968, realizan una reunión de coordinación con intenciones de formar un "frente cívico", pero sin llegar a conciliar sus puntos de vista. Recién en mayo, con la convocatoria por el gobierno a un diálogo individual con los partidos se hacen claras las diversas posiciones. El gobierno militar reconoce como interlocutores a determinadas fuerzas políticas, AP, el APRA y el PPC, los más importantes entre los grupos del viejo orden y al PC, como único representante de la izquierda. Quedaron excluidos el PSR, por la amenaza que a ojos militares implicaba y los partidos de la izquierda radical, que al plantear directamente el derrocamiento armado del régimen quedaban también descalificados. Las posibilidades de un pacto quedaban así abiertas, aunque, como veremos, todavía había camino por recorrer.

Los diálogos entre militares y partidos proceden de la siguiente manera. AP, en accidentada reunión, propone elecciones generales al año siguiente, con la legislación previa a 1968, o sea, el retorno simple y llano de los militares a los cuarteles, sin tomar en cuenta los cambios

ocurridos. El PPC, elecciones legislativas para 1978 y presidenciales para 1980. El APRA, en cambio, buscando coincidencias con los militares, plantea elecciones municipales a fines de 1977, constituyentes para 1978 y generales (parlamentarias y presidenciales) para 1980. El PC señala que el objetivo debe ser "profundizar la revolución", pero ante la inminencia de una salida electoral, dice que esta debe servir para institucionalizar las reformas y se limita a pedir la extensión del derecho al voto, incluyendo a los analfabetos y los mayores de 18 años. La posición tajante, de un retiro militar casi inmediato, descarta a AP de un posible pacto, y el PC, colocándose en el otro extremo del espectro, al defender una posición extemporánea, ve también limitada sus posibilidades de entrar en tratos más específicos con los militares. Así, quedan el PPC y el APRA con posiciones más flexibles que los irían perfilando como los interlocutores preferenciales.

El gobierno militar, sin embargo, no adopta ninguna actitud inmediata frente a los planteamientos de los partidos, delegándose a distintos jefes militares que mantuvieran el contacto iniciado y más bien debe atender la grave situación económica que se manifiesta en el mismo mes de mayo. Los resultados de estas conversaciones recién se verán en la respuesta militar a la coyuntura abierta por la recurrente crisis económica.

A EL 14 DE JULIO

A fines de mayo de 1977 el gobierno militar parece decidido a enfrentar el problema de la reducción del gasto público, buscando cumplir de esta forma con los requerimientos del FMI para acceder a nuevos créditos. Para ello designa como nuevo Ministro de Hacienda a un economista, Walter Cárnel, que se había caracterizado por su clara oposición al velasquista. El cambio busca en mostrar la voluntad militar de llegar

La Apertura Política

ESTE ES EL MOMENTO EN QUE SE DEFINE la transición, es decir la salida democrática y la vuelta de los militares a sus cuarteles. La movilización social es finalmente derrotada pero no solo con represión sino también con democratización. Es decir, se convocan a elecciones, se señalan nuevas reglas de juego y se logra una alianza que asegura la salida política. Esta democratización tiene varios significados. Por una parte, responde al ánimo anti-dictatorial de toda la sociedad, que es unánime luego de un año de Estado de Emergencia: ¡abajo la dictadura! dice la izquierda y ¡que se vayan los militares! proclama la derecha. Por otra, el camino de salida no es el mismo para todos y algunos no saben lo que quieren. Aquí es donde se impone el "retiro ordenado" que pacta Morales Bermúdez con los partidos tradicionales, desechando definitivamente la "democracia social de participación plena" que levantara el velasquismo, así como evitando cualquier proyección política que pudieran tener las demandas del movimiento social que enarbola la izquierda.

A. EL 19 DE JULIO

A fines de mayo de 1977 el gobierno militar parece decidido a enfrentar el problema de la reducción del gasto público, buscando cumplir de esta forma con los requerimientos del FMI para acceder a nuevos créditos. Para ello escoge como nuevo Ministro de Economía a un empresario: Walter Piazza, que se había caracterizado por su clara oposición al velasquismo. El cambio insistía en mostrar la voluntad militar de llegar

a un pacto con el sector empresarial y la derecha política, entregándoles directamente el manejo de la economía. Piazza diseña un programa que recorta drásticamente el gasto público, afectando los gastos y servicios del Estado y, sobre todo, elevando el precio de la gasolina (monopolio estatal) por lo tanto, del transporte en general y de los pasajes urbanos en particular. El fenómeno es expresado en forma inmejorable por el titular del periódico comunista "Unidad", en los días siguientes al anuncio oficial de las medidas por el nuevo ministro: "Piazza: habló el patrón".

Las medidas económicas causan una inmediata respuesta en todo el país, llevando a paros sectoriales de la Federación de Empleados Bancarios, del Sindicato de Maestros (SUTEP) y de los mineros del importante asiento de Toquepala, asimismo a paros regionales en las principales ciudades del sur andino: Cusco, Puno y Arequipa, y movilizaciones en Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Destaca el paro habido en la ciudad del Cusco, donde se repiten las movilizaciones a lo largo de todo el mes de junio (Valladares 1987:5-15). El 6 de julio, un mes después de anunciadas las medidas económicas, renuncia el Ministro Piazza, siendo reemplazado por un general señalado por su docilidad frente al comando. Dos factores contribuyen al cambio de Ministro: por una parte la resistencia de los militares para proceder a recortes efectivos en el gasto público, en particular en defensa, por otra, la respuesta popular. El PC y el PSR saludan el desplazamiento de Piazza y señalan que se trata de una derrota a la política económica del gobierno. Sin embargo, esta renuncia no se traduce en concesiones sustantivas a la movilización social, por lo que continúan los preparativos para un paro nacional. Finalmente el 14 de julio, una amplia gama de 23 organizaciones sindicales, agrupadas en un Comando Unitario de Lucha (CUL), que incluye a organismos influidos por el PC, la izquierda radical, sectores del velasquismo e independientes, convoca a un paro nacional de 24 horas para el día 19.

Esta convocatoria conjunta rompe una larga resistencia del Partido Comunista a convocar un paro nacional y, a la vez, plasma una acción por la que los radicales habían estado luchando, por lo menos, desde un año atrás. Sin embargo, este frente único izquierdista no es del todo sólido. El PC, por diferencias internas, tal como nos señalan Eduardo

Castillo y Gustavo Espinoza, recién se suma a última hora, luego de que intentara considerar la salida de Piazza como reivindicación suficiente. Asimismo, algunos de los sectores más radicales de la izquierda, principalmente maoístas ortodoxos, se resisten todavía a juntarse con el PC y deciden no apoyar el paro, influyendo más bien para que los sindicatos mineros del centro realicen su propia huelga una semana más tarde. La Nueva Izquierda, por su parte, que persistentemente había presionado por la medida, emite por primera vez un comunicado público conjunto, que firman cinco grupos (Vanguardia Revolucionaria, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Izquierda Revolucionaria-4ta. etapa, Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Voz Rebelde y Movimiento de Acción Proletaria). Allí, denuncian al gobierno como "dictadura pro-imperialista y anti-popular", al "carnaval electoral" que pretende organizar y llama a apoyar al paro y a estar alertas frente a un posible sabotaje del PC.

El comunicado del CUL que firman las organizaciones sociales convocantes (Pease y Filomeno 1979:2667-2668) contiene los siguientes puntos reivindicativos:

1. Por un aumento general de sueldos y salarios de acuerdo con el alza del costo de vida y contra el Programa de Emergencia de Piazza.
2. Por el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad.
3. Por la vigencia de los Pliegos Anuales sin topes ni recortes.
4. Por la plena vigencia de la estabilidad laboral (Derogatoria del D.S. 011-78).
5. Por la reposición de todos los trabajadores despedidos. Libertad de los detenidos y repatriación de los deportados por razón de sus luchas sindicales y sociales.
6. Por la vigencia irrestricta de las libertades democráticas (levantamiento de la Ley de Emergencia, Toque de Queda, libertad del derecho de huelga, de reunión, de prensa, libertad de organización, expresión y movilización. No a la intervención de los organismos representativos de los trabajadores).
7. Solución a la crítica situación que atraviesan los trabajadores del mar.
8. Por la no intervención en las empresas campesinas y la supresión de la deuda agraria.
9. Por la no intervención en las universidades."

La plataforma de lucha expresa el carácter del paro: una medida defensiva. Su propósito era la recuperación del poder adquisitivo del salario, dañado a partir de 1974, así como la restauración de las condiciones de trabajo, garantizadas por el velasquismo. No se va más allá en la defensa de las reformas ni menos de su proyecto político, tampoco se plantea salida política alguna, ni alternativa frente a los proyectos electorales del gobierno. La única mención a la democracia, en el punto sexto, se refiere a las "libertades democráticas", tal cual el movimiento social se había referido a ellas durante todo el gobierno militar, como libertades individuales y sociales que permitían ejercer la actividad sindical. Remarcamos esta particularidad porque en algunas evaluaciones posteriores a los sucesos (Pease 1988:27) se cree encontrar en los reclamos laborales una demanda electoral, lo que hubiera sido, sin duda, rechazado por la dirigencia de la época. Este carácter defensivo y de reivindicación económica, no le quita significado a la medida de lucha, pero sí señala la perspectiva del movimiento, limitado a responder a las agresiones inmediatas de las que venía siendo objeto. Esto, sin embargo, no recorta el ánimo anti-dictatorial del reclamo obrero, que veía en los militares a los culpables de sus padecimientos y prefería su recambio, aunque sin encontrar una vía, más allá del discurso revolucionario de las organizaciones que lo influían, para que esto ocurriera.

El paro es denunciado por el gobierno así como por algunos órganos de derecha como una medida subversiva. El Ministerio del Interior instruye a los diarios "que se abstengan de publicar informaciones que atenten contra la Unidad Nacional o fomenten la subversión" (Pease y Filomeno 1979:2674) y la revista "El Tiempo", en su número previo a la huelga señala: "Mañana es el martes rojo". Los partidos tradicionales, conscientes del masivo respaldo de la medida de lucha se abstienen de comentarios anteriores. Luego de realizado, el APRA califica el paro de "comunista" (Lynch 1980:215). Sin embargo, la medida tiene gran acogida, tanto en Lima, como en las ciudades del interior. Los sectores más importantes que lo acatan, como señala Manuel Valladares (1987) son urbanos y obreros y suman aproximadamente 270,000 trabajadores (Sulmont 1980:204-205). En Lima, en particular, el paro adquiere gran intensidad, multiplicándose las acciones conjuntas de trabajadores y pobladores que en los barrios populares enfrentan a la policía, desarrollando una gran jornada de lucha popular urbana.

El gobierno responde con dos medidas de capital importancia. El día 21 de julio autoriza a las empresas públicas y privadas a despedir a los dirigentes sindicales que hayan participado en el paro. En las siguientes semanas son despedidos aproximadamente 5,000 dirigentes en todo el país (Balbi 1989:113), en lo que constituye el golpe más importante a la movilización social en todo el período de transición. Eduardo Castillo, entonces Secretario General de la CGTP y que no había estado entre los más entusiastas para convocar el paro del 19 de julio, señala: "ningún dirigente preveyó las gravísimas consecuencias que en términos de despidos iba a tener el paro". Asimismo, el día 28 de julio, anuncia que próximamente se convocará a elecciones para una Asamblea Constituyente, a ser instalada al año siguiente, "con la misión exclusiva de elaborar la nueva Constitución, una carta que asegure la continuación del proceso revolucionario; la conciliación de las transformaciones estructurales con las libertades y las garantías democráticas" (Pease y Filomeno 1979:2687). Señala también que la Constitución deberá estar lista en un plazo suficiente para que en 1980 se lleven adelante elecciones generales. Ambos anuncios, de represión y apertura política respectivamente, que se producen como respuesta inmediata al paro, tendrán tales repercusiones que señalarán al 19 de julio como un punto de viraje fundamental en el período. El primero descabeza al movimiento popular impidiéndole volver a tener la fuerza sindical y política desplegada el 19 de julio, el segundo permite al gobierno pasar a la ofensiva, señalando plazos electorales, asegurando a sus interlocutores de centro y derecha y sentando las bases para negociar los detalles de la transferencia. El paro nacional no logra ninguna de sus reivindicaciones explícitas, pero termina de convencer a las Fuerzas Armadas de la necesidad de regresar a sus cuarteles, por lo menos, para que su grado de aislamiento no alcance un deterioro irreversible.

Luego del paro del 19 de julio la movilización social se ve seriamente limitada por los despidos producidos y la aparición de una "escena electoral" ante el anuncio hecho por el gobierno. Al mismo tiempo las pugnas entre los partidos de izquierda, particularmente entre el PC y la izquierda radical, sobre cómo enfrentar el problema de los despidos, se hacen más agudas. Algunos sindicatos influidos por sectores radicales intentan llevar adelante un nuevo paro nacional el día 20 de setiembre, pero este fracasa porque no cuenta con el apoyo de la CGTP. Estas

pugnas, entre el PC y la izquierda radical, continuarían llevando en enero a un nuevo paro frustrado y recién en febrero de 1978 a un paro nacional efectivo que tiene poco apoyo y tampoco consigue sus objetivos. La movilización social, sin embargo, reflejando espontaneidad de los actores y la gran heterogeneidad de la estructura social, tiene dinámicas diversas. Entre julio y febrero se dan paros y movilizaciones importantes, entre los que destacan los llevados adelante por el Frente Regional del Cusco (Comité Coordinador de Organizaciones Populares-COCOP) y el Sindicato de trabajadores siderúrgicos de la empresa estatal Sider-Perú, en Chimbote, ambos enarbolando reivindicaciones económicas y regionales y teniendo su movilización gran impacto regional (ver parte III). La diversidad que presenta este cuadro da lugar por ello a distintas interpretaciones. El PC, que deseaba influir la salida electoral manteniendo la mayor cantidad posible de reformas y no quería perder su calidad de interlocutor con el gobierno, intentaba un acercamiento cauteloso a la situación y no favorecía medidas extremas, en particular, cuando se intentaba poner al frente a la CGTP. La izquierda radical, que consideraba la convocatoria del gobierno "una farsa electoral", porque, como señala nuestro entrevistado, Manuel Dammert: "Nadie (en esa tendencia) apostaba a las elecciones, incluso después de que estas hubieron ocurrido", urgía medidas de confrontación que llevaran "a un desenlace popular de la situación revolucionaria". Esta rivalidad se juntaba con las debilidades del propio movimiento y la nueva situación electoral para disminuir las posibilidades de la lucha social.

Ambas tendencias, sin embargo, se movían en un escenario de perdedores. Habían tenido fuerza para producir una unidad eventual, en el paro del 19 de julio, logrando efectos políticos aunque no sus reivindicaciones gremiales. Pero no habían sido capaces de responder al contra-ataque del gobierno, tanto a nivel sindical, en el despido de la dirigencia, como a nivel político, en la convocatoria electoral, ya que estaban más preocupados de cuidar las reformas, el PC, o de "hacer la revolución", los radicales. Su triunfo, al lograr el paro, lo usufructúan otros y su insistencia en privilegiar la movilización social, hasta en el momento electoral mismo como veremos más adelante, los saca de juego. En ningún caso, ni el PC, ni la izquierda radical, pero sobre todo esta última, toman verdadera conciencia de la situación de la movilización

social, gravemente debilitada por el Estado de Emergencia, ni tampoco del carácter defensivo del paro del 19 de julio y del posterior descabezamiento de la dirigencia. La magnitud inédita del paro no deja ver sus limitaciones y hace creer a la izquierda que contaba con una capacidad de movilización ofensiva que podría eventualmente arrinconar a los militares u obligarlos a retirarse en desorden. Este supuesto escenario de ofensiva popular y defensiva del gobierno es el que alimentaba las ilusiones de restauración velasquista para el PC y situación revolucionaria para los radicales. Pero tal ofensiva no existía y el escenario de la lucha social había sido reemplazado por las elecciones.

Podemos decir entonces que la definición del retiro militar sería el punto de partida para la construcción de nuevas alianzas que no incluirían a los partidos de izquierda, no solo por preferencia militar y/o derechista sino también por decisión propia. La movilización social contra la dictadura se quedaría así sin representantes políticos en el nuevo pacto democrático.

B. LA CONVOCATORIA ELECTORAL

El anuncio de elecciones para una Asamblea Constituyente, así como de plazos para la misma, significaba el primer paso inequívoco de transición. Quienes estaban más interesados en la transición democrática: los partidos tradicionales, pero que se habían negado hasta ahora a negociaciones específicas, las llevarán adelante. El PPC y el APRA aceptan la convocatoria, AP, por el contrario la rechaza. En la izquierda se producen también divisiones, el PC la acoge, siempre y cuando incluya las reformas, el PSR pide primero libertades democráticas y la izquierda radical sencillamente la denuncia como un engaño.

Al anuncio de elecciones siguen entre agosto y noviembre un conjunto de medidas que buscan efectivizar la convocatoria y dar curso al escenario electoral. A fines de agosto se produce el cese del Estado de Emergencia, impuesto trece meses antes, en julio de 1976. En setiembre se da la autorización para la reapertura de las revistas de izquierda

clausuradas, también con motivo del Estado de Emergencia, siempre y cuando acepten la censura previa. En octubre se publica el decreto-ley que oficialmente convoca a las elecciones para el cuatro de junio de 1978. En noviembre el decreto-ley de elecciones que da el derecho al voto a los peruanos alfabetos, mayores de 18 años y permite la participación tanto de los partidos políticos como de las organizaciones gremiales en las mismas. Asimismo, se termina con la censura previa de las publicaciones independientes, que había estado en efecto desde diciembre de 1976, luego de la clausura con motivo del Estado de Emergencia. Queda en vigencia también, como instancia máxima para supervigilar el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones que actuó en los últimos comicios habidos en el país antes de 1968. Por último, y como corolario de todas estas medidas, se disuelve oficialmente el SINAMOS, muy venido a menos desde la caída de Velasco, pero que persistía como recuerdo de lo que habían sido las políticas de "movilización social" del velasquismo y su proyecto de "democracia social de participación plena".

La definición de este conjunto de reglas de juego va a derrotar, en primera instancia a quienes dentro del propio régimen militar no estaban de acuerdo con elecciones para una Asamblea Constituyente, ni con entregar el poder en 1980. Estos sectores, que estaban encabezados por el General Luis Cisneros, proponían una "tercera fase" de "gobierno civil-militar", donde una comisión de expertos elaborara una nueva Constitución y esta se sometiera posteriormente a referéndum. La preocupación por la persistencia de la movilización social parece ser el elemento central que animaba a esta tendencia. Así nos dice el propio Cisneros:

"Yo me opongo a la transferencia y me opongo por razones totalmente políticas. Consideraba que era indispensable una tercera fase pero de un gobierno civil-militar. Un gobierno militar con participación de los civiles en todos los sectores productivos para ir abriendo las compuertas de la democracia y poder entregar un país canalizado ya. Mi tesis era que si nosotros entregábamos el poder se iba a abrir la puerta a borbotones y después de doce años el agua iba a salir a raudales y no hemos hecho nada. En doce años de orden impuesto íbamos a dejar un desbarajuste político y un desbarajuste económico".

Señala asimismo que se forma tal comisión y se elabora un proyecto de Constitución, manteniéndose durante algún tiempo esa como una de las alternativas posibles. Sin embargo, el General Morales Bermúdez, que, según Cisneros, "ahí aprendió política", finalmente desecha su propuesta. El debilitamiento de la posición del Ministro del Interior estaría dada, además, por el retiro, por antigüedad, de la jefatura del Ejército y de su puesto de Primer Ministro, del General Guillermo Arbulú, estrecho aliado de Cisneros desde los momentos de la conspiración para cambiar a Velasco. Su reemplazo por el General Oscar Molina, oficial ligado en un momento al velasquismo, inclinaría la balanza hacia la salida electoral y la persistencia de la retórica reformista. Parece ser, incluso, que llega a haber un conato de golpe en apoyo a la propuesta de Cisneros, cuando un grupo de generales de las diferentes instituciones armadas, entre fines de 1977 y principios de 1978, contempla la posibilidad de llevar adelante un golpe, con el liderazgo de Cisneros, acción que este último rechaza encabezar.

Pero la definición de reglas de juego significará también un importante debate entre los partidos políticos. Por una parte están los que rechazan las elecciones, aunque por razones opuestas. Acción Popular, que plantea el regreso simple y llano al viejo orden, combina el deseo revanchista del partido desplazado por el golpe militar de 1968 con el afán restaurador de los conservadores, pero también incluye, de esta forma, un astuto cálculo político al buscar concentrar todo el sentimiento anti-dictatorial del pueblo. De allí, su rechazo total a los calendarios militares y su pedido de elecciones inmediatas. La izquierda radical, que globalmente rechaza la convocatoria, persistiendo en impulsar la movilización social y nuevos paros sectoriales y nacionales. Pero sus motivos son "revolucionarios", es decir no cree en la salida electoral como solución democrática y proclama vivir un período de preparación para el asalto al poder. No entra, por ello, en el debate propiamente electoral y se limita a denunciar las elecciones como una "maniobra" que pretende distraer a las masas de sus "objetivos históricos". Sin embargo, a la hora de decidir su participación electoral opta por caminos distintos. Patria Roja, grupo maoísta ortodoxo, decide por la no participación. En el número 23 (1978) de su periódico "Patria Roja" señala: "Las masas rechazan el circo electoral". Asimismo los sindicatos mineros del centro, en comunicado de diciembre de 1977, reproducen el lema de un último congreso para

manifestar su rechazo: "Contra la Constituyente y las elecciones contribuir a forjar la alianza obrero-campesina en el camino del campo a la ciudad para instaurar la dictadura democrático-popular". En cambio, la denominada Nueva Izquierda, se agrupa en la Unidad Democrático Popular (UDP) y decide su participación para "usar la tribuna electoral" en función de sus objetivos revolucionarios. Asimismo, un grupo de asesores y líderes sindicales, junto con tres partidos troskistas, forman el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), que decide participar con la misma perspectiva utilitaria.

Por otra parte, los que aceptan el juego electoral y por lo tanto pasan a discutir sus reglas. Aquí el debate se da en torno a tres puntos: el voto de los analfabetos, la necesaria inclusión de las reformas en la futura Constitución y la representación de las organizaciones sociales en la Asamblea Constituyente.

Sobre el voto de los analfabetos, cuya cifra se elevaba al 17% de la población en 1981 (Consejo Nacional de Población 1984:99), los militares optan por el criterio que había seguido la legislación electoral anterior a 1968, negándoles esa posibilidad. Pease (1981:264) calcula que dos millones de personas no tuvieron derecho al voto por esa razón. Quizás aquí haya jugado el temor a las tendencias izquierdistas que pudiera mostrar el campesinado, donde se encontraba la mayoría de la población iletrada, a consecuencia del proselitismo desarrollado durante la Reforma Agraria. Tanto el PC como el PSR en sus pronunciamientos sobre las elecciones, así como la Iglesia Católica, hacen defensa expresa del voto analfabeto, mientras que los partidos de derecha, AP y el PPC evitan pronunciarse y luego de alguna presión, el APRA, recién en diciembre de 1977, se suma al pedido del mismo derecho. El gobierno no cambia su punto de vista, según el General Morales Bermúdez porque un cambio de esa trascendencia debería dejarse a la Asamblea Constituyente. El caso es que con su decisión restringe el electorado en una forma que favorece a los partidos tradicionales y niega un derecho fundamental a la población rural que había sido objetivo privilegiado de las reformas.

El tema de la inclusión de las reformas en la Constitución tenía que ver más con la retórica del discurso militar, que buscaba una continuidad simbólica entre los dos períodos de gobierno castrense, que con lo que

sucedía en la realidad. Luego de dos años de contrarreforma y de la búsqueda de nuevos interlocutores sociales y políticos en las clases dominantes, el tema aparecía más como una forma de justificar su permanencia en el poder desde 1968 y su futura influencia en los asuntos estatales, que como una preocupación por las reformas mismas. Lo primero, sin embargo, no era poca cosa para las Fuerzas Armadas por lo que la polémica que se despierta es enconada. En un primer momento, el gobierno la considera en todos sus discursos oficiales, en particular, en el primer anuncio de las elecciones, en julio de 1977, como en el decreto-ley de convocatoria oficial, en octubre del mismo año. El asunto es particularmente resaltado por el PC, que también lo menciona en todos sus comentarios electorales, e incluso, le pide al gobierno que sea más explícito, para que los demás participantes en la contienda no puedan evadirse de tomarlo en consideración. La derecha, sin embargo, reacciona airada, señalando que tal requerimiento lesionaría la soberanía del organismo elegido y hace cuestión de estado al respecto. En el extremo esta posición lleva al ya señalado retiro de AP. El PPC, en cambio, manteniendo una posición similar, continúa buscando el camino del acuerdo con los militares. El APRA, a diferencia de los otros dos partidos tradicionales, ya había manifestado desde un principio su voluntad de considerar las reformas, posición que junto con sus coincidencias en cuanto a calendario electoral, la llevan, cada vez más, a ser interlocutor privilegiado del gobierno. Tal intensidad alcanza, sin embargo, el debate, que hacia fines de 1977, el General Morales Bermúdez señala:

"Suponga usted que la Constituyente no reafirma las reformas estructurales. ¿Qué dice el decreto-ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente? Dice que se convoca a la Asamblea y en uno de los considerandos dice para que incorpore las reformas. Entonces, el Gobierno de facto, que es este Gobierno, anula pues la Asamblea y se acabó la historia. Entonces, esto tiene que ser reforma o no reforma. Tiene que ser. Porque si no hay reforma se anula el proceso y sigue pues el Gobierno Militar, conmigo o con otra persona. Esa es la verdad." (Pease y Filomeno 1979:2879).

Días más tarde la Junta Revolucionaria se solidariza con estas declaraciones presidenciales. Pero la reacción de los partidos tradicionales es tajante, lo que lleva al gobierno a no insistir para no poner en peligro el

conjunto del proceso. Conforme avanzan los meses y surgen otras dificultades, principalmente en torno al conato de golpe señalado, el retiro de AP, los problemas económicos y la reacción del movimiento social, la prioridad para los militares pasa a ser efectuar las elecciones a como de lugar, manteniendo la letra del requerimiento reformista pero olvidándolo en la práctica.

En cuanto a la representación de las organizaciones sociales en la Asamblea Constituyente, este era un remanente del proyecto velasquista de "democracia social de participación plena" que señalaba la necesidad de la representación política directa de las organizaciones sociales en el Estado. Su inclusión en la convocatoria electoral estaba en línea con el tema anterior y formaba parte de la intención del gobierno de mostrar una continuidad en la labor de los militares. Sin embargo, poco tenía que hacer en las condiciones de contrarreforma y salida electoral del gobierno de Morales Bermúdez, más aún cuando organizaciones como la CNA y CONACI, que habían nacido al amparo estatal, pero alcanzado vida y arraigo propios, mostraban sus distancias con el gobierno. Era el elemento más débil de la retórica reformista presente en los decretos electorales y no fue tanto la oposición de los partidos tradicionales, como el propio gobierno que en la práctica dejó de lado esa provisión. Parece ser, según versión del General Cisneros, que la inclusión de las organizaciones sociales había sido iniciativa del General Molina y constituiría a la postre una víctima más de la rivalidad entre las tendencias que representaban ambos oficiales. La prueba vino cuando la CNA pretendió inscribirse para participar en el proceso electoral. Primero, una campaña de descrédito y denuncia promovida por el propio gobierno, en particular por el Ministro Cisneros. Luego, la negativa del Jurado Nacional de Elecciones a inscribir a tal organización. Por último, por su solidaridad con los paros nacionales, sería ilegalizada en mayo de 1978, a pocas semanas de las elecciones.

La discusión de las reglas de juego y las posiciones que finalmente se adoptan nos van a mostrar distintas concepciones de democracia e irán perfilando el carácter que va tomando la salida electoral.

La izquierda, que tenía su principal campo de acción en el movimiento social, combina varios elementos en su actitud. Primero, una profunda

carga ideológica marxista-leninista que la llevaba a despreciar las elecciones, a subrayar su carácter clasista "burgués", en algunos casos a considerarlas una trampa de los militares y en última instancia a tomarlas como un medio para conseguir futuros objetivos revolucionarios. Luego, como señalan Franco (1986:309-318) y Pease (1988:29-30), su memoria o conocimiento negativo de lo que había sido la experiencia de la democracia oligárquica. Por ello, su referencia a democracia, como hemos visto en la plataforma del paro nacional del 19 de julio, era a las "libertades democráticas" necesarias para que las organizaciones sociales ejercieran su actividad. La preocupación democrática cotidiana de la izquierda, tal como señalan, tanto Cotler (1988:168) como Nieto (1983:79-84), estaba centrada en la demanda de derechos sociales, la actitud positiva o negativa de los distintos actores frente a esta demanda los hacía "democráticos" o "anti-democráticos". Esta actitud llevaba a privilegiar los espacios donde se desarrollaban las demandas sociales, tales como el sindicato, la organización campesina o barrial, o el frente regional y considerar ajenas al pueblo las instancias de representación que se ofrecían con la salida electoral. Estos espacios "sociales" eran donde, para la izquierda, surgía la verdadera democracia, que debería tomar la forma de una democracia directa.

Con matices, por la distinta actitud frente a los gobiernos militares, esta idea de "democracia social" atravesaba tanto a la izquierda radical como al PC. En la primera, era la insistencia en la autonomía de las organizaciones sociales para desarrollar su demanda y movilización, en el segundo, a esta autonomía había que agregar los derechos que garantizaban las reformas velasquistas para que el movimiento tuviera perspectiva. Para Nieto (1983:82-83) similar motivación estaría también tras el proyecto de "democracia social de participación plena", a pesar de sus rasgos corporativos y controlistas, razón por la cual habría atraído al PC y a algunos otros sectores de izquierda. Un ejemplo interesante de cómo se plasma esta concepción izquierdista en el período es la cantidad de dirigentes populares, principalmente sindicales, que se convierten en candidatos a la Asamblea Constituyente. Eduardo Castillo declara: "Con el paro del 19 de julio muchos líderes llegamos a la Constituyente". Los diferentes partidos de izquierda, con distinta intensidad, compartían la idea de que la lucha social tenía su continuación natural en la lucha política y que los líderes de una podían fácilmente ser líderes en la otra.

Esta concepción "societal" de la política los llevaría a jugar en el terreno equivocado, permitiendo que otros se aprovechen de sus triunfos y dándoles escasa capacidad de representación en un momento en que tenían importante arraigo social.

En la derecha el afán era restaurador. Tanto el PPC como AP querían el retorno a 1968, incluso plantearon que se llamara a elecciones con la Constitución anterior, la de 1933. Cotler (1988:168) señala que "entendían la democracia como un orden que aseguraba intereses y privilegios", yo agregaría como un viejo orden que aseguraba intereses y privilegios, donde la garantía de derechos para unos implicaba la exclusión de derechos para otros. Este viejo orden tenía una traducción democrático-representativa, de características restringidas, que llamamos "democracia oligárquica" al iniciar esta segunda parte. La salida de Velasco y la contrarreforma llevada adelante por Morales Bermúdez habían significado la derrota del proyecto de "democracia social de participación plena". La contrarreforma, en particular, había cumplido el papel de reprimir la movilización y restringir los derechos sociales, especialmente laborales, a la par que garantizaba nuevamente el derecho de propiedad al empresariado, especialmente industrial, al afectar, entre otros, la estabilidad en el empleo y modificar la comunidad laboral. Esta represión creó nuevas condiciones sociales que favorecían a la derecha y la impresión en la opinión pública de que se estaba saliendo de una crisis causada por las reformas y el camino era regresar al sistema electoral de partidos. El cronograma de transferencia no pudo ser totalmente pactado porque la exigencia de un retiro inmediato de los militares atentaba contra la estabilidad institucional de las Fuerzas Armadas y ese fue quizás el desacuerdo mayor. Sin embargo, los demás asuntos contenciosos, fueron todos resueltos a favor de los sectores conservadores. No se dió el voto a los analfabetos, no se facilitó la representación de las organizaciones sociales en la Asamblea Constituyente, ni se insistió en la incorporación del conjunto de las reformas en el texto constitucional. La salida electoral resultaba así favoreciendo a la derecha, tanto por la coyuntura en que se daba, donde el gobierno prefería como interlocutores a los partidos tradicionales, como por las reglas de juego, que sin ser excluyentes, privilegiaban a unos y subordinaban a otros.

En este aspecto, quizás si el APRA sea un caso especial. Desde los primeros años del velasquismo mostró su acuerdo con la necesidad de cambios y cuando se empezó a hablar de "institucionalización de las reformas", señaló sus antiguas críticas a la democracia oligárquica y manifestó la necesidad de un nuevo régimen político (Lynch 1980). Fue el primer partido en tener contacto con Morales Bermúdez y buscó coincidir con el cronograma electoral propuesto por los militares. A su vez, estos lo consideraban el mejor heredero, dado su pasado reformista y su disponibilidad a servir de puente hacia un nuevo orden constitucional. Es difícil saber que tan cercanos fueron los contactos entre el APRA y los militares, tanto Morales Bermúdez como Cisneros, niegan que hubiera un tratamiento especial, pero la cercanía de sus posiciones permite observar un entendimiento fluido. De igual forma, su concepción de la democracia había juntado siempre elementos liberales con aspectos corporativos, e incluido un rol significativo del Estado (Haya 1970), cuestiones estas que se emparentaban con la retórica reformista y no dejaban de agrandar a los militares. Al mismo tiempo su calidad de "partido tradicional" por formar parte del juego político oligárquico entre 1956 y 1968, lo convertía también en posible "socio" de los partidos de derecha en un pacto con los militares, con lo que su importancia se acrecentaba. Estas múltiples características le darían apreciables ventajas en el período de transición.

Tal como señala Nieto (1983:52) luego de la convocatoria a elecciones se dejaría de hablar de "transferencia del poder al pueblo organizado" para pasar a referirse, en el discurso militar, a la "transferencia del poder a la civilidad". Este cambio va a expresar el nuevo destinatario político que define el gobierno de Morales Bermúdez, ya no será el "pueblo organizado" del proyecto velasquista, donde se reivindicaba, al menos en el discurso, a los sectores excluidos por el orden oligárquico, pero dejando de lado a los partidos tradicionales, sino "la civilidad" que debiera aludir a todos los peruanos no militares. Sacando ambas referencias de contexto podemos concluir que una es excluyente y la otra inclusiva, hasta pluralista, en un sentido liberal (Cotler 1986,1988), donde todos estarían llamados a formar una nueva comunidad política. Sin embargo, el término "civiles" es usado por los dirigentes de los partidos tradicionales para referirse a si mismos, como los únicos que habían estado permitidos de hacer política en el Perú anterior a 1968. Por

lo tanto, "transferir el poder a la civilidad" no tiene necesariamente un contenido pluralista, sino más bien ambiguo y con cierta carga restauradora, lo que se puede observar en las nuevas preferencias que desarrolla el gobierno militar.

C. ¿ACTO ELECTORAL O ACTO DE MASAS?

Fijar las reglas de juego no termina, sin embargo, con los problemas. Entre marzo y junio de 1978 la transición tendrá que enfrentar todavía varios desafíos. La crisis económica, que los militares se niegan a encarar en forma tajante, sigue vigente. La movilización social, a pesar de su dispersión, continúa como una amenaza. El temor a las masas alimenta una crisis en las alturas, que enfrenta distintas posiciones en las Fuerzas Armadas respecto de la salida política. Por último, el retiro de Acción Popular agrega desconfianza frente al proceso electoral.

En marzo, Fernando Belaúnde, líder de AP, envía una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, eludiendo al Presidente Morales Bermúdez y su gabinete ministerial, en la que pide garantías de no intervención castrense en el proceso electoral. La descortesía raya en provocación y al no obtener respuesta oficial su partido anuncia el retiro de la contienda días más tarde. A estos hechos, que por la importancia de AP, quitaban legitimidad a la salida electoral, se suman las discrepancias entre los militares. El Ministro del Interior, General Cisneros, venía aconsejando una mano más dura para con la movilización social, así como la abstención del diálogo y las concesiones; el Presidente Morales Bermúdez, trataba en cambio, de recibir selectivamente a los dirigentes sindicales y prometerles la solución de algunas demandas. El conflicto se hace particularmente agudo respecto de los despedidos por el paro del 19 de julio, llevando, a mediados del mismo marzo, a la reposición de 78 trabajadores que se encontraban en huelga de hambre. En esta coyuntura Cisneros dirá que existen "posiciones discrepantes que pueden parecer insalvables" (Pease y Filomeno 1980:2997) reconociendo la gravedad de la contradicción y algunos días más tarde señala que de persistir el clima de agitación el proceso electoral tendría que ser postergado. A su criterio, según nos dirá, Morales Bermúdez quería aparecer a veces "más como presidente democrático que como presidente

de facto", mientras que él se consideraba "un ministro de facto que preconizaba soluciones de facto".

Las posiciones del Ministro del Interior tienen eco en la revista derechista *El Tiempo*, que titula: "La Constituyente oculta la crisis y empuja al caos" y en la Sociedad Nacional de Industrias, que plantea un "Gobierno cívico-militar", mientras que la prensa izquierdista hace campaña por la renuncia de dicho ministro. El malestar se deja sentir en las Fuerzas Armadas y hay nuevamente rumores de que un grupo de oficiales habría pedido apoyo a la embajada de los Estados Unidos para un golpe de estado, sin resultados, por la política del entonces presidente Carter. Finalmente aparece, a fines de marzo, en una forma considerada inusual, un comunicado de los Comandantes Generales de cada arma, advirtiendo sobre las "actitudes desestabilizadoras" de la prensa independiente, que atentan contra "el proceso de transferencia política" (Pease y Filomeno 1980:3008). Sin embargo, parece que luego de haber sido desechada la alternativa del General Cisneros sobre una "tercera fase", a fines de 1977, sus apoyos militares eran escasos y su suerte ya estaba decidida, concretando su renuncia a principios de mayo y su envío como agregado militar a Francia.

La crisis económica, por otra parte, no cesaba de agravarse, debido sobre todo a la recurrente falta de disciplina en el gasto público. A este problema se agregaba la desconfianza de los organismos internacionales de crédito, el FMI en particular, en quienes manejaban la economía peruana, por su escasa competencia, según parece, en presentar siquiera cifras creíbles. Esto lleva al gobierno a preparar un nuevo "paquete" de medidas económicas, que reordene más drásticamente aún las finanzas públicas, recorte los subsidios a los productos de primera necesidad, restringiendo el consumo masivo y permita el acceso definitivo y sin cortapisas al crédito internacional. La misma tónica en política económica que se venía aplicando desde junio de 1975, solo que con mayor drasticidad. Al mismo tiempo, las medidas van acompañadas esta vez de un equipo económico civil que, por su trayectoria, es afín a los gremios empresariales y los partidos tradicionales, así como pasible de la confianza del FMI.

Las medidas económicas, sin embargo, logran lo que no había podido la izquierda marxista en los meses anteriores: un formidable paro

nacional de 48 horas, el 22 y 23 de mayo de 1978, que según Sulmont (1980:204-205) logra la participación de cuatro veces más trabajadores que el 19 de julio de 1977, o sea, alrededor de un millón de personas. Siguiendo el patrón del 19 de julio es precedido por movilizaciones regionales, aunque en este caso la extensión de las mismas es mayor y su coordinación más eficiente. Asimismo, la convocatoria es firmada por múltiples organismos sindicales, aunque destaca, con más nitidez que la vez anterior, la iniciativa de la CGTP, quizás por la oposición más clara del PC al gobierno, luego de las casi nulas reivindicaciones conseguidas. La plataforma de lucha reitera las demandas económicas y por libertades democráticas, similares a las del paro del año anterior, agregando un punto "contra el golpe fascista", que revela hasta donde se presentía la posibilidad de una solución más autoritaria, a pesar del retiro de Cisneros. El gobierno responde declarando el Estado de Emergencia Nacional, suspendiendo las garantías individuales, clausurando las revistas independientes, cerrando los espacios en radio y televisión asignados a la campaña de los partidos, postergando dos semanas la fecha de las elecciones y ordenando la deportación de 16 dirigentes sindicales y políticos de izquierda y un periodista de derecha, el director de *El Tiempo*. Entre los izquierdistas, habían 13 candidatos a la Asamblea Constituyente, uno de los cuales, general del Ejército en retiro, es detenido, algunas semanas más tarde, en el acto mismo de votación. Por último, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada advierte que el cumplimiento del calendario electoral está ligado a la mantención de la "paz social" y en esta tónica solo se conceden permisos para mítines finales al APRA, el PPC y el PC. Este conjunto, con la excepción de AP, excluido por decisión propia, es el mismo con que los militares inician conversaciones en mayo de 1977.

El paro y la respuesta gubernamental ponen las cosas nuevamente al rojo vivo, despertando en algunos sectores de izquierda la ilusión de que esta acción de masas podía derrotar la salida electoral en curso. El Partido Comunista Revolucionario (PCR) llega a levantar la consigna: ¡Paro Nacional: voto popular! y es seguido en este intento de boicot de última hora por el Partido Socialista Revolucionario. Incluso sectores del Partido Aprista, según relata Rafael Roncagliolo, consideran la posibilidad del retiro por el clima represivo existente. Pero la iniciativa no prende y es desechada. Diez días antes de las elecciones el gobierno

restaura la mayor parte de las libertades conculcadas y cuatro días antes permite la reaparición de las revistas ligadas a la derecha, el APRA y el Partido Comunista, finalmente el 18 de junio se lleva adelante el acto electoral.

El paro del 22 y 23 de mayo de 1978, al igual que el del 19 de julio de 1977, constituye principalmente una reacción espontánea frente a un "paquete" de medidas económicas de los militares. Su carácter, por ello, es también gremial y defensivo. Pero debido a la magnitud de las medidas y la experiencia de la izquierda en los meses anteriores mantiene una amplia coalición sindical y congrega una cantidad mayor de participantes. Sin embargo, no tiene el efecto político del anterior porque la situación del país es diferente. En julio de 1977 la salida política no estaba decidida, en mayo de 1978, el proceso ya estaba en curso, los militares opuestos a las elecciones estaban derrotados y el gobierno tenía interlocutores partidarios en el APRA y el PPC, y ocasionalmente en el PC. Por ello, el paro de mayo de 1978 difícilmente podía anular las elecciones del 18 de junio o restarles legitimidad. A pesar de la represión que acompaña a la salida electoral no había en ese momento ninguna otra alternativa política que permitiera el retorno de los militares a sus cuarteles y diera curso a la situación. Mal podía pues pretender reemplazarse el "acto electoral" de junio con el "acto de masas" de mayo. No solo no eran equivalentes, sino que el paro de mayo carecía del efecto político que sus dimensiones podían hacer suponer.

Las cifras electorales indican una población en capacidad de votar que llegaba al 30% de la población nacional, cerca de cinco millones de electores potenciales, de los cuales acudieron a votar aproximadamente el 85%, lo que dice, a pesar de la obligatoriedad del voto, del interés despertado por las elecciones. El triunfo fue de los partidos que se perfilaron como los mejores interlocutores del gobierno: el APRA, con el 36% de los votos y el PPC con el 24%. La izquierda viene luego, dividida en cuatro listas, como reflejo de la escasa importancia concedida a las elecciones. El FOCEP, con el 12%, el PSR, con el 7%, el PC, con el 6% y la UDP con el 4.5% (Roncagliolo 1980:59).

El voto mayoritario por dos partidos tradicionales, que a pesar de sus diferencias, representaba el Perú anterior a 1968, es decir, a las reformas

militares, expresaba el sentimiento anti-dictatorial del electorado manifestado en forma conservadora. Era una reacción anti-militar que se había venido incubando desde la época del velasquismo en diferentes sectores sociales y por distintas razones. En las clases altas y los partidos de derecha es una reacción contra las reformas y la pérdida de poder social y político que traían consigo, en las clases populares y los partidos de izquierda, una reacción contra los intentos de control militar de la organización social. Durante el gobierno de Morales Bermúdez, si bien la derecha recupera espacio, este sentimiento se generaliza, en particular con la aplicación del Estado de Emergencia y las ambigüedades frente a la transición. Este sentimiento es el que los partidos tradicionales saben representar mejor, incluso en el caso de AP que lo lleva al extremo retirándose.

Esta mayor capacidad de representación política, que tiene como antecedente su experiencia anterior en ajetreos similares, se manifiesta en varios sentidos. Primero, en su interés electoral, porque sentían como "clase política" que este era el régimen en el que se podían desenvolver mejor y llevar adelante su agenda, como dice el General Cisneros: "los políticos sienten que regresa el *modus vivendi*". Segundo, en su disponibilidad para entrar en relación con los militares y llegar eventualmente a un pacto, es decir, en su pragmatismo. Y, tercero, en su habilidad para captar el humor de la población que deseaba una salida política, pero no parecía dispuesta, mayoritariamente, a vivir una crisis revolucionaria. Asimismo, el primer lugar del APRA indica el mayor arraigo histórico de este partido, la ausencia de Acción Popular y cierto éxito en el manejo de su relación con los militares. Este último aspecto lo perfila como la carta continuista, capaz de unir con éxito la experiencia de sus dirigentes con su voluntad de pacto, mostrando a la par antiguas credenciales reformistas. El PPC capta el voto más claramente restaurador y se beneficia, sobre todo, de la abstención de Acción Popular.

En el caso de la izquierda, a pesar de su fragmentación, el alcanzar el 30% de la votación, la convierte en una fuerza electoral. Es difícil hacer comparaciones con resultados obtenidos por listas izquierdistas en comicios anteriores a 1968, por la marginación de que estas eran objeto. Sin embargo, el alto porcentaje alcanzado expresaba su influencia en el movimiento social y su inicial desarrollo político, a la vez que significaba

un cambio mayor en la composición de la representación nacional. Pero la fragmentación continuará siendo su característica distintiva, no permitiéndole hacer efectivo su peso electoral. Esta fragmentación tendrá como origen su desprecio por las elecciones que la llevarán en el período de la Asamblea Constituyente a usar la tribuna parlamentaria, mayormente, para hacer denuncias relativas a la lucha social. Dentro de la izquierda el porcentaje alcanzado por el FOCEP expresaba la preferencia del electorado por los caudillos radicales como Hugo Blanco y Genaro Ledesma, que habían enfrentado repetidamente en las dos décadas anteriores, no solo a los militares sino a todo el orden establecido. De igual manera, la votación obtenida por el PC y el PSR, reflejaba, a pesar de la contrarreforma, las simpatías velasquistas sobrevivientes. Mientras que la menor votación por la Nueva Izquierda, agrupada en la UDP, sancionaba su rigidez leninista y la falta de figuras nacionales.

D. LA INSTALACION DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y EL PACTO POLITICO

Sin embargo, la realización de las elecciones, con el importante significado que tiene al mostrar la voluntad del convocante y los participantes, no asienta definitivamente la salida política. La falta de un acuerdo entre el gobierno y los partidos ganadores de la contienda, APRA y PPC, impedía definir el rol de la Asamblea Constituyente y de esta manera el rumbo político.

Además, la movilización social agudizada por las medidas económicas de mayo, no había cesado. Los maestros agrupados en el SUTEP desarrollan una huelga de casi tres meses, entre mayo y julio, viéndose el gobierno obligado a concederles algunas demandas, por primera vez, desde que el sindicato se fundara en 1972. Los empleados públicos, también se movilizan en contra de recientes dispositivos que señalaban la inminencia de despidos masivos, necesarios para recortar el gasto público. En el curso de esta lucha, entre agosto y principios de setiembre, forman su propia central sindical nacional, el Comité Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), y obligan al gobierno a anular la legislación respectiva. Asimismo, en la que quizás sea la movilización de mayores repercusiones, por su impacto económico, los mineros desarrollan una huelga nacional en el mes de agosto, llegando masivamente a Lima para

presionar por sus demandas. A estas movilizaciones se agregan paralizaciones de bancarios y trabajadores de salud, con lo que la ciudad de Lima, centro hacia el cual convergen todas las luchas se convierte en diario escenario de movilizaciones callejeras. Todas estas luchas van a multiplicar el índice de horas/hombre perdidas, que había caído drásticamente de 6.8 millones en 1976 a 4.6 millones en 1977, con motivo del Estado de Emergencia, para subir a 36 millones en 1978, siendo el más alto en toda la década del setenta (Webb y Fernández Baca 1990:219).

La falta de un pacto político se deja sentir de inmediato desde el momento mismo de la instalación de la Asamblea Constituyente el 28 de julio. Haya de la Torre, líder histórico del APRA, elegido presidente de la Asamblea, declara a esta en el discurso inaugural "el primer poder del Estado" (Lynch 1980: 223) buscando ganar un espacio para la nueva entidad representativa, aunque sin desafiar la capacidad ejecutiva de los militares. Los sectores más radicales de izquierda presentan, por su parte, "la moción roja", que planteaba la necesidad de que la Asamblea asumiera funciones ejecutivas para solucionar las demandas de los sectores populares en lucha, explicitando, a pesar de su radicalismo y remota factibilidad, el problema que interesaba a todos: la división de funciones entre el gobierno militar y la Asamblea Constituyente. Esta situación, de no entendimiento entre gobierno y Asamblea, facilita que esta última se convierta, casi de inmediato, por intermedio de los grupos de izquierda, en caja de resonancia de la movilización popular, poniendo en verdadero peligro durante casi todo el mes de agosto la posibilidad de que pudiera llevar adelante sus propósitos constituyentes.

El debate se centraba entre la bancada izquierdista que exigía pronunciamientos sobre las luchas populares y, el APRA y el PPC, que trataban de llevar adelante la discusión del reglamento interno de la Asamblea. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo final entre estos partidos tradicionales (APRA-PPC) y el gobierno militar sobre el conjunto de la transición, restaba entusiasmo a la mayoría APRA-PPC para resolver la disputa con la izquierda. Pero la urgencia de la coyuntura, que adopta contornos de crisis, llevará a militares y partidos tradicionales, en conversaciones "secretas", según informa el semanario *El Tiempo*, a concretar este acuerdo hacia finales de agosto, lo cual se expresará en la rápida aprobación del reglamento interno de la Asamblea,

limitando esta a su función constituyente y en la promesa militar de llevar adelante elecciones tan pronto como terminen los trabajos de la nueva carta política. Consecuentemente la preocupación por la movilización social quedará subordinada al trabajo constitucional y el mantenimiento del orden público continuará siendo prerrogativa exclusiva de los militares. De inmediato, con la fuerza de este acuerdo, la mayoría retoma un control efectivo de la Asamblea y organiza el trabajo de la misma. La preferencia de la izquierda por continuar siendo portavoz del movimiento social y su negativa a asumir el rol de representante parlamentario, facilitan los objetivos de la mayoría y llevan a los grupos izquierdistas al aislamiento político.

Corolario de este pacto será la violenta ruptura de la huelga minera a principios de setiembre y la desarticulación de las otras luchas sindicales, gozando todas ellas de la indiferencia de la mayoría constituyente. Se había producido así el asentamiento definitivo de la salida política y creado las condiciones para el retiro ordenado de los militares, diferenciándose de allí en adelante la escena política de la lucha social y dando curso a la transición democrática, que ya no soportará el desafío de las demandas de los de abajo.

Habían pasado tres años desde la caída de Velasco, en agosto de 1975, y recién luego de la contrarreforma, de sucesivos "ajustes económicos" y de producidas las elecciones para la Asamblea Constituyente es posible un nuevo pacto político entre los militares y los dos partidos tradicionales que decidieron participar en el proceso electoral. Los primeros debieron dar repetidas muestras, en los planos de la economía y la política, a los segundos, para convencerlos de sus intenciones de retirarse del gobierno. Los partidos de izquierda, por su parte, colaboraron a su propia exclusión, sobrevalorando sus fuerzas y equivocando, gravemente, los terrenos de lucha. El movimiento social, cuya presencia había marcado cada coyuntura, será el gran perdedor en el período, sacando lecciones que tardarían años en reconocerse, pero ninguna reivindicación efectiva y menos una participación política en el corto plazo. Este pacto, de fines de agosto de 1978, permite a los militares empezar a recuperar la legitimidad perdida con las políticas represivas y asegura la salida que habían ido diseñando las Fuerzas Armadas y en particular el General Morales Bermúdez, cerrando por ello el período clave de transición a un nuevo régimen político.

TERCERA PARTE

Movimientos sociales y perspectivas democráticas

En esta tercera parte se presenta el estudio comparativo de tres casos de movimientos regionales y una federación obrera, que fueron ejemplos de la respuesta popular a la crisis del neoliberalismo y la contrarrevolución de Álvaro Fernández, así como de la distancia entre las demandas sociales y la apertura democrática. En los dos primeros casos se trata de los movimientos desarrollados en las ciudades de Chiclayo y Cuzco. El primero es el caso de la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del Perú (FETIMIP). Más allá de la falta de representatividad que tuvo toda selección, se escogieron estos casos por el grado de autonomía, organización y disciplina de que los constituyeron en el período estudiado, así como por que expresaban diferentes posturas sociales y distintas formas de relación con el Estado. En este sentido, se buscó encontrar dos aspectos que caracterizarán lo sustancial: la centralidad propia en la movilización social y la emergencia de los movimientos regionales. En el caso de Lima, la ciudad de mayor concentración urbana del país, se escogió la federación obrera más representativa, con demandas centradas en salarios y condiciones de trabajo y pocas alianzas con los empresarios del sector y el Estado. En el caso de Chiclayo, un puerto en la costa norte del Perú, se trató un movimiento regional de base y liderazgo principalmente obrero, con demandas centradas en salarios, condiciones de trabajo y servicios básicos, pero que se reclamaban a un Estado-patrón, dueño de la mayor parte de la estructura productiva del lugar. Por último, en el caso del Cuzco, una antigua ciudad en la sierra sur andina, se estudió un movimiento que

EN ESTA TERCERA PARTE PRESENTO EL ESTUDIO comparativo de tres casos: dos movimientos regionales y una federación obrera, que fueron ejemplos de la respuesta popular a la crisis del velasquismo y la contrarreforma de Morales Bermúdez, así como de la distancia entre las demandas sociales y la apertura democrática. En los dos primeros casos se trata de los movimientos desarrollados en las ciudades de Chimbote y Cusco. El tercero, es el caso de la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del Perú (FETIMP). Más allá de la dosis de arbitrariedad que tiene toda selección, se escogieron estos casos por el grado de autonomía, organización y beligerancia que los destacaron en el período estudiado, así como porque expresaban diferentes bases sociales y distintas formas de relación con el Estado. En este sentido, se buscaron rescatar dos aspectos que caracterizaron la coyuntura: la centralidad obrera en la movilización social y la insurgencia de los movimientos regionales. En el caso de Lima, la ciudad de mayor concentración obrera del país, se escogió la federación obrera más representativa, con demandas centradas en salarios y condiciones de trabajo y cuyos adversarios eran los empresarios del sector y el Estado. En el caso de Chimbote, un puerto en la costa norte del Perú, se tomó un movimiento regional de base y liderazgo principalmente obreros, con demandas centradas en salarios, condiciones de trabajo y servicios urbanos, pero que se reclamaban a un Estado-patrón, dueño de la mayor parte de la estructura productiva del lugar. Por último, en el caso del Cusco, una antigua ciudad en la sierra sur-andina, se estudió un movimiento que

expresa una coalición de intereses unidos en busca del desarrollo regional. Aquí intervienen clases medias, estudiantes, trabajadores e incluso elementos de la burguesía regional, desarrollando el conjunto una eventual e inestable relación con el campesinado. El blanco de este último movimiento es no sólo el Estado, sino también el centralismo limeño personificado en él.

La metodología fundamental de recogo de datos fue la entrevista abierta, aunque también se utilizaron colecciones de volantes y folletos en los diversos lugares visitados. En cuanto a las posibilidades de revisión de la bibliografía secundaria existente, esta ha sido diversa. Alguna, para los casos de Cusco y metalúrgicos, y casi nula para Chimbote. En cuanto a las entrevistas, se realizaron 25, ocho en Chimbote, diez en el Cusco y siete en metalúrgicos. En el caso del Cusco debo agregar la colaboración con el Antropólogo Elmer Abarca, que me permitió utilizar material de cuatro entrevistas más realizadas por él para un estudio similar. La gran mayoría de los entrevistados fueron líderes, tanto sindicales y/o populares y políticos. Este último quizás sea uno de los sesgos del trabajo, en tanto configura la versión de un estrato específico sobre los hechos y dice de las dificultades de esta metodología para abordar a miembros de base. Sin embargo, este liderazgo intermedio suele tener estrechos lazos con su audiencia y expresa una forma de interpretar sus demandas, mediadas, sin duda, por el discurso ideológico y las necesidades de los grupos partidarios. Además, he tratado que los entrevistados provengan de las tendencias políticas y sectores sindicales representativos en cada uno de los casos, de manera tal que el resultado sea lo más equilibrado posible. El tenor de las entrevistas abordaron, en forma general, los conflictos fundamentales que se produjeron en cada caso, tanto dentro del movimiento social, principalmente sindicato y/o organización popular con los partidos políticos, como entre el movimiento y las autoridades, ya fueran locales, regionales, nacionales y/o empresariales. Asimismo, las demandas que establece cada movimiento con respecto de sus adversarios y las características del espacio social que construye en la lucha por estas demandas.

Metalúrgicos: el clasismo paradigmático

A. LOS OBREROS DE MODA

LOS TRABAJADORES METALÚRGICOS fueron el sector obrero de mayor desarrollo numérico, organizativo y político en el período que va de fines de los años sesenta a mediados de los setenta. Despertaron la atención de los partidos de izquierda, de los gobiernos de aquel período y también de los intelectuales que buscaron entender el fenómeno de liderazgo obrero en el movimiento popular de la época (Agüero 1980) (Bonfiglio y Parodi, 1983) (Parodi 1986) (Nieto 1986) (Balbi 1989). Se condensaron en este sector el afán de un proletariado joven, asentado básicamente en Lima, por desarrollarse sindical y políticamente, con las influencias de la izquierda marxista y las nuevas condiciones que ofrecían las reformas desarrolladas por los militares.

No se trata, sin embargo, de obreros metalúrgicos, que trabajen la transformación del mineral metálico, sino de obreros metal-mecánicos, que trabajan de diversas formas el metal mismo. Confusiones propias de su origen, ligado al artesanado, los lleva a tener esa denominación equívoca. Pero allí no terminan las proyecciones de su heterogeneidad. Este "sector metalúrgico" agrupa actividades que van desde la fabricación de carros, autopartes, aparatos eléctricos, astilleros, artículos metálicos en general y talleres diversos (Bonfiglio 1983), variando los establecimientos en tamaño y tecnología.

El desarrollo del sector metal-mecánico está ligado al conocido modelo de desarrollo industrial, denominado "sustitución de importaciones", que impulsan diversas políticas estatales durante las décadas del sesenta y setenta y podemos decir que correría la suerte del mismo, acompañándolo en su crisis de 1976 para adelante. Es así que el proletariado del sector experimenta un crecimiento muy significativo en comparación con las otras ramas de la industria. Sulmont (1977:133) indica que pasan de 8,800 en 1955 a 32,000 en 1970, lo que los llevaría según las estimaciones del mismo autor a ser aproximadamente una cuarta parte de los obreros fabriles de Lima. Por supuesto que ello no nos debe llevar a sobrestimar su importancia en la fuerza laboral total, ya que los obreros fabriles, más de la mitad de los cuales se concentran en Lima, apenas alcanzan el 5% de la PEA nacional peruana. Por otra parte, sin embargo, Galín *et al.* (1987:41) llaman la atención sobre el alto grado de concentración de la población obrera en el Perú. Es decir, son pocos frente a la PEA total pero gran parte de ellos, un 45% , tiende a concentrarse en las empresas más grandes, lo que redundaría en una mayor capacidad de organización y lucha sindical, en particular en momentos de auge económico.

De igual forma, se trata de un proletariado joven y migrante, con una importante composición andina. Tanto Verdera (1986:68) como Galín *et al.* (1987:50-51) ponen la cifra de migrantes entre la población obrera limeña de la década del setenta alrededor del 70%, porcentaje que, de acuerdo a nuestras entrevistas y el importante peso de los metalúrgicos en dicha población obrera, debe también ser relevante para ellos. La juventud, asimismo es característica saltante en el sector, no sólo a nivel global, sino en especial entre la dirigencia. La presencia de migrantes, particularmente andinos, por el contrario, va a ser importante entre la masa obrera, pero no tan significativa entre los dirigentes, tal como veremos más adelante.

La relación obreros-Estado va también a ser fundamental, en el caso metalúrgico, como en todo el movimiento social en la década del setenta. El Estado señala la reglas de juego del conflicto sindical, por lo tanto de su variación depende, en buena medida, la dinámica del movimiento. En este sentido el gran conflicto es con el Estado, en especial de 1975 en adelante, cuando Morales Bermúdez empieza a desmontar las reformas

de Velasco. En este punto la dirigencia metalúrgica es particularmente sensible, consumiendo buena parte de su actividad gremial en largas discusiones acerca de las características reales de las medidas gubernamentales. Sensibilidad que como veremos luego tiene a la base una profunda desconfianza del Estado y de todo aquello que pudiera venir de él.

Sin embargo, el Estado no es el patrón directamente, a quienes los obreros deben enfrentar en su vida cotidiana es a los empresarios. El Estado, más bien, busca asumir un rol de mediador en el conflicto sindical. Es decir, intenta comportarse como árbitro de los conflictos laborales; según refieren los dirigentes obreros, ya no "los sacan a patadas" del Ministerio de Trabajo como sucedía con frecuencia antes de 1968. Este rol de árbitro, que los empresarios lamentan como parcialidad estatal durante todo el período velasquista, es el que hace que el conflicto obreros-Estado, más allá de la retórica ideológica de los sindicatos, no tome, tan temprano como en 1973, las dimensiones que tuvo en Chimbote.

Sus dimensiones, juventud e importante componente migrante van a crear las condiciones para que el sector metalúrgico se convierta en un polo de atracción de las corrientes políticas izquierdistas que empiezan o desarrollan su trabajo sindical. Sobre esta base se da un particular dinamismo de los trabajadores metalúrgicos, que se va a traducir en una gran capacidad de organización y movilización de su propio gremio, así como de liderazgo de otros sectores sindicales y populares de Lima, en especial en el período que va entre 1969 y 1976. El gremio que los agrupa, la FETIMP, llega a congregarse 115 sindicatos en ese período. De igual forma, entre 1969 y 1976 la FETIMP desarrolla 3 paros de 24 horas, 4 paros de 48 horas y 2 huelgas generales de 14 y 9 días de duración respectivamente, entre los que se incluye un paro de solidaridad con los trabajadores de Chimbote por la represión de 1973 (Bonfiglio 1983, Parodi 1986). También y aunque algo desligado de su ciclo más importante de lucha, se da una participación especialmente intensa en el paro nacional del 19 de julio de 1977. Todo esto tomando únicamente en cuenta a la Federación y no a los sindicatos bases, lo que nos da una idea de la importancia política que va tomando la FETIMP, cuando traduce el enfrentamiento con los empresarios privados, a nivel de cada fábrica,

en una exigencia al gobierno para que mejore las condiciones para conseguir sus demandas.

En este caso, por más que nuestro interés general está centrado en el período 1975-78, tomaremos el conjunto de la dinámica sindical y política del gremio metalúrgico, que va de 1969 a 1978, porque creemos que el período 1969-1976, de crecimiento y auge, explica y forma una sola unidad con el momento de crisis y división entre 1976 y 1978.

Estas características van a hacer del proletariado metalúrgico el sector que mejor encarne el encuentro que se da entre los partidos de la izquierda marxista y los trabajadores en la década del setenta. Asimismo, será en este sector donde ese encuentro perfile de manera más nítida la identidad resultante denominada "clasista" por sus connotaciones de autonomía, en relación a la construcción de su propio espacio sindical e independencia frente al poder de los empresarios y el Estado. El término desata polémicas entre las diferentes tendencias que hacen trabajo sindical, buscando reivindicarlo cada cual para sí, pero en todos los casos significa conciencia de pertenencia a un grupo social que está ganando organización y poder.

B. LA IZQUIERDA QUE LLEGA A LOS SINDICATOS

El motor de la organización sindical metalúrgica son los partidos de la izquierda marxista. Prácticamente no hay dirigente sindical que no tuviera ligazón con los partidos, por más caudillo que fuera en su práctica, siempre se le conocía alguna inclinación. Como dice Enrique Tineo, obrero metalúrgico y militante de la Nueva Izquierda que antes de cumplir su mayoría de edad llegó a ser Secretario General de su sindicato base:

"Se pensaba que los partidos eran primero, eran la prioridad número uno. Los sindicatos más bien debían apoyar a los partidos. Yo me acuerdo que habían compañeros partidarizados que saqueaban la economía del sindicato para darle al partido."

O Rufino Suyón, también obrero metalúrgico y militante del PCR, que llegó a ser Secretario General de su sindicato base y delegado a la asamblea de la FETIMP:

"Un dirigente sindical que era militante se la jugaba por su camiseta digamos. O sea, por la camiseta del partido. Lo que el partido canalizaba iba y se planteaba a los sindicatos."

Aclaran, sin embargo, que la simpatía obrera hacia la presencia política era más por los caudillos partidarizados que por los partidos como tales. Los trabajadores simpatizaban con el dirigente que atendía sus intereses inmediatos y en esa medida con el partido que él representara. En la literatura sobre el tema en la década del ochenta (Bonfiglio y Parodi 1983, Parodi 1986) hay la tendencia a señalar esta preeminencia como uno de los graves problemas del movimiento, denominándola "sustitucionismo", es decir, la sustitución del sindicato por el partido político en las funciones propias de aquel. Sin embargo, las explicaciones se limitan a constatar la sustitución y lamentarla sin buscar entender las formas de hacer política, de la época y del medio sindical.

La primera cuestión a revisar sobre esta presencia partidaria es la ideológica. José Valdivieso, activista del Partido Comunista Revolucionario-"Trinchera Roja" nos dice que:

"Eran partidos de élite y sobreideologizados, eso establece un monopolio y un sistema de dirección. Sin embargo, eso era compatible con una ideología muy obrerista que reconocía la dignidad del trabajador."

Rufino Suyón, nos cuenta al respecto, que él fue capaz de resistir el asedio de la empresa, que lo tenía encerrado en un canchón aislado de sus compañeros durante las ocho horas de trabajo, por la fuerza de la ideología. Cuando se refiere a la ideología alude al planteamiento marxista-leninista de la política, en una versión, para usar sus propios términos "economicista", porque buscaba propiciar la acción política a partir de la lucha sindical, de las demandas inmediatas de los trabajadores, presente en este caso quizás con más vigor que en los otros estudiados. Esa es la concepción que presidirá la acción de estos grupos radicales. El primer elemento es la urgencia de la revolución. Suyón señala:

"Yo le digo que para mí la revolución estaba a la vuelta de la esquina porque nada me importaba más que eso. Así se sentía, nosotros creíamos en eso",

y frente a estas urgencias todo debía subordinarse. En el caso de los dirigentes influenciados por el Partido Comunista la percepción es la misma, aunque su apoyo al gobierno reformista los hacía ver en él algunos elementos de revolución ya en proceso. El segundo, el papel de vanguardia que le tocaba cumplir a la clase obrera, con lo que hacían vivir, según otro dirigente, una borrachera a los obreros captados. Ese rol predestinado les daba cierto orgullo y resaltaba la importancia de su actividad sindical y política. El tercero, el papel del partido, como portador de la conciencia para la clase obrera y dirigente de sus acciones, tal como varios de ellos recuerdan haberlo leído y discutido en el "Qué hacer" de Lenin.

En este sentido, la política se entendía, como la representación sindical que los partidos eran capaces de lograr, actuando mediados por ella e identificados muchas veces por las siglas del gremio que controlaban. Valdivieso señala al respecto: "nosotros estamos de alguna manera identificados con una nomenclatura sindical, nuestra traducción a la política son los sindicatos". Jaime Cáceres, principal figura del liderazgo metalúrgico de los setentas y militante del PCR, agrega (Parodi 1983) que los partidos necesitaban llegar a la dirección del gremio para hacer política, el problema central para los dirigentes de la época era que los líderes llevaran adelante "la dirección correcta", ella lo decidía todo. Esto, que era generalizado para toda la izquierda de los setentas, se presentaba en forma más acentuada en los partidos de la Nueva Izquierda que en el Partido Comunista, es decir, en grupos cuya trayectoria en la vida pública era menor y al mismo tiempo, en forma más intensa, en gremios como el metalúrgico, donde la influencia izquierdista era muy alta y casi excluyente. Caló tan hondo esta concepción sindical de la política que cuando se produjo la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, los partidos, mayoritariamente, optaron por lanzar a dirigentes sindicales en lugar de políticos para los cargos respectivos. José Valdivieso refiere que:

"No fue una decisión electoral, fue una decisión de principios. Iban los dirigentes populares porque era una lista popular, entonces ellos tenían que estar a la cabeza y darle la legitimidad."

Esta concepción restringida de la política, tal como señalamos en la Segunda Parte, contribuiría a que la izquierda marxista no lograra una

posición más favorable en el proceso de transición democrática, aislándola al plano de la movilización social.

Delmer Quiroz, también dirigente sindical que se inicia en una base metalúrgica y que fuera llevado a la actividad gremial por el trabajo de promoción que desarrolla la Nueva Izquierda, en particular Vanguardia Revolucionaria, agrega que este estilo de hacer política por parte de los partidos "animó" en gran medida la vida sindical, antes que exclusivamente restringirla, como quisiera plantear el "sustitucionismo". Quiroz señala:

"esta competencia que digo, esta sana competencia que nos hace pelearnos por ver quién tomaría los nuevos sindicatos, quién influiría en ellos, quién trabaja para organizarlos, para irlos a crear, a gestionar su reconocimiento ante el Ministerio de Trabajo. Esto fue muy bueno".

El mismo era considerado "padrino" de los nuevos sindicatos organizados por su asesoría. Esta competencia, agrega Jorge Ramírez, obrero metalúrgico de base, es la que finalmente permitiría el liderazgo político y la importancia nacional que alcanzó la Federación.

Sin embargo, esta actitud de los partidos tenía rasgos autoritarios. "No había una táctica como movimiento obrero espontáneo, los partidos traían las tácticas" dice Tineo, "ellos decidían lo que iba a pasar en el Sindicato" asevera Ramírez. La célula de cada partido en determinada base diseñaba una táctica y buscaba una correlación de fuerzas dentro de la Asamblea del sindicato que le permitiera llevarla adelante, convirtiendo a esta casi en un "simulacro de democracia". La habilidad política no era entonces solo habilidad de organización y dirección sino también de manipulación. Ahora bien, planteada exclusivamente como manipulación la acción del partido aparece arbitraria. Sin embargo, esta iba precedida de un largo proceso de captación de trabajadores y/o dirigentes, los cuales a su vez establecían, o tenían ya, por múltiples razones, redes de lealtad, que podían ser de parentesco, compadrazgo, paisanaje, que convertían en mecanismo político. Había entonces la construcción previa de las bases para una legitimidad. Que los mecanismos no fueran democráticos no nos puede llevar a señalar que la acción partidaria fuera solo fruto de la manipulación.

Pero a pesar de ello la pregunta sigue siendo ¿por qué las bases soportaban este margen de manipulación? Parodi (1986:55-76) ensaya una respuesta, donde señala que lo hacían porque los dirigentes sindicales partidarizados eran efectivos en la consecución de beneficios económicos. Esto parece ser cierto, sobre todo porque guarda una correlación directa con el inicio de la crisis económica, en 1976, cuando conseguir reivindicaciones se vuelve bastante más duro. Sin embargo, restringir el problema a beneficios económicos es ver solo una parte de él. Los partidos logran un nivel de organización y centralización sindical como nunca antes había existido en el gremio metalúrgico y lo hacen con independencia del Estado y los empresarios, es decir, desarrollando los gremios como espacios que creaban condiciones de autonomía para los trabajadores. El que la organización no fuera lo fuerte que suponía el discurso radical y la autonomía no fuera tal frente a los propios partidos, tal como se demostraría en la coyuntura de crisis, no implica que uno u otra no existieran como logros del sindicalismo metalúrgico de los setentas.

Pero no sólo existe capacidad de manipulación por parte de los partidos, también hay un problema cultural de por medio. Delmer Quiroz, en este caso entrevistado por Jorge Parodi (1983), se va a referir a él cuando señala que los obreros mantenían, de alguna manera, una actitud servil frente a los partidos, heredada, quizás, del mundo señorial andino del que muchos provenían o de la experiencia de trato con las propias clases altas de la capital. En este caso era una actitud de sumisión frente a quienes traían un mensaje, muchas veces, como insiste Quiroz, poco inteligible para los trabajadores. Este mensaje, que se expresaba en claves nuevas en el lenguaje con el que se procedía a analizar las cosas y en las consignas que debían ser la síntesis de estos análisis, producía un doble efecto, por una parte reforzaba la sumisión, vía el respeto a quien tenía una determinada capacidad de reflexión, y por otra, implicaba una distancia, entre activistas políticos y trabajadores, muy difícil de superar.

Quizás un buen ejemplo de esta distancia sea la dificultad que encontraban los trabajadores, captados como militantes por los partidos de izquierda, para progresar dentro de las estructuras de poder de estos últimos. Difícilmente, como afirman varios dirigentes de la época, iban

más allá de la dirección intermedia de estas organizaciones. Esta dificultad para ser dirigentes político-partidarios se expresaba también en las dificultades que tenían para llevar adelante sus puntos de vista sobre los problemas sindicales que los afectaban directamente. Muchas veces el partido decidía contra lo que era el consenso mayoritario de los trabajadores y los dirigentes se veían obligados a llevar adelante esta resolución o, como a veces ocurrió, producir la ruptura de su organización política. Este último fue el caso de la fuerza dominante en la FETIMP durante la década del setenta, el Partido Comunista, cuya ruptura, entre 1977 y 1978, desemboca en la división del gremio metalúrgico y también el de la fuerza más importante de oposición, dentro de la Nueva Izquierda, el Partido Comunista Revolucionario, que sufre en la misma época una escisión, estrechamente ligada a su trabajo metalúrgico.

Pero los partidos que trabajan en el gremio metalúrgico presentan matices significativos en su estilo y propuesta políticos que los llevan a estar, tal como señalamos más arriba, en aguda competencia. Los dos grupos más importantes son, por un lado el Partido Comunista y por otro la Nueva Izquierda, que agrupa en su interior varias organizaciones políticas, pero cuyo denominador común es el enfrentamiento al PC. La competencia entre ambos agrupamientos va a estar marcada por una aguda discrepancia sobre la naturaleza del régimen militar y las consecuencias de ello para los trabajadores. El Partido Comunista plantea el carácter revolucionario del régimen y de allí su precaución, sobre todo en sectores productivos importantes como el metalúrgico, para apoyar los reclamos obreros. La Nueva Izquierda por el contrario, opinaba mayoritariamente que se trataba de un gobierno que hacía reformas para evitar la revolución, por lo tanto debía oponérsele, por ello su tendencia a organizar y polarizar la lucha reivindicativa.

En el caso del Partido Comunista, se trata de la fuerza más antigua de las que actúan en la FETIMP en la década del setenta. Su presencia en el gremio venía desde la fundación de este en los años cincuenta y su actuación política está marcada por dos rasgos claves: el control burocrático de los aparatos sindicales, la propia Federación en este caso y su posición favorable a las reformas que realiza el gobierno de Velasco. En el primer caso, el control del aparato sindical constituye una de las

formas más importantes de desarrollo del trabajo gremial que le permite al PC expandir su influencia entre los trabajadores metalúrgicos, principalmente a través de la formación de nuevos sindicatos y de la asesoría de sus pliegos de reclamos. El uso partidario de esta forma de trabajo sindical se mostraría particularmente útil para la mantención y reproducción de posiciones de poder en el gremio. Es el caso de la referencia que hace nuestro entrevistado, José Chávez Canales, Secretario General de la FETIMP entre 1974 y 1978 y militante del PC, a la importancia del trabajo con los sindicatos chicos, más proclives a la influencia de quien maneja el aparato sindical, que eran atendidos no tanto en función de llevar el debate político nacional sino más bien en sus necesidades inmediatas de reivindicación económica. Señala Chávez que esta influencia le permitía a su tendencia mantener una correlación favorable dentro de la Federación a pesar del importante peso político que logran sus adversarios. Ello se reflejaría en el triunfo que obtienen las listas del Partido Comunista en las elecciones para la Junta Directiva de la FETIMP en 1974 y 1975, años de máximo auge de la Federación. Aunque sobre esto último, otro entrevistado, Angel Gallardo, antiguo dirigente de la FETIMP desde la década del sesenta y también ligado al PC, apela a resaltar un sentimiento más primario de los trabajadores: "ellos cuidaban su trabajo, por eso no votaban ultra".

La posición del PC frente al gobierno era más posible de sostener en el gremio metalúrgico, que en otros lugares como Chimbote, por el impacto que habían tenido en el sector las concesiones recibidas por el movimiento sindical, en particular las facilidades para el reconocimiento de nuevos gremios y el rol de árbitro que el Estado, en esa coyuntura, insistía en jugar. Esto no es óbice para que un punto de vista de este tipo fuera violentamente contestado por otras fuerzas más radicales, pero nos muestra el espacio para una mayor competencia política allí donde el Estado no era directamente el patrón.

La queja reiterada de la Nueva Izquierda contra el PC era que este no estaba interesado en promover las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores, llevando al extremo su celo por no perjudicar al gobierno. Esto es algo que se menciona tanto para el período de auge de la FETIMP, entre 1972 y 1976, como para el momento del Estado de Emergencia, entre 1976 y 1977 y el propio Paro Nacional, en julio de 1977. Los

dirigentes del PC, sin embargo, responden señalando que la política de los sectores más radicales era aventurera. Pablo Checa, dirigente metalúrgico y militante del PC, entrevistado por Parodi (1983), dice que rompen el frente único sindical al poner por delante las diferencias políticas. Checa alude al tratamiento de enemigo, no sólo de adversario, que se daba entre la Nueva Izquierda y el PC, lo que llevaba muchas veces a perder de vista el conflicto con los empresarios y el gobierno. Chávez Canales agrega que esta "politización" excesiva descuidaba, asimismo, a la gran masa de trabajadores que tenían poco acceso a las discusiones entre dirigentes ya iniciados y más preocupación por sus necesidades inmediatas y los riesgos de la lucha.

La Nueva Izquierda era la fuerza nueva en el gremio metalúrgico que como dice Delmer Quiroz, "dinamiza hasta al propio PC". Su presencia se da recién a partir de 1970 y si bien hay múltiples núcleos políticos destacan los que, según Enrique Tineo, "respetan el sentido común de los trabajadores", en referencia a lo que él mismo denomina el "maoísmo heterodoxo", es decir, el tronco político que inaugura Vanguardia Revolucionaria y que continúan como sucesivos desprendimientos, cada cual del anterior, el Partido Comunista Revolucionario y Trinchera Roja. Existen también otros grupos, maoístas ortodoxos y troskistas, pero de menor significación que los primeros.

Pero esta presencia nueva en el ámbito gremial metalúrgico, no sólo significa una posición política más radical y particularmente atrayente, sino también un nuevo estilo político que considero importante resaltar. Ambos aspectos implican un serio reto a la hegemonía del PC. La posición radical se identifica rápidamente con la desconfianza ancestral frente al Estado y el estilo directo remece los reflejos burocráticos del aparato sindical.

A diferencia del Partido Comunista, cuya influencia se extendía a partir de los aparatos sindicales, estos radicales venían mayormente de fuera de la clase obrera, eran estudiantes que iban a vender el periódico de su organización a la puerta de las fábricas y buscaban conversación con los trabajadores. Rufino Suyón rememora esta situación diciendo: "era como cuando uno enamora a una chica" y Jorge Ramírez señala: "En la Nueva Izquierda había otro estilo, el activista era mucho más perma-

nente, te seguía y te acompañaba a tu casa, compartía hasta los más cotidiano". Se trataba entonces de un proceso de captación muy directo con el obrero de base, casi personal, donde destacaba una conducta, en palabras de otro dirigente obrero metalúrgico de esos años, de "austeridad, desprendimiento y disciplina" así como una actitud "paternal" que desarrollaba especial respeto de los jóvenes obreros por los jóvenes universitarios.

Sin embargo, la relación entre activistas políticos y dirigentes sindicales dejaba entrever también agudas contradicciones que expresaban, muchas veces, la diferente extracción social de ambos grupos así como la frustración de estos últimos al tratar de convertirse en políticos. Suyón, por ejemplo, se refiere a la "división del trabajo" que había entre unos y otros, señalando que "los que daban la cara" eran los dirigentes sindicales y que los activistas políticos, no participaban directamente en las movilizaciones que se organizaban. Señala así:

"Nosotros creíamos...se suponía que...bueno nos decían que nosotros éramos la clase dirigente. Los militantes estudiantiles nos veían como una especie de semi-dioses, nos ensalzaban, nos llevaban a todo sitio y un poco que nos metían una borrachera. Pero estos militantes, que eran los dirigente máximos, no aparecían en escena. Ellos trabajaban tras bambalinas, o sea cuando había una movilización o un paro había que cuidarlos de la represión. Hasta ahora yo no me explico si era efectivamente por seguridad...o era que realmente en los momentos que había que enfrentar, no tenían el coraje de enfrentar, no me lo explico aún".

Agrega también, apreciando estos conflictos en retrospectiva, la impresión de que los activistas políticos estudiantiles de los años setenta "usaron" el discurso revolucionario y su relación con los trabajadores para ser figuras públicas en la década siguiente. "Nosotros no pensábamos en ser regidores o parlamentarios" dice, posiciones, señala, que les estaban vedadas a los trabajadores por carecer de contactos fuera de su mundo laboral.

Pero esta opinión es controvertida. Jorge Ramírez señala, por el contrario, una relación, distinta, donde, según nos dice: "tú utilizabas al

activista para que vaya a la puerta del sindicato, deje prensa y ajuste algunos contactos", o sea, también se producía una instrumentalización de los partidos por parte de los sindicalistas. Aunque no parece haber sido el caso más frecuente es un aspecto a tomar en cuenta para entender a cabalidad la disposición obrera para la lucha sindical.

La política radical y el estilo directo, con todos los problemas de venir "desde fuera" de la clase obrera, tuvieron un impacto significativo entre los metalúrgicos, estableciendo la competencia a la que hacíamos alusión y permitiendo, en un momento de relativa expansión de la industria, "el brillo" tanto organizativo como político de la FETIMP.

C. LA DINAMICA SINDICAL: UN CONFLICTO DE INTERESES PARCIALES.

La FETIMP en la década del setenta tiene un período de despegue organizativo entre 1969 y 1972, otro de intensa lucha reivindicativa entre 1972 y 1976 y un último de crisis que finalmente la lleva a la división entre 1976 y 1978. Como señala Bonfiglio (1983) en 1969 se junta el ánimo del PC por reorganizar la FETIMP, que venía de una etapa de aguda debilidad, el ímpetu de los grupos de la Nueva Izquierda por desarrollar trabajo sindical en un sector relativamente nuevo e importante como el metalúrgico y la urgencia del Gobierno Militar de desplazar al APRA del movimiento sindical, todo esto, agregaríamos en el marco de un programa de reformas que concedería importante fuerza de negociación a los trabajadores. Angel Gallardo, denomina a este un período de "puertas abiertas". Ello permite que entre 1969 y 1972 el número de sindicatos afiliados pase de 15 a 62, buena parte de los cuales eran sindicatos nuevos, es decir, formados donde antes no había existido organización gremial alguna. Esta "avalancha", como la denomina Delmer Quiroz, continúa, llegando a alcanzar 115 organizaciones afiliadas en 1975.

Ahora bien, ¿cuáles fueron esas reformas que promovieron la capacidad de negociación de los trabajadores? Principalmente tres: la nueva ley de estabilidad laboral, la ley de Comunidad Industrial (denominada genéricamente Comunidad Laboral) y la nueva actitud del Estado como mediador en el conflicto de trabajo. Las dos primeras son leyes que se

dan en 1970 y la tercera pasará a constituir característica central de los primeros años del velasquismo.

La nueva legislación sobre estabilidad laboral, que garantizaba la estabilidad en el empleo a los tres meses de empezar a trabajar, se constituyó en la base de todos los demás derechos que lograron los trabajadores en este período. Con ella, estos empezaron a tener capacidad real de negociación con la patronal. Hasta ese momento formar un sindicato había sido "tarea de bravos" según nos dice Quiroz, en la cual todos los comprometidos arriesgaban ser despedidos de inmediato. La estabilidad, por el contrario, permitió extender la organización sindical a los niveles que señalamos líneas arriba. Pero, a pesar de significar un cambio tan importante para la lucha de los trabajadores, la ley de estabilidad laboral de Velasco fue motivo de enconadas polémicas entre las diferentes tendencias. Los radicales, la encontraban insuficiente y planteaban su derogatoria, aunque sin una alternativa clara de recambio, el PC, por el contrario, objetaba tan solo unos cuantos artículos y planteaba que era una conquista de la clase trabajadora. La valoración cabal de esta reforma solo vendría años después cuando el gobierno de Morales Bermúdez la deroga y emite una legislación mucho más restrictiva de este derecho.

Con la Comunidad Industrial sucede algo similar. Se trata de una forma de cogestión empresarial que ampliaba la participación de los trabajadores en la conducción de la empresa y les concedía la propiedad creciente de la misma hasta un máximo del 50%. Sin embargo, en un primer momento es tomada con desconfianza por los trabajadores, creyendo que podía constituir una competencia del sindicato, o que, eventualmente, buscaría reemplazarlo. Los más radicales tomarían esta actitud negativa, absteniéndose de participar en su constitución y en la elección de sus autoridades, "no nos interesaba" recuerda Rufino Suyón, lo que llevaría, en algunos casos, a que sectores minoritarios tomen el control de ellas. Sin embargo, la práctica las transformaría en otro frente de lucha con la empresa, convirtiendo la participación en ellas una prolongación de la actividad sindical, donde el producto efectivo en términos de cogestión sería mínimo, pero, a través del cual obtendrían valiosa información sobre la situación real de la misma, lo que les ayudaría en la confección de sus pliegos de reclamos. Delmer

Quiroz señala que esta evolución de la posición de los trabajadores sobre la Comunidad Industrial, donde el intento democratizador del velasquismo era quizás más palpable que en otros terrenos, tiene efectos en los partidos de izquierda, permitiendo algunos matices en su apreciación del gobierno militar.

Es significativo cómo la apreciación de las condiciones que permiten la organización sindical presenta agudos contrastes entre los trabajadores. Los más antiguos, generalmente ligados al Partido Comunista, que podían comparar la situación de los setentas con etapas anteriores del movimiento sindical, tienen una apreciación más bien positiva. Es el caso de Angel Gallardo, que señala el ejemplo de su sindicato base, el cual en varias oportunidades consiguió reivindicaciones que no había incluido en sus pliegos de reclamos, es decir, concedidas directamente por el Ministerio de Trabajo, cosa impensable en los gobiernos de Prado o Belaúnde. Los obreros más jóvenes, en cambio, casi siempre ligados a la Nueva Izquierda, cuya situación no les daba un término de referencia más preciso, tienden a tener una apreciación negativa, a considerar una "patraña", como recuerda Tineo, las concesiones del gobierno de Velasco. Pero las posiciones negativas, a pesar de la influencia del PC, predominaron. Angel Gallardo prefiere trascender el conflicto político para entender este predominio y lo refiere más bien a ciertas características de pasividad y falta de capacitación de los trabajadores, así nos dice:

"El gobierno militar de Velasco dió leyes de reformas bastante positivas, pero que los trabajadores no supimos analizar y defender esas posiciones en determinado momento. Fuimos muy pasivos y no entendimos esas leyes. Como consecuencia de eso, ya pues vienen los empresarios, vienen los generales, los de derecha, los que están en contra de todas estas cosas y lo desactiva. Porque si nosotros hubiéramos sido conscientes, hubiéramos hecho un estudio y hubiéramos analizado profundamente todas esas reformas. Entonces, en el momento que nos quieren quitar hubiera sido bien difícil."

Y, ¿cómo es el dirigente que produce este desarrollo organizativo del sindicalismo metalúrgico? Jorge Parodi (1986:61) lo define como un "políglota social" por los múltiples roles de mediación que desarrolla, con su propia base, entre los mismos dirigentes, con el partido, la

empresa y el Estado, con los que, además, emplea diferentes lenguajes y claves culturales, que le permiten obtener de cada cual algo específico para su posición de poder. Se trata, asimismo, de trabajadores capaces de ejercer esta función por su relativamente alta educación. Si educarse es un canal privilegiado para la movilidad social en el Perú esta no es una excepción. Los metalúrgicos se ubicaban en una población obrera limeña que mostraba ya altos niveles educativos en la década del setenta. Galín *et al* (1986:94) nos muestran que aproximadamente un 45% de los obreros limeños tenían secundaria incompleta o más, proporción que crecía entre los de mayores ingresos, como es el caso de los metalúrgicos. Tener educación superior o técnica era una condición de prestigio que se consideraba una característica importante para la dirigencia. Rufino Suyón empieza como Secretario de Estadística de su sindicato por ser estudiante universitario de Ingeniería y a partir de allí se interesa en la política. Enrique Tineo, nos señala al respecto:

“La capacitación es un factor de poder, tener información, tener cultura, también es un factor de poder para ser dirigente sindical. Mi experiencia personal es de una formación principalmente por mi iniciativa, por que yo siempre he estado con las lecturas, he sistematizado lecturas de los clásicos (Marx, Lenin). Lecturas también de debates, de práctica sindical y la formación que he tenido en los debates internos de los partidos políticos.”

Esta educación permitía a la capa dirigencial tener un acceso algo más fluido a la literatura marxista que traían los activistas políticos y de esta manera organizar un discurso ideológico para su trabajo sindical. Sin embargo, este es un fenómeno que tiene efectos ambivalentes porque por una parte les permite a los dirigentes organizar una cosmovisión, que los acerca a los partidos de izquierda y les da cierto status como dirigentes ilustrados, pero por otra, los aleja de su propia base, que no entiende el nuevo lenguaje, a menudo un conjunto de clichés, que usan los dirigentes.

Pero ¿cómo se llega a ser dirigente? Más allá de una cierta disposición básica que incluye juventud y educación, Tineo nos señala que había que liderar a una tendencia política dentro del sindicato y competir con las otras tendencias:

"El primer problema para llegar a ser dirigente es una lucha de posiciones. En mi sindicato base había compañeros del PC, troskistas y del PCR. Para ser dirigente tuve que hacer un equipo de compañeros que teníamos simpatías por el PCR, para poder confrontar a las demás fuerzas políticas. El primer problema era confrontar en una dura lucha interna a los troskistas y el PC. Yo supero estas condiciones y con mucha desconfianza de parte de ellos asumo la responsabilidad de Secretario General cuando tenía 19 años. Incluso no tenía todavía Libreta Electoral. Luego los amarillos que les llamábamos (obreros pro-patronales) quisieron cuestionarme por ser menor de edad pero yo ya había mandado la personería jurídica (al Ministerio de Trabajo)."

Es decir, que había necesidad de una socialización política, casi siempre previa, partidaria o cercana a un partido y luego, agrega, había que construir un liderazgo gremial que se demostrara mejor, en términos de conseguir reivindicaciones inmediatas, que el que podían ofrecer otras tendencias.

A esto agrega Jorge Ramírez otro elemento, de índole cultural, que trasciende lo estrictamente educativo, el hecho de que los dirigentes solían ser, en su mayoría, de procedencia étnico-regional costeña y no serrana. Ello no quiere decir que los trabajadores de procedencia serrana no se integrasen a la lucha sindical, ya que, según Ramírez, lo hacían, con particular ahínco, pero más como obreros de base. Se repetiría a nivel sindical lo que Parodi(1986:37-54) señala que sucedía en la producción, donde el trabajador serrano parece ser que era un trabajador más empeñoso y disciplinado que el costeño, aunque sin la capacidad de relaciones públicas de este último.

Ahora bien, el liderazgo sindical solía plasmarse en caudillos. Ellos eran los que representaban a los partidos ante los trabajadores y, al mismo tiempo, las figuras en que estos se sentían representados. Delmer Quiroz (Parodi 1983) asegura que había una cierta necesidad de los obreros por reflejarse en un líder algo autoritario y arbitrario, quizás por influencias culturales anteriores que suponían un orden rigidamente jerárquico. El caso es que la FETIMP de los setentas fue un mundo de caudillos, cuyos períodos incluso están marcados por presencias parti-

cularmente fuertes. Angel Gallardo nos relata de un alejamiento temporal suyo de la Federación, en 1976, "porque todo era la polémica Chávez-Quiroz y no se veían los problemas concretos". Pero esta representación a través de caudillos presentaba una seria limitación para la politización de los trabajadores e incluso para la formación de cuadros de reemplazo en el gremio. Varios dirigentes de la época coinciden en señalar que la no existencia de líderes que pudieran tomar el lugar de los despedidos en el Paro Nacional de 1977, llevó a que el gremio metalúrgico no tuviera capacidad de respuesta frente a la represión gubernamental lo que sería causa de la grave crisis y posterior división de la FETIMP.

José Chávez Canales se queja de este mundo de caudillos, a pesar de que muchos lo consideran a él mismo el gran caudillo. Argumenta Chávez Canales que muchos incendiarios de mítines y asambleas tenían bases que rara vez se movilizaban y que prácticamente no conocían las posiciones políticas de sus líderes, llegando al extremo de únicamente ir a la huelga cuando se trataba de reivindicaciones propias. Dice que este fenómeno solía darse más entre los dirigentes de fábricas grandes, influidos por partidos radicales, que tendían a centrar su trabajo en captar a los dirigentes pero tenían poco que hacer con la politización de la base.

En esta expansión organizativa la FETIMP, a pesar del relieve nacional que llegó a alcanzar, actuó más como una coordinadora de los intereses parciales de cada sindicato que como una centralizadora del conjunto de la lucha metalúrgica. Es decir, su representación político-sindical, con todo lo agresiva e importante que era tanto para los propios metalúrgicos como, en términos de liderazgo, para otros sectores, no llega a expresar intereses comunes del gremio. Quizás una muestra de ello sea la imposibilidad de reactivar la lucha por el pliego único, que había sido, bajo otras condiciones y en una dimensión mucho menor, el eje reivindicativo de la década anterior. Tineo nos cuenta que, en la época de mayor auge de la Federación, entre 1972 y 1976, cuando 20 o más sindicatos base se hallaban en conflicto empezaba la pelea por llamar a un paro o a una huelga de la FETIMP. La actitud de los directivos variaba de acuerdo a la tendencia política de los sindicatos en lucha, así como a la intensidad de los conflictos parciales, pero la dinámica general llevaba, tanto al PC como a la Nueva Izquierda, a

sumar conflictos, cada cual por su cuenta, que pudieran administrar en el momento propicio, llevándolos, eventualmente, a la huelga. Esta dinámica, sin embargo, tenía las más de las veces al PC en contra de agudizar las acciones de fuerza y a los grupos de Nueva Izquierda tratando de sacarlas adelante.

Esta pugna por desarrollar el conflicto sindical tenía como escenario las Asambleas de la FETIMP, a las cuales podían asistir, con voz y voto, delegados de cada sindicato base. Ellas se convirtieron, en los años de auge, en un acto de confrontación, "a la mala", según Rufino Suyón, entre la Nueva Izquierda y el PC. Las maniobras estaban a la orden del día y poco podían lograr los delegados que no estuvieran alineados con alguna de las tendencias en pugna. Estas reuniones eran muy concurridas, no tanto por la mayoría de los delegados sindicales como por los obreros politizados de los sindicatos en conflicto y los propios militantes de los partidos de izquierda que, recuerda Angel Gallardo, "esperaban afuera, con sus palos, los resultados y esto era alentador porque había interés". Estas asambleas de delegados de la FETIMP se convirtieron así en un espacio de disputa que tenía más que hacer con ganarle la iniciativa política al adversario que con avanzar en un esfuerzo de dirección del gremio. La vitalidad que transmitía entonces la Federación como imagen hacia el exterior poco tenía que hacer con una capacidad orgánica de acción conjunta. Como decíamos líneas arriba el conflicto interno solo le permitía sumar pero no multiplicar la fuerza de sus partes.

Las asambleas de la FETIMP, sin embargo, eran consideradas por los activistas como una importante expresión de democracia que animaba de forma singular la vida del gremio. Un "rito" nos dice Suyón en actitud casi reverencial. Quizás esta consideración ocurría por contraste con otras federaciones cuyas reuniones no despertaban tanto interés en los partidos de izquierda o en la cúpula sindical. Así, Delmer Quiroz cree ver un logro, en particular de los grupos de la Nueva Izquierda, en la asistencia de obreros de base a escuchar las discusiones de sus dirigentes. Igualmente, cuando los dirigentes recuerdan este período de la vida de la FETIMP una de las cosas positivas que aparece es la imagen de aquellas reuniones, como el espacio de legitimidad democrática del gremio. Sin embargo, esta legitimidad no se basaba tanto en estrictos

mecanismos de representación democrática sino más bien en la presencia de las bases obreras en conflicto, en particular de los trabajadores politizados, en la capacidad de fiscalización que ellos podían ejercer sobre sus dirigentes y en las posibilidades de proyección política del conjunto.

La expansión organizativa se traduce en una mayor capacidad de lucha, principalmente por salarios y condiciones de trabajo. La forma privilegiada de esta lucha era la huelga económica que se desarrolla con particular intensidad entre 1972 y 1976. Es interesante cómo el gremio metalúrgico va de organizar paros de 24 y 48 horas, primero, a desarrollar, luego, dos huelgas, en 1974 y 1976. Esta actividad incluye acciones de solidaridad, como fueron una marcha en apoyo al pueblo de Chile y un paro de apoyo a los trabajadores de Chimbote, acciones más bien raras en el movimiento sindical.

La huelga económica tenía una lectura diferenciada para los dirigentes y para las bases, lo que daba elementos para establecer una relación utilitaria entre ambos. La huelga, especialmente para los dirigentes más radicales ligados a la Nueva Izquierda, era el primer paso de un proceso mayor de movilización que debía "agudizar las contradicciones" y llevar finalmente a la transformación revolucionaria de la sociedad. De allí que su objetivo fuera producirla y luego buscar radicalizarla. Enrique Tineo nos dice:

"Los partidos lo que buscaban era que el sindicato entre a la huelga. O sea que el pliego de reclamos era un medio y la huelga el objetivo, cuando debe ser al revés. El objetivo debe ser el pliego de reclamos y la huelga es el medio. Pero en esa época los partidos de izquierda como tenían la visión de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina querían exacerbar las contradicciones de clase y ponían la huelga como objetivo, el pretexto era el pliego de reclamos."

Delmer Quiroz, por otra parte, nos señala que:

"...si alguien juzgara las movilizaciones, el movimiento social de la época a partir de los comunicados de prensa, diría que esta fue una época en que habían soviets."

Esto es un esquema general, en el que cabían múltiples variantes de acuerdo a cada lucha concreta, pero donde casi siempre podíamos encontrar al PC tratando de avanzar con cuidado, en particular con cuidado de ir a choques frontales con el gobierno, y a los radicales tratando de convertir cada pequeño fuego en la lucha final. Las bases, en cambio, lo que buscaban era reivindicaciones concretas que satisficieran necesidades inmediatas, relativas a salarios y condiciones de trabajo.

La lucha es exitosa mientras existe una situación económica relativamente estable, pero sus posibilidades se empiezan a deteriorar con la crisis del velasquismo en 1975 y las sucesivas medidas anti-laborales de Morales Bermúdez entre 1976 y 1978. Por ello, es más o menos factible, hasta mediados de los años setentas, conseguir reivindicaciones con un discurso radical por lo que esta relación, entre dirigentes y bases, resulta productiva (Parodi 1986:65-69), pero con el inicio de la crisis económica van a ser cada vez más insuficientes el discurso radical y la táctica de la confrontación.

El logro de estas reivindicaciones, sin embargo, va a tener un costo importante cuya expresión más significativa serán los despedidos. La bandera de reposición aparecerá entre las demandas de la FETIMP, con mayor fuerza, a partir de 1974. Manuel Agüero (1980) señala que para julio de ese año la Federación tenía más de 40 trabajadores despedidos en sus diferentes sindicatos bases. En un primer momento el despido será producto de conflictos localizados entre una empresa y su sindicato. Además, era difícil para los empresarios despedir por la legislación vigente que favorecía a los trabajadores. En esos años de auge gremial la empresa solía usar artimañas para deshacerse de fuerza de trabajo que no deseaba, ya fuera por razones productivas o sindicales. El recurso más común fue aprovecharse de la indisciplina de los trabajadores en el mal uso de los permisos para ir a atenderse a los hospitales del Seguro Social. El mecanismo era sencillo: denunciar a quienes pedían salir y en lugar de ir a recibir atención médica iban a otra parte.

Pero recién será con el cambio de gobierno, de Velasco a Morales Bermúdez, en agosto de 1975, y, especialmente, con la declaratoria del Estado de Emergencia, en julio de 1976, que la cuestión se dejará sentir

con toda su fuerza, recibiendo los trabajadores el golpe mayor luego del Paro Nacional de julio de 1977.

Con el gobierno de Morales Bermúdez la cosa pasó de artimañas empresariales, con alguna eventual ayuda estatal, a una política estatal tendiente a despedir a la capa dirigente. Se empieza con la autorización de despidos masivos, aunque no exactamente en fábricas metalúrgicas pero sí en el área de Lima. Se continúa con el Decreto Supremo 011-76-TR, parte del Estado de Emergencia decretado para enfrentar la crisis política de mediados de 1976, que autorizaba el despido de todos aquellos que hicieran huelga. Esta última medida tiene especial incidencia en el gremio metalúrgico porque corta el ciclo ascendente de paros y huelgas que la FETIMP había venido llevando adelante y que había tenido su último episodio en una huelga de nueve días en junio de 1976. La actividad de la Federación queda totalmente paralizada durante el Estado de Emergencia, entre julio de 1976 y julio de 1977. Agüero (1980) contabiliza hacia junio de 1977 alrededor de 250 despedidos en el gremio metalúrgico, la abrumadora mayoría de los cuales se concentran en las bases grandes y más combativas. José Valdivieso señala que este debilitamiento fue consecuencia de la falta de voluntad política del PC, mayoritario en la dirigencia de la FETIMP, que vacilaba sobre si pasar o no a una actitud opositora frente al gobierno militar de Morales Bermúdez. En este año, aunque de manera muy precaria, los únicos sindicatos que buscan mantener un mínimo de actividad, en condiciones semi-clandestinas, son los influidos por partidos de la Nueva Izquierda.

Sin embargo, la medida más dura contra los metalúrgicos fue el Decreto Supremo que autorizaba el despido de todos aquellos trabajadores que participaron en el Paro Nacional del 19 de julio de 1977. De los aproximadamente cinco mil trabajadores despedidos en todo el país, los cálculos más conservadores señalan que aproximadamente 400 fueron metalúrgicos, incluyendo a la mayor parte de los dirigentes sindicales. A pesar que venían de un período de dispersión, la participación de la FETIMP en este Paro Nacional fue muy importante, no sólo por la paralización productiva sino también por la participación en movilizaciones callejeras y por la conjunción que en esas movilizaciones tuvieron con los pobladores de los barrios populares. Delmer Quiroz nos

dice que la relación con la población circundante a las fábricas había sido una de las primeras acciones que habían realizado los sindicatos metalúrgicos, por directiva expresa del gremio, desde principios de los años setenta. Esa relación se haría patente en este Paro, llevando a lo que Valdivieso denomina "el descubrimiento" del potencial de movilización de los pobladores a partir de la relación y el liderazgo obrero.

Pero los meses posteriores al Paro Nacional harían ostensible la rudeza del golpe y las debilidades de la Federación. Los problemas no empiezan con este despido masivo de dirigentes ni la FETIMP, tal como insiste Quiroz, se hallaba en su mejor momento en julio de 1977. El cambio de gobierno y la crisis económica y política habían dejado sentir su efecto en el deterioro de las condiciones de trabajo sindical, por lo menos desde un año antes, cuando la Federación tiene graves problemas para continuar sus actividades gremiales durante el Estado de Emergencia. Ello lleva a que la FETIMP no sea capaz de iniciar una lucha por la reposición de los despedidos. Es cierto, que esta incapacidad se enmarca dentro de las dificultades de la propia CGTP para llevar adelante una lucha de estas características, sin embargo, hay gremios como la Federación de Empleados Bancarios que sí son capaces de dar una lucha relativamente exitosa por la reposición de sus despedidos. Entre los metalúrgicos un sector de dirigentes, ligado a los partidos radicales, intenta llamar a una huelga para el 20 de setiembre de 1977, pero al no contar con el apoyo mayoritario de bases, bajo la influencia del PC, marchan al fracaso. En suma, las dificultades del gremio para reponer a sus despedidos marcarán una crisis que finalmente lo llevará, un año más tarde a la división.

Sin embargo, no sólo serán reivindicaciones económicas lo que consiguen los metalúrgicos. Múltiples autores (Parodi 1986, Nieto 1986, Balbi 1989) así como varios dirigentes sindicales señalan el cambio fundamental que se da en las relaciones entre patronos y obreros al interior de las empresas. Si bien, como señala Balbi (1989:54-59), se trata de un cambio suscitado por una correlación de fuerzas adversa para los empresarios, donde se juntaban la fuerza de la organización sindical con el empuje de las reformas de Velasco, no deja de tener efectos duraderos que favorecen la autonomía del espacio sindical y la integración política de los trabajadores. El trato patronal se caracterizaba por ser despótico,

donde el empresario asumía que tenía todos los derechos y no concedía ninguno a los obreros. Es decir, una relación de subordinación señorial que reproducía los roles de la sociedad rural tradicional, no muy lejana en el tiempo en el caso peruano. Ni siquiera había un cuidado por la reproducción misma de la fuerza de trabajo. Enrique Tineo recuerda que "a veces el trabajador estaba enfermo y una máquina malograda, pero los empresarios priorizaban el problema de la máquina", agregando al antagonismo clasista un agudo desprecio racial. Una relación, en suma, que se basaba en la mutua desconfianza total, donde no había sentido de empresa como aventura común, sino tan solo de confrontación, donde uno trataba de sacarle lo máximo al otro. Esta situación es la que cambian las reformas, en particular la estabilidad laboral, haciendo posible que trabajadores y empresarios puedan negociar en igualdad de condiciones sus diferencias. Delmer Quiroz agrega que las nuevas normas daban también referencias claras al empresario, permitiéndole una legalidad en su relación con los trabajadores de la que antes había carecido. Nieto (1986), entiende esta igualdad de condiciones al interior de la empresa como el logro de elementos de ciudadanía por parte del trabajador, por cierto muy importantes para su socialización política posterior. Algunos, sin embargo, son muy escépticos sobre los cambios reales que esto pueda haber producido entre los empresarios. Angel Gallardo, por ejemplo, que lleva negociando más de treinta años con empresarios del sector metalúrgico dice que "pueden haber cambios de formas y métodos, pero en el fondo tienen la misma posición". Tineo, de igual forma, señala que "los empresarios se envalentonan con Morales", aludiendo a la poca disposición patronal por una democratización permanente de las relaciones con los trabajadores al interior de la fábrica.

Ahora bien, la táctica de la huelga económica, como expresión máxima de la lucha sindical tiene límites y ello llevará a su crisis y división a la FETIMP. El primer elemento es la crisis económica y política global que lleva al cambio de gobierno. En ella se expresa un agotamiento del modelo de "sustitución de importaciones" que Velasco trata de implementar en toda su amplitud, pero también el reclamo empresarial para terminar con las concesiones hechas a los trabajadores. Además, también está la necesidad política del gobierno de Morales Bermúdez de destruir la capacidad de movilización del movimiento obrero, para proceder con la apertura política, lo que cobra particular importancia en

el caso metalúrgico por su peso específico, presencia limeña, liderazgo e influencia de la izquierda radical en sus filas.

Pero al margen de las causas de orden global existen factores específicos en el gremio metalúrgico que lo llevan a la crisis. La gran expansión organizativa que está a la base de la importancia que adquiere la FETIMP se logra a partir de una politización de pequeños grupos de trabajadores que se expresa en caudillos, las más de las veces eficientes en la consecución de reivindicaciones inmediatas pero limitados en lograr el compromiso masivo de los trabajadores en la acción sindical. Enrique Tineo, por ejemplo, nos señala que el sindicato "Nissan", con un alto grado de afiliación sindical, aproximadamente 500 sobre 600 obreros trabajando, concitaba tan solo alrededor de 50 para las tareas sindicales. Estos caudillos, asimismo, alcanzan su liderazgo en aguda competencia con otros caudillos pero de diferente tendencia política. Líneas arriba señalamos cómo esta competencia permitió en buena medida la expansión organizativa, sin embargo, en un segundo momento sus efectos son corrosivos. Esto sucede porque la competencia entre tendencias encabezadas por caudillos está signada por el ánimo de confrontación que busca eliminar al adversario y no encontrar puntos de confluencia con él. Es más, en los partidos más radicales la negociación se asociaba con traición. Esta idea de confrontación tiene un origen ideológico en el marxismo-leninismo que profesaban los partidos de izquierda presentes. Ello los llevaba, con particular agresividad en el sector metalúrgico por la importancia que tenían en él, no sólo a plantear el enfrentamiento con el Estado y los empresarios de forma que se agudizaran los conflictos, sino también a una hiperideologización del debate que descalificaba a todas las tendencias que no fueran la propia. Esta situación lleva a la debilidad orgánica de la FETIMP, convertida más en un espacio de disputa y a lo sumo de coordinación eventual, pero no de centralización y acción conjunta. La presencia izquierdista que tiñe inconfundiblemente el discurso quizás pueda llevar a una falsa impresión de organicidad por su activismo, pero la forma sectaria y partidarista en que se dió será en el mediano plazo motivo de debilidad antes que de fortaleza.

De igual forma el caudillismo partidarizado dificulta la reproducción de cuadros sindicales. El caudillo por su propia naturaleza hace difícil el trabajo en equipo y el partido está más preocupado por su desarrollo que

por el desarrollo del sindicato. Jorge Ramírez nos señala que en su experiencia de base jamás se hicieron "escuelas sindicales" que instruyeran a los trabajadores sobre los aspectos de la vida gremial, sino más bien "escuelas políticas", organizadas por una determinada tendencia, donde intentaban explicar a los obreros que se interesaban en la vida gremial las diferencias, muchas veces de matiz, entre los diferentes grupos de izquierda que hacían trabajo sindical. Pero la formalización del discurso llegaba a tal grado que muchas veces los trabajadores salían de esas "escuelas políticas" más confundidos de lo que habían entrado.

Por las características de esta politización sectaria y caudillesca es que la FETIMP no tuvo capacidad de respuesta cuando el gobierno de Morales Bermúdez despide a los dirigentes sindicales luego del Paro Nacional del 19 de julio de 1977. No hubieron dirigentes de reemplazo que pudieran tomar el lugar de los anteriores e intentaran con seriedad lograr la reposición. De allí que los múltiples esfuerzos se quedaron en iniciativas de pequeños grupos sin posibilidades de éxito. Es relevante que en estas condiciones el Partido Comunista se inhibe de plantear ninguna medida de lucha para lograr la reposición de los despedidos. Aquí parecen juntarse dos elementos. Por un lado el PC todavía se cuidaba mucho de enfrentarse al gobierno, su actitud misma en el impulso al Paro Nacional había sido ambivalente a pesar de lo cual sus cuadros fueron golpeados sin distinciones. Por otra parte, los adversarios radicales achacan su falta de iniciativa a que la mayoría de los despedidos eran de la Nueva Izquierda, lo que libraba al PC de sus rivales en el gremio.

Es claro entonces que esta incapacidad de respuesta es la que lleva a la división de la FETIMP. "Todos trabajan por la ruptura" nos dice, refiriéndose a los partidos, Enrique Tineo, en alusión al estilo imperante. Es decir, que con el tipo de politización desarrollado y el agotamiento de la huelga económica como principal forma de lucha, no habían posibilidades de un mayor desarrollo sindical en el período. La magnitud del problema se ve reflejada en la división que causa esta coyuntura de crisis tanto en el Partido Comunista como en el Partido Comunista Revolucionario, este último en aquel momento la principal fuerza de la Nueva Izquierda en metalúrgicos. La división del PC, la fuerza mayor del gremio, llevará a una radicalización del sector disidente, que incluía a

sus principales dirigentes metalúrgicos, juntando fuerzas y puntos de vista con la Nueva Izquierda. Ello lleva al PC oficial a organizar al año siguiente, 1978, su propia FETIMP, aprovechando del manejo que tiene de la central nacional, la CGTP.

Estas divisiones y reagrupamientos contribuyen, sin embargo, a la dispersión, restando a la FETIMP la fuerza política que había tenido hasta el Estado de Emergencia, julio de 1976, y quizás si hasta el Paro Nacional de julio de 1977. Pero lo que es más grave se daña la construcción del espacio sindical que se había venido desarrollando desde principios de la década del setenta.

D. EL CLASISMO METALÚRGICO Y LA APERTURA DEMOCRÁTICA

"Clasismo" era un término en disputa entre los metalúrgicos. Los obreros ligados a la Nueva Izquierda se llamaban a si mismos "clasistas" y decían que los simpatizantes del Partido Comunista no lo eran. Esto se debía a las connotaciones de la idea, si clasismo refería a autonomía de clase, los del PC eran acusados de conciliar con el gobierno militar, mientras los radicales no se contaminaban con nadie. Asumir la distinción, sin embargo, no sería exacto, porque el clasismo refiere a un fenómeno más profundo que tiene que ver con una identidad que surge de un proceso de construcción social de autonomía, particularmente acentuado en el sector metalúrgico. Tanto Enrique Tineo como Jorge Parodi (1986:177) coinciden en señalar que el clasismo era la consideración de la dignidad del trabajador, es decir, su consideración como persona. Tineo elabora al respecto y señala:

"Los obreros de base no creo que tuvieran esa seguridad en la inminencia de la revolución, lo tomaban en cuenta por la propaganda de los partidos, pero estaban más preocupados por la conquista de su dignidad, de su pliego de reclamos, de su bienestar, de su progreso como trabajadores."

Quizás la mejor anécdota que ejemplifica esto sea la que relata Delmer Quiroz cuando señala que los obreros de su sindicato base no tenían donde comer a la hora del refrigerio y lo hacían sentados en el suelo en

la puerta de la fábrica. Una de las primeras reivindicaciones, por eso, nos dice, fue "comer como gente" y exigieron, exitosamente, que la empresa construyera un comedor.

Ahora bien, esta consideración básica la logran los obreros a partir de su organización que les permite construir un espacio propio, como es el sindicato, con fuerza para luchar y lograr sus demandas. Este reconocimiento como personas, además, los hace pasibles de derechos, entre ellos el primero es el de negociar, al menos con igualdad jurídica, y tener derecho a estabilidad en el empleo. En metalúrgicos, a diferencia de otros sectores, se perciben más claramente estos elementos de ciudadanía económica y social como contenido de la identidad clasista. El hecho de que sean obreros que se enfrenten a empresarios, en tanto patrones, y no directamente al Estado como en Chimbote, permite que tomen algo más en cuenta los derechos que van obteniendo, los que son dados por un gobierno determinado y crean condiciones para luchar contra patrones específicos. Esto no quiere decir que no definieran su clasismo también en contradicción con el Estado, sino que hay una distinción objetiva entre dos adversarios diferentes, que permite, por ejemplo, que convivan posiciones diversas como el PC y la Nueva Izquierda.

Además de autonomía y derechos, que por si solos podrían hacer aparecer la identidad clasista como un almacigo de virtudes democráticas, existe también otro elemento, en el que insiste Parodi (1986:182-183), que es la confrontación. Los trabajadores logran sus demandas usando métodos de lucha que apelan a tácticas como la huelga económica, que busca derrotar al adversario y obligarle a aceptar determinadas condiciones. El orden es claro, primero es la fuerza y luego el diálogo. El clasismo es entonces un logro de la fuerza independiente de los trabajadores.

Pero ¿cómo se ve el Estado desde este clasismo metalúrgico? Enrique Tineo alude a: "una desconfianza natural por tantos atropellos que se ha tenido, una desconfianza automática del trabajador por el Estado", sentimiento que como vimos se extiende también a la autoridad dentro de la empresa, abonando en favor de la actitud de confrontación característica del clasismo. Tineo señala que se trata de un sentimiento de distancia que les viene de sus ancestros y que tiene que ver con el rol

opresivo del Estado y los gamonales, particularmente en el mundo rural tradicional, de donde provenían en primera o segunda generación buena parte de los metalúrgicos. Quiroz, en este mismo sentido, califica la diferencia entre los trabajadores y la autoridad estatal como "cultural", agregando el componente militar como un elemento más en favor de esta distancia. Esto lleva, en las versiones más radicales, a afirmaciones como las de Rufino Suyón cuando dice: "no nos interesaba la diferencia entre Velasco y Morales" ya que a fin de cuentas ambos representaban al Estado. Este extremo no es compartido por la mayoría de los dirigentes pero nos hace ver como anidaba en ellos la certidumbre de una distancia muy difícil de salvar.

A esta desconfianza, de raíces más bien estructurales, frente al Estado se suma la influencia ideológica izquierdista para configurar la actitud de los metalúrgicos sobre el problema de la democracia, que se hace explícita con motivo de la convocatoria electoral del gobierno de Morales Bermúdez. Nuevamente aquí como en otros aspectos vamos a encontrar diferencias entre el Partido Comunista y la Nueva Izquierda. Mientras el primero se encontraba muy preocupado por el porvenir de las reformas velasquistas en el nuevo gobierno de Morales Bermúdez y le interesaba negociar el futuro de estas, la segunda continuaba, casi incólume, con su misma estrategia de revolución inmediata. En ningún caso la democracia se encontraba en agenda.

Así, tenemos que desde diferentes experiencias personales ya teñidas por su encuentro con las diferentes opciones izquierdistas, aparecen también otras desconfianzas frente a la cuestión. Angel Gallardo, veterano dirigente metalúrgico, cuya idea de la democracia seguramente se asociaba más con los gobiernos civiles anteriores a 1968, como el de Prado o Belaúnde, dirá: "la democracia está enlazada con las posiciones de derecha, con el APRA, PPC y AP que son los que tienen más influencia", argumentando que los trabajadores no tenían como participar porque no se habían preparado para ello, que los únicos que tenían ese conocimiento eran los líderes de los partidos de derecha. De igual forma, Rufino Suyón, que reitera la importancia de la ideología marxista, señala: "lo de la representación era caer en las maniobras de la burguesía", una distracción del verdadero camino de la revolución, por lo que

vierte su desprecio por los dirigentes izquierdistas que habiendo predicado una cosa se apresuraron a participar en las elecciones.

Enrique Tineo recuerda que la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente hizo entrar en crisis a los partidos de izquierda que trabajaban en el sector metalúrgico. Estos se debatieron entre una actitud, más bien utilitaria, de participar y la fidelidad a lo que fue una consigna muy difundida del período: ¡Abajo la dictadura, gobierno popular! Sin embargo, a pesar del peso de las posturas radicales en el gremio, finalmente no tendrían mucha influencia los que persistían en el boicot electoral, imponiéndose la actitud de la mayoría de la vanguardia sindical que frente a la imposibilidad práctica de realizar utopías revolucionarias prefería apoyar cualquier posibilidad de retiro de los militares.

Parece ser que no era el mejor momento, por las duras condiciones impuestas por el gobierno de Morales Bermúdez a los gremios de trabajadores, para que se produjera un cambio de perspectiva en partidos acostumbrados a realizarse en el trabajo sindical y la propaganda de consignas estratégicas. En este sentido José Valdivieso señala, que al menos en el caso de los grupos de la Nueva Izquierda, la convocatoria a elecciones les planteaba la necesidad de asumir su existencia directamente y no a través del control de tal o cual sindicato. Esta última cuestión supondría en los años siguientes la desaparición de buena parte de los grupos izquierdistas, quedando y ampliando su radio de acción únicamente los más significativos.

La democracia como forma de representación política quedaba así fuera de la identidad clasista metalúrgica. Esta última expresaba la construcción de un espacio social inmediato, como era el sindical, e incluso el liderazgo de otros sectores sociales como las organizaciones barriales. Su proyección político-estatal, sin embargo, se reducía al discurso ideológico de partidos de izquierda que no estaban interesados en levantar ninguna alternativa política.

Chimbote: El Estado patrón y los nuevos obreros

A. LA PARTICULARIDAD DE UN DESENCUENTRO

EN CHIMBOTE, A DIFERENCIA DEL CUSCO o del sector obrero metalúrgico en Lima, el rol de Estado no se restringe a señalar nuevas reglas de juego para la actividad social y/o productiva. Aquí, este asume directamente el rol de conductor de nuevas actividades productivas, es decir, el rol de patrón. En los años setenta el Estado tenía a su cargo las principales actividades locales: Sider-Perú, productora de fierro y acero, y la industria pesquera, desde su nacionalización en 1973. De la misma forma aparecía como el promotor de las obras de reconstrucción de la ciudad luego del terremoto ocurrido en 1970. En Chimbote ocurría lo que uno de nuestros entrevistados, Eduardo Cáceres, activista político en el lugar del Partido Comunista Revolucionario, denomina como una "ausencia de mediaciones". Es decir, si en otros lugares el Estado podía presentarse como árbitro entre dos partes en conflicto: empresarios privados y obreros, o poniendo las condiciones de desarrollo de un conflicto: el caso de una lucha regional contra el centralismo, aquí en cambio aparecía también como el patrón interesado en mantener una determinada tasa de ganancia. Esta falta de mediaciones, que lo llevaban a ser juez y parte al mismo tiempo, será una característica explosiva en los enfrentamientos que se producen en Chimbote en la década del setenta. Paradójicamente su proyecto político de conceder derechos ciudadanos y propiciar la participación a partir de organizaciones de base chocará con su proyecto económico de impulsar las bases de un

desarrollo industrial a partir de la iniciativa estatal. Esta contradicción buscará resolverse por la vía autoritaria, interviniendo los espacios autónomos (sindicatos y organizaciones vecinales), que construía la población como trabajadores y pobladores.

Esto hace que poco quede en la memoria de los dirigentes entrevistados sobre el carácter "revolucionario" que ostentaba el gobierno militar. No se trata sólo en este caso de la influencia que pudieran tener de los grupos de la izquierda radical, sino de las condiciones en que se desarrolla el conflicto en Chimbote. Tienden por ello a tener una actitud contraria o en el mejor de los casos ambigua sobre las reformas de los militares, considerando, en toda acción de los organismos oficiales o de los partidos que apoyaran las reformas, sospechas de autoritarismo.

B. LOS NUEVOS OBREROS

La gente llega a Chimbote, principalmente en los sesentas y setentas. Se calcula que en 1972 el 95% de los habitantes de la ciudad eran migrantes o hijos de migrantes (Muñoz 1984). Así, la ciudad pasa de tener 68,157 habitantes en 1961, a 223,341 en 1981 (INDES 1983). El escenario de las movilizaciones que estudiamos es como tal nuevo, ya que la ciudad tiene la oportunidad de ser rediseñada luego del terremoto de 1970. Resalta, sin embargo, su carácter de ciudad proletaria, "un pueblo joven grande" como lo define Pedro Colchado, otro de los entrevistados, líder del sindicato de pescadores y militante de Vanguardia Revolucionaria. INDES (1983) calcula que aproximadamente el 80% de su población vive en barrios populares, destacando la austeridad global de su infraestructura urbana. Pero no solo es proletaria por su pobreza, también por la ausencia visible de burgueses en las calles. Parece que esta es una característica que se remonta a sus orígenes como ciudad industrial. Salvo unos pocos, los propietarios y/o conductores de las empresas del lugar viven fuera, en Trujillo o Lima, ciudades más grandes y cosmopolitas.

Pero ¿quiénes llegan a Chimbote? Hugo Marquesado, militante del MIR, que también "llega" a la ciudad, pero en misión política, nos dirá que se trata de gente de diferentes pueblos de la costa y sierra norte. Se trata de gente que busca trabajo, atraídos por la oferta existente, en la

mayor parte de los casos sin un pasado obrero, personal o familiar. La ciudad, sin embargo, a pesar de ser un foco de atracción para los que buscan empleo, por las nuevas e importantes actividades económicas que desarrolla, no logra proveerlo en sus industrias más importantes, sino para un 25% de la población económicamente activa (PEA). Esta PEA varía de 50,898 personas en 1972 a 74,232 en 1981, por lo que se calcula que entre doce y veinte mil personas son las que alcanzan un empleo como trabajadores en las industrias más significativas (Maletta y Bardales 1988). Para nuestros entrevistados, que serían protagonistas de las movilizaciones posteriores, es un arribo que se produce entre fines de los sesentas y principios de los setentas. Quienes logran un puesto, lo hacen por sus propias calificaciones o por relaciones personales. El primero es el caso de César Sánchez, que llegaría a ser dirigente del sindicato obrero siderúrgico, que nos dice:

"Yo soy egresado de un politécnico en Talara y mi objetivo era seguir estudiando en la universidad, pero buscaba un lapso de tiempo para desenvolverme y tener experiencia y luego poder postular... Llego a Chimbote, de Talara, el año 68. Llego un día domingo y el mismo domingo había conseguido trabajo. En el primer taller que encuentro había un letrero que dice: "Se necesitan técnicos", me presento y me dicen: "Véngase mañana". Y más allá habían dos o tres más. La mano de obra calificada era necesitada en Chimbote."

¿Qué trabajadores y con qué características? Existen diversos sectores laborales importantes, entre los que destacan: siderúrgicos, pescadores, trabajadores de la industria pesquera, construcción civil y astilleros. Sin embargo, vamos a incidir en el desarrollo de los dos sectores más importantes: siderúrgicos y pescadores, que son los que van a marcar la pauta del conjunto del movimiento social en Chimbote. Los otros, por el carácter coyuntural de la actividad y/o su menor dimensión, no llegan a tener el peso de los primeros.

De igual manera entre los dos sectores más representativos encontramos también algunas diferencias. La primera es cuantitativa, los pescadores, principalmente ancho veteros, que son los relevantes para nuestro caso de estudio por extraer la materia prima para la fabricación de harina

de pescado, producto fundamental de la industria pesquera peruana, ven reducido su número a menos de la mitad durante la década de los setenta. En números aproximados se reducen de 6,000 en 1976 a menos de 3,000 en 1980 (INDES 1983). Es decir, descienden a menos del 5% de la PEA. Los siderúrgicos, en cambio, crecen en la primera mitad de los años setenta y mantienen una población de alrededor de 5,000 trabajadores entre 1974 y 1980 (INDES 1983). Esto es reflejo de las diferentes fases por las que atravesaban ambas industrias en la década del setenta. Mientras la siderurgia tenía la atención preferente del gobierno militar y con tropiezos intentaba una ampliación, la pesca no se recuperaba de la grave crisis, producto de la depredación de las especies marinas, en que cayó a fines de los sesentas. La estatización de los activos privados, en este último caso, no produjo la racionalización esperada, agravando los conflictos tanto económico como laboral.

En cuanto a las características específicas de los trabajadores en cada uno de estos sectores es necesario también anotar algunas diferencias. Los pescadores tienden a ser migrantes de origen rural, andino en muchos casos, con educación primaria o algunos años de secundaria. Los siderúrgicos en cambio tienden a tener una socialización urbana previa, educación o experiencia técnica y, a veces, algunos años de Universidad. Los requerimientos del trabajo explican fácilmente las diferencias educativas entre ambos contingentes, Sánchez lo reitera en su testimonio: "me presenté a Sider-Perú y en la medida en que tenía experiencia y certificados, ingresé inmediatamente". Los procesos productivos en que ambos grupos se insertan van a ser también diferentes. Los pescadores trabajan en una lancha, en grupos de diez o doce, al mando de un patrón de la embarcación, su relación jurídica es la de un contrato de locación de servicios y su ganancia un porcentaje de lo pescado. Trabajan en jornadas que pueden durar varios días y paran, con motivo de las vedas, varias veces al año, dependiendo de las épocas de auge o decaimiento por las que atravieza dicha industria. Como señala Colchado: "...la vida de un pescador es muy dura, tú no sabes cuándo vas a regresar y si vas a regresar". El caso de los siderúrgicos es otro, pudiendo quizás asimilarse al de un proletario clásico. Hacen un trabajo en fábrica, divididos en secciones y con responsabilidades específicas. Su jornada es de ocho horas, ganan un salario y desarrollan las solidaridades y problemas que surgen en cualquier taller industrial.

Atraídos por esta concentración obrera llegan también los políticos. No es que Chimbote fuera territorio virgen para la política, tanto ciudadana como sindical. Había una antigua tradición aprista, parte de la hegemonía de este partido en el norte peruano, que alcanzaba también el sector sindical (Rodríguez 1980). El APRA, por ejemplo, había tenido la dirección del sindicato obrero de la empresa siderúrgica durante la mayor parte de la década del sesenta, así como también la dirección de la Unión Sindical de Trabajadores de Ancash, que más tarde se transformaría en la Federación Sindical de Trabajadores de Ancash (FESIDETA). De igual forma había también un trabajo del Partido Comunista, tanto en pescadores como en siderúrgicos, rivalizando con el APRA aunque dentro de parámetros de actuación similares, es decir, dentro de la dinámica de la "negociación" como apunta Eduardo Cáceres. Pero la novedad en este panorama será el arribo a Chimbote de cuadros de la denominada Nueva Izquierda. Por su juventud, tanto personal como de sus organizaciones políticas, sus puntos de vista radicales y su gran espíritu de lucha, estarían más dispuestos a la confrontación que a la negociación y serían los protagonistas del conflicto con el "estado-patrón".

Hugo Marquezado y Eduardo Cáceres, así como también otro de nuestros entrevistados, Manuel Cortez, militante del PCR que se convierte en líder sindical de los obreros de Sider-Perú, llegan a Chimbote, en la década del setenta, enviados por sus respectivas organizaciones políticas. Había en ellos un pasado universitario y una militancia que se convertía en la razón de ser de sus vidas. Son atraídos por un movimiento social que ya estaba en curso y su presencia, como la de muchos otros cuadros que llegan "enviados", potenciará el movimiento. Detalle significativo porque contrasta con las versiones que difundía la propaganda del gobierno militar de la época, que veían en estos conflictos exclusiva obra de agitadores. Hermógenes Villanueva, militante del Partido Comunista, de presencia anterior en el lugar, resiente, cuando lo entrevistáramos, esta llegada de cuadros importantes de los grupos a la izquierda de su Partido, que contrasta con el repliegue al que se ve obligado el PC a principios de la década del setenta. Pedro Colchado, destaca en cambio esta "concentración de dirigentes" que según él permite una competencia que impulsa al movimiento.

Pero no sólo son los militantes que llegan quienes traen ingredientes políticos al movimiento, también los propios trabajadores que se con-

vierten en dirigentes sindicales tienen una experiencia que los predispone a la participación. Ella se puede traducir en la memoria de su lugar de origen, como es el caso de César Sánchez, criado en Talara, cuando la presencia de la empresa norteamericana, la IPC, regía la vida del lugar:

“Yo he sufrido directamente el problema de la IPC, en cuanto a su trato que le dió al pueblo de Talara, donde habían zonas que los talareños, ni aún los obreros podían ingresar. Todo eso me había marcado un sentimiento de rechazo a una forma de control, de monopolio del imperialismo. Pero en Talara no hubo expresión política, ahí todo estaba controlado por el APRA. Eso que yo no pude hacerlo en Talara lo vengo a hacer acá en Chimbote, al ingresar a Sider Perú.”

También se encuentra en una experiencia sindical previa, como la de Wenceslao Risco, de origen campesino y luego dirigente sindical y militante del PCR, quien es seriamente afectado al sufrir el despido de su primer trabajo en una hacienda:

“Los apristas forman el Sindicato de la Hacienda Labor y yo como aparecía el que más sabía me nombran Secretario de Actas. Hay dos huelgas importantes contra la empresa y la patronal se decide a romper el sindicato, lo rompe y al final los dirigentes son despedidos casi todos. Era el 65 y en esa época no había estabilidad laboral. Sicológicamente me afectó mucho porque fui despedido por supuesta apropiación ilícita y sin el pago de beneficios sociales.”

Estas memorias de injerencia extranjera en la producción y ausencia de estabilidad laboral contrastarán con el Chimbote de los setentas, donde imperaba la propiedad estatal y la estabilidad en el trabajo estaba, al menos, garantizada por ley, cuestiones ambas que incentivarán una mayor participación.

C. LA LUCHA POR LA AUTONOMIA

Los que llegan pasan por la experiencia de convertirse en trabajadores construyendo un espacio social propio que tiene como referente inicial

el sindicato y posteriormente también la organización vecinal. Esta lucha por el espacio propio tiene un adversario en conflicto con el cual ocurre: el gobierno militar. Es decir, sucede en respuesta a un intento de sujeción corporativa que tenía un doble propósito: buscar una base social para el gobierno y a la vez controlar las demandas de trabajadores cuyo empleador era el propio Estado. Es importante, sin embargo, señalar que la lucha contra el Estado se da tanto cuando este, siendo patrón, pretende intervenir las organizaciones sindicales, como cuándo busca privatizar las actividades productivas bajo su control. Por lo que parecería que nunca se pretende, de parte de los trabajadores, ni romper la simbiosis Estado-patrón, ni tampoco terminar su vinculación laboral con el Estado, en aras de, por ejemplo, un hipotético "control obrero". Ello tienta a formular que la simbiosis más significativa se establecía entre Estado y trabajadores, donde, contradictoriamente, uno necesitaba de los otros y viceversa, para desarrollarse. ¿Qué tanto se puede hablar de autonomía en estas condiciones? Esa es la cuestión. Podríamos decir entonces que el problema está en el protagonismo para construir determinados espacios sociales. Lo hace el Estado, con determinadas consecuencias en términos de identidad y democracia, como veremos más adelante, o lo hacen los trabajadores.

A partir de las diferentes versiones de nuestros entrevistados podemos establecer que esta lucha por la autonomía va a marcar los límites del período, así como los hitos más importantes, en el caso de Chimbote. Estos límites, en términos de la relación movimiento social-Estado, son particulares en cada uno de los casos estudiados. En términos globales privilegiamos el período entre 1975 y 1978, sin embargo, para poder entender la dinámica de Chimbote debemos tomar mejor el período que va de 1973 a 1978. Mayo de 1973 es un momento clave para el movimiento. "Una ruptura", tal como nos dice Cáceres, entre un antes y un después. Es una coyuntura de ofensiva del Estado contra los sindicatos, a través de un grupo adicto, el MLR. El Estado intenta afianzar su presencia sindical entre los pescadores, rechazando, con el uso masivo de la violencia, el intento de grupos izquierdistas por devolver el ejercicio democrático al gremio en cuestión. Los esfuerzos de estos últimos convocan la solidaridad de otros sindicatos y la misma población produciéndose amplias movilizaciones y graves enfrentamientos. 1978, por otra parte, no sólo es el último año de grandes movilizaciones populares

a nivel nacional, sino también el año en que termina una gran huelga del gremio siderúrgico, que de igual manera concita gran simpatía del pueblo y consigue importantes reivindicaciones, tanto para los trabajadores siderúrgicos como para toda la población de Chimbote.

Es importante resaltar que hasta 1975 el intento de intervención estatal en las organizaciones sociales es a través del MLR. Tal como señalamos en la Segunda Parte, esta era una organización desarrollada por los sectores más autoritarios al interior del velasquismo, parece ser que impulsada en un primer momento por el Ministerio de Pesquería para contrarrestar la influencia de los sectores de oposición. Aunque nunca se ha determinado con precisión y detalle la extensión de sus actividades, fue en la ciudad de Chimbote y en particular en el sector pesquero, donde hicieron su trabajo más importante. Al igual que en el resto del país, su composición era de gente lumpen y su método la imposición violenta. Como tal, es identificado rápidamente por los trabajadores, convirtiéndolo en el blanco principal de sus luchas.

Los sucesos de mayo de 1973 van a ser un punto de viraje en el movimiento social chimbotano que en lo inmediato significarán una derrota para sus ambiciones de autonomía, pero que en el mediano plazo implicarán modificaciones en la naturaleza de los actores y en las formas de organización y movilización, lo que les permitirá avanzar en la construcción de espacios propios. Eduardo Cáceres observa tres fenómenos que suceden en ese año:

“La experiencia del 73, esa suerte de estallido popular contra lo que eran las puntas más corporativas, incluso facistizantes del gobierno militar, el MLR, marca un quiebre, una ruptura, en un tipo de relación entre dirigentes y masas en el ámbito sindical, además representa el surgimiento de una nueva generación política, tanto en pescadores como en siderúrgicos. En tercer lugar, sucede un fenómeno menos percibido pero que también va a repercutir a todo lo largo de la década del setenta e incluso del ochenta: el año 73 es el año en el cual entra a Sider-Perú un contingente muy grande de obreros a raíz de la ampliación, gente que se concentra sobre todo en las plantas de “planos” y “no planos”.

Durante la década del sesenta había sido dominante en el movimiento sindical chimbotano la presencia aprista, con un estilo básicamente negociador, que distinguía al llamado "sindicalismo libre" propiciado por dicha tendencia, pero que no había dejado de lado instrumentos de lucha como las huelgas para conseguir sus demandas. Esta hegemonía la empezaron a compartir con el Partido Comunista, a finales de la década, en la que era quizás la principal base sindical chimbotana, el sindicato obrero de Sider-Perú (Rodríguez 1980) (Atusparia 1989). Es importante señalar que la pugna entre el APRA y el PC no tiene en este caso las connotaciones de confrontación cerrada que se observan en otros lugares del país. Aquí, ambos compartían el mismo espíritu negociador y el APRA se mostraba más combativa que su promedio nacional. Al mismo tiempo se había fortalecido también el gremio de Construcción Civil, tal como nos informa Wenceslao Risco, por el auge coyuntural de la construcción causado por el terremoto, desarrollándose a su interior las primeras tendencias radicales de envergadura que buscan disputar la hegemonía en la localidad al APRA.

Esta situación se va a expresar en el V Congreso de la FESIDETA, a comienzos de 1973. Diversas expectativas, además de las propias del aprismo, se habían desarrollado en torno a dicho evento. Por una parte el PC que esperaba aglutinar alrededor suyo al conjunto de las fuerzas radicales y así tentar la dirección, por otro, las fuerzas radicales buscaban su propia hegemonía subordinando al PC. Inclusive estas últimas habían alentado la formación de un "Frente de Defensa", organización de carácter social que debía agrupar sindicatos y organizaciones vecinales, "contra" el Estado, en un intento de acumular fuerzas para el evento. Wenceslao Risco nos relata al respecto:

"A principios de los años setenta el Sindicato de Construcción Civil se convierte en el eje de la centralización del movimiento obrero de la provincia. El 72 convoca a todas las organizaciones en todos los niveles, hasta pueblos jóvenes, para conformar el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia del Santa¹². Se elabora toda una plataforma y el objetivo de asumir la dirección de la FESIDETA. Reynaldo

12. Chimbote es la capital de la provincia del Santa, donde se concentra la mayor parte de la actividad económica y social.

Arana (líder de los obreros de Construcción Civil) sale elegido presidente. Se establece una declaración de principios, un programa, básicamente economicista y algunas cosas contra el imperialismo".

Este nuevo contendor que aparece en escena, con su propia coalición de fuerzas, llevará a que el evento tenga resultados inesperados. En cada caso, PC y radicales, contaban con un candidato de prestigio para la Secretaría General, por el PC iba Cristóbal Espinola y por los radicales Reynaldo Arana. Estas disputas llevan a una situación paradójica. La confrontación entre el PC y los radicales los anula mutuamente, permitiendo que el APRA dirija el evento y elija a la nueva Junta Directiva. Hermógenes Villanueva, resiente esta situación y señala:

"...era una forma de sancionar, si se quiere, al PC, pero fue un error porque no era un problema de qué grupo tenía la dirección sino que era un problema de frente único, de frente clasista."

El mayor número de delegados de convicciones izquierdistas permite, sin embargo, cambiar los Estatutos de la Federación, introduciéndose conceptos propios del sindicalismo denominado "clasista", alentado por la izquierda marxista. Pero la introducción de un nuevo discurso "clasista", propiciado sobre todo por la Nueva Izquierda, no supone una dirección en el mismo sentido, lo que nos lleva a señalar que las diferencias en el sindicalismo chimbotano no estaban marcadas por el discurso, sino por la actitud práctica de los dirigentes, teniendo mayor peso hasta ese momento quienes propician la negociación. Aunque esta última posición no implicará renegar de la independencia de sus organizaciones, sino establecer una dinámica de trato con el Estado-patrón.

Este espíritu negociador quizás pueda tener, por el lado del APRA, una explicación en su tradición de trabajo sindical, pero por el lado del PC tiene más que ver con su apoyo al gobierno militar del general Velasco, tal como señala Villanueva:

"...el PC con toda su responsabilidad no puede negar el aval que le dió en un momento al gobierno de Velasco. Creo que este exceso de aval nos costó muy caro en Chimbote."

Tanto el APRA como el PC, como partidos con representatividad nacional, tendían más a seguir la dinámica del conjunto del país, a diferencia de los grupos radicales, de menor dimensión, que más fácilmente se adaptaban a la dinámica chimbotana.

Los sucesos de mayo de 1973 se originan cuando un grupo significativo de pescadores, organizados por partidos de Nueva Izquierda deciden reorganizar su sindicato y darse una directiva democrática, ya que la que estaba en funciones no convocaba a elecciones desde hacía varios años y basaba su fuerza en el respaldo que le brindaba el gobierno. Eligen a una Junta Transitoria para que llame a elecciones y retoman el control de su local sindical. El otro grupo, ligado directamente al Movimiento Laboral Revolucionario, reacciona violentamente y con el apoyo de la policía recupera el local. Frente a esta situación se suceden manifestaciones de apoyo a los pescadores por parte de la mayoría de los trabajadores organizados, particularmente de los siderúrgicos, en el curso de los cuales es asesinado por la policía, el líder siderúrgico y dirigente comunista Cristóbal Espinola, "acribillado desde una camioneta de la Guardia Republicana, encargada de la seguridad de Sider-Perú", según nos señala Hermógenes Villanueva. La muerte de Espinola quizás simbolice la aguda contradicción que atravezaba al Partido Comunista, atrapado entre la necesidad de defender los intereses inmediatos de los trabajadores y su política general de apoyo al gobierno militar.

La situación se agrava y la población inicia una huelga general, encabezada por los siderúrgicos, que dura aproximadamente 10 días. La iniciativa de la huelga se origina en la propuesta de los grupos más radicales dentro del sindicato siderúrgico, quienes toman ventaja de la indignación causada por la represión para ganar el liderazgo de las acciones. En un momento se negocia con la autoridad militar de la ciudad para levantar la huelga, lográndose la satisfacción de varios de los puntos pedidos, como era la investigación y sanción de la muerte del dirigente Espinola, sin embargo no se llega a un acuerdo respecto al retiro de la policía encargada de cuidar las instalaciones de la planta siderúrgica, por lo que no se firma ningún compromiso. Risco, se queja amargamente de la intransigencia de los más radicales:

"...habíamos conseguido que la Guardia Republicana no portara armas en Sider-Perú, habíamos conseguido que se investigara la

muerte del compañero Espinola y se sancionara al responsable, habíamos conseguido que se destinaran fondos para continuar la reconstrucción de Chimbote. Sin embargo, todas esas cosas fueron echadas al agua. No se tomaron en cuenta. Ahí no nos jugábamos la toma del poder, era una cuestión gremial."

La huelga es derrotada al poco tiempo por las autoridades sin hacer ninguna concesión al movimiento, incluso se despiden a 48 trabajadores de Sider-Perú acusándolos de sabotaje a las instalaciones de la planta, disposición que afectará a todos los partidos, incluso al APRA y, sobre todo al PC. Años más tarde, según nos dice César Sánchez, las propias autoridades reconocerían que no se trató de sabotaje sino de un "hecho fortuito" que produjo los daños achacados antes a los trabajadores.

La reacción del gobierno se puede explicar por la importancia que tenía el gremio de pescadores, como "una posición de fuerza", señala Manuel Cortez, desde la cual el MLR podía avanzar en el control de otras organizaciones sociales. El caso es que la fuerza represiva del gobierno militar radicaliza a la población y permite que los grupos más extremos tomen la dirección de las acciones, desplazando tanto al APRA como al PC, por más que estos también participen del rechazo al MLR. A su vez, la radicalización de las medidas de protesta y la falta de permeabilidad para negociar llevan a su total derrota al movimiento. Es decir, la vieja hegemonía APRA-PC se muestra insuficiente para defender a la organización sindical frente a la intromisión del gobierno, pero los sectores radicales tampoco son capaces de mantener los espacios ganados. El fracaso de las tendencias en pugna es lo que hace de estos sucesos un punto de viraje, cerrando un período y abriendo otro, en el que se dará un enfrentamiento más exitoso a la intromisión estatal.

Queda, por lo demás, señalar que después de los sucesos de mayo de 1973, el gobierno militar intenta desarrollar su presencia en el movimiento sindical armando una central departamental de trabajadores paralela a la FESIDETA, la Federación Departamental de Trabajadores de Ancash, FEDETAN, de poca repercusión posterior. Asimismo, crea sindicatos paralelos tanto en Construcción Civil como en Pescadores y logra moderar considerablemente a la nueva directiva del gremio siderúrgico. En el caso de Construcción Civil, se trata de un sector cuya importancia

productiva se hallaba ya seriamente disminuída, debido a que había pasado la etapa crítica de reconstrucción de la ciudad posterior al terremoto. En cuanto a pescadores, también se trata de un sector que productivamente no se encontraba en su mejor momento, aunque aquí la represión jugará un rol fundamental. Los siderúrgicos, a pesar de los golpes recibidos, son quienes mejor atraviezan esta difícil coyuntura, expresándose esto en su recuperación posterior.

Entre 1973 y 1978 se dan algunos fenómenos significativos en lo que al rol del Estado se refiere. El primero, sucede, entre 1973 y 1975, es el intento del gobierno de Velasco de proceder a una ampliación significativa de la planta siderúrgica, tomándose un gran número de nuevos obreros. Luego, entre 1975 y 1978, ya en el siguiente gobierno militar, de Morales Bermúdez, dentro de la tónica de reducir la intervención del Estado en la economía, se procede a privatizar parte de los activos pesqueros y se empieza a dar marcha atrás en los planes de ampliación de Sider-Perú. Ambas políticas tienen efectos importantes en el movimiento. Los nuevos obreros serán el contingente fundamental para la reconstrucción del sindicato siderúrgico y, posteriormente, las medidas privatistas de Morales Bermúdez causaran reacciones, tanto en la pesca como en Sider-Perú.

Entre 1973 y 1975 se produce un importante trabajo de reconstrucción y ampliación del espacio social autónomo por parte de los dirigentes ligados a los grupos de Nueva Izquierda. Una parte de este trabajo se desarrolla en Sider-Perú, donde el Sindicato Obrero y la Comunidad Industrial, luego de los sucesos de 1973, contaban con dirigencias proclives a la patronal. En particular, en el caso de la Comunidad Industrial, donde se encontraban personas ligadas al Movimiento Laboral Revolucionario. A partir del trabajo en las secciones de la fábrica, particularmente en la de "productos planos", de apertura reciente y que aglutinaba a los obreros más nuevos, se empieza a elegir delegados con posiciones independientes de la dirigencia. Esto lleva a generar una oposición que se expresa con motivo de la visita a Sider-Perú del Ministro de Industrias de la época, un general del ejército, quien trata de dirigir la palabra a los obreros. Ello causa una reacción masiva de los trabajadores lo que permite que un activista, Manuel Cortez, suba al escenario y exponga los problemas por los que atravesaban:

"El Ministro dijo: "¿Por qué silban? Yo quiero que ustedes me digan qué pasa aquí". Pucha, me dije, esta es la mía. A mí me habían puesto un cordón de la gente de seguridad de la empresa, entonces yo le metí un empujón a uno y cogí la baranda y me subí. Carajo, me temblaba todo, era la primera vez que me ponía a hablar así. Entonces le dije: "Yo le voy a decir por qué es que estamos haciendo esto" y la gente vivaba. "Ya está bien" dijo el Ministro, "No señor Ministro, no está bien" dije. "Cómo que no está bien" dijo, y yo me seguía mandando. "Porque aquí se ha dicho que nosotros ganamos más que los campesinos y nosotros no estamos preguntando cuánto ganan los generales..." y la gente seguía metiendo bulla... La masa estaba esperando que alguien dijera lo que quería decir y tuve que ser yo. Pudo ser otro también pero no sucedió. Yo lo hice y la gente inmediatamente cerró conmigo a ese nivel."

Como resultado de esta acción los trabajadores logran mejores condiciones para su participación democrática en las instancias que les correspondían, como era el caso de Comunidad Industrial, hasta ese momento controlada por dirigentes cercanos a la empresa.

Con esta acción Cortez inaugura un nuevo tipo de liderazgo, cuyas características analizaremos más adelante, que lo lleva entre fines de 1974 y principios de 1975 a ser sucesivamente elegido Secretario General de la FESIDETA y del Sindicato Obrero de Sider-Perú. En el primer caso significa la primera derrota del predominio aprista en la Federación de Trabajadores y en el segundo, la derrota de la dirigencia pro-patronal que entra luego de los sucesos de 1973. Cortez se convertirá así en un personaje emblemático de la recuperación del movimiento sindical en la zona, aunque luego también pasará por serias dificultades.

La otra parte es la que se desarrolla en la organización vecinal, en el esfuerzo por desarrollar una Federación de Pueblos Jóvenes. Al igual que los sindicatos, los barrios populares también se habían convertido en un campo de disputa entre las fuerzas que apoyaban al gobierno, MLR incluido, y los partidos de la izquierda radical. Estos últimos, tal como nos informa Pedro Colchado, vieron reforzado su trabajo con el desplazamiento de antiguos dirigentes del gremio de pescadores, luego de los sucesos de 1973, que llevaron a los barrios sus habilidades políticas

y organizativas. El Congreso de la Federación de Pueblos Jóvenes tiene un desarrollo accidentado y ocurre en dos etapas, siendo asaltado por los matones del MLR con apoyo policial cuando era claro que las fuerzas gobiernistas no tenían posibilidades de ganarlo. Hugo Marquizado lo recuerda así:

"En ese tiempo, 1975, yo era dirigente de los Pueblos Jóvenes y...fue un asalto violento, armas en mano, con el apoyo de la Sub-Prefectura y la Policía de Investigaciones, en carros oficiales trasladaban a los asaltantes al Congreso. Hubo una evidente y directa participación del Estado."

Sin embargo, el evento se reanuda dos meses más tarde y culmina eligiendo su dirigencia, predominando abrumadoramente activistas ligados a la Nueva Izquierda.

Pero esta etapa que ocurre entre 1973 y 1975 todavía es de superación del repliegue sufrido en 1973 y de lucha contra la injerencia abierta del gobierno a través de MLR. De recuperación de espacios más que de conquista de terrenos mayores. Aunque es importante señalar que las fuerzas políticas que lo dirigen son de izquierda radical, mostrando que su postura intransigente en defensa de los espacios autónomos era la única efectiva frente a la ofensiva estatal en el terreno de la organización social. Otras opciones como la aprista sufren una seria derrota al ser desplazados de FESIDETA y el PC prácticamente desaparece luego de la represión de que es objeto, la muerte de su líder Cristóbal Espinola y la marginación explícita del resto de la izquierda. Respecto de esto último Villanueva señala:

"Nosotros estábamos muy golpeados, todos nuestros cuadros estaban despedidos. Todos, todos despedidos, no quedó ni uno. Todo el trabajo se vino abajo."

El cambio de gobierno, de Velasco a Morales Bermúdez, tiene particular incidencia en Chimbote por la importancia de la presencia estatal y el peso obrero en la fuerza de trabajo. El repliegue del Estado que intenta Morales Bermúdez busca privatizar Pesca-Perú, cortar los planes de ampliación de la siderurgia y recortar varios de los derechos

sindicales dados por el gobierno de Velasco. Además, Morales Bermúdez abandona también el aspecto corporativo del proyecto velasquista y por lo tanto quita el apoyo al MLR. Estas acciones cambian las condiciones de lucha del movimiento social, modificándose quizás algunas de sus demandas, pero sin variar el adversario al que deben enfrentar, que continúa siendo el Estado. No existe ya más el MLR, pero Manuel Cortez nos dirá que con Morales Bermúdez viene "la represión diaria, una práctica liquidación de las libertades democráticas" con el uso directo de la policía y las Fuerzas Armadas. El hecho de que no varíe el adversario lleva a que en la conciencia de muchos trabajadores no se establezcan diferencias claras entre Velasco y Morales Bermúdez, ambos eran "la dictadura militar". A posteriori, sin embargo, se puede observar que el cambio entre una política de disputa de un espacio social determinado, como era el caso del intento corporativo, a una política de destrucción o simple subordinación de la organización social, como se intenta luego, lleva a una reacción radical y masiva de los trabajadores que se va a expresar en los paros nacionales de 1977 y 1978.

El período que va de 1975 a 1978 es un período que se inicia con una recuperación organizativa. El VI Congreso de la FESIDETA a fines de 1974 recupera la unidad entre las fuerzas de la izquierda radical, o en las palabras de Pedro Colchado "el frente único de la izquierda", es decir, le confiere representatividad, aunque fuese temporalmente, a la Federación de trabajadores entre el nuevo espectro de fuerzas dominantes, habida cuenta del desplazamiento de la hegemonía APRA-PC. Esto se completa, ya en 1975, con la elección de Cortez al sindicato obrero de Sider-Perú y la realización del Congreso de la Federación de Pueblos Jóvenes, que afianzan la misma tendencia radical.

La primera lucha de envergadura que se produce en estas nuevas condiciones es la huelga de pescadores a fines de 1976, una huelga de dos meses y diez días que convoca a todos los pescadores del litoral peruano pero que tiene especial repercusión en Chimbote. Se trata del desafío más importante, antes del paro nacional de 1977, que sector trabajador alguno presentó al Estado de Emergencia impuesto por el gobierno de Morales Bermúdez en julio de 1976. El motivo de la huelga es la privatización por parte del gobierno de Morales Bermúdez de la flota pesquera. Las razones de los pescadores eran el temor a la desocupación

que traería esta transferencia, así como una importante retórica sobre las bondades de la propiedad estatal, a la que asumían mejor, a pesar de los sucesivos conflictos habidos, que la privada.

Colchado nos señala que el sindicato de Chimbote se reactiva apenas unos meses antes de la huelga, en julio de 1976, con motivo de las medidas del gobierno, convocándose a asambleas y eligiéndose una nueva Junta Directiva. La huelga, sin embargo, no logra sus demandas. Se trata, quizás, del primer evento de lo que luego sería una dinámica nacional. El gobierno de Morales Bermúdez se caracteriza por su dureza frente al movimiento sindical, en particular cuando lo que estaba en disputa eran aspectos sensibles de su política, como las privatizaciones. Pero en Chimbote este fracaso tiene connotaciones particulares. El gremio de pescadores había sido seriamente golpeado en la lucha contra el MLR, debiendo replegarse, como vimos, a la organización barrial. No sucede en este caso el proceso de recuperación organizativa que se da en otros gremios como el siderúrgico. Sus condiciones para dar una lucha de estas características no eran las mejores, y si la huelga tuvo esa duración y extensión, era porque enfrentaban, o creían enfrentar, su desaparición.

Además, esta huelga abre una fisura importante entre pescadores y siderúrgicos. Estos últimos, no llevan adelante un paro de solidaridad acordado para el 4 de noviembre de 1976, o sea, exactamente en medio de la lucha de los pescadores. Las acusaciones entre los dirigentes son mutuas, respecto de la necesidad o la oportunidad del paro solidario, cayendo finalmente en el campo de la recriminación política, entre los distintos grupos radicales, donde un sector de trabajadores actuó o dejó de actuar por directiva del grupo político que lo influenciaba. Lo real es que la huelga de pescadores no despertaba entre otros sectores una solidaridad masiva, a pesar de su número e importancia económica en la localidad. Esta situación lleva a dirigentes de la época, como Pedro Colchado, a mitificar las cualidades del pescador como "heroico" y "solidario" frente a un proletariado siderúrgico "atrasado" y "economicista" que sólo estaba interesado en sus salarios, así como a los partidos que, según el mismo Colchado "daban las directivas en la clandestinidad, a medianoche y los engañados éramos nosotros porque luego esos intelectuales nunca aparecían". Sin embargo, Manuel Cortez

señala, que a pesar del fracaso en cuanto a sus objetivos específicos, "abrió el camino" para el paro nacional del 19 de julio de 1977. Más allá de la corrección de estos puntos de vista, en esa coyuntura se reflejan las debilidades de un gremio que había sufrido los embates del corporativismo durante el gobierno de Velasco y luego la intransigencia del siguiente gobierno urgido por solucionar la crisis económica.

La otra lucha significativa que se desarrolla en este período es la que llevan adelante los siderúrgicos, una huelga de 52 días por razones principalmente salariales, entre diciembre de 1977 y enero de 1978. Esta huelga, sin embargo, a diferencia de la anterior, termina victoriosa, consiguiendo las reivindicaciones de los trabajadores siderúrgicos así como también varias demandas de servicios urbanos de los barrios populares. Quizás si el logro más significativo en este caso es el grado de solidaridad que se llega a concitar. A principios de enero de 1978 se desarrolla una Asamblea Popular en la Plaza de Armas de la ciudad, donde dirigentes de diferentes gremios y organizaciones sociales forman el Comité Coordinador de Organizaciones Sindicales y Populares (CECOSPA). Esta instancia sirve para organizar el apoyo de la población a la huelga, permitiendo el desarrollo de movilizaciones de los diferentes barrios de la ciudad. Asimismo, esta instancia es la que convoca, sucesivamente, a paros provinciales de 24, 48 y 72 horas, en apoyo a la lucha siderúrgica, hasta que finalmente el gobierno accede a las demandas planteadas.

Al igual que en 1973 parece ser que la formación del CECOSPA, como una forma de Frente de Defensa, estaba también motivada por rivalidades políticas y personales entre quienes estaban en la directiva del sindicato siderúrgico y quienes conformaban la dirigencia de FESIDETA, a decir de Hugo Marquesado, los primeros "no se sentían representados" por estos últimos. Sin embargo, en este caso, CECOSPA no se limitó a ser un instrumento de acumulación de fuerzas de un sector contra otro, sino que organizó la solidaridad de la población y las demandas del conjunto. Así nos señala Marquesado:

"El año 77-78, con la huelga, con la huelga de Sider-Perú, surge el CECOSPA, organiza comités barriales en todo Chimbote y con el apoyo de los diferentes sectores populares moviliza a miles de

personas...Este CECOSPA logra desarrollar la primera experiencia de Asamblea Popular, que se hizo el 4 de enero de 1978, después de un mes de huelga. Allí se decretó el paro del 5 de enero de 1978, que ha sido desde mi punto de vista el paro más grande que ha habido en Chimbote, con bloqueo de avenidas, pistas y en general de todo Chimbote."

Y, agrega Manuel Cortez:

"Se forma el CECOSPA y se obtiene una victoria política, porque logramos hacer retroceder a la dictadura, logrando reivindicaciones no sólo para los siderúrgicos sino también se consiguen cosas para los pueblos jóvenes, que se hagan pistas, veredas etc."

Fue tal la envergadura del movimiento que la población llegó a cortar la carretera Panamericana por cerca de diez días, a pesar del control militar existente. Las diferencias entre los siderúrgicos y FESIDETA quizás pueda explicarse por el liderazgo ejercido por el sindicato de trabajadores de Sider-Perú, de lejos el más poderoso del lugar, que difícilmente se podía someter a la directiva de la Federación local de trabajadores, pero que sí podía arrastrar tras suyo la solidaridad de los más diferentes sectores de la población. Para Manuel Cortez este fenómeno lleva a considerar los Frentes de Defensa en Chimbote como una extensión del movimiento sindical, en este caso podríamos decir, más precisamente, del sindicato siderúrgico. Esta actitud, de cierta soberbia del sindicato siderúrgico, en relación con los otros gremios chimbotanos, contrasta con la fidelidad a su central nacional, la CGTP, que se manifiesta en el acatamiento, aunque fuera formal, de todas las medidas que esta decretara.

En cuanto a los paros nacionales de la época, en julio de 1977 y mayo de 1978, hay opiniones contradictorias. Por una parte, tiende a haber concesiones a la imagen nacional de triunfo que transmitieron estas paralizaciones, por otra, sin embargo, se acepta que en Chimbote, como señala César Sánchez, "no se obedece a una dinámica nacional sino que tiene su propio desarrollo", se imponía la dinámica local e incluso sectorial, que hemos tratado de diferenciar en el caso de pescadores y siderúrgicos. En cuanto al paro nacional del 19 de julio de 1977, Hugo

Marquezado relata que pocos días antes, buena parte de los dirigentes populares son detenidos por la policía en una reunión de preparación del paro y luego de realizado este son despedidos de sus puestos 52 dirigentes sindicales. Mejor suerte y mayor participación tuvo la doble jornada del 22 y 23 de mayo de 1978. Cabría decir que el fracaso de la huelga de pescadores no fue el mejor antecedente para el paro de julio de 1977, en cambio, el triunfo siderúrgico de principios de 1978 creó mejores condiciones para el paro nacional de mayo de ese año. Sin embargo, en ningún caso, logran desarrollarse movilizaciones de la envergadura de las que motivaban las reivindicaciones locales.

Vemos que el período que va de 1975 a 1978 significó una ampliación del espacio social propio del movimiento popular en Chimbote. Una ampliación en términos de organización e incorporación de nuevos actores, que revierte, como señaláramos, la situación de 1973. Sin embargo, es una ampliación de espacio basada en la fuerza y el liderazgo de un solo sindicato, el siderúrgico, que se sirve y a la vez es usado por diversas organizaciones sociales para conseguir múltiples reivindicaciones. El aspecto sindical-obrero sigue siendo el predominante en la construcción de los espacios sociales y las reivindicaciones atienden a la defensa, construcción y consolidación de los espacios que se van ganando, tanto en la organización sindical como en la barrial.

Las debilidades del proletariado chimbotano se muestran, sin embargo, en la eventualidad o transitoriedad de sectores como Construcción Civil o Pescadores, que en un momento llegan a ser muy importantes, pero que luego, por los problemas de su base productiva, ligados a las dificultades de la intervención estatal, no logran consolidarse ni económica ni sindicalmente.

D. LA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA

La primera impresión política de los nuevos obreros cuando llegan a Chimbote es que se trata de un medio con mayores canales de participación. César Sánchez nos dice:

“Aquí en Chimbote al ingresar a Sider-Perú encontré que había un espacio más amplio que permitía la participación y el mecanismo

principal fue el sindicato. Era donde podían salir los que estaban decididos a luchar. En la medida en que habían acciones de masa, entonces había forma de expresar descontento o el rechazo a determinadas medidas...Esa es mi primera incursión a nivel sindical, como me fui forjando como dirigente."

El hecho de que sean obreros de primera generación cuya memoria refiere al mundo tradicional, inmerso o cercano al campo, donde prima la sumisión a grandes o pequeños señores locales, hace que esta experiencia de inserción política en el medio urbano se viva como una ruptura. El canal más importante de esta participación es el sindicato y el vehículo de socialización política, los partidos, particularmente, en los años de nuestro estudio, las agrupaciones de la denominada Nueva Izquierda.

En estos años de gobierno militar la importancia política de los espacios sociales es mayor, particularmente en medios como el sindical y en experiencias como Chimbote, que observan un rápido crecimiento de la población asalariada. Las razones están dadas por las condiciones de dictadura que priman en el ámbito nacional y hacen muy difícil, sino imposible, la participación en las decisiones de gobierno. Sin embargo, en este caso no solo es la dictadura lo que lleva a relevar la importancia política de lo sindical, sino también el momento inicial de proletarización que vivían los trabajadores. Para ellos volverse obreros fue la forma de acceder al mundo urbano y convertirse en actores capaces de tomar decisiones sobre sus intereses. Ahora bien, como señala Eduardo Cáceres, el interés de participación de la masa de trabajadores era "de contenidos muy específicos dentro de un universo general clasista y de oposición al Estado", o sea, estaban interesados en puntos reivindicativos inmediatos, a la vez que reconocían a quien debían enfrentar, quizás de allí la relevancia de lo sindical.

Podemos diferenciar, entonces, un proceso más global, casi estructural, de democratización social, en cuanto acceso a un mundo libre de las subordinaciones señoriales. Pero esta democratización social es más una posibilidad o un abanico de posibilidades que se le presentan al trabajador, no todavía una norma y un mecanismo específico de toma de decisiones, que se empezará a dar en el ejercicio de la práctica sindical.

Pero si la política se desarrolla como lucha sindical ello no significa que no existiera una perspectiva mayor referida al gobierno nacional. Esta perspectiva es lo que Manuel Cortez denomina "conciencia anti-dictatorial", es decir, son trabajadores que viven la experiencia de la imposición vertical del gobierno a través del sindicato. El sentimiento anti-dictatorial, tal como lo señalamos en el acápite anterior, va a ser el que define el período de estudio entre 1973 y 1978, señalando un continuum entre Velasco y Morales Bermúdez, y poniendo por delante el respeto al derecho que tenían a decidir en sus propios espacios. Gobierno se identifica para ellos con dictadura, y, por oposición, sus esfuerzos de autonomía y participación con democracia.

Hemos reseñado el primer hito de esta conciencia anti-dictatorial en el enfrentamiento al MLR en 1973. Allí se modelan las condiciones y los actores del enfrentamiento para los años siguientes y la perspectiva democrática que estos desarrollan. Quienes como el APRA, estaban más ligados a prácticas de convivencia con el poder, o el PC, que se debatía entre la lealtad a sus bases y el apoyo al gobierno militar, quedaban descartados como protagonistas del nuevo sentido democrático que emergía desde los sindicatos.

Pero este sindicalismo era posible por los partidos. Manuel Cortez nos reitera que se trataba de un "sindicalismo rojo", aludiendo a la identidad entre grupo radical y gremio. Así nos dice sobre la actividad de su partido, el PCR, dentro de Sider-Perú:

"Nosotros teníamos el librito rojo y nuestros boletines que no diferían mucho. En una sección se llamaba "Palabra proletaria", en otra "Puño de Acero" y en otra "El Forjador". Como el sindicato no sacaba nada, y eso era fundamental, (a nivel general) nosotros metíamos "El Siderúrgico Rojo".

Incluso, a nivel de la ciudad de Chimbote, se llega a identificar a cada sindicato por el grupo o la alianza de grupos que predominara en su Junta Directiva. Los partidos eran los que impulsaban la vida sindical, posibilitando, nos dice Wenceslao Risco, "el nivel de conciencia" necesario entre los trabajadores acerca de sus problemas, sin ellos cree que hubiera sido imposible organizar las demandas.

Sin embargo, la práctica de los partidos tiene también críticos, Colchado señala una actitud paternalista que, según él, impide que surga una élite dirigente desde la propia base. Refiere también que "el que sacaba la cara" para llevar adelante una táctica acordada por el partido era el dirigente sindical y si no lo hacía era calificado de "traidor". Explica esto como una actitud de utilización que tiene como eje el desarrollo de tal o cual organización política, generalmente clandestinas, y no necesariamente del sindicato, recibiendo la primera los beneficios y corriendo la segunda con los costos. Haya sido una utilización unilateral o mutua, esta importante presencia partidaria demuestra las limitaciones del sindicalismo impulsado por la Nueva Izquierda, y, en buena medida, su restricción a los trabajadores ligados a los grupos políticos.

Contradictoriamente los partidos de la Nueva Izquierda impulsan la participación de los trabajadores y del pueblo en general, pero al mismo tiempo la limitan. Insisten en instrumentos de lucha como las asambleas y las movilizaciones e incluso encuentran en ellos su fuente de legitimidad, frente a los grupos que desplazan como el APRA o el PC, pero son particularmente cuidadosos en el monopolio de la toma de decisiones. Cortez mismo señala que las decisiones eran prerrogativa de la cúpula que expresaba a las organizaciones políticas y los mecanismos sindicales eran "correas de transmisión". Esto no quiere decir que la mayor participación fuera una ficción, pero sí que en buena medida era una "presencia", más o menos activa, de los trabajadores, y no tanto una participación en mecanismos que le permitieran ejercer decisión. Esto no significa tampoco que los partidos tuvieran una capacidad de manipulación absoluta sobre los trabajadores, un partido puede ser hegemónico en un determinado momento siempre y cuando satisfaga determinadas necesidades de las bases, si deja de hacerlo o la situación cambia, generalmente la dirección sindical es removida. Manuel Cortez es aquí un buen ejemplo. Desarrolla su liderazgo enfrentándose intransigentemente a los directivos de la empresa e incluso a un Ministro que pasa de visita, en momentos especialmente duros, entre 1974 y 1975, cuando era muy difícil conseguir concesión alguna. Obtiene importantes éxitos al recuperar la conducción del gremio para posiciones independientes de la empresa y lograr diversos canales de participación democrática para los trabajadores. Sin embargo, en un siguiente momento, cuando había necesidad de negociar, pierde las elecciones y otros

dirigentes toman su lugar procediendo a las negociaciones. En retrospectiva el propio Cortez nos señala: "Mi gestión como dirigente sindical estuvo caracterizada por la confrontación permanente y eso no siempre es del gusto de todos".

Es importante también señalar que este aliento y limitación simultáneos a la participación lo hacen los grupos radicales desde una perspectiva estratégica de toma del poder y ruptura revolucionaria. Ello implicaba buscar la forma de agudizar los conflictos, estimulando la movilización de las bases, la toma de medidas como paros, huelgas, asalto de locales, que condujeran a crear las condiciones para un futuro levantamiento armado. Esta perspectiva se veía favorecida por la existencia de un régimen dictatorial, sin mayores canales de participación nacional, que convalidaba sus proposiciones radicales. Esta concepción tendía pues a tomar el trabajo sindical más en un sentido instrumental, en función de sus objetivos políticos, que por la necesidad de afianzar la organización de base.

Desde esta experiencia sindical de la política el acercamiento a una dimensión nacional que no fuera exactamente de traducción dictatorial presentará serias dificultades. La convocatoria electoral de Morales Bermúdez tendrá así variadas lecturas. Hermógenes Villanueva, será quizás la versión más gremialista: "los paros nacionales desenmascaran la apertura de Morales". Julio Caipo, dirigente bancario, en entrevista que nos brindara, continuará con la confusión, entendiendo democracia como las libertades democráticas necesarias para el trabajo sindical. Eduardo Cáceres, por último, dice sin ambages que para la izquierda de la época la convocatoria electoral fue simplemente un truco. El grito característico de la época ¡Abajo la dictadura, gobierno popular! hace ver que no había otra perspectiva frente a los problemas del gobierno nacional que su derrocamiento y el cambio por otro de naturaleza diferente. La idea de derrocamiento, por más que se quedara en la propaganda, no se condecía con procedimientos democráticos de recambio gubernamental. No es esta, sin embargo, la actitud de la masa trabajadora, allí predomina una actitud más práctica, que Cáceres denomina "ladina", de probar para ver qué pasa, si de repente por allí puede haber alguna solución a sus problemas.

Es interesante, además, observar cómo en las sucesivas elecciones que se producen desde 1978 en la ciudad de Chimbote, siempre gana el APRA. Es decir, no se traduce la predominancia de la izquierda, a nivel sindical, en el plano electoral. Quizás a ello contribuya una antigua tradición aprista en la región, que data de varias décadas y demuestra ser más poderosa que las nuevas identidades sindicales. Sin embargo, existe también una cierta desconfianza en el mismo sujeto trabajador cuando vota para la directiva de su sindicato y cuando vota para una elección nacional. Los requisitos de confianza en ambos casos son distintos y seguramente, como nos dice César Sánchez, la beligerancia sindical y la retórica radical propia de ese ámbito, no ayudan en el segundo de los casos. Hugo Marquezado es aún más explícito al respecto:

“Los trabajadores veían a los compañeros de izquierda como defensores consecuentes y honestos de sus intereses económicos inmediatos, pero no les veían como que estaban en capacidad de decidir los destinos del país.”

Las posibilidades democráticas no trascienden, con todas sus limitaciones, el ámbito social, en particular del sindicato. No es imaginable para esta experiencia sindical de la política que la dictadura pueda exhibir convocatorias democráticas verídicas. Los asuntos del gobierno nacional y del Estado en general, son de “otros”, en una relación ajena y excluyente con las cosas que ocupan a los trabajadores.

E. EL CLASISMO: UNA IDENTIDAD SOCIAL

El espacio social que los trabajadores construyen, a través de los partidos de la Nueva Izquierda, para organizar sus demandas, va a tener una expresión de identidad que los distinguirá de otros esfuerzos de organización sindical. Esta expresión la denominarán en el propio ámbito del movimiento social “clasismo”. La predominancia de la Nueva Izquierda en la organización sindical y barrial de Chimbote durante el período de estudio hará que estos grupos identifiquen como propia esta distinción, por oposición al antiguo discurso de conciliación aprista, de apoyo a las reformas que proponía el PC, o de intervención y subordinación como planteaba el MLR. Sin embargo, esta identidad con una tendencia política no impedirá que el “clasismo”, como distinción, abarque a capas

mayores de trabajadores que muestran su simpatía por una actitud en la organización y la lucha sindical.

Pero ¿cuáles son los elementos de definición de esta identidad en Chimbote? Julio Caipo nos dirá, en forma general, que el clasismo era apoyar lo que "convenía" a los trabajadores, Manuel Cortez insistirá en que era la defensa de sus derechos, César Sánchez pondrá el acento en el aspecto de la participación y Eduardo Cáceres, más globalmente, señalará que era la democracia tumultuaria y radical, en universos circunscritos como el sindical. Derechos, democracia, y radicalidad, facilitados en su convergencia por el conflicto con el Estado-patrón, que parecía encarnar todo lo contrario.

Ahora bien, este clasismo se vivía como defensa de reivindicaciones inmediatas, cuyos contenidos siempre tendían a ser precisos. Reivindicar, casi siempre cuestiones económicas, era poner en acción la identidad, es decir, hacer política en las condiciones de este sindicalismo. Por esta razón era muy difícil distinguir sindicato de partido, no estaba establecida una acción diferenciada para cada uno de ellos. A lo sumo, el partido ponía el discurso, que además de hablar de la radicalidad de la acción inmediata se extendía en una recargada retórica sobre la necesidad y las características de la toma del poder, aunque sin fijar las relaciones entre una y otra cosa. En términos de política concreta quedaba entonces, nada más, la acción inmediata. Marquezado insiste por eso en que la política desde esta perspectiva era: "sindicato, movilización, olla común, comunicado".

Los dirigentes de este sindicalismo clasista se pueden definir como audaces, valientes y sobre todo honestos, dispuestos a tomar la iniciativa en una acción que casi siempre era de confrontación. A estos elementos unían la posibilidad de ser revocados en cualquier momento en su mandato, no sólo por la interminable competencia entre las diferentes fracciones del radicalismo y los apetitos personales de diversos líderes, sino también porque el trabajador común y corriente que adhería al clasismo consideraba como la prueba de transparencia del dirigente la posibilidad de que fuera revocado. Ello se demuestra en la gran movilidad de dirigentes clasistas en el período, lo que respondía a esta sensibilidad de los trabajadores. Cáceres señala:

"Hay mucha revocabilidad y en respuesta a eso las dirigencias clasistas son muy inestables. Ha quedado esa huella de que si una persona está mucho tiempo en el cargo, está robando."

Estos elementos se daban en contraste con los que habían caracterizado a los dirigentes, principalmente apristas, en los períodos anteriores. Estos eran caudillos que tenían la imagen de ser proclives a la corrupción y que solían durar largo tiempo en los cargos sindicales.

Toda política que no se diera en estas condiciones, de acción inmediata o retórica estratégica, era pasible de sospecha o considerada simplemente como "mala" para este clasismo. De allí las dificultades para entender la convocatoria electoral y la idea misma de la representación política. Cáceres señala que por su propia práctica el clasismo buscaba tramitadores más que representantes, es decir, alguien que hiciera las gestiones para solucionar sus demandas. Otro rol que saliera del espacio sindical era considerado como posible de contaminarse con el gobierno nacional, un mundo ajeno con el cual casi siempre habían tenido relaciones de conflicto.

Cusco: el radicalismo andino

A. EL CUSCO ROJO EN LA CIUDAD DE LOS SEÑORES

LA CIUDAD DEL CUSCO, en el sur andino del Perú, es una urbe de mediano tamaño en relación al país en que se encuentra (130 mil habitantes en 1972) (Monge 1981), pero con una tradición histórica y cultural de primer orden debido a su condición de capital del imperio del Tahuantinsuyo en el momento de la llegada de los españoles. Esta característica, a pesar de su reconstrucción como ciudad colonial por los conquistadores, se continúa en su condición de referente cultural del mundo andino, en especial de la cultura quechua y, en el siglo XX, de la preocupación intelectual indigenista.

Desde la tercera década del siglo la ciudad ha sido considerada un baluarte político del Partido Comunista, cuya fundación regional, en 1927, precedió a la del Partido Socialista del Perú realizada por José Carlos Mariátegui un año más tarde. El comunismo cusqueño, a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, privilegia en sus inicios el entronque con la tradición indigenista del lugar lo que le permite influencia y arraigo regionales (Lynch 1979). Por esta razón el apelativo de "Cusco Rojo". Sin embargo, se trata de un comunismo de precaria base obrera. Si en sus primeros lustros los comunistas realizaron un importante trabajo entre los trabajadores textiles y de construcción civil, así como entre algunos gremios artesanales y de servicios, fundando en 1942 la Federación de Trabajadores del Cusco (FTC), la ruina de la primera

industria y el carácter coyuntural de la segunda, los limita con el tiempo al artesanado, la intelectualidad y la asesoría campesina. La región, por lo demás, no es ni ha sido industrial sino agraria, predominando, hasta la Reforma Agraria de 1969, una estructura semi-feudal en el campo. Esto hacía del conflicto social una confrontación ancestral entre señores y siervos en la que los comunistas no intervienen sino episódicamente hasta fines de la década del cincuenta, teniendo una participación decisiva, a través de la Federación de Trabajadores, para la fundación de la Federación Departamental de Campesinos de Cusco (FDCC) en 1961.

La ciudad ha sido el referente urbano de los dueños de la tierra. Desde su construcción como ciudad colonial sobre las ruinas de la capital del Tahuantinsuyo se perfiló como una urbe señorial, ajena al campesinado indio que la rodeaba. Esta contradicción, de ciudad terrateniente que muchas veces intenta recuperar lo indígena como preocupación intelectual, pero desprecia al indio como tal, va a marcar no solo al estrato dominante señorial sino que se prolongará al propio movimiento social urbano, influido, vía los sectores medios, de la cultura señorial terrateniente.

Artesanos, proletarios y clases medias van ganando, sin embargo, progresivamente, espacio social en el siglo XX y los comunistas cumplen un rol al liderar su impronta. Pero estos sectores sociales no logran cambiar el carácter de la ciudad, por lo menos hasta la década del cincuenta. Es aquí cuando un terremoto, en 1950, y el movimiento campesino, en la segunda mitad de la década, expresan los límites de la dominación terrateniente. No es coincidencia por ello que el primer movimiento popular urbano de envergadura en el pasado inmediato tenga lugar en abril de 1958 (Sotomayor 1984), cuando se forma, a iniciativa comunista, un "Comité Popular" para protestar contra el alza del precio de la gasolina y su repercusión en los demás precios básicos de la economía. Este movimiento captura a las autoridades y asume el control de la ciudad durante dos días, negociando sus demandas en la capital de la República. Esta es, quizás, la primera vez que la ciudad pertenece a otros que no fueran los señores de la tierra.

La toma de la ciudad en 1958, la influencia que ejercían en la Federación Departamental de Trabajadores y la Federación Departamental de Campesinos, así como en la Federación Universitaria Cusco (FUC),

que agrupaba a los estudiantes universitarios, da una idea de la importancia comunista en la ciudad e incluso en la región. Sin embargo, su proyección en el campo no trasciende la asesoría gremial, sin llegar a la intensidad de otros trabajos políticos más limitados en tiempo y espacio pero también más profundos, como el trotskista, a través del Frente de Izquierda Revolucionario (FIR) y su carismático líder Hugo Blanco, en los valles de La Convención y Lares, entre 1958 y 1962. Vladimiro Valer, en ese momento activista del FIR, en entrevista que nos brindara, achaca esta aparente superficialidad del trabajo agrario del PC a que: "El Partido Comunista no creía en el movimiento campesino", supuestamente privilegiando una perspectiva obrerista más ortodoxa. Es tal el sello que llega a imponerle el FIR a su trabajo puntual de La Convención y Lares que Mario Herrera, otro activista sindical y político de la época, cuando lo entrevistamos señala que el movimiento campesino llega a identificarse como "trosko" en la coyuntura de auge de principios de los sesentas. Pero a pesar del relativo éxito troskista por su mayor cercanía a las bases campesinas, Herrera señala que el debate que estas diferencias de estilo y objetivos políticos producían en el seno de la Federación Departamental Campesina, no dejaban de ser "una polémica entre asesores".

De igual forma la proyección ciudadana de la hegemonía comunista presenta también importantes limitaciones. En las elecciones generales de 1962, a pesar de los límites de aquellos procesos electorales donde, por ejemplo, no votaban los analfabetos, las listas encabezadas por el PC no alcanzan, en el Cusco, el 5% de la votación (Roncagliolo 1980).

Estas limitaciones, tanto en su trabajo en el campo como en su proyección ciudadana, llevarían a que la ruptura que sufre el Partido Comunista a nivel nacional el año 1963¹³, tenga particular repercusión en el Cusco, debilitando su influencia gremial, especialmente la campesina y la estudiantil. Esto lleva a una situación que, Ricardo Baylón, maestro y dirigente del Partido Comunista, señala de la siguiente forma:

13. A fines de 1963 el Partido Comunista Peruano se divide entre una facción moscovita y otra maoísta. Los primeros mantienen su unidad, por lo que se les reconoce como "Partido Comunista", los segundos, en cambio se subdividen en múltiples facciones que toman el nombre del eventual periódico que publican o de algún lema que los caracteriza.

“Antes el movimiento popular estaba centrado bajo un solo mando político que era el PC, después de las divisiones internas del partido y las divisiones sindicales, aparecen un conjunto de movimientos políticos en el Cusco que dan lugar a una especie de archipiélago político.”

Si a esto agregamos la represión que sufren las posiciones de izquierda como producto de las guerrillas de 1965, que intentan abrir un frente militar en el departamento del Cusco, encontraremos que la proyección del liderazgo político comunista, promisorio a principios de la década, atravesaba, a mediados de los sesentas, por una seria crisis.

La ciudad, sin embargo, ya no sería más de los señores de la tierra. El comienzo de sucesivas reformas agrarias, la creciente presencia del Estado fruto del primer gobierno de Beláunde y los inicios del turismo masivo, harían aparecer nuevos sectores sociales, particularmente artesanos, trabajadores de servicios y empleados del Estado. El Censo de 1972 da una composición de la PEA urbana para la ciudad del Cusco donde los sectores de transporte, comercio y servicios superan el 50% y la industria sólo llega al 14% (Monge 1981), presumiblemente artesanos en su mayoría.

B. ¡KAUSACHUN VELASCO!

¡Kausachun Velasco! en el idioma de los quechuas o ¡Viva Velasco!, será un grito que marcará los primeros años de la década del setenta en el Departamento del Cusco, desafiando la hegemonía de otro lema, el de “Cusco rojo, siempre será” que luego de décadas de predominancia indiscutible mostraba en ese momento su identidad confundida.

La ley de Reforma Agraria dada en 1969 por el gobierno militar del general Velasco va a tener un profundo impacto, tanto en el campo como en la ciudad del Cusco. El Departamento se convierte en algo así como el laboratorio de sucesivas legislaciones de Reforma Agraria, luego del poderoso movimiento campesino que ocurre entre 1958 y 1962, pero ninguna tiene la trascendencia de la reforma velasquista. Tanto por su impacto en la destrucción del poder terrateniente, terminando un proceso que había iniciado en décadas anteriores el movimiento campesino,

como por la extensión de la presencia estatal al mundo rural y el intento de organizar masivamente al campesinado en apoyo a su política reformista. Vladimiro Valer, que luego de su militancia troskista trabajó como funcionario de SINAMOS, nos señala que "se logró llegar a organizar a los campesinos en los lugares más alejados". Esta medida, sin embargo, va a dividir campos en el movimiento popular cusqueño.

El poder gamonal, que era el poder local y regional de la casta terrateniente, sufre un embate decisivo con esta Reforma Agraria. No tanto en las provincias que habían tenido el movimiento campesino más poderoso, como es el caso de La Convención y Lares, sino en las denominadas "provincias altas" del Departamento donde permanecían seculares e intocadas las estructuras del poder terrateniente. Aquí, es la intervención estatal la que permite terminar con un agente de opresión social como eran los señores de la tierra e incluso organizar al campesinado en lo que se denominó las "ligas agrarias" en cada provincia, que a nivel departamental se juntarían en la Federación Agraria Revolucionaria "Túpac Amaru" (FARTAC). Es decir, como señala cuando lo entrevistamos, quien en ese entonces era dirigente sindical de los trabajadores universitarios, Elmer Abarca: "este cambio en el Cusco se ve muy claro, los campesinos e indios habían ganado con Velasco un espacio que no tuvieron por muchos años, desde Túpac Amaru".

Pero esta intervención del Estado no se apartó de lo que fue el común denominador de la práctica velasquista, tanto en términos de organización productiva como social, es decir, la imposición de un modelo desde arriba, sin tomar en cuenta las peculiaridades del lugar. Esto significó reorganizar las antiguas haciendas como cooperativas manejadas por burócratas estatales, que solo concedieron un rol marginal a las antiguas comunidades indígenas, así como también muy poca preocupación por establecer continuidad entre las antiguas organizaciones campesinas independientes, en muchos casos destruidas o seriamente debilitadas, y las nuevas que se creaban para impulsar el proceso. Esto llevó a un práctico paralelismo por parte de las ligas agrarias, que Vladimiro Valer señala como uno de los más serios errores del velasquismo. El control estatal de inspiración castrense, dejó, así, un margen estrecho para el apoyo, no solo campesino, sino de vastos sectores sociales que habían luchado también contra la opresión terrateniente. Sin embargo, uno de

los polos del conflicto social fundamental desapareció (los terratenientes) abriendo nuevas posibilidades de desarrollo para el campesinado, pero, que a la postre también se frustrarían.

Como señalábamos, la reforma agraria velasquista ahondó divisiones que ya se venían procesando en el movimiento popular cusqueño. En particular su intento de organizar directamente a los campesinos en apoyo a las reformas a través de la FARTAC, despertó múltiples resistencias y suspicacias. Más allá de la posición que cada grupo político tuviera frente al gobierno, esta acción rompía con la tradición de independencia que había tenido el movimiento popular en la región, además de significar una competencia política de envergadura, donde los medios con que contaba el gobierno en el corto plazo eran muy superiores a los de cualquier eventual adversario.

La situación de las fuerzas políticas izquierdistas interesadas en organizar las demandas populares reflejaba esta situación de crisis. Por una parte la división del Partido Comunista, que debilitó seriamente su influencia sobre las organizaciones sociales que otrora controlara monóticamente. El PC "oficial" mantuvo su influencia sobre la Federación de Trabajadores y siguió la línea de su dirección nacional apoyando el proceso de reformas del velasquismo. Esta posición, sin embargo, restó influencia a la Federación de Trabajadores sobre el movimiento popular urbano, particularmente el sindical, porque la puso en la incómoda situación de apoyar un gobierno, mediatizando los conflictos laborales que se daban en su ámbito, sin que este se mostrara muy interesado en su concurso como fuerza protagónica. La fracción maoísta más importante fruto de esta división "Patria Roja", desarrolló trabajo entre los estudiantes universitarios, con particular incidencia como señala Alex Bustamante¹⁴, dirigente estudiantil maoísta en aquel período, entre los que venían de las provincias del Departamento, formando, nos dice, "los famosos círculos de estudiantes de las provincias" controlando, así, la Federación Universitaria Cusco. Asimismo, a partir de su trabajo estudiantil, organizó un sindicato de maestros, el SUTEP, que

14. Entrevistado por el antropólogo Elemer Abarca para otro estudio sobre el mismo período.

tuvo en el Cusco a una de sus bases más combativas. La posición de Patria Roja era de radical oposición al gobierno militar, al que calificaba no solo de reformista y contrarrevolucionario sino incluso de "fascistizante". Por último, algunos caudillos aislados de posiciones maoístas recalcitrantes, se afincaron en los restos de la Federación Departamental de Campesinos, rechazando la reforma agraria como una maniobra gubernamental. A estas fuerzas de origen comunista se sumaron los partidos marxistas de la Nueva Izquierda, en particular Vanguardia Revolucionaria, desarrollándose en la región al influjo de militantes, de procedencia universitaria, venidos de Lima. En un primer momento VR concentra sus esfuerzos en la Universidad local, desplazándose luego al campo para iniciar un trabajo que con el tiempo le daría importantes resultados. La posición de este último grupo frente al gobierno militar se resumía en la calificación de "reformista burgués" que lo llevaba a una oposición al mismo, aunque sin la radicalidad de los maoístas ortodoxos.

La iniciativa de organización social y política del gobierno militar, a través de un organismo especializado, el ya mencionado SINAMOS, generó un movimiento de corte anti-dictatorial que tuvo como su ámbito inmediato a la ciudad del Cusco. Este movimiento, cuyos picos ocurrieron en agosto de 1971 y noviembre de 1973, se basó en la rápida, casi explosiva, capacidad de movilización de los estudiantes universitarios, agrupados en la FUC y dirigidos por Patria Roja. Esta capacidad es la que lleva a afirmar a Alex Bustamante, refiriéndose a su organización, Patria Roja:

"...creíamos que el movimiento universitario era el factor casi dirigencial de los hechos políticos y sociales por una simple razón, porque era el ente más dinámico en el movimiento popular en Cusco, era un movimiento que podía salir de la noche a la mañana."

El motivo inmediato del movimiento fue la respuesta a una legislación universitaria represiva dada por el gobierno militar para extirpar la política radical de la Universidad y el intento por parte de la izquierda universitaria de establecer una forma de gobierno autónomo de los claustros. En ambos casos, sin embargo, se intentó formar Frentes Populares, que tomaron el nombre de Frente Unico de Defensa de los

Intereses del Cusco (FUDIC), buscando agrupar a otras organizaciones populares en conflicto. El sector de influencia inmediata fueron los maestros organizados en el SUTEP y también influidos por Patria Roja, que habían, precisamente, realizado el congreso de fundación de su sindicato en 1972, en la ciudad del Cusco. También se agruparon algunas organizaciones de pobladores y pequeños comerciantes que tenían problemas inmediatos que resolver.

El conflicto más importante de este período se da en noviembre de 1973, cuando en una movilización de estudiantes universitarios es muerto por la policía el estudiante Jaime Salas. Como reacción al día siguiente, 23 de noviembre, los universitarios queman el local del SINAMOS en el centro de la ciudad del Cusco. Nadie ha aceptado nunca, explícitamente, la autoría del incendio, pero es claro, tal como nos señala nuestro entrevistado Carlos Paredes, dirigente estudiantil y militante de Vanguardia Revolucionaria en la época, que este simboliza el rechazo, por lo menos de buena parte del Cusco urbano al gobierno militar. SINAMOS era el organismo encargado de la política de organización social del gobierno, por lo tanto, blanco privilegiado de quien se opusiera a ella. Vladimiro Valer va a llamar la atención sobre el hecho de que el incendio se produzca al poco tiempo del mitin, de apoyo a la reforma agraria, que organizara la FARTAC el 4 de noviembre de 1973, según muchos observadores uno de los mítines campesinos más grandes que hayan habido en el Cusco, así nos dice:

“No recuerdo cuántos habrán sido, pero había gente que no entraba en la plaza. Fue una cosa gigantesca y eso produjo un fenómeno extraño, nuevo, del que no le podría dar explicación. Todo el mundo se alarmó y preguntaban ¿qués esto? Nunca en ninguna movilización campesina anterior y eso que el Cusco fue escenario de muchas movilizaciones campesinas se había visto algo así. Y los campesinos actuaron, los chumbivilcanos, por ejemplo, tenían piquetes con lazos y ya habían laceado y capturado a varios estudiantes que estaban posiblemente distribuyendo volantes contra el mitin. Ahí parece que hubo la interpretación de que se estaba preparando la invasión de la universidad y la toma de la ciudad por parte del campesinado. Por la cantidad de campesinos fue casi una toma de la ciudad en esa oportunidad que debe haber alarmado a cualquiera. Eso podría

explicar la reacción que se dió después, en una marcha, en una eclosión que indujo al incendio de SINAMOS, que más que intencional me parece que fue una cosa muy espontánea."

Quizás por ello Mario Herrera, dirigente del gremio de Construcción Civil en esa coyuntura, diga que la quema de SINAMOS expresa "odio al campo" por parte de quienes lo hicieron. Corroborando esta versión, aunque desde una visión contrapuesta, Carlos Paredes, dice que el gobierno movilizó su fuerza campesina para enfrentar a la ciudad, generándose un movimiento anti-dictatorial que fue "aplastado por el ejército".

Mucho se ha especulado sobre las causas de esta reacción anti-dictatorial que se plasma en el atentado referido. Sin embargo, si nos atenemos a la composición social de la multitud que protagoniza las movilizaciones: estudiantes universitarios y maestros, veremos que se trata de dos sectores que ven deterioradas sus expectativas de ascenso social, en particular en el ámbito de una ciudad provinciana y andina como el Cusco de principios de los setentas. La actitud de rigor y orden que el gobierno militar busca implantar en las universidades es entendida por los estudiantes como un intento de limitarles su acceso a la enseñanza superior, cortando un cañal de movilización social privilegiado en la sociedad peruana como es la educación (Lynch 1990). Asimismo, el deterioro de las condiciones de vida del magisterio, que destruye la imagen del profesor como un respetable profesional de clase media, tal como nos refiere otro de nuestros entrevistados, el dirigente magisterial de la época y uno de los responsables de Patria Roja, Gustavo Palomino. Ello afecta gravemente, tanto a los antiguos profesores, provenientes muchos de ellos, en el caso cusqueño, de familias terratenientes o emparentadas con ellos, como a quienes buscan ingresar al profesorado, entre los que predominan hijos de campesinos, que ven el magisterio como la forma más inmediata de dejar atrás la miseria rural. Palomino señala la importante presencia que tienen en los primeros años del SUTEP estos profesores emparentados con la casta terrateniente y la significativa influencia que desarrollan en alimentar el radicalismo del sindicato, tanto al oponerse en forma tajante a la reforma educativa que intentan los militares como al apoyar entusiastamente cualquier pronunciamiento contra la reforma agraria. Al respecto se explica Palomino:

“El maestro era totalmente refractario a la reforma educativa y me atrevería a decir que no tanto por oposición ideológica como por desconocimiento. Debía modificar su rutina de trabajo y no quería ser afectado. Subsistía la mentalidad latifundista. Porque el maestro de áreas rurales era una suerte de latifundista, dueño de su escuela, de su trabajo, de su labor. En algunos sitios incluso le pagaba el latifundista y era un maestro a su servicio. Entonces su mentalidad estaba dada a admitir que lo que sabía, lo que poseía y lo que hacía, era indiscutible. Por lo tanto hay oposición por desconocimiento y por temor a incomodarse.”

Asimismo, bajo la influencia del proceso de cambios en el campo, Mario Herrera recuerda que “el campesino empezó a controlar al profesor” buscando combatir el habitual desgano de los maestros rurales. Todos estos elementos llevan al propio Palomino a concluir que “hubo influencia reaccionaria en la quema de SINAMOS”.

El impacto de la reforma agraria no logra entonces cumplir un rol aglutinador del movimiento social en la región, que una campo y ciudad, pasado y presente. Fisuras ancestrales parecen imponerse, ante todo entre movimiento campesino y movimiento urbano. La explicación podría encontrarse en que las reformas son fruto de la acción estatal, peor todavía, llevadas adelante por un gobierno militar. Esta iniciativa estatal prácticamente obvia lo urbano y busca engarzarse con el campo pero sin atender a lo ya existente, queriendo reemplazar los antecedentes con la burocracia y la autoridad. Esta actitud subleva a la ciudad, desde siempre postergada por el centralismo limeño simbolizado por el gobierno y permite que se junten los intereses de quienes, incluso teniendo un origen campesino, llegan a la Universidad y buscan obtener un sitio en la ciudad a través del título profesional, con los de aquellos que se ven en peligro de terminar de perder sus títulos señoriales, aunque fueran ya imaginarios, que habían tenido como principal fuente al campo.

Esto es posible porque la acción estatal “desde arriba” se da en un momento en que no existe ninguna fuerza política que pueda servir de puente entre el campo y la ciudad. Como fue el caso, aunque muy limitado, del Partido Comunista en la coyuntura de movilización social que se da entre 1958 y 1962. A principios de los años setenta el PC está

fragmentado y su hegemonía diluida, sin lograr ser reemplazado por el gobierno, o por sus organismos de movilización social como el SINAMOS. Si este puente no existe y el Estado pretende organizar directamente al campo, la ciudad reacciona mostrando sus odios más profundos.

Pero aún más llamativo es el papel de catalizador de estos intereses que asume el radicalismo ideológico maoísta, principalmente representado por Patria Roja. Más allá de su discurso, que apela hasta la saciedad a obreros y campesinos, los maoístas terminan organizando las demandas de quienes pugnan, unos por entrar y otros por no salir, de la clase media. En ambos casos, trátase de estudiantes o maestros, rechazando en su proceso social y en su actitud política al mundo campesino y lo que pueda expresar como alternativa económica o de poder.

C. TODOS CONTRA LA DICTADURA

La caída del régimen reformista del general Velasco y el paso al gobierno del general Morales Bermúdez va a significar un importante cambio para el Cusco y su región. José Luis Rénique (1986) argumenta que el primer efecto será el retiro de la inversión en diversos proyectos de desarrollo y Vladimiro Valer agrega que otra de las acciones de Morales Bermúdez en la región será la desactivación del SINAMOS en su papel de promotor de la organización social y política. Sin dinero ni apoyo a la organización social el régimen aparece desnudamente autoritario. Si antes este carácter de dictadura del gobierno militar podía ser discutido, principalmente por el impacto de la reforma agraria en algunas provincias, de 1976 en adelante la actitud dictatorial del régimen va a ser sentida no sólo por estudiantes y maestros, sino crecientemente por otros sectores laborales urbanos, particularmente trabajadores estatales, así como también, aunque siempre con menos capacidad de expresión, por el campesinado.

El primer momento en que se manifiesta este viraje es en marzo de 1976 en el IV Congreso de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), nuevo nombre que adopta la antigua Federación de Trabajadores del Cusco. Allí se produce la salida de importantes bases de la central sindical departamental, como son: los sindicatos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENAFER), Electroperú y trabajado-

res municipales, es decir, de trabajadores cuyo empleador es el Estado. Ellos forman a iniciativa de VR el Frente Unico Sindical de Trabajadores (FUSIT), como alternativa de centralización a la FDTC. Julio Castro, entrevistado por nosotros y dirigente del PCR en la época, señala que el mensaje era claro por parte de los disidentes: la FDTC, controlada por el PC, no era capaz en ese momento de liderar su lucha reivindicativa, porque se encontraba todavía muy ligada al gobierno militar, a pesar de los cambios notorios que empezaba a introducir Morales Bermúdez.

Por otra parte, la relación de estos gremios disidentes con grupos izquierdistas radicales, en este caso opuestos al régimen militar desde sus inicios, donde VR a nivel sindical era el más notorio, no era de ninguna manera de subordinación sino más bien de asesoría político-sindical. En el caso de los gremios señalados, los sindicatos de Enafer y Electroperú al menos, estaban encabezados por caudillos sindicales como Jaime Bueno y Guillermo Barrueta de significativa trayectoria y conocimiento de su función, lo que les permitía mantener con orgullo una condición de "independientes" y relacionarse de igual a igual con los activistas políticos. Este tipo de relación, sin embargo, devenía muchas veces en una mutua utilización, que da lugar a expresiones como la de Mario Herrera, quien en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil en la época, se refiere al espacio que le dió a VR para desarrollar trabajo al interior del gremio diciendo: "necesitábamos gente que nos haga los oficios", actividad seguramente más propicia para los universitarios radicales que se acercaban al gremio.

A principios de 1977, entre enero y febrero, se da un segundo intento de centralización anti-dictatorial, esta vez a iniciativa no solo de VR, sino también del Partido Comunista Revolucionario, disidencia "izquierdista" de la anterior. Al efecto se constituye el Frente Democrático Popular Antiimperialista (FDPA), que pretendía agrupar no solo organizaciones gremiales sino también políticas, buscando atraer tanto a Patria Roja como al Partido Comunista. Sin embargo, en ambos casos predominaba aún el sectarismo. Patria Roja quería revivir los Frentes de Defensa del período velasquista, mostrando poca atención sobre el cambio de coyuntura y el PC no quería ninguna coalición que no aceptara a la FDTC como dirección. El FDPA, sin embargo, logra

convocar al mitin del primero de mayo de 1977, en coordinación con la FDTC, elaborándose una plataforma de reivindicaciones regionales de quince puntos, que será el germen de las plataformas posteriores. Los puntos que se incluyen, que se volverán característicos del período, contienen: la construcción del hospital del Seguro Social, la ampliación de la hidroeléctrica de Machu Picchu, la construcción del Aeropuerto Internacional, mayores rentas para la Universidad, así como otras referidas al costo de vida y la defensa de las libertades democráticas y sindicales, además de algunas reivindicaciones campesinas. Sin embargo, las suspicacias de los sindicalistas independientes por la presencia de los partidos y de las fracciones comunistas porque no se les reconocía lo que creían debía ser su lugar, crean serias dificultades a este FDP para cumplir un efectivo rol de centralización política.

En esta coyuntura de lucha anti-dictatorial contra Morales Bermúdez es cuando salen a luz los grupos de la Nueva Izquierda como Vanguardia Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario. La rivalidad entre estos grupos de Nueva Izquierda y los partidos del tronco comunista tiene su origen no solo en las probables diferencias ideológicas sino también en su diferente origen social y estilo de trabajo. Los activistas de la Nueva Izquierda eran recientes en la región, se trataba de universitarios limeños de clase media que, en un primer momento sobre todo, se dedicaron a captar cusqueños también universitarios y de similar origen social. Sus lazos con el movimiento popular eran, igualmente, más recientes y su dificultad para contar con líderes sindicales entre sus propias filas era mayor, de allí quizás su afán de coordinar con los caudillos independientes. Patria Roja y el Partido Comunista, por otra parte, eran partidos cusqueños en todos sus escalones y, sobre todo el PC, con dirigentes propios en diferentes gremios. Sin embargo, corresponde a la Nueva Izquierda la iniciativa de un trabajo campesino independiente del que desarrolla el Estado a través del SINAMOS, aunque con serias dificultades, como veremos más adelante, para articularse con el movimiento urbano que se desata.

Serán las denominadas "jornadas de junio", que como dice Carlos Paredes "tuvieron al Cusco un mes de paro", el evento que permitirá la confluencia de este espectro de partidos, gremios y personalidades, eso sí, todos ellos urbanos. Estas movilizaciones fueron una respuesta a las

medidas económicas que anunciara el Ministro del ramo Walter Piazza. Son consideradas la respuesta regional más importante en todo el país y por ello antecedente de primer orden del Paro Nacional del 19 de julio de 1977. Las medidas económicas que tenían entre sus puntos la subida del 100% de los pasajes urbanos, llevó a una movilización, casi espontánea, de los estudiantes universitarios el día 15 de junio, que se continuó el día 16 con el concurso de las vendedoras del mercado y algunos contingentes de trabajadores. Fue en esta última jornada que cayó muerto por la policía un obrero, motivando la continuación más violenta y extendida de las manifestaciones. En este momento es que recién reaccionan el FDPA y la FDTC, convocando ambos, en sendos comunicados, a la paralización de la ciudad, el FDPA por 48 horas y la FDTC por 24. Esta última acusó de extremista al primero, buscando mantener el privilegio que históricamente había tenido de encabezar estas manifestaciones, aunque, de acuerdo con Rénique (1987) parece ser que algunos activistas de grupos de la Nueva Izquierda quisieron ver en los hechos actividades pre-insurreccionales. A pesar de estas desavenencias, que seguían expresando mutuas desconfianzas entre el PC y la Nueva Izquierda, la masiva participación popular volvió a unir en las calles a las diferentes tendencias, poniendo las bases para las futuras organizaciones de frente que se formarían en los años siguientes.

El caso es que la ciudad estuvo totalmente paralizada durante tres días, en los cuales ocurrieron las movilizaciones más importantes que se recuerden desde los eventos de abril de 1958, "las movilizaciones más importantes de los últimos 20 años", en las palabras de Elmer Abarca. La paralización, por lo demás, continuó en algunos sectores, particularmente en la Universidad, durante varios días, debiendo suspenderse, por única vez en la historia reciente, las fiestas del Inti Raymi, el 24 de junio, que son consideradas las fiestas de celebración de la ciudad y es la fecha más importante del año para los cusqueños.

La confluencia práctica que implican estas "jornadas de junio" va a cerrar la división que se desarrollara en el movimiento popular cusqueño con motivo de las reformas velasquistas. Las rivalidades por supuesto persistirán, pero se darán en torno a la dirección de la lucha antidictatorial y no evitarán que partidos y organizaciones sociales intenten un enfrentamiento común al gobierno militar de Morales Bermúdez.

El paro nacional del 19 de julio de 1977 no tendrá, sin embargo, la dimensión que en otros lugares del país, si bien tanto el FDPA como la FDTC proceden a su convocatoria conjunta, levantando una plataforma similar a la del primero de mayo de ese año. Las fuerzas se habían "agotado" en las movilizaciones del mes anterior y tanto el acatamiento como las manifestaciones son menores. Sin embargo, es importante destacar la actitud de Patria Roja, cuya dirección regional resuelve, según señala Alex Bustatamante, considerar el paro como "movimiento electorero" y no hace nada para su efectivización. Parece ser que toman esta actitud influidos por el radicalismo extremista de una fracción interna conocida con el nombre de "Puka Llacta" ("Pueblo Rojo" en el idioma quechua), pero este abstencionismo era también la repetición de una actitud anterior, que veía en toda lucha anti-dictatorial una continuidad de las luchas que este grupo había liderado a principios de la década. Por eso ellos no podían imaginar una coalición más amplia ni un liderazgo distinto al de su propio partido. Este comportamiento era lógico si se toma en cuenta que para Patria Roja la diferencia entre las dos fases del gobierno militar era mínima y ambas merecían ser caracterizadas igualmente de dictadura.

La consecuencia inmediata de este Paro Nacional en el Cusco quizás sea lo más significativo. En uso de las atribuciones conferidas por un Decreto Supremo dado por el gobierno de Morales Bermúdez, diversas empresas públicas y privadas procedieron a despedir dirigentes sindicales, que supuestamente habían dirigido el paro. En total sumaron 21 dirigentes los despedidos. Ello motivó la formación de un "Comité de Derechos Humanos" a iniciativa del Colegio de Abogados para pedir la reposición de los despedidos. Este Comité y las movilizaciones a las que convocó fueron la fragua inmediata de la experiencia de Frente Popular más importante de la coyuntura: el Comité Coordinador de las Organizaciones Populares del Cusco (COCOP).

El COCOP nace el 17 de octubre de 1977, confluyendo en él gremios influidos por la mayoría de las tendencias políticas, principalmente izquierdistas. Se agrupan así la FDTC, el FUSIT, la FUC y el SUTEP. Era, de acuerdo a Elmer Abarca, que fuera su Presidente, una instancia de frente único "más gremial que popular" con clara tendencia radical. No admite la presencia explícita de los partidos, quizás, como Abarca

mismo señala "porque querían imponer un punto de vista propio aunque no fuera real" pero al mismo tiempo diga que "el movimiento no hubiera sido posible sin ellos". Los promotores más entusiastas de su formación fueron los sindicalistas independientes, entre quienes se encontraban los disidentes de la FDTC, ya nombrados, así como dirigentes de otros gremios como empleados bancarios o trabajadores de la Universidad. Este grupo mantenía una cierta equidistancia de la dirigencia de la FDTC muy temerosa de realizar medidas de fuerza, así como del radicalismo del SUTEP y la FUC influidos por el maoísmo ortodoxo. Podríamos decir que mantenían mejores relaciones con la Nueva Izquierda, aunque sus continuas divisiones, como remarca Elmer Abarca, tampoco los decidían por una alianza estable con esos grupos. Además, el carácter "independiente" de la mayoría de sus directivos era un atractivo para un medio como el cusqueño tan cargado de sectarismos partidarios y rencillas personales.

Carlos Paredes nos señala las dificultades de los partidos izquierdistas cusqueños en el período:

"La izquierda tenía dificultades para expresarse políticamente, para pasar del gremio al partido y del partido a la sociedad. Estábamos ilegalizados y perseguidos entonces, no teníamos expresión pública ni representación clara. El conducto regular de expresión era el gremio, por eso a través del gremio se hace el frente."

El rol de los partidos de izquierda en el COCOP representa por ello una ruptura con lo que había sido su actuación anterior en las organizaciones sociales. Sobre esto hemos mencionado la influencia de las diferentes tendencias políticas del Cusco urbano, como es el caso del comunismo en sus diferentes versiones, que las más de las veces devenía en control de la organización social. Pero algo similar sucede con la Nueva Izquierda, que en este aspecto no parece haber sido tan nueva. Demetrio Vargas, campesino quechua y militante del PCR en el período, hablando sobre el trabajo de los partidos entre el campesinado de la pampa de Anta señala:

"Muy sectariamente trabajábamos. Nosotros los del PCR por nuestro lado, con nuestras comunidades y los de Vanguardia (VR) con sus

comunidades, con sus dirigentes, por su lado. En algunas asambleas nos agarrábamos como gato y perro, muy mal. No había razón, no había motivo. Yo pienso que era más el problema de línea política que tenía cada partido. Eso lo llevábamos a discutir dentro de una comunidad, de una asamblea, donde nuestros compañeros campesinos no alcanzaban a entender. Entonces eso asustaba, dividía, espantaba a muchos dirigentes. Se apartaban nos miraban con desconfianza, tanto a los del PCR como a los de VR."

Contra esta situación es que reaccionan los sindicalistas independientes, admitiendo nada más que la presencia indirecta de los partidos a través de militantes que fueran líderes sindicales o populares. Esto llevaba a los partidos a la necesidad de contrastar, a regañadientes en la mayoría de los casos, sus puntos de vista con los de otros sectores políticos y sociales, introduciendo un nuevo elemento en la dinámica del movimiento regional cusqueño.

En un mitin, el 4 de noviembre de 1977, el COCOP presenta un programa de 21 puntos, repetición, quizás algo más exhaustiva, de la plataforma presentada con motivo del primero de mayo del mismo año, donde se demandaban un conjunto de obras de infraestructura, agregando en esta oportunidad tópicos relativos a la necesidad de industrializar la región. Este nuevo frente tiene una primera prueba de confrontación el 17 de noviembre, con motivo de la inauguración de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) en la ciudad del Cusco. Ese día el COCOP decretó un paro de 24 horas, "de recibimiento" a las delegaciones asistentes. Elmer Abarca nos señala que en esa oportunidad un grupo de ministros de Estado, encabezados por el Ministro de Industrias General Ibañez O'Brien, pretende enfrentar la situación llamando a una reunión con el COCOP y jefes de diferentes reparticiones públicas, la cual termina en escándalo, al señalar el citado Ministro que los problemas del Cusco eran menores que los de algún pueblo joven de Lima y negarse a reconocer representatividad a esta nueva organización. Al no haber respuesta alguna de parte del gobierno el COCOP llama a un nuevo paro, esta vez de 48 horas, para los días 23 y 24 de noviembre. Finalmente, llega al Cusco a mediados de diciembre el Ministro del Interior, Luis Cisneros Vizquerra, quien discute en una maratónica sesión los puntos de su petitorio con los representantes del

COCOP, prometiendo solución para la mayoría de aspectos, pero concediendo de inmediato nada más que algunas pequeñas partidas presupuestales.

Las soluciones, sin embargo, tardan en llegar y el COCOP tiene una intensa actividad en el año 1978. Convoca a paros en enero, agosto, y diciembre, aparte de su participación en los paros nacionales de febrero, mayo y enero de 1979. Es decir, tal como señala María Isabel Remy (1984), el movimiento regional demuestra gran vitalidad en este período participando en diez paros, seis locales y cuatro nacionales entre junio de 1977 y enero de 1979. Aunque sería importante distinguir, como dice Abarca, que en los paros nacionales "cumple" y que los locales, en cambio, sí suelen realizarse a cabalidad.

A los partidos les es difícil adaptarse a la dinámica del movimiento regional y en particular a la del COCOP. Se trataba de un fenómeno fuera de programa: representantes gremiales y encima mayoritariamente independientes que pretenden asumir la representatividad regional. Tomemos en cuenta, tal como dice Julio Castro, que tanto para la Nueva Izquierda (VR y PCR) como para Patria Roja:

"El mito revolucionario era que la gran transformación social la íbamos a hacer con el abatimiento de la dictadura. No era que veíamos un horizonte mucho más lejano, revolucionario, sino que lo empatábamos con la lucha anti-dictatorial. Y es además esta visión la que se traduce en objetivos partidarios específicos."

Y para el PC, por otra parte, se trataba de resguardar las reformas de la época velasquista y lograr un pacto con los militares, no querían tener confrontaciones definitivas ni liderar grandes movimientos contra el gobierno. Los más radicales estaban entonces en una dinámica de organizar la guerra y el PC de administrar la crisis política y negociar con el poder. Ninguna de las dos perspectivas tenían en agenda el movimiento urbano regional. A Jaime Gálvez, responsable regional de su partido, el PCR, en esos años, en entrevista que nos concediera, le era difícil incluso recordarlo.

Julio Castro, sin embargo, señala que "las necesidades de conducción real nos alejan de la estrategia de guerra popular" y Carlos Paredes

concede que el COCOP fue una transacción entre partidos y gremios. A la Nueva Izquierda, en todo caso, le fue más fácil adaptarse, donde quizás el carsima de algunas personalidades, como Julio Castro, ayudaron en este proceso. Patria Roja, por otra parte, fue superando desconfianzas iniciales, cuando, según Néstor Guevara¹⁵, dirigente de la FARTAC, "no le daba base al COCOP" y poco a poco se fue integrando, quizás debido a su mayor peso específico en el movimiento urbano, con estudiantes y maestros, y a la gran huelga del SUTEP en 1978, que requirió la solidaridad del conjunto de la población.

La otra cara de la moneda esta constituida por el PC. El celo por cualquier organización que a su juicio pudiera competir con el liderazgo de la FDTC fue particularmente acentuado en la época del COCOP. Razones ideológicas también acudían en su ayuda. La hegemonía de la FDTC en el movimiento popular expresaría "la hegemonía de la clase obrera en la revolución" que seguramente veían más lejos que los radicales, pero que no dejaban de invocar un solo minuto en su provecho. Un antiguo militante como Ricardo Baylón afirma que el PC no entendió la lucha regional y desdeñó los diversos frentes que se formaron al efecto. Dice, incluso, que los directivos de la FDTC en aquel período fueron sancionados por el partido debido al grave perjuicio que les produjo su sectarismo. Francisco Mejía¹⁶, dirigente bancario, señala, por otra parte, una explicación más estructural de esta rivalidad. El COCOP, dice él, estaba formado mayoritariamente por gremios de empleados pertenecientes a la clase media, mientras que la insistencia de la FDTC en asumirse "obrera" la alejaba, por un prejuicio de desprecio social, del resto, que no querían verse dirigidos por obreros. Esta vacilación frente a la lucha regional urbana y en particular frente al COCOP, así como su ambigüedad frente al gobierno de Morales Bermúdez, que solo corrige muy lentamente, implicarán que la nueva ruptura que tiene el PC a nivel nacional, entre fines de 1977 y principios de 1978, tenga también importante reflejo en el Cusco. Varios dirigentes del COCOP militarán en esta disidencia e incluso el grupo llegará a dirigir lo que queda de la FARTAC luego del velasquismo.

15. Entrevistado por el antropólogo Elmer Abarca.

16. Entrevistado por el antropólogo Elmer Abarca.

La ausencia campesina, mayoría social en la región, va a ser otra, sino la característica más saltante del movimiento. No se trata de constatar la presencia de los dirigentes de determinadas organizaciones campesinas, como puede ser el caso de la FARTAC o de bases de la FDCC (que recién sería reorganizada en su III Congreso en marzo de 1978) sino de presencia real de campesinos en las movilizaciones de los frentes regionales, así como de consideración sustantiva del problema agrario en las plataformas respectivas. Los campesinos no aparecen en los frentes, tampoco en el COCOP y la consideración de sus problemas se tiene en cuenta pero a la cola de todas las reivindicaciones urbanas y luego de mucha presión de los partidos interesados, VR y PCR generalmente, que tienen importante trabajo en el campo. Como nos dice Carlos Paredes, "Celebrábamos que después de 18 puntos apareciera la problemática del campo, aunque fuera mal planteada. Era un triunfo que se considerara."

No es tampoco que no hubieran luchas en curso. Las tomas de tierras en Anta, a escasos 30 Km. de la ciudad del Cusco, suceden, en dos oleadas, en setiembre de 1977 y octubre de 1978, recuperando los campesinos más de sesenta mil hectáreas. Sin embargo, la importancia local y la repercusión nacional siguen a cargo de las demandas urbanas. Demetrio Vargas, dirigente campesino de Anta, nos dice que "los campesinos se mueren de miedo de ir al Cusco" porque es la ciudad que identifican con los patrones y la represión y que ellos estuvieron presentes en las actividades del COCOP con delegaciones de máximo 20 ó 30 personas. En todo caso cuando se movilizan masivamente, como es el caso del mitin, de aproximadamente siete mil asistentes, que desarrollan en el Cusco los campesinos de Anta, luego de la primera toma, lo hacen por sus propias reivindicaciones inmediatas. En este mismo sentido, Elmer Abarca recuerda que en plena lucha de Anta otro importante directivo del COCOP le pregunta un día "¿qué es eso de FEZOCAU?" inquiriendo por las siglas de la Federación Zonal de Campesinos de Anta-Urubamba, que era el gremio en lucha en esas provincias.

Pero a quienes afectaría de manera particular este desfase entre movimiento urbano y campesino sería a los partidos que venían desarrollando un importante trabajo en el campo, desde principios de los setentas, me refiero a Vanguardia Revolucionaria y al Partido Comunista Revolucionario. Estos grupos buscando consecuencia con un maoísmo

heterodoxo al que llegan desde la radicalidad estudiantil e intelectual, animaban las tomas de tierras por parte de los grupos campesinos no beneficiados o falsamente beneficiados por la reforma agraria. El movimiento generado en estos procesos de tomas de tierras debía servir para organizar la guerra campesina que llevaría a la revolución. Sin embargo, las dos experiencias más importantes con impacto en la región cusqueña: las tomas en Andahuaylas en 1974 y en Anta en 1977-78, no tuvieron los resultados esperados en este supuesto proceso de acumulación de fuerzas para desatar la guerra revolucionaria, fueron, más bien, como diría al entrevistarlo, Walter Angulo, dirigente de VR en el período, "el techo de la visión militarista" y de la visión heroica de la política que venía de la revolución cubana y la figura del "Che". Jaime Gálvez recuerda que en el caso de Anta, una vez tomada la tierra, lo que preocupaba a los campesinos era cómo hacerla producir, más que cómo formar una "base roja" y en esta dinámica tuvieron que entrar los partidos involucrados, a riesgo de quedarse fuera de carrera. Se desplazan de esta forma, según el mismo Gálvez, del espacio de la guerra al de la opinión pública, o en términos de medios de comunicación "de las pintas callejeras a la radio", lo que implica, según nos relata, que los líderes de la lucha clandestina sean desplazados de los puestos de responsabilidad partidaria, que pasan a ser ocupados por los que son líderes en la opinión pública. Este proceso es el que se empezaría a cumplir con la lucha urbana regional para desarrollarse años más tarde en la dinámica electoral y parlamentaria.

Pero esta lucha urbana anti-dictatorial tuvo su límite cuando la propia dictadura encuentra el suyo y cumple con permitir la instalación, en julio de 1978, de la Asamblea Constituyente que había convocado un año antes. No es coincidencia que Elmer Abarca señale que "el COCOP está en alza hasta agosto del '78". Hay, sin embargo, varios factores que contribuyen al decaimiento de esta forma de lucha liderada por el COCOP. Uno primero es la rivalidad con la FDTC. Por más que este sectarismo le costó a la Federación de Trabajadores el aislamiento de buena parte del movimiento regional, no cesó en su actitud, llegando a combatir públicamente contra el paro que convocó el COCOP en agosto de 1978 y denunciando un supuesto paralelismo de este último. Otro, es la necesidad de convocar a fuerzas que no fueran estrictamente gremiales de izquierda, como los comerciantes locales, el alcalde y el

arzobispo, para conseguir un mayor apoyo a sus demandas. Esto último dió lugar a la formación del Frente Unico de Desarrollo del Sur-Oriente (FUDESO), en octubre de 1978, iniciativa que no implicaba la desaparición del COCOP, pero que indudablemente lo dejaba de lado. Y, el factor definitivo es la nueva dinámica en que la convocatoria electoral y la perspectiva del régimen parlamentario ponen a la clase política regional, tanto partidos como personalidades, en muchos casos a pesar suyo. Empiezan a existir, así, otros canales de participación política y el interés colectivo deriva crecientemente hacia lo electoral. En un primer momento los sindicalistas independientes, como es el caso de Francisco Mejía, tienden a acusar a los partidos de ser los que cambian de dinámica, pero poco a poco, unos más que otros, aunque en el discurso plantearan lo contrario, van entrando al proceso electoral.

El caso del FUDESO es particularmente interesante como ejemplo del cambio en la forma de lucha política. Este organismo incorpora autoridades, empresarios, instituciones y organizaciones cívicas dándole mucho mayor fuerza al movimiento. Deja, sin embargo, el estilo radical y contestatario de su antecesor, lo que motivó arduas y enconadas polémicas entre los izquierdistas, partidarios y opositores del nuevo frente, porque, como dice Walter Angulo: "cuando te sientas junto a la burguesía te sientes incómodo". Entre los puntos que se incluyen en la plataforma heredada del COCOP destaca la demanda de creación del "boleto turístico", suerte de impuesto al turista no cusqueño por visitar los monumentos de la ciudad. Asimismo, señala por primera vez la necesidad de un gobierno regional, aunque como afirma Carlos Paredes "más como insolencia frente a Lima" que como punto programático serio. Algún tiempo más tarde el FUDESO logra alguna de las reivindicaciones planteadas, como la ampliación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu, el hospital del Seguro Social y el "boleto turístico", lo que fue un logro significativo dada la dureza del gobierno de Morales Bermúdez. Sin embargo, el estilo reivindicativo, que venía de experiencias anteriores del movimiento regional, no cambia. Se mantiene la "suma" de reivindicaciones y los logros dependen, más, de las posibilidades del gobierno central o de la presión reivindicativa de algún sector de la población. Como señala Remy (1984), tanto las demandas como los logros demuestran que no hay proyecto regional en esa coyuntura.

Frente a este momento de relativo éxito, Francisco Mejía, en afirmación que comparten otros dirigentes de la época, señala que "los logros del FUDESO los preparó el COCOP", buscando relevar los esfuerzos de este último. Sin desmerecer esa importante labor organizativa y centralizadora es fundamental tomar en cuenta otros elementos. Primero, la mayor capacidad de concesión que tenía en 1979 el gobierno de Morales Bermúdez, por una temporal mejora de las exportaciones, a lo que se debe agregar dos factores políticos de primera magnitud, uno, a nivel regional, la ampliación del frente y la disminución de su filo antidictatorial, y otro nacional, el pleno funcionamiento en que ya se encontraba la Asamblea Constituyente.

El COCOP todavía intenta recuperar su rol de instancia "gremial-radical" y convoca a fines de 1978 a su primer congreso, de manera tal que pudiera darse organicidad. Sin embargo, las diversas fuerzas políticas, ya no solo el PC, pierden interés en este tipo de frente y observan con recelo la posibilidad de que se pudiera institucionalizar. Mejía desde su condición de independiente señala que "los partidos no podían usarlo como plataforma electoral" por lo que deciden boicotearlo. El hecho es que el COCOP va muriendo a lo largo de 1979, sin lograr, al margen ya del esfuerzo partidario, llevar adelante su primer congreso. No tiene mejor suerte, en términos de vigencia temporal el denominado FUDESO, ya que a pesar de sus éxitos, la precariedad política de la coalición en que se basaba lo lleva también a la extinción. Este último, sin embargo, presagia agrupamientos posteriores en la década del ochenta, que tuvieron una similar amplitud de participantes.

D. IDENTIDAD REGIONAL Y DEMOCRACIA

Lo que generalmente se entiende en los medios intelectuales y políticos del Cusco como "movimiento regional" tiene más precisamente que ver con el movimiento urbano regional. La escisión, como hemos visto a lo largo del texto, que se desarrolla entre ciudad y campo, tiene su reflejo en el conjunto del movimiento, Mejía nos señala "la ciudad tiene su plataforma y el campo la suya". Especialmente entre la dirigencia, militantes de partidos tan disímiles como Julio Castro, del PCR, Carlos Paredes, de VR, Ricardo Baylón, del PC, Gustavo Palomino, de Patria Roja y Vladimiro Valer, del SINAMOS, coinciden en los prejuicios anti-

indios de esta dirigencia urbana, de alguna manera, quizás, en sus propios prejuicios. Por ello, a pesar, del auge campesino, en diferentes períodos, este no se logra articular con el movimiento urbano. Las demandas también apuntan en el mismo sentido, se trata de obras de infraestructura que pueden tener proyección regional pero cuyo beneficiario inmediato es la urbe (hidroeléctrica, hospital, aeropuerto etc.). Tenemos entonces que el espacio de referencia principal de este movimiento regional es la ciudad del Cusco.

Además, el movimiento urbano-regional, se desarrolla en la confrontación, principalmente con el centralismo limeño. El espíritu de demanda radical y el método multitudinario atraviezan la experiencia cusqueña en 1958, 1971, 1973, 1977 y 1978, por más que el período se caracterice por la hegemonía PC, primero, por la división, cuando el velasquismo, o por la confluencia cuando el COCOP. El método de la confrontación tiene prestigio en el movimiento porque implica consecuencia, personal y de grupo, además que, efectivamente ayuda a la organización de las fuerzas, aunque, como vimos, no siempre sea el mejor expediente de éxito. La organización tiende siempre a ser gremial e institucional, donde nuevamente el COCOP es el mejor ejemplo y los partidos, por más que se reconozca su rol, "porque sirven para generalizar la experiencia", dice Angulo, no están libres de sospecha. Elmer Abarca insiste que estas experiencias de frente expresan la voluntad de los cusqueños por tomar ellos mismos las decisiones que les competen. Sin embargo, se trata siempre de un movimiento "anti", cuya capacidad de protesta es muy grande pero la de propuesta muy reducida.

En estas condiciones la salida electoral que proponía el gobierno de Morales Bermúdez a la crisis global del país era considerada con escepticismo por la dirigencia urbana cusqueña. Pero este escepticismo tenía sus matices. Estaba la posición abstencionista de Patria Roja que denunciaba el proceso electoral, porque como señala Alex Bustamante las elecciones eran "tabú" y participar en ellas "traición"; posición compartida, aunque sin la misma carga ideológica, por los sindicalistas independientes, que veían diluido su espacio de poder. Estaban también los grupos de la Nueva Izquierda a quienes su mayor cosmopolitismo quizás era lo que les permitía intuir posibilidades en las elecciones, aunque su decisión de participar era "vergonzante", porque lo hacían

por razones de propaganda más que por convicción democrática. Similar a esta última posición, aunque siempre haciendo gala de un mayor pragmatismo, se encontraba el PC, para quien frentes o elecciones eran buenas si reverdecían las condiciones de la "hegemonía obrera", tan venida a menos hasta en la ilusión ideológica desde hacía algún tiempo. En resumen, las elecciones eran un asunto "de la derecha" como dice Fanel Guevara¹⁷, dirigente estudiantil maoísta en la época, donde la izquierda, tal cual se había desarrollado "nada tenía que hacer", porque al fin y al cabo, "ellos" (los partidos tradicionales), como afirma Abarca, "funcionaban mejor en el juego demo-burgués".

La identidad de este movimiento urbano-regional se definía entonces por la capacidad de construir una representación gremial e institucional que formulara y eventualmente consiguiera demandas del Estado. Para el efecto se desarrollaba un espacio de frente, capaz de acoger la diversidad regional y efectivizar un mínimo de democracia en su interior, que pudiera controlar a los socios muy grandes de la coalición o a quienes eran conocidos por su autoritarismo, como los partidos. En una "dictablanda" oligárquica, como era la situación antes de 1968, esta experiencia era viable, en términos de confrontación, por el matiz autoritario de esos gobiernos. Lo mismo sucede, paradójicamente, con el velasquismo, a pesar de sus intenciones de reforma, pero alcanza su punto culminante frente a Morales Bermúdez, cuando se dan las mejores condiciones para la lucha anti-dictatorial. El movimiento, sin embargo, se sentía ajeno al Estado y a la utilidad que pudiera tener la participación en su régimen político. De allí su distancia como tal frente a las elecciones y su incapacidad para convertirse en alguna forma de representación ciudadana que cumpliera un rol electoral. Los dirigentes más radicales concluirían por ello que "las soluciones eran otras" y no pasaban tampoco por el COCOP, refiriéndose a la necesidad de la lucha armada que trajera un nuevo orden en todo el país.

17. Entrevistada por el antropólogo Elmer Abarca.

Rasgos comunes de los movimientos sociales estudiados

1. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ESTUDIADOS se desarrollan en interacción con las políticas estatales de los dos gobiernos militares de la época: Velasco y Morales Bermúdez. Esto no significa que los movimientos sociales no existieran antes de estos gobiernos militares, o que el influjo viniera únicamente desde arriba, pero las políticas de reforma, primero, y de contrarreforma después, fueron las que, en lo fundamental, permitieron que se desarrollara la acción colectiva en esos años. Las políticas de reforma concedieron derechos económicos y sociales que permitieron la expansión de la organización y la demanda de reivindicaciones, tanto para defender los derechos alcanzados frente a terratenientes y empresarios como para defenderse de la intromisión del gobierno que buscaba cooptar los movimientos como base social o reprimirlos sino colaboraban. Las políticas de contrarreforma, al intentar recortar los derechos alcanzados y reprimir la organización, generaron una respuesta que llevó a una mayor movilización sectorial y regional y a los paros nacionales de 1977 y 1978.

Los movimientos se desarrollaron luchando por su autonomía, sindical y/o regional del Estado, lo que les permitió tener su propio programa reivindicativo, esta es una tendencia que se acentúa a partir de la crisis del velasquismo y el inicio de la contrarreforma. Sin embargo, los movimientos sociales no deseaban romper su relación con el aparato estatal, sino más bien mantenerla para ganar el espacio social y político que les permitiera obtener sus demandas. Aunque es preciso tomar en

cuenta que la insistencia para el mantenimiento de esta relación se da a partir de una nueva posición de fuerza dada por el desarrollo de la organización autónoma. Esta insistencia es más clara en los lugares donde el Estado era el adversario directo, ya fuera porque se trataba de empresas estatales, como en el caso de Chimbote, o porque era el principal promotor de las obras de desarrollo regional como en el caso del Cusco.

2. Estos movimientos sociales fueron promovidos por los partidos de izquierda, en particular, por los de la denominada Nueva Izquierda. Estos eran partidos en su mayoría ilegales en la época y conformados, salvo el PC, principalmente por jóvenes y especialmente estudiantes universitarios. Los partidos desarrollaron su acción política y obtuvieron representación actuando a través de las organizaciones sociales, en particular de los sindicatos. Aunque su influencia es decisiva en el conjunto del período, varía en cada uno de los casos. Mientras que en la Federación Metalúrgica los partidos eran literalmente lo que su control sobre determinados sindicatos podía significar, en Chimbote las lealtades sindicales podían, en algunos sectores, estar por encima de las partidarias y en Cusco, a diferencia de los dos anteriores, los partidos tuvieron que establecer alianzas con caudillos independientes para poder ejercer su influencia. Sin embargo, en todos los casos, es comúnmente aceptado que el desarrollo de los movimientos hubiera sido imposible sin ellos. Los partidos trajeron la ideología y muchas veces las técnicas organizativas, lo que permitió a los movimientos avances significativos. La ideología: el marxismo-leninismo, se convirtió en la forma de pensamiento de la vanguardia sindical y popular y es particularmente importante para entender las posibilidades y límites de estos movimientos en los ámbitos sindical y político. Asimismo, los recursos humanos, en términos de organizadores gremiales y políticos y asesores profesionales, que proporcionaron los partidos, permitieron una mayor capacidad de movilización y un mejor planteamiento de sus demandas a las organizaciones sociales.

Resaltar la influencia partidaria no implica considerar que las organizaciones populares fueran exclusivo resultado de ella. Por el contrario, estas se convirtieron en los vehículos de la lucha contra los patrones y el Estado y ello les permitió construir un espacio social, una repre-

sentación de su segmento frente al conjunto y en este sentido, una vida propia. Es más, la identificación primaria de trabajadores, campesinos y/o pobladores era con la organización popular, no con el partido que la influenciara.

3. La política de los movimientos sociales se desarrollaba en los ámbitos regional y local y, con especial énfasis, a nivel de base. Su plataforma, por ello, contenía mayormente puntos reivindicativos para hacer frente a problemas inmediatos. Su proyección nacional era de rechazo más que de propuesta, de allí su posición anti-dictatorial. El método era la confrontación de masas, ellas debían enfrentar al adversario, pensado en términos de enemigo, para obtener sus demandas con legitimidad popular. Ello no excluía las negociaciones, pero estas debían ser llevadas adelante desde una actitud de confrontación. A diferencia del enfrentamiento, las negociaciones eran un asunto que concernía a la dirigencia y se convertía en un examen de sus habilidades.

Esta política de confrontación prestó así muy poca atención a la institucionalización de las organizaciones sociales y a sus posibilidades de establecer relaciones permanentes con el régimen político. Incluso a nivel de base estos movimientos sociales fracasaron tratando de crear organizaciones que trascendieran el período de movilización que nos ocupa. El Estado y sus instituciones aparecían, por ello, distantes para estos movimientos, sin un terreno común que compartir.

4. La expansión organizativa producida por los movimientos sociales significó una mayor oportunidad de participación en la vida sindical y popular para amplios sectores de la población, considerados anteriormente como fuerza de trabajo, activa o potencial, sin mayores derechos. Este desarrollo organizativo les dió posibilidades de opinar en la confección de una agenda de reivindicaciones y de movilizarse por su consecución. En este sentido, se abrió a nivel de base un espacio de intercambio democrático antes inexistente.

Sin embargo, la incursión de los partidos, que pugnaban por hacer de los gremios "correas de trasmisión" de sus puntos de vista, así como el rol de los líderes sindicales, que solían, más allá de que tuvieran o no una filiación partidaria, adoptar una conducta autoritaria de caudillos, limi-

tó seriamente el desarrollo de esta democracia de base. Por ello, el significado más importante de la palabra "democracia" para estos movimientos era de carácter instrumental. La consigna "Libertades democráticas" ocupaba así lugar privilegiado en su plataforma, ya que estas libertades permitirían tener derechos de organización, reunión y opinión. Pero la lucha por estos derechos no era pensada en términos electorales sino como una facilidad, para no ser molestados por las autoridades en su trabajo de base.

Como práctica en la vida de las organizaciones sociales democracia significaba presencia, una tumultuosa presencia de dirigentes y miembros de base en las actividades de la organización, fueran estas asambleas, marchas, mítines, huelgas, etc. La presencia de miembros de base se entendía como una forma de control sobre la dirigencia, supuestamente para evitar se manipularan sus intereses, por eso cuanto mayor era el número que acudía a las movilizaciones, más se pensaba que era la democracia existente.

Pero esta percepción de la participación no incluía el proceso de toma de decisiones. Las decisiones eran un asunto de la dirigencia, de los caudillos, generalmente con la guía o la intervención directa de los partidos políticos. Este procedimiento no era completamente explícito pero sí masivamente aceptado, en tanto la dirigencia fuera capaz de mantener contentos a la mayoría. Aquí la figura autoritaria del caudillo juega un rol crucial, similar a la de los señores de la tierra en la sociedad tradicional.

Esta percepción de la participación no tenía ninguna proyección como régimen político nacional, solo importaba su eficacia inmediata. Por lo tanto, la idea de democracia como régimen político era considerada un "truco", una cuestión que concernía a "otros", o más específicamente a la burguesía. Es decir, un procedimiento de arreglo al interior de las clases dominantes para gobernar el país. Esta percepción, además de estar animada por la idea leninista del asalto al poder, estaba también asociada con los regímenes denominados "democráticos" anteriores a 1968, cuando la oligarquía manejaba un juego político restringido. Ello explica por qué el llamado a elecciones constituyentes a fines de julio de 1977 no recibió mucho crédito de parte de la dirigencia popular, divi-

diendo criterios sobre las posibilidades de la participación electoral, algunos optaron por el simple rechazo, otros por una actitud pragmática, de participar "para ver qué pasa". Cuando las elecciones efectivamente ocurrieron se las tomó como una forma de deshacerse de los militares y conseguir algunas demandas inmediatas, a la vez que como una tribuna para predicar el futuro advenimiento de la revolución. El motivo preciso de la convocatoria: el diseño constitucional de un nuevo régimen político, no mereció mayor atención.

5. Sin embargo, estos movimientos desarrollaron importantes identidades locales y regionales. Se trata de procesos que ocurren en los nuevos espacios sociales que construía la acción colectiva. Estas identidades se basaban en las capacidades de movilización de los movimientos sociales, es decir en su capacidad para presentar una plataforma reivindicativa y organizar la lucha por ella. Los elementos que definen estas identidades son: una actitud de autonomía frente al Estado y la reivindicación de la dignidad de los sectores involucrados. A ello se agrega un sentido de consecuencia con las reivindicaciones planteadas, de honestidad en el manejo dirigencial y de respeto a la presencia democrática de las masas, junto con una marcada tendencia a la confrontación y la acción directa. En el caso de los trabajadores esta identidad se denominó "clasista", en referencia a una pertenencia de clase independiente en su conducta de las clases dominantes y el Estado. En el movimiento regional se trató también de un sentimiento de pertenencia, a un espacio geográfico en este caso, con particular acento en el liderazgo urbano. La denominación "clasista", sin embargo, se propagó por todo el país para calificar a cualquier movimiento con similares actitudes de compromiso independiente, sin importar si era o no un movimiento de trabajadores. El "clasismo" llegó a ser un símbolo de la autonomía de los movimientos sociales frente al Estado. Pero esta era una identidad segmentaria, muy poderosa a niveles locales, regionales y/o sectoriales, pero, tal como sucedía con las percepciones de democráticas que producían los movimientos, con una gran falta de proyección en una identidad mayor, verdaderamente nacional.

Conclusiones generales

CUANDO INICIÉ ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN manejaba la hipótesis de que los movimientos sociales ocurridos en el período de transición a la democracia se habían constituido como actores autónomos a partir de su propia dinámica y habían sido el elemento social y político fundamental en la coyuntura. Sin embargo, luego del análisis del período de transición y de sus antecedentes inmediatos, así como de movimientos sociales específicos, creo que lo que se produce es una compleja interrelación entre sociedad y Estado, que no cierra la distancia ancestral entre ambos, ni integra la sociedad, particularmente lo nuevo de la sociedad: los movimientos sociales, en el sistema político. Lo que se produce, usando el término de Cardoso (1981:273), son "dos lógicas", una del poder y otra de los movimientos sociales, que no permiten otra forma de contacto que no sea la confrontación.

Lo particular en el caso peruano, a diferencia de otros ejemplos de transición en América Latina donde se han desarrollado movimientos sociales significativos en períodos de dictadura, es que aquí los movimientos sociales son, en buena medida, impulsados desde el Estado. Las políticas de reforma, primero, y de contrarreforma, después, dan una dimensión nunca antes vista a la movilización social empezada con la crisis del Estado Oligárquico. Ellas permiten, aunque por distintas razones, la constitución de nuevos actores sociales y el desarrollo de la autonomía de los movimientos. La iniciativa estatal tiene entonces un rol central en la movilización social en el período.

Sin embargo, es fundamental establecer el momento de viraje, en que se produce un "giro a la autonomía" en esta relación entre los movimientos sociales y el Estado. Este es el año de 1973, cuando empiezan a darse los primeros síntomas de la crisis económica y la ofensiva controlista del gobierno militar contra la organización popular, cuyos efectos, tal como lo muestran nuestros estudios de caso, se sienten en todo el país. En este año se produce la gran ofensiva del MLR en Chimbote y la quema de SINAMOS en el Cusco, así como el desarrollo del auge huelgístico en la FETIMP. Este viraje tiene un primer período, entre 1973 y 1975, cuando se resiste la ofensiva controlista del reformismo, y, uno segundo, entre 1975 y 1978, cuando se defienden los derechos alcanzados con las reformas contra el desmontaje de las mismas por el gobierno del General Morales Bermúdez, que desembocan en los dos paros nacionales de 1977 y 1978. Este "giro a la autonomía" establece las "dos lógicas" que señalábamos antes, aunque sin romper las relaciones entre movimientos sociales y Estado, ya que los primeros demandan y esperan obtener legalidad y reivindicaciones inmediatas por parte del segundo.

Ahora bien, este viraje hacia la autonomía es también un momento de auge en la producción de sociedad, en particular de las "organizaciones privadas" (Gramsci 1971:12) que desarrollan los movimientos sociales, formando una densidad organizacional que ha venido en llamarse sociedad civil. Las nuevas condiciones generadas por el reformismo al reconocer y promover masivamente organizaciones sociales, van a resultar en movilización independiente al chocar contra los límites de la reforma militar y frustrar sus expectativas de cambios mayores. Los sindicatos obreros y los frentes regionales se constituirán en las formas organizativas más importantes de esta sociedad civil, y, los partidos de la izquierda marxista-leninista en sus alentadores más importantes. Pero, a diferencia de lo ocurre, por ejemplo en Brasil, ella no abarca a organizaciones de las clases dominantes o a partidos de derecha. Se trata de una sociedad civil popular, porque es producto de movimientos sociales desarrollados por obreros, pobladores y clases medias empobrecidas que defienden organización y reivindicaciones conseguidas. Primero se defienden del control estatal, luego del intento de despojarlos de los derechos económicos y sociales conquistados, pero en ambos casos esta actitud defensiva marcará la naturaleza de su relación con el Estado.

Este carácter popular le dará especial fuerza a la sociedad civil, pero será también su limitación más significativa restándole pretensiones de universalidad. No podrá convertirse, por ejemplo, en sinónimo de "oposición", ya que la oposición de derecha a los militares tenía demandas, económicas y sociales, que la colocaban exactamente en las antípodas de esta sociedad civil popular. Además, los partidos tradicionales, como herederos del orden oligárquico, anterior a 1968, eran reacios a la organización del pueblo. Incluso el APRA, integrada al orden oligárquico a fines de los años cincuenta, había visto disminuidas sus fuerzas a nivel social y se unía al resto de la derecha para denunciar cualquier desarrollo a este nivel como "comunista".

Asimismo, el desarrollo de movimientos sociales con creciente autonomía reaviva antiguos reflejos en el Estado peruano y sus gobernantes militares que datan de su matriz colonial y oligárquica, ahondando la desconfianza de todo aquello que no sea producido desde arriba. La movilización social pasa así a convertirse, de acuerdo al discurso oficial, en el obstáculo para que las cosas no funcionen, para el buen desarrollo de las reformas primero y para el éxito de la apertura democrática, años más tarde. Se impone entonces una lógica del poder cuyo objetivo pasa a ser la integridad de las instituciones estatales, en particular de las Fuerzas Armadas.

En el viraje señalado juegan un rol muy importante los partidos de la izquierda marxista-leninista, que al influir decisivamente en la organización de los movimientos, logran asentar las lógicas diferenciadas. En el período velasquista el sentido de esta influencia no es tan nítido por el rol del Partido Comunista, que apoyaba las reformas, pero en el curso de la transición y debido al crecimiento de la izquierda radical, ella va a ser muy clara. Esta influencia marxista-leninista logra tener impacto en asentar la diferencia señalada por la existencia de dos condiciones anteriores. La primera es la falta de articulación entre sociedad y Estado en el Perú que lleva a la superposición de roles y a las mixturas ya consideradas entre actores sociales y políticos, y, la segunda, la tradición autoritaria del Estado, acentuada por tratarse de un gobierno militar que se sentía amenazado. Ambas condiciones permiten a las orientaciones radicales separar y confrontar. Sucede entonces lo que Stepan (1988:3-6) llama la negativa de la "sociedad civil" a participar en la "sociedad

política" y en especial en la apertura democrática. Para el discurso marxista-leninista se vivían tiempos revolucionarios y el desarrollo del movimiento social se interpretaba como prueba de la inminencia de una gran transformación, por lo que los planteamientos aperturistas del gobierno militar no podían ser sino un engaño. Esta influencia afirma la participación en el acción colectiva y el desarrollo de nuevos espacios sociales pero niega la proyección política de los movimientos y su intervención en la transición. En particular, no valora los derechos económicos y sociales conseguidos como elementos de ciudadanía, es decir de pertenencia a una sociedad global mayor, donde eventualmente se produjera una integración entre sociedad y Estado. Los derechos económicos y sociales no eran elementos de ciudadanía para los grupos marxistas-leninistas sino tan solo "mejores condiciones de lucha" para la transformación social, contribuyendo con esta visión al aislamiento de la sociedad civil.

Pero el supuesto revolucionario del discurso marxista-leninista chocaba también con la realidad de las organizaciones sociales porque el carácter de las luchas que estas desarrollaban era defensivo, particularmente en el período de contrarreforma que desemboca en la transición. Es decir, generalmente demandaban que el gobierno les devolviera algo que ya habían tenido, se tratara de empleos, valor adquisitivo de sus salarios, derechos sindicales, inversión estatal, etc. Es más, cuando el Estado se retiraba de alguna esfera productiva, exigían su vuelta, prefiriéndolo a la empresa privada. Su actitud era de confrontación, para lograr sus demandas, pero en última instancia, no de ruptura con el Estado, con quien, como señalamos, querían mantener lazos, a pesar de todas las dificultades. El discurso revolucionario podía ser entonces útil para el momento de la confrontación pero difícilmente podía convertir a estos movimientos sociales en base para un asalto al poder que buscara un nuevo orden.

De igual forma, el establecimiento de lógicas distintas no implica que Estado y movimientos sociales no se influyan mutuamente, en el curso que van tomando, aunque se tratará de una influencia sin canales de comunicación claramente establecidos. Como hemos explicado la crisis del reformismo tiene directamente que ver con el desarrollo de la movilización social y su incapacidad de mantenerla bajo control, lo que

lleva a la caída de Velasco. De igual forma la respuesta popular a la contrarreforma de Morales Bermúdez termina de decidir, aunque sin proponérselo explícitamente el retiro de los militares a sus cuarteles y la convocatoria a elecciones. En ambos casos, el primero que abre y el segundo que decide la transición democrática, la influencia de los movimientos sociales es muy importante, pero en términos de "golpes" enviados desde afuera hacia el Estado en sucesivas confrontaciones.

¿Se puede decir entonces que la sociedad civil popular que se desarrolla es excluida de la transición? El supuesto de la pregunta, que forma parte de mis proposiciones iniciales de investigación, es cierto, aunque lo que existe no es solo exclusión en un sentido, es decir, exclusión de esta sociedad civil por parte del Estado, en la que activamente estaban empeñados el gobierno militar y los partidos tradicionales, sino que también se produce un fenómeno de autoexclusión, de parte de los grupos de izquierda y las organizaciones sociales. La autoexclusión se entiende no necesariamente como una negativa a participar en el proceso electoral, al que de hecho concurren la mayoría de los partidos de izquierda por razones de agitación y propaganda, sino como la negativa a formar parte del nuevo pacto democrático que los militares intentaban llevar adelante con los partidos tradicionales, no solo por la indignación que les mereciera los esfuerzos excluyentes de los de arriba, sino por razones de principio. De igual manera, en los miembros de base de las organizaciones sociales tiende a desarrollarse lo que un organizador político en Chimbote nos señalaba como "una actitud ladina", es decir, ir y votar para ver qué pasa, pero sin mayor confianza en los resultados.

Esto no se contradice con la importante votación alcanzada por las agrupaciones de izquierda en las elecciones de 1978, ni con la mayor proporción de electores respecto a procesos electorales anteriores, permitida por la mayor amplitud de la legislación electoral, tampoco con el tipo de influencia que los movimientos sociales tuvieron en las decisiones de apertura política; todos ellos argumentos generalmente esgrimidos para resaltar la participación popular en la transición democrática. Tiene que ver, más bien, con la capacidad de representación de la sociedad civil en la comunidad política que se pretendía conformar. Esta capacidad de representación era sistemática y violentamente erosionada por el gobierno militar en el período de contrarreforma al

restringir los elementos económicos y sociales de ciudadanía dados por el reformismo, así como por la propia actitud de autoexclusión de la sociedad civil a la que hemos hecho referencia. En el primer caso se trata de la élite militar que buscaba un nuevo pacto político para garantizar la integridad de su propia institución y por añadidura la del conjunto del Estado, para lo cual debía conceder garantías que restablecieran plenamente los derechos de propiedad de la burguesía. Para estos objetivos, de integridad institucional y propiedad burguesa, los movimientos sociales eran una amenaza y los derechos aludidos un obstáculo, concluyendo la necesidad de subordinar a los primeros y restringir los segundos. En el segundo caso, los movimientos sociales tenían una orientación partidaria con un discurso revolucionario marxista-leninista que planteaba, la sustitución del Estado, por otro distinto, no la participación en sus proyectos de transición, ni menos en el pacto político que los sustentara. Más eficaces, sin embargo, resultaron estos partidos izquierdistas en desarrollar nuevos espacios sociales que en desafiar revolucionariamente al Estado, pero ello no les impidió despreciarlo.

Estos objetivos diferentes implicaron concepciones de democracia también distintas. En el ámbito de la sociedad civil se desarrollan formas de democracia directa que conviven, contradictoriamente, con el autoritarismo tanto de caudillos como de partidos políticos. La apertura de nuevos espacios, entre los cuales el sindicato es el ejemplo por excelencia, ofrecen posibilidades de participación antes inexistentes y crean "un mundo de libertad" desconocido para la mayoría de jóvenes que se acercan a los movimientos sociales. Sin embargo, esta participación se limita a la presencia de los miembros de base en las actividades de la organización y al intercambio, muchas veces también restringido, de opiniones en las asambleas, recortándose por otra parte, drásticamente, su contribución en la toma de decisiones, que se reserva a caudillos y, sobre todo, a las dirigencias partidarias. Caudillos y partidos promueven a la vez que limitan las formas democráticas, como una necesidad para legitimar su liderazgo y su discurso revolucionario, así como para asegurar su control de las esferas críticas del poder. Pero, a pesar de ser una democracia entendida como presencia en actividades y no como participación en la toma de decisiones, constituye un actor colectivo que logra un lugar como miembro de la sociedad global, es decir logra

reconocimiento de derechos y por lo tanto elementos fundamentales de ciudadanía. Esta naturaleza colectiva de los actores es la que les da fuerza para confeccionar su propia agenda y establecer demandas al Estado.

Los partidos tradicionales, por su parte, que se presentan como las "fuerzas democráticas" nutren su concepción del régimen anterior a 1968. Aunque el APRA, a diferencia de Acción Popular y el PPC, intente tomar distancias de su actuación durante los años de crisis oligárquica y servir de puente entre la derecha y los militares, sin lograr esbozar un proyecto democrático alternativo. En conjunto continúan con un discurso que reclama formas liberales de representación política, libertad individual y derechos de propiedad, es decir, una democracia como protección del ciudadano-propietario, que puede aceptar a otros ciudadanos no-propietarios siempre y cuando limiten sus derechos a la elección periódica de los gobernantes. Esta era la mejor forma para garantizar intereses y privilegios de grupo, que habían visto mellados por el reformismo. Como clase política conocían el funcionamiento de este sistema y sabían de su utilidad para fines privados. Su afán es por ello restaurador. Pero si antes de 1968 la exclusión había sido la regla en el manejo político, luego del velasquismo era una operación que se volvía muy difícil, de allí que debieran apoyar la contrarreforma y entrar en conversaciones con los militares. Así, a costa del retiro electoral de Acción Popular, deben pactar un calendario político, reglas electorales más amplias y aceptar la participación de los grupos de izquierda que desearan hacerlo, dentro del régimen democrático, pero fuera del pacto político que le da sustento.

Entre ambas concepciones de democracia, una levantada por actores colectivos que reclaman derechos económicos y sociales y otra por partidos tradicionales que buscan defender las propiedades de grupos minoritarios, los cuales entienden el reclamo de derechos como expropiación de sus bienes, no habían posibilidades de integración como pares en un mismo sistema político. Más, cuando el movimiento de unos era amenaza para los otros. Finalmente, continuando con la dinámica de separación entre Estado y sociedad, será el gobierno militar quien diseñe una salida y la negocie, no con el conjunto de la oposición, los partidos tradicionales y lo que se había conformado como sociedad civil popular,

sino tan solo con los primeros. Es una salida que se basa en la represión a la movilización social, la subordinación de la izquierda en la transición democrática y su exclusión del nuevo pacto político. Se formula como una democracia para individuos, que rechaza la presencia de los actores colectivos, pero debe aceptar un mayor número de electores y una ampliación sustantiva de la esfera política que incluya a la izquierda contestataria.

¿Qué queda en estas condiciones para la sociedad civil popular formada por los movimientos sociales? La identidad desarrollada con los nuevos espacios construidos, particularmente la distinción denominada "clasismo" en la esfera sindical. Esta identidad es símbolo de su autonomía, de su posibilidad de constituirse como actor y eventualmente de lograr atención para sus demandas. Sin embargo, es expresión también de su debilidad. Al ser una identidad con un componente gremial muy significativo tiene dificultades no solo para expresarse en la "sociedad política", tal como señalamos líneas arriba, sino incluso para ganar consenso sobre sus problemas en capas mayores, no organizadas, de la población. El clasismo de esta sociedad civil al no integrarse en un nuevo sistema político fruto de la transición tendrá una existencia precaria, al vaivén de las crisis posteriores, en los años ochenta, que erosionan el tejido social que le da sustento.

Bibliografía

- ABUGATTÁS, LUIS A. "Populismo and After: The Peruvian Experience".
En: *Authoritarians and Democrats. Regime Transition in Latin America*,
editado por James A. Malloy y Mitchell A. Seligson. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press, 1987.
- AGÜERO AGUIRRE, Manuel. *FETIMP 23 años de lucha*. Lima, 1980.
- AMES, Rolando y NIETO, Jorge. "Asediando al Leviatán". *Cuestión de Estado*, (Lima) Nº 1, Setiembre 1987, pp. 12-18.
- ARATO, Andrew y COHEN, Jean. "Civil Society and Social Theory". New School, 1988. Fotocopia de manuscrito.
- ATUSPARIA. *Historia del Movimiento Sindical Siderúrgico. 30 años de Sindicalismo en Siderperú*. Chimbote: Asociación Cultural Atusparia, 1989.
- BALBI, Carmen Rosa. *Identidad Clasista en el Sindicalismo*. Lima: DESCO, 1989.
- BASADRE, Jorge. *Historia de la República del Perú*. Lima: Editorial Universitaria, 1968.
- *Elecciones y Centralismo en el Perú*. Lima: Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, 1980.

- BONFIGLIO, Giovanni. "Historia de la Federación Metalúrgica. FETIMP 1957-81". En: *La Federación Metalúrgica: historia y problemas hoy*, editado por Giovanni Bonfiglio y Jorge Parodi. Lima: CEDAL, 1983.
- BOURRICAUD, Francois. *Poder y Sociedad en el Perú*. Lima: IEP ediciones, 1989.
- BURGA, Manuel y FLORES GALINDO, Alberto. *Apogeo y Crisis de la República Aristocrática*. 4ta. edición. Lima: Ediciones Rykchay Perú, 1987.
- CARBONETTO, Daniel. "La Opción por un Nuevo Modelo de Acumulación: sus límites". En: *El Perú de Velasco*, editado por Carlos Franco. Lima: CEDEP, 1986.
- CARDOSO, Fernando Henrique. "Régimen Político y Cambio Social. Algunas Reflexiones a Propósito del Caso Brasileño". En: *Estado y Política en América Latina*. México: Siglo XXI editores, 1981.
- "Associated-Dependent Development and Democratic Theory". En: *Democratizing Brazil. Problems of Transition and Consolidation*, editado por Alfred Stepan. New York and Oxford: Oxford University Press, 1989.
- CASANOVA, José. "Modernization and Democratization: Reflections on Spain's Transition to Democracy" *Social Research* 50, Nº 4, Winter 1983, pp. 929-973.
- COHEN, Jean L. "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements". *Social Research* 52, Nº 4, Winter 1985, pp. 663-716.
- COLLIER, David. "Overview of the Bureaucratic-Authoritarian Model". En: *The New Authoritarianism in Latin America*, edited by David Collier. Princeton: Princeton University Press, 1979.
- Consejo Nacional de Población. *Perú: Hechos y Cifras Demográficas*. Lima, 1984.

- COTLER, Julio. "La Mecánica de la Dominación Interna y el Cambio Social en la Sociedad Rural". En: *Perú Problema. Cinco Ensayos*. 3ra. edición. Lima: IEP ediciones, 1983.
- *Clases, Estado y Nación en el Perú*.
Perú Problema N° 17. Lima: IEP ediciones, 1985.
- "Democracia e Integración Nacional en el Perú". En: *El Gobierno Militar. Una Experiencia Peruana*. 1968-1980. Lima: IEP ediciones, 1985a.
- "Los Partidos Políticos y la Democracia en el Perú". En: *Democracia, Sociedad y Gobierno en el Perú*. Jorge Parodi y Luis Pásara editores. CEDYS. Lima, 1988.
- "Segmentación Social, Fragmentación Política y Cultura de la Violencia en el Perú". Conference Paper N° 41, presentado a la conferencia de investigación, Violence and Democracy in Colombia and Perú, llevada a cabo en la Universidad de Columbia, del 30 de noviembre al primero de diciembre de 1990.
- DAHL, Robert A. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1956.
- *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- DANCOURT, Oscar. *Sobre las Políticas Macroeconómicas en el Perú, 1970-1984*. Documento de Trabajo N° 12. Lima: IEP ediciones, 1986.
- *Política Macroeconómica y Democracia*. En: *Economía para la Democracia*. Siete Conferencias. editado por Efraín González de Olarte. Lima: IEP ediciones, 1989.
- DI PALMA, Giuseppe. *To Craft Democracies. An Essay on Democratic Transitions*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1990.
- FRANCO, Carlos. "Los Significados de la Experiencia Velasquista: Forma Política y Contenido Social". En: *El Perú de Velasco*. Editado por Carlos Franco. Lima: CEDEP, 1986.
- GALÍN, Pedro; CARRIÓN, Julio y CASTILLO, Oscar. *Asalariados y Clases Populares en Lima*. Lima: IEP ediciones, 1986.

- GIDDENS, Anthony. "Class Division, Class Conflict and Citizenship Rights". En: *Profiles and Critiques in Social Theory*, editado por Anthony Giddens. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1982.
- GRAMSCI, Antonio. *Selections from Prison Notebooks*, editado por Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart, 1971.
- GUERRA, FRANCISCO. "Proceso de Cambio y Régimen Militar". En: *El Perú de Velasco*, editado por Carlos Franco. Lima: CEDEP, 1986.
- HARDING, Timothy y Petras, James. "Democratization and Class Struggle". *Latin American Perspectives*, 15, Nº 3, Summer 1988, pp. 3-17.
- HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl. *El Antimperialismo y el APRA*. 3ra. edición. Lima: Editorial Amauta, 1970.
- HELD, David. *Political Theory and the Modern State*. Stanford: Stanford University Press, 1989.
- HOPKINS, Raúl. *Desarrollo Desigual y Crisis de la Agricultura Peruana 1944-1969*. Lima: IEP ediciones, 1981.
- HUNTINGTON, Samuel. *The Soldier and the State*. Cambridge: Belknap. Harvard, 1986.
- INDES. *Chimbote Hoy: Avances sobre la Problemática Barrial*. 1983.
- KRUIJT, Dirk. *La Revolución por Decreto*. Lima: Mosca Azul editores, 1989.
- LENIN, V.I. *El Estado y la Revolución*. Obras Completas Vol. 27. Montevideo: Editorial Cartago, 1970.
- LIPSET, Seymour Martin. *Political Man. The Social Bases of Politics*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1981.
- LÓPEZ, Sinesio. "El Estado Oligárquico: un ensayo de interpretación".

- Revista Mexicana de Sociología* 40, Nº 3, Julio-Setiembre 1978, pp. 991-1007.
- “La Otra Cara del Asedio”. *Cuestión de Estado* (Lima), Nº 1, Setiembre 1987, pp. 19-22.
- “Sociedad y Estado en el Perú actual: patrimonialismo, participación y representación” En: *El Dios mortal*. Lima: Instituto Democracia y Socialismo 1991.
- LOWENTHAL, Abraham. *El Experimento Peruano Reconsiderado*. En: *El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980*. Lima: IEP ediciones, 1985.
- LYNCH, Nicolás. *El Pensamiento Social sobre la Comunidad Indígena a principios del siglo XX*. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1979.
- “La Polémica Indigenista y los Orígenes del Comunismo en el Cusco” *Crítica Andina* (Cusco) Nº 3, Junio 1979, pp.5-46.
- *El APRA y la Dictadura Militar: 1968-1978*. En: *El APRA un camino de esperanzas y frustraciones*. Lima: Ediciones El Gallo Rojo, 1980.
- *Los Jóvenes Rojos de San Marcos*. Lima: El Zorro de Abajo ediciones, 1990.
- MACÉWAN, Arthur. “Transitions from Authoritarian Rule”. *Latin American Perspectives* 15, Nº 3, Summer 1988, pp.115-130.
- MALETTA, Héctor y Alejandro Bardales. *Perú: las Provincias en Cifras 1876-1981. Vol.II, Fuerza Laboral y Empleo*. Serie Estadísticas Nº 2. Lima: AMIDEP, 1988.
- MARIÁTEGUI, José Carlos. *Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana*. 18va edición. Lima: Editorial Amauta, 1970.
- MARSHALL, T.H. “Citizenship and Social Class”. En: *Class, Citizenship and Social Development*, editado por T.H. Marshall. Westport Conn.: Greenwood Press, 1976.
- MARX, Karl y Engels, Frederick. *Manifiesto del Partido Comunista*. En Vol. 1 de: *Obras Escogidas en dos tomos*, por Karl Marx y Frederick

- Engels. Moscú: Editorial Progreso, 1971.
- *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*. En Vol. 1 de: *Obras Escogidas en dos tomos*, por Karl Marx y Frederick Engels. Moscú: Editorial Progreso, 1971.
- MC CLINTOCK, Cynthia and Abraham F. Lowenthal. *El Gobierno Militar. Una Experiencia Peruana 1968-1980*. IEP ediciones. Lima, 1985.
- MERCADO JARRÍN, Edgardo. "La Política y la Estrategia Militar en la Guerra Contrasubversiva en América Latina". *Revista Militar del Perú* 64, Nº 701, pp. 4-41. 1967.
- MONGE, Carlos. *Informe Dinámica Demográfica. Investigación sobre el Desarrollo Regional*. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1981.
- MONTOYA, Rodrigo. *Lucha por la tierra, Reforma Agraria y Capitalismo en el Perú del siglo XX*. Lima: Mosca Azul editores, 1989.
- MUÑOZ, Teresa. "Migraciones, barriadas y organización". En: *Chimbote: Balance de un Desarrollo Frustrado y Elementos de una Alternativa*. 1985.
- NIETO, Jorge. *Izquierda y Democracia en el Perú*. Lima: DESCO, 1983.
- "El Sindicalismo Obrero Industrial Peruano: en Busca del Espacio Perdido". En: *Movimientos Sociales y Democracia: la Fundación de un Nuevo Orden*, editado por Eduardo Ballón. Lima: DESCO, 1986.
- NORHT, Lisa. "Orientaciones Ideológicas de los Dirigentes Militares Peruanos". En: *El Gobierno Militar. Una Experiencia Peruana. 1968-1975*. Lima: IEP ediciones, 1985.
- O'DONELL, Guillermo. "Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy". En: *The New Authoritarianism in Latin American*, editado por David Collier. Princeton: Princeton University Press, 1979.
- "Introduction to the Latin American Cases". En: *Transitions from Authoritarian Rule: Latin America*, editado por Guillermo O'Donell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead. Baltimore and London:

- The John Hopkins University Press, 1986.
- "Theoretical and Historical Background to the Study of the Bureaucratic-Authoritarian State". Chap. 1 de *Bureaucratic Authoritarianism. Argentina, 1966-1973, in Comparative Perspective*. University of California Press, 1988.
- O'DONELL Guillermo and Philippe C. Schmitter. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about uncertain democracies*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1986.
- PANFICHI, Aldo. "La Crisis y las Multitudes: Lima, 5 de Febrero de 1975". En: *Debates en Sociología* (Lima) Nº 9, 1983, pp. 31-63.
- PARODI, Jorge. "Las debilidades organizativas del gremio metalúrgico: hablan los dirigentes." En: *La Federación Metalúrgica: historia y problemas hoy*. Lima: CEDAL, 1983.
- *Ser obrero es algo relativo*. Lima: IEP ediciones, 1986.
- PATEMAN, Carole. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- PEASE, Henry. *El ocaso del poder oligárquico*. Lima: DESCO, 1977.
- *Los caminos del poder. Tres años en la escena política*. 2da. edición. Lima: DESCO, 1981.
- "Los Partidos de Izquierda en la Transición Democrática: el Caso Peruano". Ponencia presentada a la reunión del Taller sobre partidos políticos de CLACSO. Lima, 1988.
- Pease, Henry y Alfredo Filomeno. Perú 1975. *Cronología Política*. Lima: DESCO, 1977.
- Perú 1976. *Cronología Política*. Lima: DESCO, 1977a.
- Perú 1977. *Cronología Política*. Lima: DESCO, 1979.
- Perú 1978. *Cronología Política*. Lima: DESCO, 1980.
- POULANTZAS, Nicos. *Political Power and Social Classes*. London: New Left Books, 1973.
- PRZEWORSKI, Adam. "Some Problems in the Study of the Transition to

- Democracy". En: *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*, edited by Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter and Laurence Whitehead. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1986.
- REMY, María Isabel. "Movimiento Regional Cusqueño (1977-1982)". En: *Promoción campesina, regionalización y movimientos sociales*, editado por M.I. Remy. Lima: Centro Bartolomé de las Casas, 1984.
- RÉNIQUE, José Luis. "Democracia y Movimiento Social en el Sur Andino". En: *Movimientos Sociales y Democracia. La Fundación de un Nuevo Orden*, editado por Eduardo Ballón. Lima: DESCO, 1986.
- *¡Kausachum Qosqo! La lucha del Cusco por la descentralización y el desarrollo regional*. Lima: CEPES, 1987.
- RODRÍGUEZ, Martha. *Interpretación de la historia político-sindical del proletariado siderúrgico (1957-1972)*. Lima: Taller de Estudios Urbano Industriales. Departamento de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Católica, 1980.
- RONCAGLIOLO, Rafael. *¿Quién Ganó?* Lima: DESCO, 1980.
- SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper and brothers, 1942.
- SCHYDLOWSKY, Daniel and Juan Wicht. "Anatomía de un Fracaso Económico". En: *El Gobierno Militar. Una Experiencia Peruana. 1968-1970*. Lima: IEP ediciones, 1985.
- SOTOMAYOR, José. *Cusco: 1958. Análisis Testimonial de un Movimiento Urbano*. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1984.
- STALLINGS, Barbara. "El Capitalismo Internacional y el Gobierno Militar Peruano". En: *El Gobierno Militar. Una Experiencia Peruana. 1968-1980*. Lima: IEP ediciones, 1985.
- STEPAN, Alfred. *The State and Society. Perú in Comparative Perspective*. Princeton: Princeton University Press, 1978.

- *Rethinking Military Politics. Brazil and the Southern Cone*. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- SULMONT, Denis. *Historia del movimiento obrero peruano 1890-1977*. Lima: Tarea, 1977.
- *El Movimiento Obrero Peruano (1890-1980). Reseña Histórica*. Lima: Tarea, 1980.
- TELLO, María del Pilar. *¿Golpe o Revolución? Hablan los militares del 68*. 2 Vols. Lima: Ediciones SAGSA, 1983.
- THORP, Rosemary. "Evolución de la Economía Peruana". En: *El Gobierno Militar. Una Experiencia Peruana. 1968-1980*. Lima: IEP ediciones, 1985.
- TILLY, Charles. *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House, 1978.
- TOURAINÉ, Alain. *The Voice and the Eye. An Analysis of Social Movements*. New York: Cambridge University Press, 1981.
- *Actores Sociales y Sistemas Políticos en América Latina*. Santiago: PREALC, 1987.
- TOVAR, Teresa. *Otra historia prohibida. Velasquismo y movimiento popular*. Lima: DESCO, 1985.
- VALLADARES, Manuel. *Paro Nacional. 19 de julio de 1977*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales, 1987.
- VERDERA, Francisco. *La migración a Lima entre 1972 y 1981. Anotaciones desde una perspectiva económica*. Documento de Trabajo N° 14. Lima: IEP ediciones, 1986.
- WEBB, Richard y Graciela Fernández Baca. *Perú en números: 1990*. Lima: Cuánto S. A., 1990.
- WEFFORT, Francisco. "Why Democracy?". En: *Democratizing Brazil*.

Problems of Transition and Consolidation, editado por Alfred Stepan. New York and Oxford: Oxford University Press, 1989.

ZAVALETA, René. "Las Masas en Noviembre". En: *Bolivia Hoy*. México: Siglo XXI editores, 1983.

El texto de **La Transición
Conservadora/movimiento social y
democracia en el Perú, 1975-1978**
se presenta en caracteres Palatino de
10 p. con 2 p. de interlínea; las notas
de pie de página en 8 p. con 1 p. de
interlínea. La caja mide 26 x 38 picas.
Se terminó de imprimir en el Taller
de *Gráficos S.R.L.* Camino Real 1849
Santiago de Surco.
Teléfono: 481524